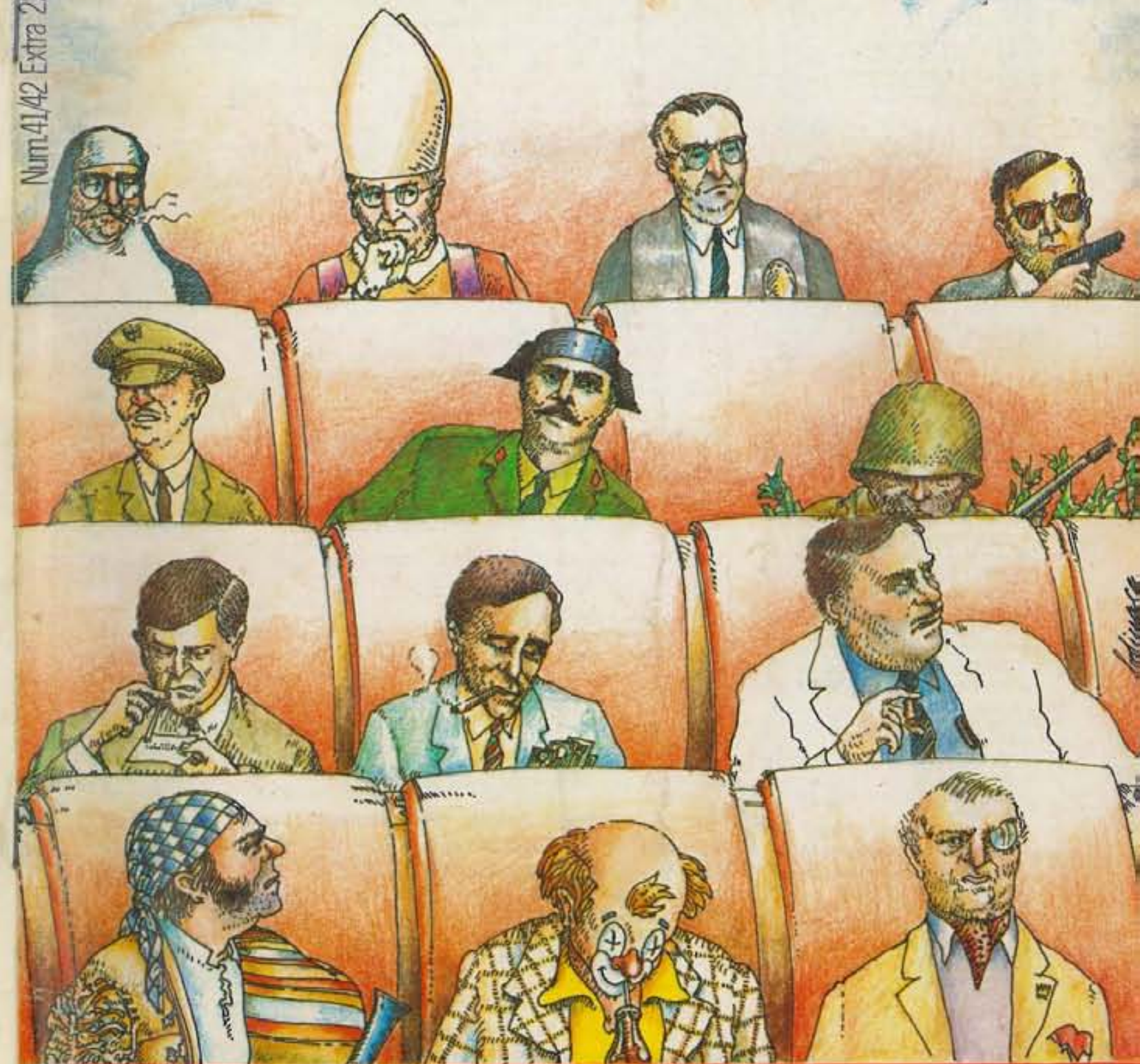


bicicleta

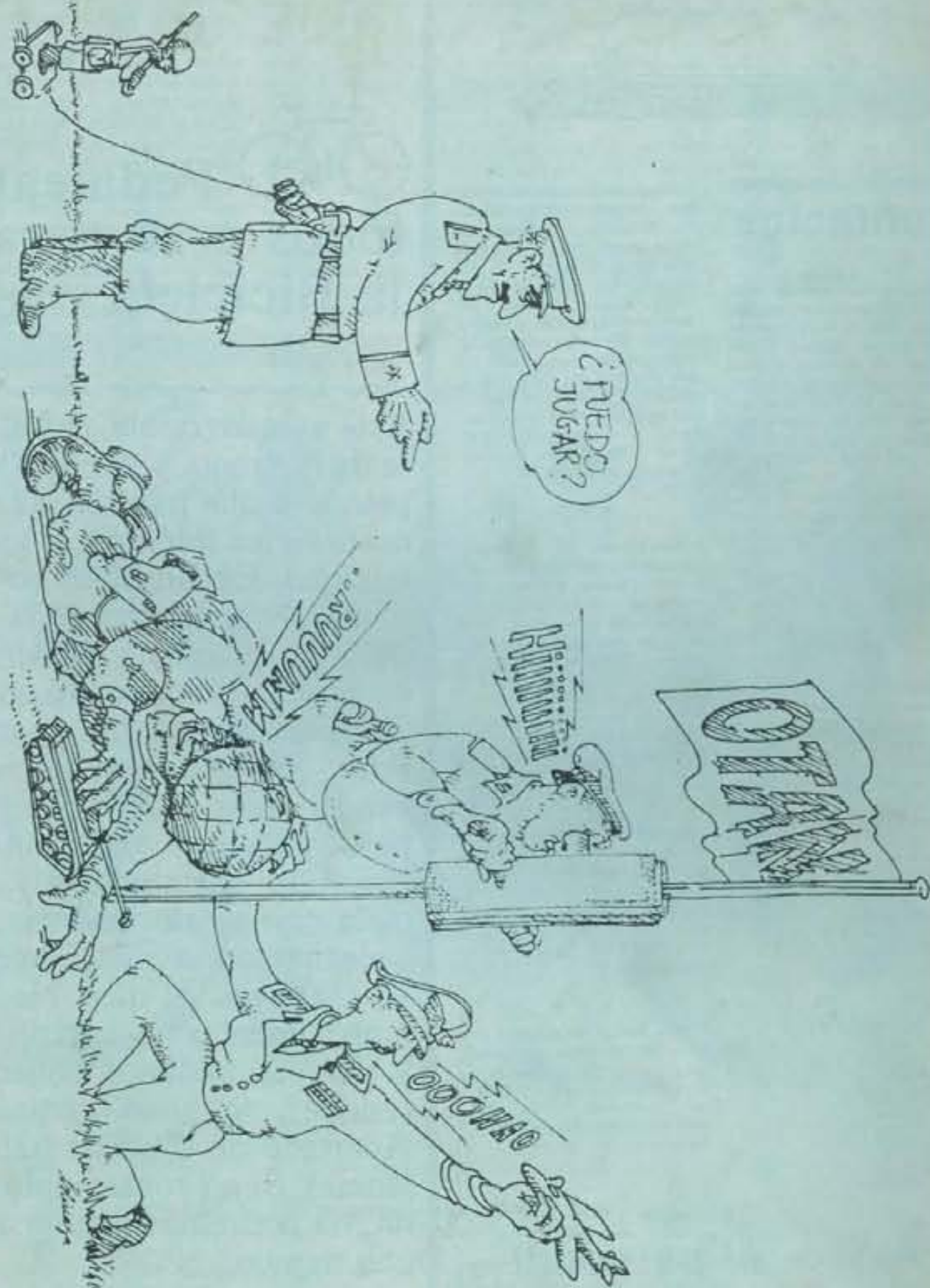
EXTRA

Revista de Comunicaciones Libertarias

Num 41/42 Extra 225 Ptas.



¿QUIEN MANDA AQUI?



LAS EDICIONES DE
La Piqueta



Nº 8

Michel Foucault
Jacques Donzelot
Claude Grignon
Jean-Paul de Gaudemar
Francine Muel
Robert Castel



**ESPACIOS
DE PODER**

Frente al Estado Leviatán, frío monstruo, perverso y omnipotente, que nos acecha permanentemente y del que es imposible zafarse, existe la imagen del Estado como regulador del sistema productivo en el que se concentran todos los poderes incluidos los aparatos ideológicos. La finalidad de estos análisis es poner al descubierto cómo emergen, se entrecruzan, reestructuran y coagulan las tácticas que hacen posible la gubernamentalización del Estado.

Otros títulos de *Genealogía del poder*:

1. M. FOUCAULT. Microfísica del poder.
2. JEREMIAS BENTHAM. El Panóptico.
3. JULIA VARELA y FERNANDO ALVAREZ-URIA. El cura Galeote, asesino del obispo de Madrid-Alcalá.
4. ANNE QUERRIEN. Trabajos elementales sobre la escuela primaria.
5. ROBERT CASTEL. El orden psiquiátrico.

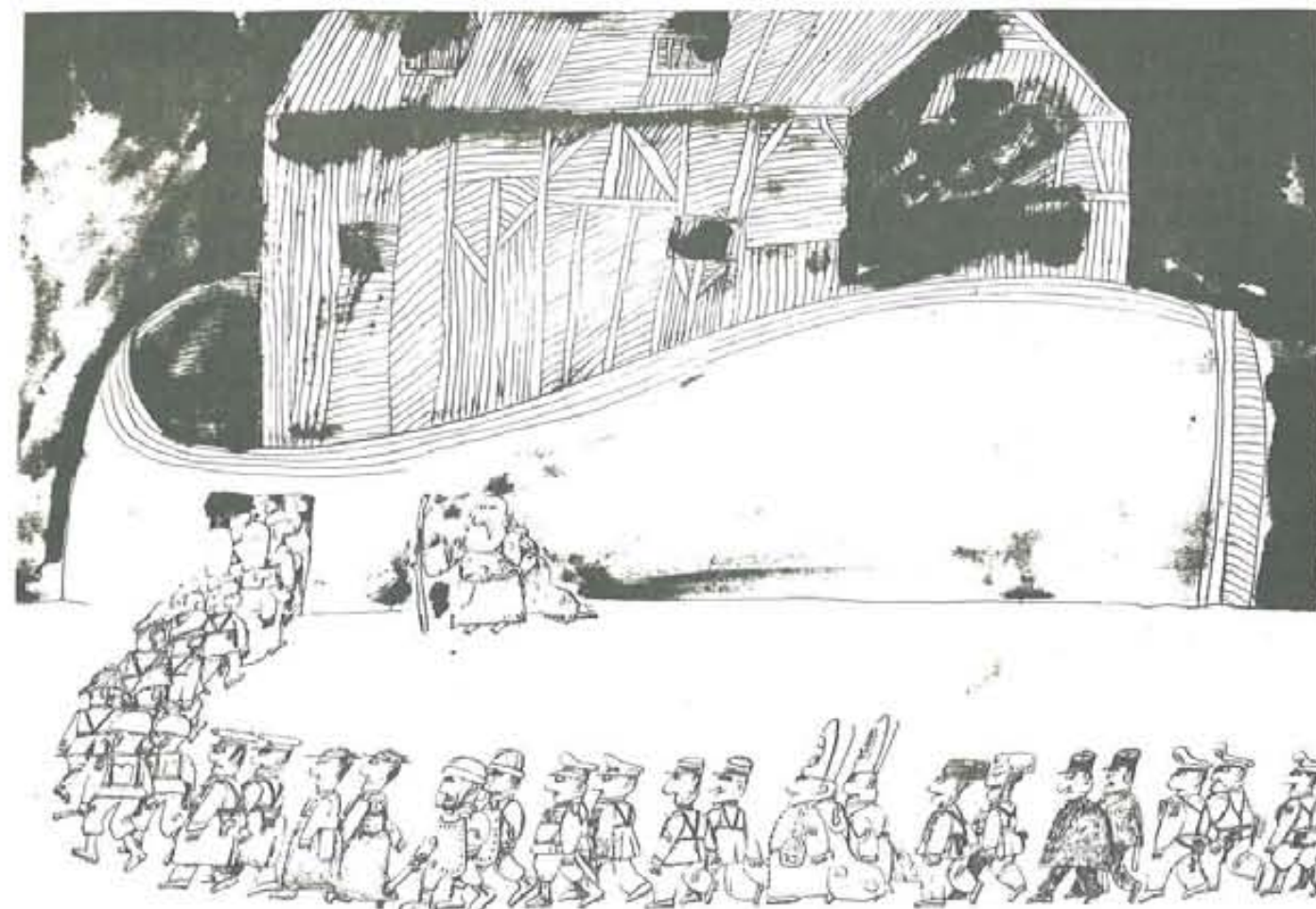
Enviamos catálogo:
Seseña, 59 - bajo D
Madrid-24
Teléfono: 222 36 68



N.41/42 Noviembre 1981

QUIEN MANDA AQUI.....	3
LOS MONOPOLISTAS DE LA VIOLENCIA.....	5
La danza del sable.....	6
Fuerzas Armadas y D.S.N.....	15
Policía en acción.....	20
Cuadro de Honor.....	20
Nuestros protectores.....	22
Horizonte represivo.....	27
LOS CUERVOS SAGRADOS.....	31
La Sagrada Trinidad: la familia, el ejército y la Iglesia.....	32
La Asociación Católica Nacional de Propagandistas.....	36
Nueva ofensiva contra el aborto. SOLIDARIDAD.....	37
LAS RICAS URRACAS.....	39
La Patronal.....	40
Una batalla perdida.....	43
El poder de la banca.....	44
Los que mandan en el campo.....	45
La sociedad informatizada.....	46
La estafa nuclear y sus propagandistas.....	49
LOS CUENTOS DE LA CRISIS.....	53
La crisis: fiera zurrupia.....	54
Poder sindical y Eurocorporatismo.....	58
Entrevista a José Luis Sampedro.....	61
Pequeña historia de los pactos sociales.....	63
LA CASTA BUROCRÁTICA.....	65
El poder judicial.....	66
Los enemigos de la peligrosidad social.....	68
El poder económico de la burocracia.....	70
A la Magistratura de Trabajo.....	71
Tecnoburocracia y teoría anárquica.....	73
El poder heteronómico.....	78
La Administración por dentro.....	80
LOS QUE MANDAN A LOS MANDADOS.....	83
La OTAN y el Estado Español.....	84
Reflexiones sobre Reagan.....	88
Del dogma del estado a la violencia sin dogma.....	89
Por un debate sobre la violencia.....	94
TALEGO/PIZARRA.....	97

EDITA: Soc. Coop. BICICLETA. Redacción y Administración: Apdc. de Correos 629. Valencia.
DIRECTORA: Pilar Gracia.
IMPRIME: Lipsia, S. A. Roger, 25 y 27. Barcelona-28
DLM 37701/1977- ISSN 0210-2757.



¿QUIEN MANDA AQUI?

Podría ser que no mandara nadie, pues el poder de unos sobre otros no es una característica necesaria de todas las sociedades humanas. Pero hace ya mucho tiempo que, en los territorios de lo que es hoy en día, transitoriamente, el Estado español, hay quienes mandan y quienes obedecen (a la fuerza o incluso creyendo legítima esa dominación).

Los primeros que, hace mucho, mucho tiempo, empezaron a mandar aquí fueron sin duda los hombres, cuando los primeros agricultores en la Península Ibérica (antes de que se llamara así) empezaron a preocuparse por controlar y encauzar socialmente la reproducción de las familias. Para eso, los hom-

bres empezaron a mandar a las mujeres, y todavía las continúan mandando, ayudados por tradiciones ideológicas mucho más recientes, tanto de origen musulmán como cristiano.

Pero en este número extra de BICICLETA no nos remontamos a épocas tan lejanas, ni consideramos tampoco todas las formas de dominación que existen. Por ejemplo, ¿quién manda en las fábricas? ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre el poder en las fábricas y el poder en las haciendas esclavistas o en los cortijos con obreros asalariados? No aludimos a estas formas de poder.

En este número intentamos discutir el poder del Estado español actual, su poder sobre sus súbditos, a los que a veces llama, para disimular,

sus ciudadanos. El poder no lo ejercen solamente quienes integran el Estado en su sentido más restrictivo (militares, funcionarios, políticos) sino también otras instituciones y personas: la Iglesia, los banqueros y grandes empresarios.

La Constitución de 1978 dice que el pueblo es soberano, aunque todos sabemos que el soberano de verdad es, transitoriamente, el General Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Pero el Estado Español no tiene la simplicidad de una monarquía absoluta donde manda el monarca ayudado de sus funcionarios (se llamen sátrapas o como se llamen). El pueblo no es soberano, de eso no cabe ninguna duda, pues no se puede ser al mismo tiempo víctima de dominación y soberano sin que violentemos el lenguaje

dejando esos términos sin significado. Pero tampoco el General Juan Carlos de Borbón es el único que manda, ni mucho menos. Manda más que lo que la Constitución le reconoce, pero no manda sólo él. Los capitanes generales, puestos de acuerdo, mandan más que él.

La ficción de la soberanía popular ha servido para legitimar el dominio de la burguesía mediante el mecanismo de las elecciones. Es el parlamento el «aparato ideológico» fundamental de muchos estados capitalistas (los que se llaman «democracias»), pues mediante las elecciones parlamentarias parece que sean los propios individuos los que designan a sus gobernantes, elegidos por «voluntad popular». Si la gente se cree esto, el poder de la burguesía queda legitimado, manda por consenso más que por coacción. Claro está que en la mayoría de estados capitalistas (y en todos los estados llamados socialistas, que desde luego no son socialistas si socialismo significa igualdad, pues la igualdad es incompatible con la existencia de estados), no existe ni tan siquiera la ficción de la soberanía popular. Existe a menudo (como hoy en día en la Argentina, en el Brasil) la ficción de que los regímenes actuales se encaminan lentamente hacia formas democráticas «occidentales». Pero mandan, no los gobiernos parlamentarios, sino los militares. En las democracias occidentales parece que mandan los gobiernos parlamentarios, pero de hecho mandan también, quizá más, los grupos de presión económicos, a veces las Iglesias (en Italia, por ejemplo), y siempre hay en reserva el recurso a las fuerzas armadas. Cuando en 1968 parecía

que en Francia amenazaba la revolución tras el movimiento estudiantil y la huelga general, De Gaulle fue a consultar con el ejército francés estacionado en Alemania Occidental la posibilidad de una intervención militar en París. Cuando en Inglaterra en 1926 hubo una huelga general, el gobierno recurrió para romperla a las fuerzas armadas, que sustituyeron a los huelguistas en algunos servicios. El ejército sirve para asegurar el dominio del capital cuando el pueblo se muestra excesivamente «soberano», y eso ocurre también en las «democracias» parlamentarias. Si unas elecciones dan resultados excesivamente amenazantes, puede suceder lo que en España en 1936 o en Chile en 1973.

El sistema español actual combina la ficción de la soberanía popular expresada en elecciones parlamentarias con el gobierno de hecho de fuerzas extra-parlamentarias. El Ejército, por ejemplo, no está meramente en la reserva, sino que está muy activo en el ejercicio del poder. Los funcionarios, por ejemplo, tienen un poder propio, quizá similar al que pueden tener en algunas otras democracias más típicamente parlamentarias, pues eso de los funcionarios es una plaga universal. Los banqueros, por ejemplo, se permiten aquí el lujo de llamarse a sí mismos un «poder fáctico», un poder de hecho, extra-parlamentario. Y, desde luego, como en otros países, las autoridades del Estado español resultan ser, en muchas ocasiones, unos «mandados» del poder imperialista.

Aunque la Constitución diga que el Estado español es una monarquía parlamentaria (como lo son Holanda o Suecia), es éste un régimen

parlamentario donde el poder extra-parlamentario es mucho más fuerte. Eso es así en lo que respecta al poder de quienes quieren preservar el sistema socio-económico, e incluso es así en lo que respecta a la oposición (es más oposición real ETA, y Herri Batasuna, que son parlamentarios que no ejercen de tales, que la oposición parlamentaria). Por eso en este número de BICICLETA no hablamos apenas de los partidos políticos.

En los territorios sometidos al Estado español hay una amplia oposición extra-parlamentaria en potencia (como se nota en la cifra de abstencionistas cada vez que hay elecciones: el caso de Galicia en octubre será un buen ejemplo). Lo que distingue al régimen político del Estado español no es ni la existencia de un parlamento ni la existencia potencial de una amplia oposición extra-parlamentaria (que en Euzkadi es una existencia real—, y por eso hay tantos presos vascos mientras no hay ni uno sólo del PSOE o PG). Lo que nos separa de Holanda y Suecia (por ejemplo) y nos acerca mucho a Argentina y Brasil es la evidente fuerza activa que aquí tiene el gobierno de los extra-parlamentarios. Las elecciones y el parlamento proporcionan, como si dijéramos, la coreografía. Así es en la realidad y así podía verse que fuera desde 1975 y aún desde antes, desde que la oposición política optó por la «reconciliación nacional» con los franquistas. «Reconciliación nacional» y «ruptura democrática» eran consignas incompatibles. El Estado español no es una monarquía parlamentaria. La ficción de la soberanía popular es aquí una superficción.

B.I.C.I.C.L.E.T.A.



Es difícil escribir con detalles sobre el poder, porque una característica del poder es el secreto. El poder siempre se protege a sí mismo. Si la CIA en Estados Unidos trama un complot contra el gobierno de algún país, eso se hace en secreto. Luchar contra el poder es también luchar contra ese secreto. Si en España, en el episodio político más importante en lo que va de año, el intento de golpe del 23 de febrero, estuvo o no estuvo implicado tal o cual general, qué conversaron por teléfono Juan Carlos de Borbón y los capitanes generales, qué conversaciones continúa habiendo ahora para reducir el impacto político del juicio a algunos de los golpistas, todo eso no son sólo secretos del sumario sino que van a permanecer como secretos en el juicio. Falta siempre, por naturaleza de estas instituciones, información sobre el ejército y la policía (especialmente sobre los servicios de información secretos de esas instituciones, sobre sus redes de confidentes).

Más que descubrir ningún secreto, los artículos sobre los «monopolistas de la violencia» repiten verdades de todos conocidas, aunque sea considerado de mal gusto repetirlas. Los únicos que tienen derecho a usar armas contra seres humanos en un «estado de derecho», son los militares y la policía. Las fuerzas armadas son la esencia del Estado.

¿Cómo usan el monopolio de la violencia en el Estado Español? Que lo hagan de acuerdo a la ley o contra la ley, no es quizá lo más importante. En cualquier caso, hay aquí ejemplos para todos los gustos, desde gustos democrático-liberales hasta gustos fascistas. Cuando el «monopolio de la violencia» no puede ejercerse según la legislación vigente, siempre es posible inventar una nueva teoría política ad-hoc, sea ésta la de la Seguridad Nacional u otra.

LOS MONOPOLISTAS DE LA VIOLENCIA

LA DANZA DEL SABLE

El ejército, «poder fáctico» por excelencia, requiere un espacio especial en un extra dedicado a hablar de los que mandan aquí. En las páginas que siguen se relatan sus movimientos en los últimos años, tratando de enmarcar la naturaleza de las fuerzas armadas, el golpe como algo que cabía esperar, y lo que puede avecinarse si nadie lo remedia, que no lo va a remediar.

Utilizamos como base un extracto del artículo de Ignacio Ramonet en «Le Monde Diplomatique» de abril. Una información bastante ajustada, que pensamos resume bien el tema a tratar. Con distinto tipo de letra, intercalaremos informaciones suplementarias aportadas a miembros de los colectivos BICI por las más diversas fuentes, que van desde lo oído a un ministro en una rueda de prensa, a confidencias de miembros de la media docena de oficiales democráticos que hay en el ejército, reflexiones de antiguos miembros de la UMD, dossiers de la Unión de Periodistas, etc., junto a opiniones que son de responsabilidad exclusiva del colectivo.

B.

Los historiadores hablan de 200 pronunciamientos militares desde 1814. No nos hemos parado a contarlos todos, lo que sí es cierto es que, sin guerras exteriores que «justifiquen» su existencia, los militares llevan doscientos años empleándose en la política interior: asonadas, guerras, levantamientos, dictaduras... marcadas, desde Pavía hacia aquí, por un feroz y sanginario conservadurismo, por una oposición ciega a la voluntad popular cuando ésta lleva a la sociedad por derroteros demasiado avanzados.

En 1906, con la Ley de Jurisdicciones especiales, vigente hasta no hace mucho, el ejército se reservaba el derecho a juzgar y sancionar temas de libertad de expresión con relación a las fuerzas armadas, y toda una serie de «delitos»: manifestación, huelga, etc., que son asociados a la sedición. Su empleo en las huelgas es especialmente eficaz, por ejemplo en 1917, o en 1919, donde se llegó a ocupar militarmente toda la provincia de Córdoba.

En Barcelona, donde hay un pujante Movimiento Obrero, básicamente anarcosindicalista, la presencia del ejército es constante. Miláns del Bosch (¿os suena?) manda allí, y pone y quita a las autoridades si las considera demasiado blandas. Su mejor auxiliar será otro general: el criminal Martínez Anido, gobernador de Barcelona, que celebra con una paella el asesinato de El Noi del Sucre, y figura como primer ministro de gobernación de Franco, un puesto éste donde los militares han tenido grandes actuaciones. Recordemos a Camilo («Camulo») Alonso Vega. Pero antes, en 1923, había tenido lugar un pronunciamiento bien llevado a cabo, y con grandes similitudes al que se ha intentado ahora: implicación del rey, complicidad de los partidos, supresión de las organizaciones molestas y de los derechos sindicales, reorganización de las fuerzas de la derecha, etc. El Gabinete Primo de Rivera incluye al socialista Largo Caballero como ministro de Trabajo.

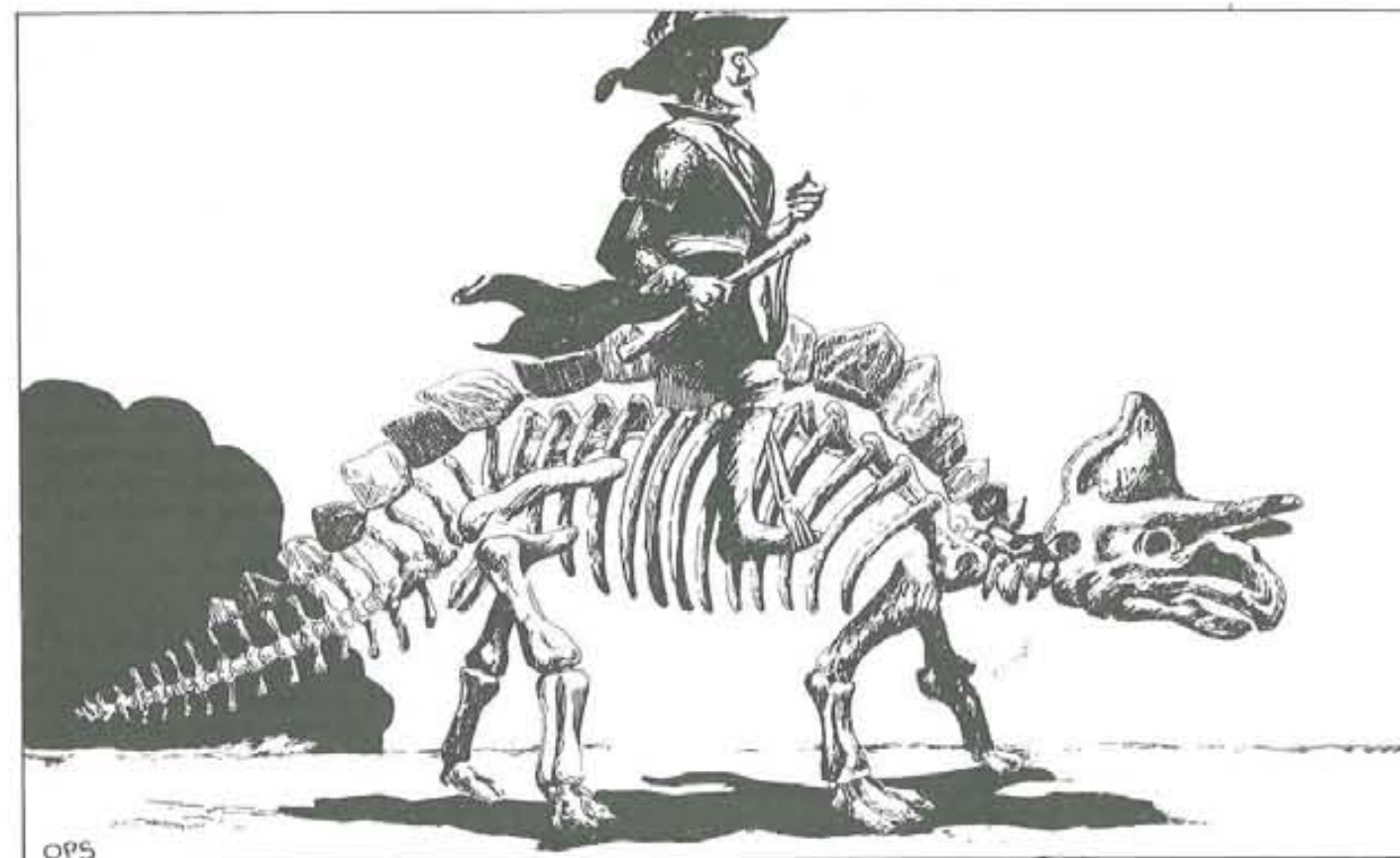
Y así llegamos, tras diversos atentados, al levantamiento de Franco, Sanjurjo y Mola, en 1936, sobre el que no vale la pena extenderse mucho por ser bien conocido para los lectores de BICI.

El actual ejército español, nacido de la victoria militar franquista de 1939, ha sido, durante cuarenta años, la garantía fundamental de un régimen que descansaba, en última instancia, sobre la legitimidad conquistada por su éxito militar. A todo lo largo del franquismo, este ejército ha funcionado como un elemento político determinante (en todos los gobiernos franquistas han habido varios ministros militares), y la educación de los oficiales en las academias militares creadas por Franco, incidía en el papel de vigilancia ideológica que estaba reservado al ejército.

Desde las primeras medidas de democratización, las fuerzas armadas han reaccionado contra un cierto número de tímidas iniciativas liberales y si esto, en un primer tiempo, no tuvo consecuencias importantes fue porque no estaba, por una parte, la garantía del rey Juan Carlos, heredero elegido por el propio Franco, y por otra la habilidad de Suárez que, respetando la legalidad precedente, quitaba cualquier argumento legal a los adversarios de la democratización. Sin embargo, «desfranquistizar» España sin desmontar el ejército aparecía, cada vez más y a pesar de la mano derecha del jefe de gobierno, un objetivo difícil de mantener.

En cualquier caso, y de una forma un tanto suicida, nadie está seriamente por la labor. Los partidos de izquierda y derecha, ex franquistas o ex clandestinos, se olvidan pronto de sus soflamas del día anterior y de la necesidad de desfranquistizar el sistema; no sólo el ejército, también la policía, el poder judicial, etc., permanecen intactos como pilares de un aparato democrático que se quiere homologar en la letra de sus leyes con las democracias avanzadas.

El hecho es que una depuración mínimamente seria del ejército lo habría hecho prácticamente desaparecer. Franco hizo limpieza general en 1939 a base de fusilamientos y expulsiones, remachando la tarea con la ley de 1940 que separaba del servicio a los «tibios», abrió la Academia y la puso en buenas manos ultras, y volvió a estructurar las capitánías generales dándoles la organización territorial que había eliminado la república. Una muestra de que toda esta reorganización va dirigida al «enemigo interior», la tenemos en Madrid,



bien lejos de cualquier frontera, y que tiene la guarnición más importante, situada como un anillo o cinturón en torno a la capital.

Y aquí está la raíz de toda la película de hazañas bélicas, real como la muerte misma, que se describe en las líneas que siguen. El cambio a la democracia sin una «ruptura» en las instituciones significa, además de que el ejército conserva todo su poder y las funciones disuasorias que tiene asignadas en todas partes, que sin hacerse a la idea de que se ha de integrar en un nuevo orden donde manda gente «de paisano» asiste crispado al espectáculo que supone el derrumbe de todas las cosas que se les han inculcado como inmutables y fundamentales.

La culpa, como decíamos, no está sólo en el gobierno sino en todas las fuerzas políticas, en la «clase dirigente», que tal vez sin acabar de decidirse, porque la acción del ejército le ha venido muy bien para salvar sus privilegios en otras ocasiones históricas, se hinchaban a hacer declaraciones diciendo que las Fuerzas Armadas aceptan la democracia, que los que hablan de «depuraciones» son desestabilizadores, que los sectores ultras son insignificantes, etc. etc.

El primer choque importante entre el gobierno y la jerarquía militar se produjo en abril de 1977 cuando, tras la promulgación en febrero de un decreto instando a los militares a conservar una total neutralidad política y mientras Suárez prometía no legalizar el partido comunista, el primer jefe de Gobierno rompía su promesa y legalizaba el PCE, provocando inmediatamente la dimisión del vice-primer ministro, el almirante Pita Da Veiga.

Aquí aparece un hombre clave en la trama, al que tendremos ocasión de referirnos ampliamente más adelante, el entonces teniente coronel Federico Quintero, que se encarga de filtrar lo tratado en el Consejo Superior del Ejército sobre el tema, y es cesado.

Pero antes de la dimisión de Pita, hay que referirse al vicepresidente De Santiago, conocido ultra, que señala en una carta: «el verdadero motivo de mi dimisión ha sido mi oposición a la legalización de las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes en la zona roja, y de Comisiones Obreras que es la organización sindical del PC». El general Iniesta Cano, que dirige entonces la Guardia Civil, se solidariza en carta a «El Alcázar» y califica la dimisión de De Santiago como «sabia y limpia lección que han de seguir cuantos aspiren a servir noblemente a la Patria».

Apoyándose en este mismo decreto que, durante un tiempo desconcertó al ejército, Suárez llevó a cabo inmediatamente una serie de reformas militares, siendo la más importante la fusión de los tres ministerios de las fuerzas armadas (marina, aviación, ejército de tierra) en uno sólo y nombrando, más tarde, a un civil para la cartera de defensa. En los cuarteles estas medidas fueron mal recibidas, ya que limitaban las perspectivas de carrera de los oficiales; se temía un desmantelamiento de las fuerzas armadas. Y en un contexto político muy agitado, entre las primeras elecciones libres de junio de 1977 y la decisión de restablecer la autonomía catalana el 28 de septiembre del mismo año, comenzaron las grandes conspiraciones militares.

Habría que reseñar la información que publicó el diario «Le Monde», según la cual el capitán general de Cataluña tiene preparado un plan para una eventual intervención del ejército en la represión de huelgas y manifestaciones; la parte militar está confiada al coronel Martín de Pozuelo, mientras que el facha Alberto Royuela es el encargado del trabajo «político».

Conspiración ignorada

Sin duda, la más ambiciosa (y ciertamente la más peligrosa antes de la del 23 de febrero último) es la «conspiración de Játiva». Del 13 al 16 de septiembre de 1977, se reunieron discretamente en Játiva (ciudad de la provincia de Valencia), un número considerable de oficiales de alto rango entre los que se pueden citar los ex ministros del ejército, generales Barroso y Álvarez Arenas, así como los generales De Santiago, Campano, Prada Canillas, Coloma Gallegos y Miláns del Bosch (que mandaba entonces la división acorazada Brunete), el almirante Pita Da Veiga, etc. Los conjurados, después de un análisis de la situación política interior, proponían al rey constituir un gobierno provisional, apoyado por las fuerzas armadas y presidido por un general. Pensaron incluso, si el rey lo rechazaba, en buscar «otras vías» para realizar su plan. Entre las decisiones que adoptaron estaba la de exigir la dimisión del gobierno Suárez y la disolución del Congreso por un período de dos años «hasta el restablecimiento de la normalidad». El nuevo gobierno habría estado presidido por el general De Santiago, asistido por el general Campano (tenían la intención de nombrar a Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, ministro de Hacienda).

Esta conjura tuvo lugar pocos días después de un gravísimo incidente entre el gobierno y el general Coloma Gallegos, que mandaba entonces la región militar de Cataluña, y que, el 11 de septiembre, había manifestado su intención de sacar los tanques a la calle para oponerse a la manifestación popular masiva (un millón de personas) en apoyo de la autonomía catalana.

En este período, el general Liniers, que mandaba la región militar de Canarias, amenazó con dimitir si el gobierno no tomaba medidas para oponerse a la «degradación política» en el archipiélago donde los grupos autonomistas (sobre todo el MPAIAC) se estaban haciendo fuertes; el general Liniers, rebasando las reglas de la disciplina, pidió la solidaridad de sus compañeros y, en particular, el general Prada Canillas se manifestó de su parte.

En fin, el 8 de octubre de ese mismo año 1977, los grupos de extrema derecha y los nostálgicos del franquismo, dirigidos por Blas Piñar, Tomás de Carranza, García Carrés, Girón, Utrera Molina, José María Oriol, Fernández de la Mora y el general Iniesta Cano, se reunieron también para determinar su actitud en el caso de un eventual golpe de estado.

Por otra parte, se crea una Unión patriótica militar, por el coronel Fernando Delgado de la Rioja y los tenientes coroneles José Ramírez Garellano, Manuel Balenda, Díaz de la Cortina, Félix Bedmar y el comandante Carlos Fernández Gálvez. Se constituyen, igualmente, con un proyecto parecido, el Movimiento patriótico militar, las Juntas patrióticas, etc. El golpe de Estado está, claramente, en el aire desde ese otoño de 1977.

Y el gobierno de Suárez no reacciona: el conjunto de las informaciones sobre estos inquietantes acontecimientos, que le dirige la dirección general de la seguridad, son centralizados por el comisario Conesa, conocido por sus ideas conservadoras, que los esconde a sus superiores y, en particular, al ministro del Interior (Martín Villa entonces) y al presidente del gobierno, Suárez.

Alertado al fin, con pruebas concluyentes, de la amplitud de esta conjura militar y de la inminencia de este intento de putsch, el gobierno reacciona con moderación y la mayor discreción (no se filtra ninguna información en la prensa); multiplica los traslados (el general Miláns del Bosch, por ejemplo, es relevado de su cargo de comandante de la División Acorazada Brunete), procede a pases a la reserva anticipados y, sobre todo, acelera la promoción de oficiales leales (los generales Gabeiras, que accede a jefe del estado mayor de la armada y que, desde este puesto, ha sido uno de los artífices del contra-golpe de Estado del 23 de febrero; Quintana Laccaci, que manda la región militar

de Madrid y cuya fidelidad fue preciosa este 23 de febrero; y Pascual Galmes, que reemplaza primero a Miláns del Bosch a la cabeza de la Brunete y luego asciende a jefe de la importante región militar de Cataluña, donde se encontraba el 23 de febrero).

El pacto del miedo

Con esto de generales «leales», no se piense que se trata de gente de izquierda, ni siquiera en la mayoría de los casos de lo que se denomina «talante liberal». Por ejemplo, el general Quintana Laccaci, declaraba a la prensa unos meses antes del golpe: «los militares debemos respetar la democracia, pero no asumirla, ni introducirla en nuestras filas»; se trata de uno de los generales más «progresistas» que hay en activo en la actualidad.

Pero la consecuencia más espectacular de este primer intento serio de desestabilización de la democracia, es de orden político: se efectúa un acercamiento entre el partido en el poder y la oposición; se concluye un pacto político entre el gobierno de una parte, y los partidos de izquierdas y los sindicatos de otra; es el pacto de la Moncloa.

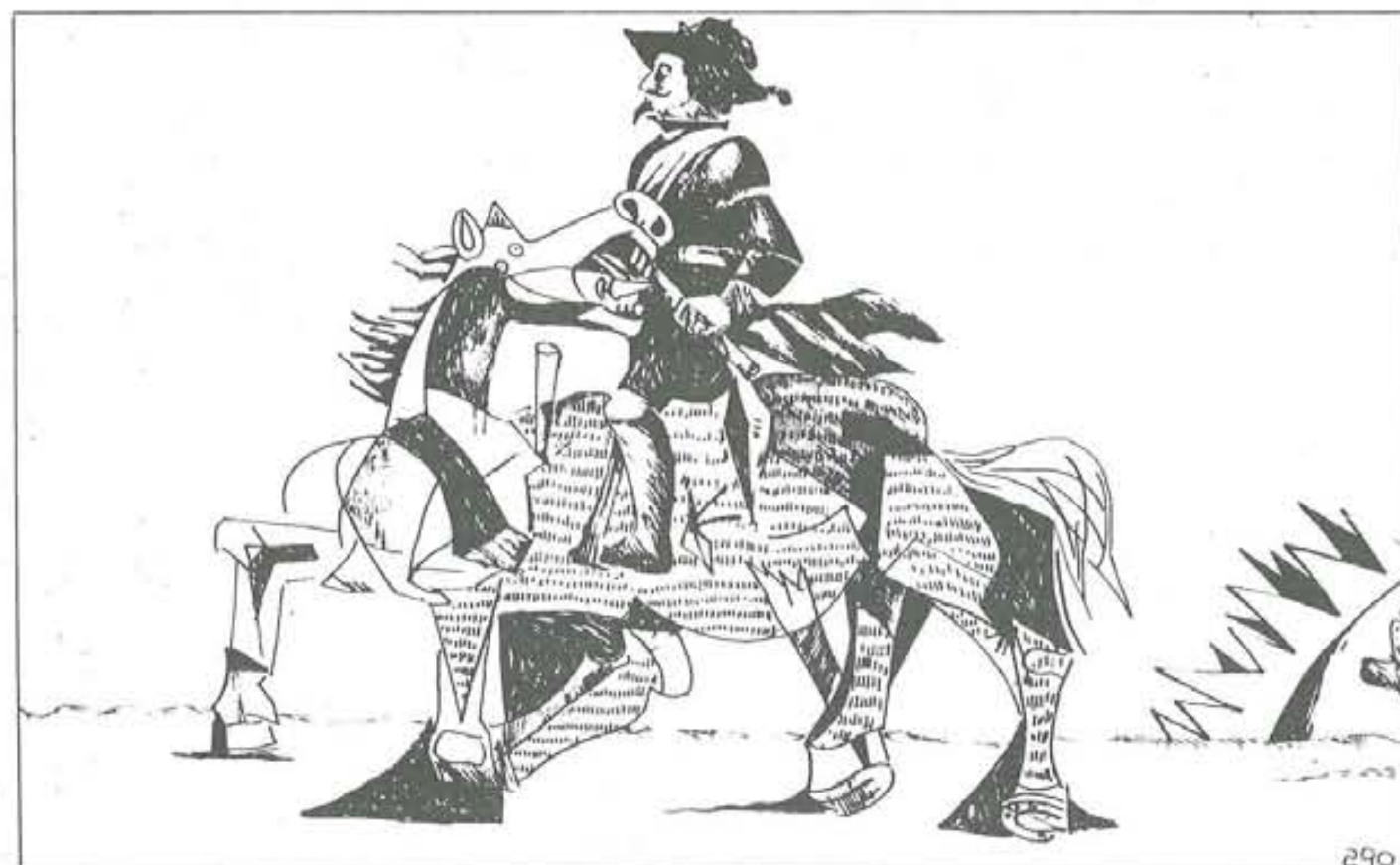
Se establece un acuerdo (se hablaba todavía de consenso) sobre una plataforma de medidas económicas y sociales destinadas a luchar contra la inflación en apariencia. De hecho (pero nadie sabe verlo entonces) se trata de demostrar claramente a las fuerzas armadas que el conjunto de la clase política se opone enérgicamente al putsch.

Sin embargo, el mal continúa dentro del ejército. En 1978 se trama otra conspiración, el general Medrano pone en pie la «operación Cervantes», con la ayuda activa de los coroneles Herrero y Mer, los cuales movilizan a un número considerable de oficiales en activo y de la reserva. Estos graduados entrenan grupos de jóvenes civiles de extrema derecha dirigidos por De las Heras del partido Fuerza Nueva (neo-fascista), el marqués de Prada (carlista de derechas) y Velo, de la Unión Nacional Española (neo-falangistas), estos grupos de jóvenes deberían introducirse en los cuarteles para apoyar un eventual putsch.

De hecho, la amplitud de los gruñidos de los militares es tal, que el gobierno se ve incapaz de reaccionar con eficacia entre 1978 y 1979. Cada crispación de autoridad, particularmente por parte del general-ministro de Estado Gutiérrez Mellado, acentúa las críticas en los cuarteles. Y los incidentes se suceden: el más destacable es, sin duda, la célebre «operación Galaxia», que revela los intentos del teniente coronel Tejero y el capitán Ynestrillas, apoyados por un escaso número de oficiales, de secuestrar al primer ministro Suárez en su palacio de la Moncloa el 17 de noviembre de 1978, con el fin de precipitar, de una vez, la acción conjunta del ejército. Este asunto pone de relieve, a la vez, la debilidad del sistema de control del ejército (sólo fue descubierto por casualidad), y la complicidad de los jueces militares a quienes repugna sancionar, justamente, estos intentos de rebelión.

A continuación de este affaire, el general Gutiérrez Mellado, ministro de Suárez, fue insultado públicamente en Cartagena por el general de la guardia civil Atarés Peña; esto se tradujo en un consejo de guerra (el primero para juzgar a un general desde la guerra civil) y la condena a una pena mínima.

Recordemos a los juzgadores de Atarés. Presidente



del Tribunal León Pizarro (el que mandaba los tanques en Valencia), Juez Instructor Luis Caruana (el que ocupó el poder civil el 23-F), encargado de confirmar la pena o revíarla, Miláns del Bosch (sin comentarios).

Aparece implicado en la «galaxia» el ya coronel Quintero, al que en «castigo» se le envía de agregado militar a la Embajada de Turquía. Parece que el intento sedicioso es algo más que una patochada, y que en la mente de la gente inteligente, se trata de pulsar el grado de adhesión que un golpe podría tener en las distintas regiones militares y en las unidades claves.

El capitán de navío Menéndez, con ocasión de los funerales por militares asesinados por terroristas, respondió públicamente al general Gutiérrez Mellado que «antes que la disciplina está el honor...». El crecimiento de la indisciplina es tal que el rey declara en un discurso dirigido a los militares: «Un ejército que pierde el sentido de la disciplina no es un ejército».

No sirve de nada y los incidentes recrudecen: con ocasión del cincuenta y nueve aniversario de la fundación de la Legión española, el general Merry Gordon, jefe de la región militar de Sevilla, hace públicamente declaraciones anticonstitucionales. El 23 de septiembre de 1979, el general Miláns del Bosch declara al diario ABC: «Nosotros los militares, vemos con gran preocupación esta transición política (...) El ejército deberá intervenir cuando sea evidente que las leyes, la acción policial y judicial, se revelen insuficientes».

En enero de 1980, «Diario 16» titula: «Un golpe de Estado ha fracasado en Madrid». Se desmiente por todas partes, pero se sabe que el jefe de la División Brunete, el general Torres Rojas (implicado en el putsch del 23 de febrero), ha sido relevado de sus funciones y trasladado a La Coruña, a causa de sus declaraciones anticonstitucionales ante los oficiales de su cuerpo. En febrero de 1980, rumores insistentes hablan de conversaciones entre el

antiguo presidente del gobierno Arias Navarro y un cierto número de oficiales importantes. En septiembre, el «informe Quintero» sobre el golpe de Estado del general Evren en Turquía, se comenta en los cuartos de oficiales; el coronel Quintero es un antiguo jefe de los Servicios de Información del almirante Carrero Blanco (primer ministro de Franco), antiguo instructor de los Guerrilleros de Cristo Rey, comandos de extrema derecha; es un antiguo condiscípulo del general Evren con el que ha seguido, en los Estados Unidos, un curso militar de enseñanzas de contra-insurgencia; nombrado agregado militar en Ankara, Quintero se encuentra allí curiosamente en el momento del golpe de Estado y realiza sobre él un escrito que constituye una verdadera apología del putsch turco. El coronel Quintero se encuentra también, curiosamente, desde hace varios días en Madrid cuando la tentativa abortada el 23 de febrero.

Más concretamente: Quintero se encuentra «inexplicablemente» en la División de Inteligencia del cuartel general de Ejército. El asunto parece haber pasado desapercibido pero está fuera de toda duda que además de «las figuras gloriosas del ejército, los coroneles adscritos al viejo Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno, creado por Carrero Blanco, son los verdaderos cerebros del golpismo, y no, porque se haya mantenido ningún tipo de confluencia casual, sino porque las redes creadas entonces (con una incidencia clave en los aparatos policiales, que siguen dirigidos por aquella gente) han seguido desarrollándose».

Veamos: el coronel San Martín, máximo responsable del Servicio de Información de Carrero, aparece como jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, clave en el golpe, y en las reuniones preparatorias anteriores. Pardo Zancada, adscrito a servicio de Carrero, es otra de las figuras, como comandante de la misma unidad. Quintero ha quedado ya suficientemente destacado (Otras figuras del Servicio como

Casínello, o Prieto Cueto aparecerán sin duda en el dossier sobre la policía).

Los servicios de Información son los verdaderos artífices del golpe, y la mayoría se han salvado hasta ahora de ser procesados. A pesar de que por ejemplo se pilló en septiembre del 80 al teniente coronel García Mauriño, potenciándose un servicio de información particular, mediante la difusión de las claves secretísimas de la comunicación militar. A pesar de que el jefe de Información de la Capitanía General de Valencia, teniente coronel Pacheco, haya aparecido con un papel decisivo el 23-F. ¿Cuándo volverán a sonar estos nombres?

En diciembre, el periódico de extrema derecha «El Alcázar», comienza la publicación de una serie de tres artículos firmados «Almendros»: el tono y el estilo de los textos indican que, bajo este pseudónimo se esconden uno o varios oficiales pertenecientes a la alta jerarquía del ejército. Los autores dan pruebas de cultura y de una visión política compleja de la situación; el primer texto lleva por título «Análisis político de la situación militar». El segundo aparece el 22 de enero de este año, titulado «La hora de las tres instituciones», y califica la Constitución de ambigua y sostiene que «la imagen del Congreso se degrada». En el último artículo, aparecido en los comienzos de febrero, «Almendros» señala que «la solución para España no pasa por la simple continuidad» y que la actual «irresponsabilidad política obligará a la Corona a intervenir». Si bien no se ha efectuado ninguna encuesta para determinar qué oficiales se esconden tras el nombre de «Almendros», algunas comprobaciones permiten suponer que el general Armada forma parte del mismo, así como el coronel San Martín (ambos implicados en el putsch del 23 de febrero), así como, entre otros, el teniente coronel Beneyto y el teniente coronel Mer.

Nadie se ha preocupado de investigar quiénes son los cerca de 500 golpistas, en su mayoría militares, que firmaron aceptar solidariamente la responsabilidad a que dieran lugar los artículos de «Almendros». En uno de ellos, se describe lo que va a ser exactamente la «operación Armada», cuando tras pedir la intervención del rey se habla de «la salida de la crisis por un gobierno de coalición cuya única viabilidad se fundamentaría en el prestigio y la autoridad fáctica de quien lo presidiera» (Armada, mismamente).

En este mismo diario, «El Alcázar», el general Cano Portal ha publicado, bajo el pseudónimo de «Jerjes», textos insurreccionales; el general De Santiago (ex ministro de Estado del gobierno Arias, implicado en la conspiración de Játiva) publica, también en «El Alcázar», algunos días antes del 23 de febrero un texto titulado «Situación límite», en el que reclama abiertamente la intervención del ejército. Ninguno de estos autores se siente inquieto; el gobierno les deja hacer.

Ciertas revistas militares, con gran difusión en los cuarteles, como «Reconquista» o «Empuje», no cesan de hacer apología de los regímenes militares latinoamericanos, exaltan el recuerdo de la dictadura franquista y se burlan del espíritu liberal regularmente.

Y no sólo del espíritu liberal, sino que el propio rey Juan Carlos es tomado a pitorreo en un gran número

de tertulias cuarteleras, y en reuniones de jefes y oficiales. En algunos casos, oficiales «demócratas» son sancionados por llevar «El País» u otras publicaciones consideradas nefastas. Todo esto es conocido de los dirigentes políticos, lo que no les impidió consensuar en la Constitución amplísimos poderes para el ejército que incluyen: «garantizar la soberanía e independencia, defender la integridad territorial y defender el ordenamiento constitucional democrático». A pesar de que mientras se hacía la Constitución un senador y ex militar, tan poco sospechoso de izquierdismo como Joaquín Satrustegui, declaraba: «Estoy convencido de que entre los altos mandos del ejército hay un porcentaje bastante considerable que opina que la democracia no conviene a España».

Preparando el 23-F

La presión difusa del ejército alcanza a lo largo del año 1980 un alto grado de intensidad, en el momento en que la UCD, minada por sus querellas internas y gastada por el poder, parece girar en el vacío. Algunos hombres políticos piensan en un desastre de la UCD que dejaría la vía libre a los militares; es entonces cuando el diputado socialista Enrique Múgica imagina la «operación De Gaulle»: un gobierno de coalición PSOE-UCD presidido por un militar. Múgica piensa en el general Armada, uno de los oficiales con mayor índice cultural del ejército español. Preceptor del rey durante veintitrés años, buen conocedor de los dossiers económicos del país y que goza de un gran prestigio en el seno de las fuerzas armadas, Múgica y el general Armada se encuentran por dos veces, a comienzos del otoño, en Lérida, donde el general era todavía gobernador militar, y luego en Navidad en Pontevedra, donde el general posee una propiedad; las conversaciones son oficiosas y, por otra parte, el PSOE se apresura a decir que se trata de una iniciativa individual del diputado, que no implica al partido. No es menos sintomático que, en la vigilia del putsch del 23 de febrero, algunos responsables políticos de izquierdas no vieran para el país otra salida que el recurrir a un general...

El propio Suárez, durante un viaje, filtra a los periodistas que conoce perfectamente el intento del PSOE de colocar a un militar como presidente del gobierno. En una de las reuniones, participan Múgica, Solana y Osorio de Coalición Democrática e introducido en los medios militares. Es el mismo Múgica que en declaraciones a «Interviú», en julio de 1979, se deshace en elogios para Miláns del Bosch, y declara que el ejército no tiene nada de golpista. Declaraciones que contrastan con las de su correligionario Alfonso Guerra cuando describe, aproximadamente, lo que se proponen los militares unos meses antes: «La involución duraría 72 ó 90 horas; luego se volvería al respeto de la democracia, tras la caída de algunas cabezas a las que se haría un monumento, tras lo cual se formaría un nuevo parlamento posiblemente más moderado que el actual».

Y hay que constatar que, después de cuatro años de régimen parlamentario el ejército continúa, globalmente, idéntico a como era bajo el franquismo; han sido pocas las medidas concretas tomadas para democratizarlo. Cierta-

mente, se ha modificado el sistema de ascensos heredado del franquismo; a fin de frenar la carrera de oficiales anticonstitucionalistas. Pero no son más del 10% los oficiales que se declaran demócratas y el deseo del golpe, en estos comienzos de 1981, es manifiesto. A todos los niveles, los cuadros franquistas se mantienen, y se continúa educando a los oficiales (en las academias los profesores son exclusivamente militares) refiriéndose ostensiblemente a la personalidad de Franco. Un ejemplo: algunos días después del golpe del 23 de febrero, cuando el rey presidió en Zaragoza la ceremonia de entrega de diplomas a la catorce promoción de la academia militar, tuvo que escuchar el discurso pronunciado por el mayor de la promoción, el lugarteniente González de Austria, que hizo la apología del general Franco y del golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Pero no son sólo los profesores o los dirigentes de academias militares. Las únicas academias preparatorias para el ingreso están controladas por ultras. El 60% de los aspirantes a oficiales son hijos de militares, y un 25% hijos de militantes ultraderechistas. El hecho de que sólo una mínima parte de los militares implicados en el golpe hayan hecho la guerra civil demuestra que es un problema institucional, que en las academias militares se siguen impartiendo las doctrinas ultras... Según el ex comandante Luis Otero se puede considerar que no pasan de un 4% los militares demócratas, mientras que hay un 20% claramente golpistas, el resto son de tendencia conservadora, más cerca del golpismo que de la democracia.

El gobierno no ha sido capaz de conseguir que el ejército aceptara la reincorporación en su seno de antiguos oficiales que fueron fieles a la República; tampoco ha podido oponerse a la liquidación de la Unión Militar Democrática de la que algunos oficiales, auténticos demócratas, fueron expulsados de las fuerzas armadas. Ni tampoco ha conseguido desmilitarizar la guardia civil y la policía nacional, y hacer depender estos dos cuerpos únicamente del ministerio del Interior. Tampoco ha adoptado la elemental precaución de alejar de Madrid a las dos unidades más importantes: la DAC (División Acorazada Brunete) y la BRIPAC (Brigada de Paracaidistas con base en Alcalá de Henares), cuyo objetivo evidente es ocupar Madrid en caso de problemas populares.

Por el contrario, a lo largo de estos últimos años, se han adoptado decisiones que han llevado al reforzamiento de ciertos cuerpos conocidos por su conservadurismo: en primer lugar la Legión, para la cual se ha creado en Ronda (Málaga) un centro de entrenamiento y una academia de suboficiales; en segundo lugar, la caballería blindada, que actualmente ha doblado sus efectivos. La caballería es, por tradición, el cuerpo más reaccionario: dotado de carros ligeros, de coches con ametralladora y de blindados con ruedas, sus escuadrones poseen gran movilidad y están bien entrenados para el combate en la calle. Es un arma esencialmente anti-insurreccional. Su feudo es Valladolid y el coronel Navarro, que manda el regimiento de caballería Farnesio, es sin duda el jefe de fila de los coroneles españoles con ambiciones. Y hoy, los coroneles tienen un deseo de golpe mucho más marcado que los generales.

El ya citado ex comandante Otero nos declaraba a este respecto: «El peligro es muy real en coroneles y



generales de brigada, gente que pertenece a la primera y segunda promoción del ejército de Tierra y en los que se están detectando una serie de movimientos en el último año. Tienen un gran peso a nivel operativo. Son un sector que ha tenido siempre consciencia de que iba a ocupar altos puestos y tiene una preparación profesional mucho más sólida que los anteriores, que ingresaron en el ejército con la guerra, un porcentaje muy elevado son Diplomados de Estado Mayor. Han recibido una formación acorde con el franquismo y pueden tener papeles muy relevantes en movilizaciones golpistas: es el caso del coronel San Martín, que es el auténtico cerebro del golpe del 23 de febrero».

El golpe por fin

En este clima de presión militar se precipitan los acontecimientos al comienzo del año. El 21 de enero, el jefe del gobierno Suárez dimite sin dar explicaciones claras pero, sin duda, bajo la presión del ejército; el rey, a pesar de las tensiones que genera este vacío gubernamental, mantiene su proyecto de viajar al País Vasco. El viaje es muy mal visto por el ejército por dos razones: primero porque es un reconocimiento oficial del Estado autónomo vasco, y después porque teme que este viaje no sea más que la consecuencia de un acuerdo entre el PNV y la UCD y se salde con la consecuencia de una amnistía para los detenidos vascos acusados de terrorismo. Y esto, sobre todo, el ejército lo soportaría difícilmente. El rey, ya se sabe, sufrió una afrenta en Guernica, pero su estancia en el País Vasco se considera como una victoria.

Parece claro que estas presiones militares impidieron las «medidas de gracia» que el rey iba a anunciar en su visita a Euzkadi, y de las que ya se había hecho eco la prensa.

El ambiente no puede ser más tenso. Suárez, obligado a dimitir por presiones militares y de la Iglesia, el informe Quintero en marcha, el rey abucheado ante la imposibilidad de anunciar la amnistía. En «Diario 16» el ex capitán Fernando Reilen (expulsado del ejército por demócrata), habla claramente de «presiones militares», «ruido de sables»: «está en marcha una operación blanda para evitar o controlar las de otro tipo». Volviendo a los tiempos crípticos del franquismo, el diario liberal «El País», publica esta viñeta, sin ningún comentario, el mismo día.



Algunos días más tarde, ETA militar comete un grave error político al asesinar al ingeniero Ryan; los terroristas se encuentran aislados, las manifestaciones populares rechazan la violencia armada. Es la primera vez que con tal unanimidad se rechaza el terrorismo; esto, en el contexto vasco constituye la mayor victoria política que ha conseguido la democracia. Esta victoria insólita (ETA no acostumbra a cometer a menudo errores tan grandes), se ve arruinada algunos días más tarde por el asunto de Arregui. Una conjunción de factores hace este asunto relativamente confuso; el hecho es que el militante vasco muere, tras varios días de interrogatorio, a manos de la policía (dependiente del ministerio del Interior) en la prisión de Carabanchel (dependiente del ministerio de Justicia). En una situación política explosiva, los dos ministros se intercambian la responsabilidad de la muerte de Arregui. El ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, declara públicamente que Arregui ha sido asesinado por «los hombres de Rosón» (el ministro del Interior, y su adversario político). Estas polémicas sordas sobre el cadáver de un hombre que había sido torturado (se habla también de provocación policial), llegan al escándalo; el balance político del asunto Arregui es catastrófico para el poder pues las manifestaciones de solidaridad que tienen lugar en los funerales del militante vasco (un terrorista, para las fuerzas del orden), exasperan a la policía y al ejército. La actitud de los ministros asquea a numerosos policías y las dimisiones de funcionarios de la policía se multiplican, amenazando con paralizar los servicios del ministerio del Interior. Único beneficiario político de este singular asunto: ETA militar, que consigue así hacer olvidar la muerte de Ryan.

En estas circunstancias — políticas, económicas, sociales y militares — el golpe del 23 de febrero no constituye una sorpresa. Se sabe que estaba bien organizado y no revela nada de improvisación; su fracaso se debe tanto a la incapacidad del general Armada para controlar el estado mayor del ejército como a la aptitud de los generales Sabino Fernández Campos y Gabeiras, para dirigir el contra-golpe al lograr controlar la BRIPAC y al hacer regresar a las unidades de la Brunete que ocupaban ya algunos objetivos de Madrid, así como para convencer a los

generales dudosos (Campano de Valladolid, Merry Gordon de Sevilla, De la Torre Pascual de Baleares y González del Yerro de Canarias), conocidos por sus simpatías ultras, para que no imitaran a Miláns del Bosch (parece que el rey hizo por lo menos dos salidas en helicóptero — a Burgos y a Zaragoza? — para persuadir personalmente a los generales reticentes).

No entraremos en las especulaciones del por qué del fracaso del golpe del 23 de febrero: si había varios movimientos en marcha y se entrecruzaron, etc. El desarrollo previsto para la tarde del 23 aparece claro. Tejero como un fantoche «con huevos» hace de caballo: aplastamiento de ciertas cabezas (las del cuartito aparte), algo de sangre. Entrada de Armada con la División Acorazada detrás y ocupando Madrid para evitar incontrolados como Tejero. Eliminación física de Tejero si es necesario. Presión de Miláns con los tanques en la calle y preparativos en otras Regiones Militares. Suficiente para que Armada se presente como única solución para evitar una guerra civil y exponga a los parlamentarios, a estas horas dispuestos a aceptar lo que sea, un gobierno de salvación presidido por él y con participación de sus amigos socialistas. El rey, en la envoltura de los hechos consumados, sancionando la dictadura constitucional y monárquica a lo Alfonso XIII. Lo de después ya puede imaginarse: supresión de derechos sindicales, paz social sin huelgas, más represión en Euskadi, respiro para la burguesía, reconocimiento internacional a la turca con entrada en la OTAN incluida, etc. etc.

Parece que el hecho de que fallase el despliegue madrileño de la división acorazada, y que Armada entrara en el Parlamento sin «poderes» que exhibir, propiciaron el que Tejero, que no sabía de la misa la media, lo echase todo a rodar. Ahora sus compañeros de viaje no quieren saber nada de él. Armada le odia a muerte.

En cualquier caso, el papel de los militares legalistas ha sido fundamental (sobre todo el de Sabino Fernández Campos) para hacer fracasar el golpe. Es políticamente importante notar que el rey se apoyó en la legalidad civil constituyendo (sobrepasando, por otra parte, sus prerrogativas constitucionales) un gabinete de crisis que aseguraba la continuidad gubernamental.

La alerta, sin embargo, ha sido fuerte y se puede pensar que, en las mismas circunstancias, un régimen republicano hubiera fracasado pues, por encima de la fidelidad a la Constitución y a la democracia, ha sido la fidelidad a la propia persona del rey la que ha impedido a algunos generales convertirse en golpistas.

Y ahí radica uno de los aspectos más reveladores del movimiento golpista: la ficción del aparato parlamentario como legitimador del poder político. Los representantes del pueblo no pintan absolutamente nada, ni para los golpistas, ni para los no golpistas.

Miláns reúne a todo el Estado Mayor de la Capitania General en sus distintas secciones y a los servicios de información. Allí se encuentran por lo menos dos o tres militares que no son golpistas en modo alguno, y que simpatizan poco con el general. Miláns les lee el bando del estado de excepción y se ponen en marcha. ¿Por qué la unanimidad, aunque luego algunos se vuelvan atrás y queden al descubierto

los verdaderos golpistas, que son muchos más de los que se ha procesado? Porque se dice que el rey como jefe de los ejércitos, y el poder ejecutivo en segundo término, están de acuerdo. Y el golpe hubiera triunfado plenamente si en Madrid no lo hubieran hecho tan mal, y triunfará en el futuro si las cosas se hacen de otra forma. Qué sistema democrático es el que está en manos de los militares y en última instancia del acierto del jefe de los ejércitos?

Pero el conjunto de los problemas continúa. ¿Es razonable, para evitar próximos intentos, probables, por parte de los militares, dar marcha atrás en la política de las autonomías? Parece impensable ya renegociar los estatutos vasco y catalán; se trata de dos adquisiciones democráticas, en cierta medida, irreversibles. ¿El ejército se sentirá satisfecho con las medidas simbólicas que acaba de decidir el gobierno de Calvo Sotelo, y que hacen obligatoria la presencia de la bandera española al lado de los estandartes regionales? Parece, en todo caso, que haya llegado la hora de las concesiones a los militares y no el del desmantelamiento del ejército.

Concesiones a los golpistas

Acierta plenamente y aún se queda corto en el pronóstico que hacía el autor del artículo respecto a la situación y el futuro a dos meses de golpe. Las medidas del gobierno Calvo Sotelo (y de la «oposición»), para «satisfacer» al ejército, tienen poca de «simbólicas».

Reforzamiento del aparato policial con la ascensión de Ballesteros a la jefatura del Mando Único Antiterrorista.

Intervención del ejército en Euskadi, cuando tanto el gobierno como el propio Rey se habían negado repetidas veces a esta petición de los militares.

Frenazo de las autonomías, las ya «concedidas» y las futuras, mediante la correspondiente ley de «armonización».

Cumplimiento de las condiciones de Tejero.

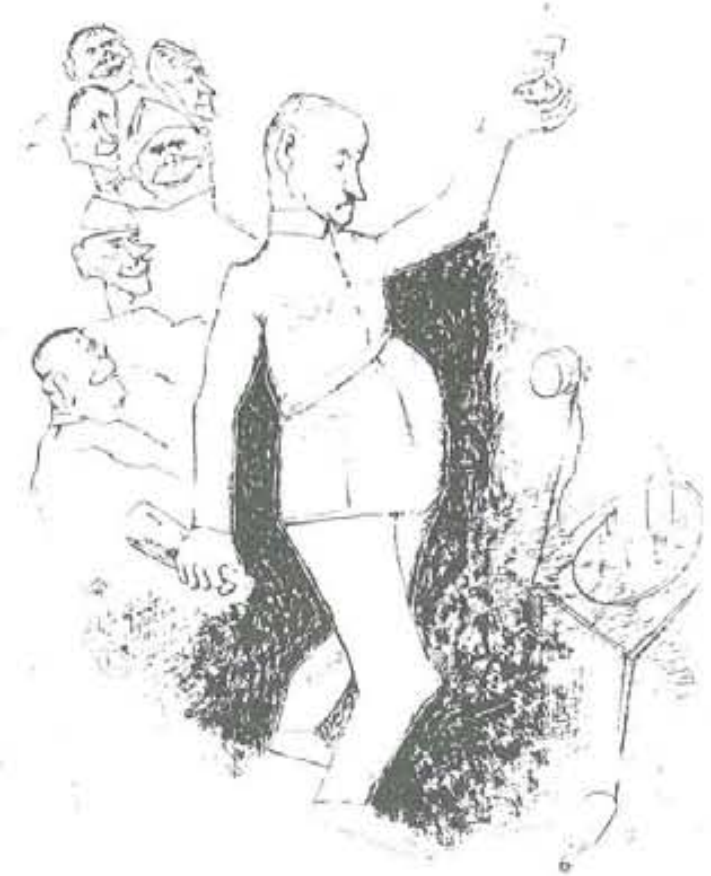
Enfervorizamiento patriótico de la izquierda parlamentaria (con lo que Savater llama «ofensiva pro-recuperación de la España cañí», incluyendo una especie de jura de bandera de Carrillo en la Plaza Mayor de Madrid en la que pidió ilegalizaciones de partidos y cierres de medios informativos).

Ley de regulación de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Aceptación por todos los partidos con carácter de urgencia una llamada «Ley de defensa de la democracia» que anula derechos fundamentales contenidos en la Constitución y prevé el cierre de publicaciones y la incautación de medios antes de que haya sentencia. Con estas leyes en la mano, cuando los ultras pedían en mayo que se decretara el estado de excepción ante los últimos atentados, representantes de UCD y del PSOE señalaban en el Parlamento que era innecesario tal «estado» porque ya estábamos en él.

Lo que se ha llamado «poderes fácticos», y que tuvieron una intervención decisiva en el intento de golpe, son reconocidos públicamente como tales poderes tan «extraparlamentarios» como decisivos y recibidos uno a uno por el Jefe del Gobierno, que les da toda clase de garantías.

Mientras tanto el ejército campa por sus respetos en Euskadi, con el objetivo oficial de proteger la frontera.



Esto no impide que espectáculos como el de militares borrachos que aseguran por los bares que les gustaría fusilar a todos los menores de 35 años, o amenazas de pegar dos tiros al que se le oiga hablando vasco, sea un espectáculo usual, como recoge algún periódico. También es frecuente el que las fuerzas «especiales» se empleen en el asalto violento de caseríos, al no encontrar a mano «tarras que liquidar».

Configurado pues el sistema original, tan original como los «pronunciamientos», que empieza a llamarse «democracia vigilada», «golpe blanco» o «democracia cobarde», según la define algún medio informativo.

¿Cuándo será el próximo?

Mientras tanto los golpistas «de base» siguen haciendo de las suyas. Así un personaje tan conocido como el comandante Ynestrillas (de la operación Galaxia), es sorprendido en plena recluta de un grupo selecto de cincuenta fajas a los que se ofrece para armarles y entrenarlos con objeto de disponer de una fuerza de choque sin uniformes para cuando llegue el momento.

El último espectáculo bochornoso lo constituye, a la hora de terminar estas notas, la proclama golpista del Capitán General de la VIII Región Militar en la Catedral de Santiago: «estamos en plena guerra, una guerra especial, sucia...» «hay un enemigo infiltrado en la prensa, la radio y la TV», etc. etc., para acabar justificando el golpe de Estado de Franco y su glorioso reinado. Pero lo más bochornoso no fue el discurso en sí, sino la reacción de las fuerzas «democráticas» ante la proclama. Para Fraga «ejemplar», para Carrillo no tiene importancia (aunque se hace en nombre de España y del rey), para Luis Solana (PSOE) «enorme sinceridad».

Nadie habla del carácter golpista del discurso del general. A lo sumo fingen mostrarse sorprendidos por

el tono violento. ¿No recuerdan los «expertos» que ese mismo general en diciembre del año pasado hizo una patochada similar, también en discurso-ofrenda al apóstol Santiago en nombre de los españoles, acusando de terroristas, a los ecologistas y predicando las excelencias de la energía nuclear en el incomparable marco de la Catedral de Santiago?

Como se ha repetido hasta la saciedad una de las claves del futuro que nos espera amenazante se encuentra en los procesos a los golpistas, en lo que suceda hasta entonces y en el desenlace mismo de los procesos.

De momento, y aunque no se ha optado por echar tierra al asunto, como en un primer momento se pensó (recordemos que las detenciones de algunos de los implicados de mayor graduación sólo se produjo bastantes días después del 23 de febrero. Tampoco los máximos responsables de la División Acorazada Brunete y de la División Motorizada Maestrazgo (la que ocupó Valencia), fueron desposeídos de sus puestos (aunque no procesados) hasta bastante después del desenlace del golpe.

Pero tampoco se han decidido nuestros gobernantes a tirar de la manta del golpismo. Una vez conocidos los aspectos más importantes de sumario y el informe del fiscal, la Unión de Periodistas del País Valenciano denunciaba numerosos aspectos en la jornada golpista, en un lugar como Valencia donde los sediciosos lograron todos sus objetivos: se sanciona al jefe de los tanques según el Código de Justicia Militar, pero no se le incluye en el proceso; se reconoce que el gobernador militar Luis Caruana fue el encargado de la toma del poder civil y la detención del gobernador, y no sólo no se le procesa, sino que se le asciende; se reconoce que la Sección de Información del Estado Mayor pudo tener un papel destacado en la preparación del golpe, y que fue la que se empleó en la ocupación de medios de comunicación, y no sólo no se les procesa, sino que se omite su actuación en el informe del fiscal; se sabe que numerosas ciudades de Alicante y Murcia fueron ocupadas militarmente, y se olvida luego el tema; se sabe que fueron bastantes los ayuntamientos en los que la Guardia Civil animada por «el tejerazo» tomó el poder y desalojó a los representantes «democráticos», y ni se menciona el asunto; se conocen innumerables movimientos golpistas en todo el país valenciano, secundados en muchas ocasiones por representantes de UCD, y ni siquiera se investiga el tema...

Pero ya en la efectividad del mismo proceso se sitúan serias dudas para el observador «imparcial». Como muestra un botón: uno de los juzgadores, el general José de Diego, fue nada menos que auxiliar de Queipo de Llano (golpista modelo para los sediciosos), en Sevilla en los años 30. Posteriormente fue jefe de policía y director de Seguridad de Franco, en los años más sangrientos de la dictadura. ¿Qué se puede esperar por este camino?

Como señalaba un ex comandante del ejército, los procesos a los golpistas nos sitúan en una especie de callejón de difícil salida. Si las penas a que se condena a los golpistas son irrisorias —tipo Galaxia—, el golpe está virtualmente ganado y sobra la mitad de esta BICI para señalar quién manda aquí. Si se castiga a los golpistas con la ley en la mano y se intenta desentrañar todo el entramado de la subversión derechista, es muy posible que el ejército frene en seco el intento, hasta se aglutine en torno a una causa común que incorpore a los «dudosos» al golpismo.

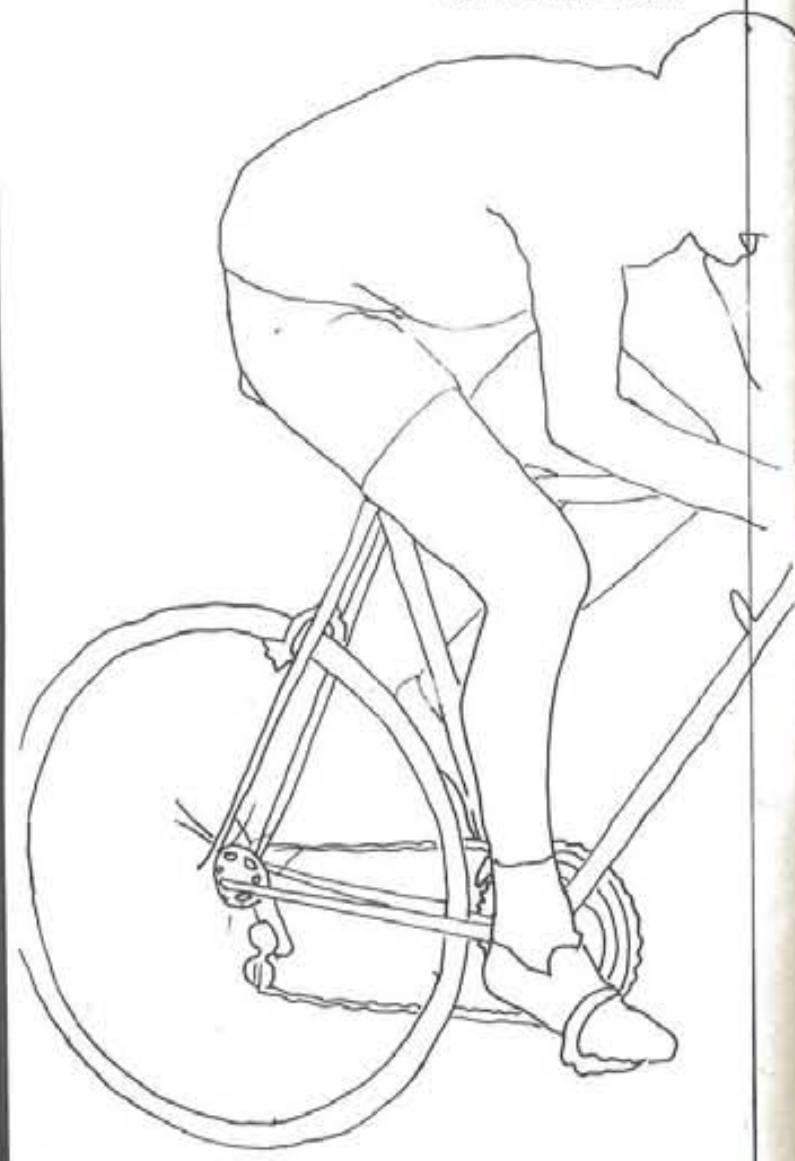
De momento nuestros políticos se emplean frenéticamente en demostrar a los poderes fácticos que ya no es necesario un nuevo golpe de Estado. ■ COLECTIVO



VUELTA ANTIMILITARISTA A ANDALUCÍA



SEPTIEMBRE 1981



FUERZAS ARMADAS Y DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL (*)

JUANJO FERNÁNDEZ

honor, disciplina, «valores castrenses», patriotismo, fraternidad de las armas, servicio, etc., constituyen la trama de una ideología militar que puede resumirse en una tautología: el ejército es necesario porque el ejército es necesario.

Pero no se trata de estudiar aquí la ideología militar, tema por lo demás muy poco analizado. Lo que interesa es prever la posible ideología por la que un gobierno militar posgolpista —tanto si llega al poder a la chilena o a lo tejerazo, como si la operación es menos espectacular, a lo Primo de Rivera—, justificaría su actuación.

Algunos comentaristas, con interesante ceguera, han señalado que tal ideología sería meramente una serie de tópicos nostálgicos, vetusta retórica franquista inviable en el mundo de hoy. Y que ello precisamente conduciría al fracaso de un intento golpista, tanto por falta de apoyo internacional como de apoyo interior sólido. Contra lo que creen estos «ingenuos» comentaristas, lo más probable es que un régimen militar se justificara mediante una ideología menos arcaica, homologada internacionalmente, estable y perfectamente aceptable por amplios sectores de la burguesía interior: la Doctrina de Seguridad Nacional, quizá retocada en algunos detalles con elementos del arcaísmo franquista.

La D.S.N. es bien conocida por ser la ideología oficial de los regímenes militaristas sudamericanos, en especial Brasil, Chile y Argentina. La D.S.N. fue, en su origen, sistematizada por los militares brasileños de la Escola Superior de Guerra, siendo uno de sus principales teóricos el general Golbery de Couto e Silva, consejero de todos los gobiernos que se han sucedido en Brasil tras el golpe de estado de 1964 y principal organizador de los servicios secretos. El imperialismo norteamericano recogió la doctrina, la profundizó



Se presta hoy poca atención a las ideologías en general, pero no estaría de más prestar atención a la ideología —o ideologías— de las FF.AA. españolas, así como a la ideología en cuyo nombre gobernarían tras un pronun-

ciamiento triunfante. La ideología es, muy a menudo, mera «falsa conciencia»; pero también tiene una funcionalidad «mitológica», por así decirlo: designa, notifica, hace comprender e impone. Legítima, en resumen. Existe una ideología-mitología propiamente militar, por la que un ejército se justifica a sí mismo y se auto-sacraliza;

(*) Resumen de un texto publicado en «La Puça i el general» (c/ Virgili, 97 - Barcelona-30)

zó, la enseñó en las escuelas militares norteamericanas a militares de diversos países de Occidente, y la convirtió en modelo a aplicar en países subdesarrollados «para contener el avance del comunismo y la subversión».

Soslayaremos la descripción detallada de la D.S.N., remitiendo al lector interesado al correcto estudio de Joseph Comblin, *El Poder Militar en América Latina* (1), entre otros elementos bibliográficos (2). Recogemos, no obstante, la caracterización general de la D.S.N., según Comblin: «Nada se le escapa a la D.S.N. Da un sentido y un lugar a todos los aspectos de la vida social. Es un instrumento ideal para un Estado centralizador o autoritario. Proporciona razones para controlar eventualmente y para dirigir todos los sectores de la vida. Proporciona excelente justificación para un Estado autoritario y aun totalitario. Es sencilla, coherente, fácil de divulgar, y su simplicidad le da un aire de evidencia que tranquiliza las exigencias racionales de todos aquellos que están interesados en creer en ella».

La geopolítica no le es absolutamente indispensable, pero puede reforzar la idea de guerra, que es el verdadero fundamento del sistema conceptual. Partiendo de la guerra generalizada, fría pero permanente y más total que nunca gracias a las notas (sic) de la guerra revolucionaria, se puede deducir la necesidad de una estrategia total. La estrategia total consiste en poner en ejecución el conjunto de los factores presentes en una sociedad por el hecho de que todos ellos comparten las características del Poder Nacional. Gracias al Poder Nacional, la estrategia está en condiciones de garantizar la Seguridad Nacional en la que, finalmente, se concentran todos los Objetivos Nacionales.

La Seguridad Nacional es un fin hasta tal punto extensivo que el sistema podría mantenerse aún si la guerra fría cediera el lugar a una amenaza de guerra generalizada incluso a una mera posibilidad (...). La guerra fría ha servido para montar la ideología, que una vez montada, es capaz de sobrevivir por sí misma, aunque la perspectiva de la guerra generalizada fuere más lejana. Bastaría, para justificar el sistema, recordar cada cierto tiempo que la amenaza no ha desaparecido totalmente, a condición, naturalmente, de que haya gente interesada en mantenerlo. La D.S.N. no es una ideología en el aire. Supone un Estado y el Estado responde a una cierta sociedad».

Armand Mattelart, por su parte, la describe así en un brillante estudio (3): «El personalismo de un caudillo se ve reemplazado por una burocracia,

La institución militar deja de estar confiada al papel de árbitro en los conflictos que surgen entre las diversas fracciones de la burguesía, sin eliminar jamás a ninguna, y a la misión de defender el territorio nacional contra la amenaza o la realidad de la agresión exterior. Las fuerzas armadas han tomado el control del conjunto del aparato de Estado, al que se esfuerzan por moldear a su propia imagen. La institución militar llega al poder. Los valores militares sustituyen a los principios civiles de organización de la sociedad. Los nuevos parámetros que presiden esta empresa de reestructura-



ción han sido codificados en una doctrina, la D.S.N., doctrina de guerra cuyo primer efecto es el de identificar el campo de los amigos y el campo de los enemigos, elaborando con respecto a unos y a otros maneras estratégicas de acercamiento».

No obstante, Mattelart mismo señala también que «la concepción de la seguridad nacional no ha logrado formalizarse en una doctrina explícita en todos los regímenes que la ponen en práctica» (4). El concepto de D.S.N. debe pues manejarse con ciertas precauciones, so pena de verlo por todas partes, ya que se basa, en parte, en tópicos comunes a cualquier ejército.

La D.S.N. entre nosotros

Pese a estas matizaciones, es evidente que la D.S.N. se puede encontrar, en sus esquemas y terminología más «ortodoxos», en diversos documentos del ejército español. Uno de ellos es el manual publicado en 1977 por el E.M.E., «Orientaciones. Subversión y Contra-Subversión», que guía la actual intervención del ejército español en Euskadi. Este documento, del que

algunos medios informativos han publicado significativos fragmentos (5), es impresionante y hasta terrorífico para el lector desprevenido, si bien su eficacia parece dudosa (Euskadi no es Chile, ni la selva brasileña).

En un libro de inminente publicación, si el tiempo y la autoridad (militar, por supuesto) no lo impiden, Jordi García i Jané confronta sistemáticamente los conceptos clave de la D.S.N. con el documento del EME, demostrando rigurosamente cómo el mismo es D.S.N. de lo más ortodoxo. También encuentran significativos indicios de D.S.N. en el libro del Tie-

Col. Hilario Martín «Los valores morales de las FAS en las Reales Ordenanzas de S.M. Juan Carlos I», en la Ley Orgánica de Defensa, en declaraciones del CESEDEN (auténtico cerebro de las FF.AA. españolas), y en el libro para oficial de César Ruiz-Ocaña «Los Ejércitos Españoles». Los canales de penetración de la D.S.N. serían el entrenamiento de oficiales españoles en los EE.UU. (unos 12.000 hasta la fecha), y la «ayuda» militar U.S.A. resultante de los tratados «bilaterales».

Asimismo, repasando publicaciones militares pueden encontrarse diversos artículos en la línea de la D.S.N. (8). Podría incluso hacerse una genealogía de elementos de D.S.N. en la literatura militar española, remontándonos hasta la conferencia del teniente general Manuel Díez-Alegría, «Introducción para un estudio de la guerra de guerrillas» pronunciada en un curso de la Escuela Superior del Ejército, en 1966 (9), y al manual reglamentario de «lucha anti-guerrilla» editado por el EME.

Parecería, por tanto, que la ideología de la D.S.N. ha penetrado profundamente en las FF.AA. españolas, encontrando además el terreno abonado por el papel jugado por el ejército durante los famosos 40 años de dicta-



dura. Pero las cosas no son tan fáciles, y los propios autores del trabajo citado hacen algunas matizaciones.

Estamos haciendo hipótesis, partiendo de un terreno mal conocido, no se olvide. Ahora bien: aunque en el seno de las FF.AA. españolas diversas opciones pugnen por la hegemonía ideológica (desde el arcaísmo nostálgico de algunos, al modernismo constitucionalista de otros; de la «mano dura y olé tus cojones», a los «métodos científicos», de los vinculados a sectores capitalistas en decadencia o fraudulentos, a los ligados al incipiente complejo militar-industrial, etc.), sin conseguir imponerse ninguno de estos proyectos, es obvio que:

1. Ni siquiera en los regímenes donde actualmente domina la D.S.N., ésta se había impuesto de modo uniforme en el seno del ejército. Fue con posterioridad al golpe dado por una élite que consiguió arrastrar a importantes sectores, al imponerse una dictadura militar, cuando este régimen adoptó la D.S.N., y con él todo el ejército de manera oficial. Como señala Comblin y Matterlart, muchas veces tales regímenes se vieron obligados a adoptar la D.S.N. como ideología a pesar de sus intenciones iniciales —más «espirituales» y menos «tecnocráticas».

2. Así como no parece existir un proyecto homogéneo en las FF.AA. españolas, todos sus miembros, en cambio, comparten la «preocupación» por lo que ellos llaman «terrorismo» y el peligro para la «integridad nacional» (y para el orden capitalista) que suponen los movimientos populares de Euskadi (de los que ETA Militar no es más que una pequeña parte, si bien quizá la más llamativa). Asimismo los militares comparten el descontento por la falta de una solución, por parte del gobierno, al problema vasco, lo que les empuja a intervenir. Casualmente, ¡qué feliz coincidencia!, las pautas para una intervención militar en Euskadi están marcadas por un documento típicamente D.S.N. ... Aquí tenemos, probablemente, la cla-

ve de una generalización de la D.S.N.

Su resistible ascensión

¿Es posible aplicar la D.S.N., hoy, en el Estado español? También aquí estamos en el terreno de la incertidumbre.

Existen dos tipos básicos de militarismo: uno es el relacionado con el complejo militar-industrial, la producción de armamentos muy sofisticados, la creación de un prestigio y capacidad a partir del armamento (Francia sería una buena muestra de ese tipo, incluso con Mitterrand y el PSF en el poder); y otro es el de tipo Latinoamericana, que es la reconducción de la vida económica, del sistema productivo, a través de los esquemas militares. Son dos sistemas homologados diferentemente: el primero para países desarrollados y el segundo para países tercermundistas. En el Estado español coexisten las dos tendencias: hay un incipiente complejo militar-industrial, y hay, como hemos visto, elementos de D.S.N., sin que ninguno de los dos modelos acabe por imponerse.

Las razones para la definitiva imposición de la D.S.N. en el Estado español las hemos de buscar, en todo caso, fuera del campo estrictamente militar: en la economía y en la política.

Reestructuración capitalista y D.S.N.

Respecto a lo primero, es obvia la relación entre los regímenes de D.S.N. y cierto tipo de reestructuración capitalista. Raúl Santibáñez la describe así (10): «... El contexto de guerra interna es el único en el que los militares gozan de poderes absolutos que les permiten asumir toda la responsabilidad de la sociedad: Estado, economía, cultura, etc. Contrariamente a la opinión de algunos círculos militantes, los objetivos de esta guerra no son, ciertamente, ni el genocidio de la clase obrera y del pueblo, ni la liquidación ciega de la economía del país. Es, por su profundidad, UNA GIGANTESCA EMPRESA DE REESTRUCTURACIÓN CAPITALISTA, con toda una serie de desestructuraciones económicas y de desplazamientos sociales. (...) El estado de guerra permanente permite al aparato militar reestructurar el capitalismo con una eficacia desconocida en la "democracia de masas". Los estrategas de Washington reconocen que es justamente bajo este estado de excepción cuando la eficacia militar consigue "reducir el aparato de Estado, volver a atribuir recursos a las actividades más produc-

tivas, arrastrando en una fase transitoria despidos y quiebras para conseguir después un ritmo de desarrollo dinámico» (*El Mercurio*, 2 y 8-5-1976). Mediante esta penosa reestructuración, el capitalismo desencadena un verdadero cataclismo en la sociedad chilena, cuyo resultado más general parece ser una vuelta del capitalismo a sus orígenes clásicos, es decir, una marcada bipolarización de las clases sociales: golpea duramente a la clase obrera, pero proletariza también a importantes sectores de las clases medias... Finalmente, el enemigo principal de los militares en esta «guerra interna» resulta ser esa enorme masa de población sometida a las graves tensiones desencadenadas por la reestructuración capitalista. En cierta forma la sociedad se ha simplificado mucho, y esto facilita la táctica de los militares. Se trata, primero, de aplastar toda resistencia a los «tratamientos de choque» de la economía (11), proceda tal resistencia de la clase obrera o de las capas medias en curso de pauperización».

Pero ¿necesita la reestructuración capitalista en el Estado español de semejante intervención militar? Dejando de lado el papel que se le haya asignado en la nueva división internacional del trabajo, parece evidente que ni los intereses de las burguesías interiores, ni los de poderes económicos internacionales, precisan de la misma. Las condiciones para la reestructuración capitalista son mejores gracias a «concertaciones», pactos de la Moncloa y ANE, el chantaje de la crisis y el paro, la propia fuerza estructural del sistema capitalista, la ilusión democrática, el miedo a los poderes fácticos, etc. Actualmente la clase obrera está tanto o más fragmentada y desmovilizada que bajo un hipotético régimen militar. La economía del Estado español, al igual que la de los países desarrollados, no precisa, por ahora, de una dictadura militar. Al contrario, semejante dictadura probablemente le sería perjudicial, entre otras razones por oposición de amplios sectores de la burguesía, que verían sus intereses y proyectos atacados (es-



pecialmente las burguesías vasca y catalana; y nos referimos a intereses estrictamente económicos, no a ningún tipo de veleidades nacionalistas).

Peculiaridades españolas

Hay que destacar algunas «peculiaridades españolas»:

A) Que los Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso la Policía y la Guardia Civil, sean cuerpos militares, integrantes de las FF.AA.

B) La evidente continuidad con el franquismo en el seno del ejército (visible en sus discursos y programas de instrucción, francamente desfasados y arcaicos para un ejército europeo), y en especial en los Cuerpos de Seguridad del Estado (manifestada mediante la práctica sistemática de unas maneras de tortura típicamente «tercermundistas»).

C) El hecho de que se hable en términos de «Seguridad del Estado» y no, como sería lógico en una democracia, de «Seguridad de los Ciudadanos».

Respecto a A), son obvias las complicaciones que resultan de tal mezcla, incluso desde el punto de vista de una democracia formal. Se trata de una confusión sin equivalente en los países europeos, una de las más evidentes continuidades con el franquismo. Las tentativas golpistas de Tejero, Ynestri-llas, oficiales respectivamente de la Guardia Civil y la Policía, demuestran bien las consecuencias de semejante embrollo. Otra consecuencia es que complica las relaciones entre el gobierno y sus cuerpos de seguridad, implicando corporativamente al ejército y nada menos que la «Defensa Nacional». Un escandaloso caso de tortura, que obligue al gobierno a tomar medidas disciplinarias contra policías, puede dar pie nada menos que a un golpe de Estado, como se vio con el caso de Joseba Arregui. Lo mismo puede aplicarse a cualquier tentativa de reforma o depuración.

En cuanto a B) precisamente la práctica sistemática de la tortura es uno de los pilares clave de los Estados de D.S.N., y de la «guerra psicológica». Como señala Armand Mattelart: «La tortura no es considerada solamente como un medio para obtener, a toda costa, información sobre los movimientos clandestinos, sino como una manera de destruir en cada militante, hombre y mujer capturados, el sentido de la solidaridad con la organización y la colectividad. Refiriéndose a la guerra psicológica, Hitler escribió en *Mein Kampf*: «Nuestra estrategia consiste en destruir al enemigo desde el interior y conquistarlo por medio de él

mismo». Incluso si la información que puede dar el individuo es ya conocida por el que tortura, arrancarle la confesión contribuye a destruirlo psicológicamente; culpabilizándolo y haciéndole perder la identificación con un grupo. Actualmente, en esos países, la desorganización sistemática de los individuos se ha vuelto una norma del comportamiento del Estado. Su sistematización se apoya en la necesidad de regresar al modelo de individualismo exacerbado que la sobreexplotación de las masas obreras y campesinas requiere.»

Por último, en lo referente a C) podría pensarse que exageramos la importancia de una cuestión terminológica. No es así. En los sistemas fascistas, corporativos o de D.S.N., como hemos visto más arriba, el Estado aparece como un fin en sí mismo. Sus aparatos coercitivos tienen como misión «la defensa de los intereses del Estado». De ahí por ejemplo, aquella «Dirección General de Seguridad del Estado», creada en el franquismo. En cambio, los sistemas de democracia burguesa, incluso los más derechistas, no aceptan tal formulación. En tales regímenes, el Estado es simplemente la «expresión de los intereses de los ciudadanos» y no una entidad en sí misma. Una buena muestra de las diferencias entre dichos sistemas la tenemos en Portugal, donde en el antiguo régimen (Salazar, Caetano) la policía recibía el nombre de Policía Internacional de Defensa del Estado (PIDE); tras la ruptura del 25 de abril, el nuevo régimen democrático cambió sus formulaciones: la policía es llamada ahora Policía de Seguridad Pública.

Comentando este aspecto, un observador político declaraba: «Quien crea que se trata simplemente de una cuestión semántica, está muy equivocado. A partir de la formulación de tipo fascista, la posibilidad de atentar contra los ciudadanos, si los «intereses del Estado» están en peligro, permanece abierta desde el punto de vista del derecho político» (12). Por el contrario, en la segunda formulación —la correspondiente a democracias burguesas— esa posibilidad no existe más que entrando en contradicciones o apelando a legislaciones especiales de carácter excepcional. «Sólo desde esta perspectiva —acaba señalando el observador político citado— pueden comprenderse las facilidades institucionales existentes en el Estado español, dirigidas hacia un recorte de las libertades, o hacia una auténtica involución política en toda regla».

Destaquemos, para cerrar este apartado, las peligrosas potencialidades contenidas en la Ley Básica de Movilización Nacional (13), a la que tanto y



tanto analista del golpismo potencial ha olvidado prestar la atención que merece. (Sería el instrumento legal para evitar las huelgas tras una intervención militar).

Entre Brasil y la R.F.A.

En resumen ¿qué? Perplejidad e incertidumbre. Igual que no es posible afirmar ni desmentir concluyentemente un hipotético golpe militar en el Estado español, tampoco puede acabar de negarse la viabilidad de la D.S.N. aquí, ni darla por inevitable.

Racionalmente, la D.S.N. no es necesaria al capitalismo español ni internacional. Pero precisamente «donde acaba la razón, empieza el ejército», como me decía un capitán en el cómico curso de ascenso a cabo que hice en la mili (en realidad, el capitán quería decir otra cosa, pero ya le entendimos, ya). Los aparatos militares no funcionan tan sincronizadamente con el resto del aparato del Estado y la clase dominante como creíamos. Tienen su especificidad, y apenas sabemos en que consiste ésta. Una vez más estamos pagando muy cara la tradicional, y suicida, ignorancia sobre la cuestión militar, mantenida por la izquierda durante lustros.

Tan sólo se pueden hacer unas precarias constataciones: está comprobada la presencia de la Doctrina de Seguridad Nacional en sectores de las FF.AA. españolas.

La incapacidad, por terca intransigencia, del gobierno (arropado por «la oposición») para solucionar políticamente el llamado «problema vasco» (negándose a aceptar reivindicaciones tan elementales como la plataforma KAS), así como también para «solucionarla» por medios coactivos «civiles», empuja a los militares españoles a intervenir directamente (es fácil prever que no sólo no arreglarán la situación, sino que aún la agravarán más).

La intervención del ejército en Euskadi está en la línea de la D.S.N. (que también presta mucha atención a la «integridad territorial»; véase Com-

blin, op. cit.). Por más ordenadores que se importen de la República Federal Alemana, el «anti-terrorismo» español está más próximo a Buenos Aires o Rio de Janeiro, que a Bonn. Y si se intensifica, aumentará esta tendencia.

De agudizarse tal tendencia, se multiplicarán los conflictos entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los enfrentamientos en el seno del poder ejecutivo, entre «modernizadores» y «arcaizantes», etc. El 23-F fue buena prueba de tales tensiones. Y ya ni hablemos de la esperpéntica situación que vino después.

Caso de un golpe militar, tanto si la subsiguiente dictadura se guía por el arcaísmo franquista como por la D.S.N. «a la española», habría que ver hasta qué punto sería digerible por el capital interior e internacional. Por ahora, parece que un golpe molestaría sensiblemente los proyectos capitalistas en el Estado español, estorbando más que facilitando la reestructuración capitalista. Puede pensarse que el apoyo civil al régimen militar, por tanto, sería bastante débil y frágil. Pero ¿y si los militares se bastan solos? ¿pueden? No olvidemos que el militarismo es la continuación de la política por «otros medios»; pero también significa la posibilidad de que las élites militares desplacen a extensos sectores de la burguesía del papel de clase dominante. ¿Se dejarían estos sectores burgueses —más sólidos en el Estado español que en los países sudamericanos— arrebatar el botín tan fácilmente?

Podríamos seguir haciendo hipótesis, sin salir del círculo vicioso de las especulaciones. Hay que señalar, además, que por la vinculación directa de los más capaces y mejor situados de los altos mandos militares con el actual proyecto del capital, cabe suponer que no serían éstos quienes impulsaran el golpe, sino «desmadrados» a lo Tejero o kamikazes a lo Milans del Bosch, incapaces de conectar con un proyecto moderno (o sea, viable) de desarrollo capitalista. Un golpe militar requiere una organización técnica muy compleja para triunfar, y un respaldo mayor que el de los grupos «ultras». Una tentativa «desmadrada» se saldaría en la chapuza y el fracaso, como ocurrió el 23-F. ¿Entonces qué? Más interrogantes, más dudas. Y, para rematar la incertidumbre, hay que añadir que la D.S.N., quizá ya está vetusta, y empieza a resultar ineficaz incluso en Sudamérica, pues los EE.UU. están elaborando ya una nueva doctrina de contra-insurrección.

En todo este montón de perplejidades, una cosa parece obvia: la omnipresencia de la «cuestión vasca». Su no solución puede ser el detonante de

una intervención militar no sólo ya en Euskadi, sino en todo el Estado español (y esta intervención militar generalizada no sólo no solucionaría «la cuestión vasca», sino todo lo contrario: quien afirme lo contrario no conoce Euskadi). Cabe concluir, en consecuencia, que quienes deseen evitar realmente la intervención militar, deben exigir que el gobierno español se avenga a negociar con ETA-m o con organismos realmente representativos del pueblo vasco (no con el fantasmal gobierno vascongado, que no sirve para nada) una salida política, un alto el fuego. Y éste no puede producirse mientras continúen las torturas, mientras se pretenda separar a Nafarroa del resto de Euskadi-Sur, mientras continúen las cárceles llenas de presos vascos, mientras el ejército español continúe en la muga con Euskadi Norte, mientras no se reconozca el derecho inalienable del pueblo vasco a la autodeterminación y el autogobierno.

Semejante negociación es difícil, delicada, todo lo que se quiera, pero no imposible ni irracional. Y si los «poderes fácticos» no se muestran dispuestos a aceptarla, el gobierno español (y su leal oposición) deben convencerles de que ésta es la salida más racional, o imponer la autoridad que los mecanismos gubernamentales les conceden. Mucho me temo, sin embargo, que esto sea un piadoso deseo. En tal caso, si el gobierno es incapaz de imponer su autoridad a los militares, y si el partido en el gobierno y la oposición fueran realmente democráticos, deberían confesar el rotundo fracaso de la «Reforma», proclamar a los cuatro vientos que estamos, pura y simplemente, en una dictadura de los «poderes fácticos», y que la democracia es imposible sin una ruptura democrática con el régimen anterior, ruptura que aún no se ha producido. Como se ve, somniem truitas. Pero precisamente esta «utopía» es la única alternativa racional a un régimen militar encubierto, y aún descarado. No se puede menos que ser pesimista: la racionalidad y el Estado español son históricamente incompatibles. Tenemos inestabilidad e incertidumbre para mucho tiempo. En el Estado español no son utópicos el comunismo, ni el socialismo, ni siquiera la independencia de Euskadi o los Païssos Catalans; lo utópico es incluso la mera «democracia a la europea».

La lección es sencilla: al que no le gusten las dictaduras militares, con o sin D.S.N., que luche por lo menos por la «ruptura democrática». Quizá sea utópico, pero es preferible la utopía a vivir como borregos. ■

J. F.

(1) J. Comblin, *El Poder Militar en América Latina*. Eds. Sígueme, Salamanca 1978.

(2) Se encontrará amplia bibliografía en el libro citado en la nota precedente. Destacaremos asimismo: J. J. Amaral Gurgel, *Segurança e democracia*, Rio de Janeiro 1975; E. Rizzo de Oliveira, *As Forças Armadas: Política e ideologia no Brasil* (1964-69), Campinas, 1976; J. Tapia Valdés, *El Terrorismo de Estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur*, Ed. Nueva Imagen, México 1980; asimismo los artículos *La Doctrina de la Seguridad Nacional*, «*Ashtatuna*» n.º 11, junio 1980; *Taiwanismo, pinochetismo y seguridad nacional*, J. Tapia Valdés, *Tribuna Libre de «El País»*, 16-4-81.

(3) *Ideología, información y Estado Militar, en Comunicación e ideologías de la Seguridad*, Cuadernos Anagrama 159, Barcelona 1978.

(4) *Ibid.*, pág. 45-46.

(5) *La puca i el general*, n.º 16, págs. 9-10; **PUNTO Y HORA DE EUSKALHERRIA** n.º 227, pág. 28-31.

(6) Señalemos algunos, todos ellos aparecidos en la revista «Reconquista»: Jerónimo Delgado Lasa, *Guerra y Defensa Nacional*; Juan Velasco de Fuentes, *Guerra Especial*; J. L. F., *Terrorismo: gota a gota*; Arturo García-Vaquero y Salazar, *Confusión y claridad*; Antonio Troncoso de Castro, *Patria Española y Ejército* (por cierto, el capitán —o quizá ya comandante— Troncoso, fue vocal ponente el Proceso de Burgos. Se encuentra una buena descripción de este personaje en el libro de Pierre Colbay, *Consejos de guerra en España. Fascismo contra Euskadi*, Rueda Ibérica, París 1976, págs. 118-122).

(7) Incluida en M. Díez-Alegria, *Ejército y Sociedad*, Alianza Editorial, Madrid 1972. El tte. genl. Díez-Alegria gozó de fama de «liberal» —lo que le costó el puesto, mediante una vaca manifiesta que se le hizo en 1974—, simplemente por su voluntad de modernizar el ejército (5). Ha sido agregado militar en Brasil, enviado en numerosas comisiones especiales a los U.S.A., y jefe de la comisión militar para las negociaciones «técnicas» para la prórroga del Convenio Defensivo con los EE.UU. Durante la época en que fue director del CESEDEN, y jefe del EME, es evidente la introducción de conceptos de D.S.N. en el ejército español, los cursos anti guerrilla y contra subversivos, la creación de unidades especiales como las C.O.E., etc. Fue, sin duda, un personaje clave en el proceso que analizamos, y creó «escuela», qué duda cabe.

(10) *Control del espacio y control social en el Estado militar chileno*, Herodote n.º 5, París 1978.

(11) «Tratamientos de choque de la economía»: con este nombre el economista americano Milton Friedman, premio Nobel de Economía, ha designado el modelo económico que aconsejó a la Junta Militar chilena. Véase el análisis de tal modelo en A. Gunder Frank, *Capitalismo y genocidio económico*, ZYX, Madrid 1976.

(12) *EGIN*, n.º 1.059, 14 marzo 1981, pág. 10.

(13) Una buena descripción de esta ley puede leerse en V. Fias, *El Poder Militar en España*, Ed. Laia, Barcelona 1979, pp. 134-140.

(14) Michael T. Klare, *Une nouvelle doctrine de contre-insurrection*, *Le Monde Diplomatique* n.º 325, abril 1981.



...en acción

En algún lugar apuntábamos que en este número, tanto se trata de aclarar quién manda aquí, como de qué forma se nos manda. Así que será interesante examinar cómo actúan nuestras fuerzas de orden, cómo administran el monopolio de la violencia que les otorga el estado de derecho. Ahí va una lista de sus víctimas, que no aspira ni mucho menos a ser exhaustiva, desde 1976 hasta hoy; es decir, desde el año siguiente a la muerte del dictador, que como es bien sabido, acabó sus días chapoteando en sangre.

No se incluyen las víctimas de «enfrentamientos armados», aunque en la mayoría de los casos no son tales, escapan a la intención de nuestra pequeña estadística: demostrar que las fuerzas de orden se comportan como bandas armadas, y mucho más peligrosas en víctimas inocentes que cualquier grupo de «delincuentes» o «terroristas».

1976

El 23 de febrero muere en una manifestación en Elda (Alicante) el joven Teófilo del Valle, cuando «dispersa» a tiros la Guardia Civil. Unos días más tarde, el 1 de marzo, eran fusilados en el desalojo de una asamblea de trabajadores en una iglesia de Vitoria, los obreros Bienvenido Perera, Romualdo Barroso, Pedro Ocio, Francisco Aznar y José Castillo. Estos crímenes de la policía nacional despiertan una ola de protestas que van a sumar nombres a las víctimas: a Miguel Ortiz, de 17 años, van a seguir el trabajador de Tarragona Juan Gabriel Rodrigo, al que se mata en una manifestación de protesta, y Vicente Antonio Ferrero, muerto en Basauri en otra concentración.

De fusilamiento o aplicación de la conocida «ley de fugas» puede calificarse la muerte del joven libertario Oriol Solé, que ha conseguido huir de la cárcel de Segovia y al que se sorprende desorientado en mitad del campo.

El 12 de abril la Guardia Civil ejecuta la pena de muerte sin juicio previo contra Juan Manuel Toracido Díaz por hacer una pintada en Sestao. Unos días después cae en un «control», de forma como llaman ellos «alevosa», Felipe Suárez, que también se lleva una visión de tricórnios como último recuerdo de su tierra.



ROBERTO CONESA. maestro de torturadores y creador de los mejores cuadros de la social. Infatigable mandando gente al paredón en la postguerra, aparece en numerosos juicios por malos tratos a detenidos. Durante el año 75, su acción es especialmente intensa en la detención de militantes del FRA, tres de los cuales serán fusilados. Aparece en los asuntos más turbios del post-franquismo. Por ejemplo en la muerte del magistrado Cruz Cuenca, que le comunica el día que va a volver a Madrid, después de estar oculto por amenazas. Sólo lo sabe Conesa. El juez muere a la salida de su casa. Hay sabor a película italiana en pleno centro de Madrid. Parece que sigue moviendo ciertos hilos a pesar de estar oficialmente retirado.

BALLESTEROS. Discípulo predilecto de Conesa, se destaca como torturador en su estancia al frente de la Sección de Universidad de la Brigada político-social en Valencia en los años 60. Pasa de jefe superior a La Coruña, para ser destinado a Bilbao en agosto de 1978, en ambos lugares es acusado de torturador. El inspector Pérez Ledesma se refiere sin duda a él cuando habla de «un destacado dirigente policial, acusado de promocionar a espaldas del gobierno gangsters para que asesinen allende nuestras fronteras». En la revista de la USP se habla de él como de alguien que «odia visceralmente la democracia». Premiado su labor al frente de la Brigada Operativa, se le nombra jefe del mando único antiterrorista, mientras el diputado Bandrés pide públicamente «su procesamiento e ingreso en prisión».

FEDERICO QUINTERO. Verdadera figura clave de la conexión golpista al decir de los bien informados. Coro-

nel del ejército. Se ve mezclado en todos los movimientos ultraderechistas desde el fin del franquismo. Ha recibido enseñanzas especiales en Estados Unidos sobre contrainsurgencia. Desde Ankara, donde es amigo de los militares golpistas, envía un informe relatando las excelencias del cuartelazo, que circula entre los militares y es presentado a Suárez antes de su dimisión. El ex jefe de policía de Madrid, recomienda la vía turca contra «la anarquía, el terror y el separatismo», cuando los jefes del golpe turco han matado en un mes a 600 personas, han liquidado a 51 personas mediante torturas y 50 condenados a muerte esperan ser ejecutados. Dentro de la tupida red de los Servicios de Información que funcionan desde Carrero Blanco, y de la que fue número dos, ha conseguido escapar a la implicación en las tramas golpistas.

JOSÉ IGNACIO SAN MARTÍN. Coronel jefe del Estado Mayor de la División Acorazada, la unidad clave en la toma de Madrid, y procesado por el golpe de febrero. Fue la cabeza de los Servicios de Documentación de la Presidencia del Gobierno, que creara Carrero Blanco (y que luego se integraron en el CESID). Desde entonces ha mantenido un sistema de información con puestos clave en el ejército y en la policía, y una red de colaboradores financiados por los dirigentes civiles del golpismo. De forma sorprendente su liberación, a pesar de no ser de los que más «sonaban», fue reclamada por los asaltantes al Banco Central de Barcelona (una operación clásica de servicios de información, con carnaza lumpen que no sabe más que lo que va a caer y salida cuando falla el asunto entre los rehenes). Está en posesión de un excelente fichero en el que se hallan todas las personalidades políticas y militantes

de Honor



destacados de la izquierda. Se le considera el cerebro del 23-F.

ANDRÉS CASINELLO. Teniente coronel, brazo derecho de San Martín en los Servicios de Carrero, Director de los Servicios de Información de la Guardia Civil; con ambos servicios está toda la infraestructura de información para cualquier golpe de estado. Acusado de estar al tanto de la matanza de Atocha como director de los Servicios Especiales, por medio del comandante Prieto de la Guardia Civil, que aparece como inductor, y que casualmente se encuentra en misión especial fuera de España en el momento del juicio a la banda que mató a los laboristas. En la actualidad aparece como el número dos del Mando Único Antiterrorista.

ANTONIO GONZÁLEZ PACHECO, conocido como «Billy el Niño». Ahijado de Conesa, aprendió con éste tácticas de infiltración en movimientos de izquierdas, aunque a última hora siempre le perdía su impronta facha. Torturador directo en numerosos interrogatorios de antifascistas en los años 70, e implicado en la matanza de Atocha. Su ánimo infatigable le lleva a participar también en venganzas y palizas callejeras que normalmente se suelen dejar para los incontrolados. Martín Villa le concede la medalla al mérito policial en junio de 1977.

BENJAMÍN SOLSONA. Compañero en las torturas a estudiantes en Valencia del jefe Ballesteros. «Recuerdo perfectamente a Solsona, dándole al botón de la corriente eléctrica», declara el actual diputado comunista Antonio Padomares. Bien situado como hombre de Conesa, se le asigna la Jefatura de Policía de Bilbao. Durante su estancia en Valencia, recibió el apodo de «el galleta» por su especialidad en golpear simultáneamente los

dos oídos del detenido con los puños cerrados. Los que le conocieron en aquella época le han calificado como «un verdadero demente».

ANDRÉS GÓMEZ MARGARIDA, con Ballesteros y Solsona, forma la tríada de policías especiales procedentes de la brigada social y ejercientes de lo mismo. Cesa en La Coruña en septiembre del 78 por «rebeldía» con el mando central. Como premio es nombrado para la dirección del Mando Único Antiterrorista. Fue coordinador de los Servicios de Información en el País Vasco desde noviembre de 1977, etapa floreciente en incontrolados y batallones.

JULIÁN MARÍN RÍOS. Bien conocido en Madrid, es uno de los auxiliares de Agrela como Jefe de Grupo de la B. Regional de Información. Trabajó seis años en los servicios de Documentación de la Presidencia del Gobierno a las órdenes de Quintero y San Martín, en San Sebastián, donde simultaneaba tan altas misiones con el reparto de panfletos fachas.

TOMÁS AGRELA. Jefe de la Brigada Social de Madrid, continúa en la democracia ocupándose de la política, desde su ideología confesada de pro-nazi. Es el jefe de los que matan al militante vasco Joseba Arregui en febrero desde el mando de la «Brigada Regional de Información».

DOMINGO MARTORELL. Un valor en alza dentro del aparato policial antiterrorista, fue «supervisor y coordinador» del interrogatorio de Arregui. Es el secretario técnico de la Brigada de Información de Ballesteros, sin duda su nombre va a sonar en el futuro como elemento destacado del aparato policial de élite. ■

En 8 de julio, una mujer de 46 años, Begoña Menchaca, cae en medio de una manifestación pro-amnistía en Santurce. La nota oficial habla de «incontrolados», aunque no tardará en reconocerse que pueden ser guardias civiles los homicidas. Unos días más tarde, la guardia civil de Madrid celebra el 18 de julio liquidando al joven de 29 años Carlos Hernández Expósito, según la nota oficial «se le ha dado el alto cuando merodeaba por el puente de Segovia», luego se da por seguro que ha muerto en el interior del cuartelillo. Sin salir de Madrid, el 29 de julio, cae en Villaverde Alfonso Atalaj, víctima de un tiroteo contra una manifestación de trabajadores.

El 15 de agosto, la Guardia Civil vuelve a aplicar en Almería la pena de muerte al joven de 19 años Javier Verdejo. Como en la Almería de hoy, las mentiras de los asesinos quedan de manifiesto. Se dice que le dieron el alto, que huyó corriendo, que se le cayó un subfusil al suelo, que se disparó, etc., cuando se ve claramente que la bala le ha entrado a Javier por la frente y la ha salido por el cuello.

El 8 de septiembre el mismo benemérito instituto tantas veces recordado, se carga a Jesús María Zabala en una manifestación en Fuenterrabía. En Santa Cruz de Tenerife se liquida a base de una ráfaga de metralleta, antes de preguntar, al estudiante José García Luengo. Es el 10 de octubre, y la Guardia Civil le tenta confundido con «El Rubio». El 28 del mes siguiente un guardia borracho se carga de un tiro a Santiago Navas Aguirre en Santiesteban y luego le remata en el suelo. Según la nota de la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, se tuvo que defender el pobre civil porque le atacaban. Antes de terminar el año, en Madrid se golpea hasta la muerte a Angel Almazán, de 18 años, en una manifestación de izquierda contra el referéndum, los antidisturbios lo tienen más de media hora en un portal escupiendo sangre, a uno de ellos se le oye decir cuando alguien quiere sacar de allí a Angel: «no tiene importancia, además si se muere uno menos». Cuando el gobernador Rosón llama asustado a la UVI de La Paz ya no hay nada que hacer.

1977

Temprano abren los protectores del orden el año. El día 8 de enero se cargan a un chaval de 15 años, Juan Manuel Iglesias, en unos futbolines de Sestao, cuando entran furiosos a la búsqueda de peligrosos manifestantes. En el mismo mes y en otra manifestación se cargan en Chirivella (Valencia) a José Vicente Casabán.

El 24 de enero una estudiante madrileña de 20 años, Mari Luz Nájera, se le destroza la cabeza con un hote de humo disparado a bocajarro para «disolver» una manifestación de protesta por la muerte de Arturo Ruiz a manos de los fachas dirigidos por los servicios de información.

Es el mismo día en que se produce la masacre de la calle Atocha cuando un comando ultra, aparentemente dirigido por antiguos jefes del sindicato vertical, mata a cuatro abogados comunistas especialistas en temas laborales. Quedan fuera de esta relación los crímenes de los «ultras» pero en ésta, como en otras acciones, por ejemplo del «Batallón Vasco Español», no anda lejos la inspiración y hasta la intervención directa de individuos de las «fuerzas de orden».

El 12 de mayo Rafael Gómez, de 78 años, muere en Rentería víctima de las descargas de metralla con que la Guardia Civil quiere contrarrestar la jornada pro-amnistía, una masacre que se salda con catorce heridos graves además del anciano muerto. Al día siguiente se añaden dos muertos más por el mismo motivo. El caso de Manuel Fuentes es especialmente brutal: un cabo de la Policía Armada lo saca de un bar de Ortuella, lo mata de un disparo en la nuca a quemarropa, y patea después el cadáver. En el mismo pueblo, al día siguiente, Manuel Fuentes, que celebra una despedida de soltero, muere con la cabeza destrozada por una ráfaga de metralla policial.

El 14 de octubre, Gonzalo Pequeño Moyano muere en Baracaldo al «saltarse un control policial». En Triana (Sevilla) la policía hace pública la clásica nota embustera diciendo que un inspector ha tenido que matar a Enrique Mesa Bugatto de un tiro en la cabeza para impedir que le apuñalara. Al final el policía no podrá evitar ser procesado por homicidio. Sin salir de Andalucía, y precisamente en la celebración del Día Nacional, muere el militante del M. C. Manuel García Caparrós. Se habla de «incontrolados», como siempre. Finalmente Martín Villa tiene que reconocer que las balas que se dispararon contra la manifestación legal eran de policías que tiraron sin previo aviso, pero el sumario al final se «archiva» por falta de claridad después de mantenerse en secreto.

El año lo cierra Javier Fernández Quesada, muerto en La Laguna por la Guardia Civil en una jornada de lucha y huelga general.

1978

El 11 de mayo la Guardia Civil fusila en Guernica desde distintos sitios y apostados en plan película a José María Arrazola, de 19 años, y a Alberto García, de 21. Según las propias notas oficiales, al primero, que ha conseguido refugiarse en una cabaña, le rodean, le ordenan salir y le acorralan cuando está fuera. A Alberto García le persiguen tres guardias civiles que «simultáneamente le dieron el alto e hicieron fuego contra él alcanzándole con varios disparos en la espalda». Ambos están desarmados y no son culpables de nada.

Dos personas, sin ningún tipo de implicaciones «terroristas» murieron por las balas de la Guardia Civil en Durango y Sestao; se trata de los jóvenes de 17 años José Emilio Fernández y Felipe Carro. En Pamplona, en plenos Sanfermines y

NUESTROS

La ausencia de una depuración en las fuerzas policiales tras el franquismo es uno de los hechos más escandalosos, inexplicables y reveladores de nuestra situación presente.

Un buen número de los líderes políticos y sindicales de la democracia han pasado por las comisarias en los tiempos en que cualquier tipo de actividad opositora estudiantil, intelectual o social, más o menos conspirativa, podía acabar en visita de madrugada, registro y estancias más o menos prolongadas en Comisaría según la influencia del personaje o el momento. Por otra parte, las nacientes autoridades democráticas municipales, conocen el poder real que ejercían y siguen ejerciendo la guardia civil y sus servicios paralelos.

Lógico era pues que en los programas mínimos de la oposición, desde los simplemente «demócratas» hasta los pro-chinos, se dedicara algún capítulo a la necesidad de dismantlar los aparatos de poder de la dictadura y muy especialmente los que trabajaban a base de electrodos, bañeras, barras, patadas, culatazos, servicios de criminales distinguidos a surtido, etc. En un artículo publicado en «Cuadernos para el Diálogo» tras la matanza de Atocha en 1977, el que luego sería secretario general del partido del gobierno, Rafael Arias Salgado, hablaba de la necesidad de desarticular «los centros neurálgicos del aparato de poder de la dictadura, constituida por sectores fuertemente ideologizados y cuidadosamente seleccionados para la represión política durante 40 años, que tienen ramificaciones y conexiones difíciles de esclarecer».

Pero las buenas intenciones se esfumaron tan pronto como se cubrieron las formas de la democracia. Una democracia que no sólo mantuvo el aparato policial del franquismo, sino que aún lo reforzó ascendiendo a gente tan turbia como el superagente Conesa. Así se han llegado a dar paradojas tan curiosas como ver ascender a la subsecretaría de justicia al antiguo PeSePero Enrique Linde, y al mismo tiempo ascender como jefe máximo de la policía a Ballesteros. «El jefe de los torturadores a estudiantes» cuando Linde estudiaba en Valencia en los años 60.

Como en tantas otras cosas todo ha quedado reducido a un cambio de



nombres: a la D.G.S. se le llama ahora D.S.E.; a la Social, Brigada «Operativa», y así sucesivamente.

Los cerebros de la dictadura

El «cuadro de honor» ilustra lo suficiente para ahorrar bastantes comentarios. El núcleo fundamental de los «servicios» policiales y de «información» que impregnan el ejército, la policía y los oscuros servicios paralelos, proceden en una gran parte del antiguo Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno, que creara Carrero Blanco antes de subir a los cielos con coche y todo, Cerebros grises los coroneles San Martín (golpista actualmente en prisión) y Quintero

PROTECTORES



(informador desde Ankara de las excelencias del «modelo turco» y con un papel aún no esclarecido en el 23-F). Durante su gestión además de escandalosas torturas que son denunciadas (y ahora olvidadas) por gente como Peces Barba, actual portavoz socialista en el Congreso, se producen innumerables operaciones turbias, de las que la matanza de Atocha es una punta del iceberg. Se elabora y se mantiene al día un fichero que abarca todo el espectro político, sindical y de movimientos sociales y se va formando toda una generación de policías que van a ser la élite del antiterrorismo (cuando empiece a llamarse así), como Julián Marín. Jefe de la B. I. de Madrid, Andrés Casinello, que pasa a la Guardia Civil para incorporarse luego al

M.U.A., Pardo Zancada, que ocupa un puesto decisivo en la División Acorazada con San Martín, y numerosos comandantes y tenientes coroneles que van ocupando los puestos claves en las Secciones de Información de los Estados Mayores (las que llevan a cabo el golpe de Estado).

El golpe no es más que una consecuencia, y no será la última porque sólo una pequeñísima parte del aparato ha quedado neutralizada, de la permanente labor de conspiración llevada a cabo por el centro de poder policial, conspiración que incluye, en distintos grados, la formación de una tupida red que nadie quiere o se atreve seriamente a denunciar.

La Guardia Civil

Para la Guardia Civil no ha existido ningún cambio desde 1939. Ejercen su poder, particularmente en las zonas rurales, de la misma forma que lo ejercían a principios de siglo. Un tímido intento de hacerlos desaparecer o convertirlos en una especie de Guardia Nacional, como «contrapartida» en los Pactos de la Moncloa, fue desechado de inmediato. La Guardia Civil ejerce un poder de forma directa y a menudo brutal, su presencia es fundamental, desde la presidencia de cualquier fiesta popular hasta el control del movimiento de las personas, de las minorías raciales, etc., siempre dispuesta a acudir solicita en favor del terrateniente o cacique ante cualquier protesta social.

Que en los cuartelillos de la Guardia Civil se tortura es algo admitido y publicado en algunas ocasiones. Que «El Crimen de Cuenca» no es algo enterrado, sino que puede ser realidad cotidiana en cualquier momento nos lo ha venido a recordar, con un muerto más, el «Crimen de Almería». Y no se trata de «guardias» más o menos incontrolados, que el de Almería es un teniente coronel. Igual que el del Parlamento.

Por otra parte hay que destacar que la Guardia Civil cuenta con el Servicio de Información más completo que existe, con dos mil hombres que tienen variadas tareas y una labor callada y permanente en materia de control y represión, con una red de chivatos y colaboradores implantada en todas partes, que permite en un momento dado saber quién es cada cual, qué ha hecho en su vida, qué hicieron sus

en una intervención de la policía, que entra en la plaza de toros a tiros y que el propio gobernador califica de «innecesaria y desafortunada» muere de un balazo en la frente Germán Rodríguez.

El 11 de septiembre, como el año anterior, la Diada de Barcelona se salda con un muerto por disparos «disolventes» de la policía contra las manifestaciones.

En Sevilla, el 20 de octubre, Domingo Gutiérrez Delgado, de 44 años, «infunde sospechas» a la Guardia Civil que decide terminar con él por si acaso. El trece del mes siguiente Dionisio Aguado Merino, de 16 años, que practica motocross en Palencia «con riesgo para los transeúntes» es ejecutado por la policía armada.

1979

El 5 de enero en Poble Nou, la policía armada mata a un joven de 17 años: «lanzó una navaja contra un agente que efectuó un disparo que le alcanzó el vientre». Al día siguiente, José Luis Muñoz Pérez, de 15 años que viaja sospechosamente el día de Reyes con su padre y su abuela, es liquidado por la Guardia Civil de tráfico.

El 12 de enero un policía mata a Antonio Alcalá, de 19 años, en un club de Madrid con su «arma reglamentaria». El 6 de febrero y también en Madrid un policía armado tiene que matar a Angel Mellado. Con la escasa imaginación de costumbre se nos explica que no habla más remedio porque el muerto se «abalanzó» contra el gris.

El 4 de marzo un peligroso niño de 14 años, Ursino Gallego, es muerto por un balazo de goma, en una no menos peligrosa manifestación en Parla pidiendo agua.

En Barcelona, donde va a ser muy frecuente el aplicar pena de muerte in situ a los ladrones de coches, la policía nacional se ha cargado a Martí Marco, de 17 años, como «un sospechoso en el interior de un automóvil».

En Bilbao, nueva edición de la «ley de fugas», cuando la guardia civil liquida en el interior de un Land Rover a Felipe Vaz, de 19 años, en Sopuerta. Integrantes del mismo «instituto» fusilan en Barcelona a Eduardo Aldea Viñas, de 23 años, el 10 de marzo. Casi a la misma hora que, en Somorrostro, Gregorio Fernández Riaño, de 18, cae muerto por un policía municipal: «le querta arrebatando».

El 11 de abril de 1979 Juan Alamillos «infunde sospechas» a la Guardia Civil, que lo mata en Benajárfar dentro de un coche. En la barriada del Buen Pastor, de Barcelona, Eduardo Gómez Fernández es ajusticiado por conducir un coche robado, el 17 de abril.

En Fuencarral (Madrid), el 25 de mayo a las 11 de la mañana, muere José Carlos Camacho. La nota oficial dice que «se saltó un control», testigos presenciales dicen que la policía lo mató en un bar.

El 3 de junio, la Guardia Civil liquida de un tiro en la cabeza a la militante ecologista Gladys del Estal, cuando participa en una sentada pacífica antinu-

clear. Unos días más tarde, el 10, policías de paisano matan a un travesti en Rentería. El mes de junio se cierra con la muerte en Valencia, en el transcurso de una manifestación laboral, de Valentín González, víctima de un balazo de goma disparado a bocajarro en el pecho.

Las fiestas de agosto en Monforte de Lemos se saldan con un muerto y diez heridos, en una acción de las fuerzas del orden similar a la reseñada en los «sanfermines» de Pamplona. El 21 de agosto, nuevamente, la policía aplica la pena de muerte por robo de un coche; se trata del joven de 17 años Baltasar Valladares, de Alicante. El 1 de septiembre, Ignacio Quijara, de 18 años, recibe un balazo en el pecho cuando se manifiesta en San Sebastián, en apoyo de los refugiados vascos. Testigos presenciales informan que el policía nacional autor de la hazaña «disparó a unos diez metros parapetado en un coche y en posición de tiro al blanco». Se impide recoger al herido, mientras agoniza en el suelo, e incluso es golpeado por intentar un alférez de la Cruz Roja.

Por disparos al aire de madrugada en Almería, muere Juan Escalera, de 20 años, el 10 de septiembre: «Buscaban a unos atracadores». El 19, Valeriano Martínez, de 41 años, cae de un tiro en la espalda mientras participaba en la huelga de transportes de Santander.

Una muestra de los «métodos usuales» nos la da la muerte del policía de 24 años Santos Sampedro Lozano, a quien se encuentra con varios tiros y con su cartera y documentos por el suelo, en San Sebastián: sus colegas de la Guardia Civil no le han dado tiempo a identificarse.

El 20 de octubre, la Guardia Civil busca en los Montes de Tolosa una radio libre, no la encuentra, pero deja acorralado a Francisco Aldanondo e impide que sea recogido en diez horas. En Bilbao, durante la madrugada del 6 de noviembre, Francisco Caballero Requejo, de 24 años, muere en el interior de un 2 CV, en el que transitaba «en actitud sospechosa». Por el mismo motivo, el día 9 liquidan en Barcelona a Mateo Giménez, de 15 años, que llevaba un coche robado. Idéntica razón se esgrime para justificar, también en Barcelona, la muerte de Luis Hernández, el día 5 de diciembre.

Desde el cuartel de Echarrí-Aranaz, salen ráfagas misteriosas, que provocan la muerte al concejal navarro Miguel Arregui, de 32 años, cuando vuelve a su casa tranquilamente, el 10 de diciembre.

En Madrid, policías nacionales que los psicólogos militares justificarán después diciendo que «estaban profundamente impresionados por el odio que observaban en las miradas de algunos manifestantes», se cargan por el método del tiro al blanco a José Luis Montañés, de 23 años, y Emilio Martínez, de 20, el 13 de diciembre, durante una manifestación contra el paro. A las notas habituales de los responsables de «interior», se unen ahora las no menos repugnantes del PSOE que habla de «provocaciones» y de Camacho (Comisiones-PCE), diciendo que «no eran trabajadores».



padres y abuelos en la guerra, etc., de una forma infalible en zonas rurales. Un banco de datos sobre el que han resbalado leyes, constituciones y demás hojarasca. Director de estos servicios de Información fue el coronel Casinello, uno de los hombres clave del antes citado aparato de «Documentación» de Carrero, así como el comandante Prieto, que casualmente tenía una «misión especial» en el extranjero el día en que fue llamado a declarar al juicio por la matanza de Atocha.

Formas de trabajo

En algún momento de crisis, como el que supuso la muerte de José Arregui por «bronconeumonía atípica», algunos miembros del exiguo sector «progresista» de la policía han resumido así la forma de actuar de la policía: «se trabaja a golpe de electrodo y barra».

Los «malos tratos» son el método habitual, pero no sólo ni especialmente con los presos políticos. Son los presos sociales, los «comunes» los que más sufren estos métodos de forma invariable: la relación normal del policía con el detenido es a base de hostias. Y parecía que esto iba a ser frenado con la ley de asistencia letrada al detenido que permite al abogado estar presente en los interrogatorios. Efectivamente así fue el primer día, cuando en Madrid la policía tan sólo pudo poner a tres personas a disposición judicial. Luego se fue subsanando el «problema» a base de trucos: desde hacer firmar la renuncia a asistencia letrada con engaños o amenazas —lo más corriente— hasta la suplantación del abogado por un policía.

En abril del año gasado una comisión parlamentaria denunciaba casos de tortura con presos de ETA pero afirmaba: «los malos tratos son poco, comparados a lo que sufren los comunes». La misma comisión que señalaba que «siguen en sus cargos muchos

torturas, si es que no se usa este tiempo para simples «castigos», venganzas, «operaciones ejemplares», etc.

La Brigada de Información

Antigua Brigada Operativa, está formada en su mayor parte por miembros de la antigua Brigada Político Social. Constituye el núcleo fundamental de poder dentro de la policía y un coto cerrado donde se tamiza ideológicamente a sus miembros antes de dejarles pasar. (Y recordemos que, según una encuesta no difundida, el 80 por 100 de los policías se identifican con la ideología de la ultraderecha). Sus cerebros proceden de la vieja escuela de los San Martín, Conesa, Sainz, etc.

Nadie, ni el propio gobierno, está seguro de cuáles son los móviles y la dirección de su trabajo, que en muchas ocasiones, y de forma curiosa, sabotea el progreso de la propia democracia. Recordemos la muerte por los hombres de Ballesteros en Francia de Argala, con quien representantes del gobierno iban a iniciar una negociación en diciembre de 1978, para conseguir una tregua de ETA.

En las pocas ocasiones en que se ha puesto en cuestión sus métodos, o se han permitido procesamientos por torturas, se han rebelado abiertamente, despreciando al gobierno y amenazando con soltar mierda (lo hicieron por ejemplo con Martín Villa, del que, al parecer, saben bastantes cosas). Recordemos cuando aparecieron con que estaban «dolorosamente hartos», o el más reciente caso de plantones y dimisiones cuando el ministro de justicia se niega a cargar con el muerto que le envían desde la Brigada de Información. En lugar de inhabilitar y echar a los dimisionarios, como cabía esperar o incluso, dentro de su jerga, considerarlos como «reos de sedición» se asciende a Ballesteros y se le pone al frente del Mando Unificado Antiterrorista.

Al servicio de la Brigada de Información se encuentran los servicios paralelos que, con siglas fantasma o sin ellas, se dedican fundamentalmente al trabajo sucio (¿más aún?), dentro y fuera de las fronteras españolas. Una práctica que no es de ahora: recordemos en tiempos de Quintero jefe de Policía de Madrid y Conesa jefe de la Social, era frecuente llevar a los detenidos a chalets en las afueras de Madrid, para torturarlos tranquilamente, al modo de los «desaparecidos» argentinos.

Las conexiones de grupos de provocadores en Euskadi o del «Batallón Vasco Español» (20 muertos el año pasado), con los Servicios de Informa-

ción es ampliamente admitida. Recordemos que tras la matanza de Hendaya el pasado 23 de noviembre, sus autores, tras pasar la frontera de forma violenta, fueron dejados en libertad mediante una llamada de teléfono y la pronunciación de un nombre mágico: Ballesteros.

Fachas y somatenes

También son conocidas las excelentes relaciones y habitual colaboración de los hombres de la Brigada de Información con Fuerza Nueva. Es sorprendente que contra el terrorismo de ultraderecha no se encuentran nunca excesivas pruebas y haya que soltar de inmediato a gente inequívocamente terrorista. En otras ocasiones se les deja salir por las ventanas: curiosa-mente parece ser bastante frecuente esta forma de escaparse. Unos días antes de que Ramón Antón cayera en mala postura, había escapado por el mismo método y lugar una chica.

Antes y después del golpe, la colaboración policía-Fuerza Nueva se ha materializado en el trasvase de datos a los fachas para la elaboración de un archivo de «rojos». Es bien sabido, por otra parte, que la gente de Información sigue vigilando y poniendo sus ficheros al día, con gente de izquierda que milita en organizaciones legales. No debe extrañar: hasta gente de UCD era espiada por Conesa por orden de Martín Villa, según se descubrió hace unos meses gracias a una filtración.

Herramienta auxiliar de la Guardia Civil, y en general de las fuerzas represivas, es el Somatén, una institución que funcionaba en Cataluña y que fue implantada en toda España por Primo de Rivera con la finalidad de «defensa de vidas y haciendas contra todo ataque al orden social, hacer respetar las leyes y autoridades, capturar al que esté reclamado por la justicia y contribuir al funcionamiento de los servicios públicos mediante la prestación personal». En las normas de funcionamiento de este grupo armado figuraba que «llegado el caso de una alteración del orden social, el comandante general entregaría a los cabos un distintivo visible para todos sus hombres con el fin de que sean conocidos por las tropas y demás agentes de la autoridad encargados de sofocar el movimiento». El jesuita José M. March, uno de los mentores ideológicos del movimiento, escribía: «los fascistas salvaron un año a Italia y la misma civilización latina seriamente amenazada; los somatenes seriamente organizados y prudentemente guiados podrán salvar a España».

Con el reparto de armas correspondiente, el somatén se extendió por

El año termina con el tiroteo de la Guardia Civil, del que es víctima Francisco Valderrama Flores, de 16 años, por saltarse un semáforo en Castelldefells, el 27 de diciembre.

1980

El encomiable celo por aplicar la pena de muerte por robo de coches queda de manifiesto nuevamente en Barcelona, con las muertes de Eduardo Gómez, de 14 años, y Clemente Martos, de 16, el 17 de enero. En Madrid la policía nacional derriba de un tiro en la espalda, el 21 de febrero, a Matías Merino, cuando hacía motocross. Se intenta justificar el crimen diciendo que «tenía antecedentes», lo que desmiente la familia.

El 29 del mismo mes, el Guardia Civil Angel Langarica, de 22 años, recibe en San Sebastián catorce balazos cuando un compañero de cuerpo lo toma por un militante del MC pegando carteles: en realidad los estaba quitando. Antes de que pueda ser detenido por la policía «normal» Abelardo Collado Araujo, los chicos de Conesa lo fusilan a la vista del público, cuando sale tranquilamente del metro, en Madrid. (Lo incluimos en esta lista porque quedó bien probado que Abelardo iba completamente desarmado, y por las circunstancias del hecho: el momento en que se produce, una ambulancia preparada para llevarlo, etc., aparece bien claro que se trata de la aplicación de la pena de muerte, por los guardianes del «antiterrorismo».)

La muerte de Luis Monasterio Quintana, por parte de la policía nacional, en Bilbao el 6 de septiembre, es tan escandalosa que llega a ser objeto de una interpelación en el Parlamento. Aunque no menos que la del dueño y un cliente del Bar Vega, en Vitoria, por parte de un policía nacional el 10 de noviembre. Sin salir de esta ciudad, José Luis Ochoa, empleado de una gasolinera, es arrollado el 9 de diciembre por un coche «camuflado» de la policía, de forma inexplicable.

El 17 de diciembre Francisco Barros, quiosquero de Oviedo, recibe como respuesta de la policía municipal a sus protestas por la acción de la grúa dos tiros en la tripa.

1981

El 10 de febrero, la Guardia Civil liquida en Mallorca a Antonio Buales Vallejo, de 20 años. Otro miembro del benemérito instituto protagoniza en Madrid un curioso «incidente» al detener en un autobús a Rafael Montosa, de 29 años, por el procedimiento de tiro a bocajarro. Así lo describía un despacho de la agencia EFE: «Tras el disparo el Guardia Civil le puso las esposas, al ir a bajar del autobús el delincuente se desplomó, rápidamente fue avisada una ambulancia que lo trasladó a un centro asistencial donde ingresó cadáver».

A la puerta del cuartel de Villaviciosa de Odón, los centinelas de la Guardia

Civil matan a Alberto Álvarez Tormos, el 3 de marzo, cuando iba a denunciar un atraco. Al día siguiente, en Overa (Almería), María Ascensio Morales, de 32 años, queda descerebrada por una bala de goma de la Guardia Civil, en una manifestación de vecinos en protesta para que no se les quite el agua de los pozos.

El 20 de marzo muere de un tiro en la estación de Chamartín el marroquí de 25 años Absallah Arrinche: «Estaba tumbado en un banco e hizo un gesto despectivo cuando le pidieron la documentación». También en Madrid, en un descampado, muere de disparos de la Guardia Civil Jesús Urbien Orbegozo, el 27 de marzo.

En Málaga, cuando «se procede a desarticular una banda dedicada al tráfico de droga», muere a tiros Manuel Muñoz Valenzuela, el 12 de abril. En Sevilla Jesús García Ortiz, de 18 años, es castigado a tiros por conducir un coche robado, el 5 de mayo.

Juan Abel Muñoz, de 19 años, «resulta» muerto en Gijón por un policía nacional de paisano, cuando «pedía la documentación a unos jóvenes sospechosos», el 13 de mayo. El mismo día, en Madrid, dos policías nacionales de paisano se cargan a José Antonio Iglesias. En la nota policial no se alude a ningún motivo especial, salvo el mal concepto que le merecía a los policías. En el Polideportivo de Aluche un niño de 13 años, Antonio López Ovejero, es muerto a tiros por la policía municipal, el 3 de julio, tras el grave delito de haber saltado la verja para reunirse con sus amigos. El 12 de julio a Raimundo San Andrés, de 17 años, le matan dentro de un «coche sospechoso» a tiros.

EN Almería, y como «presuntos miembros de ETA» según explican, la Guardia Civil tortura brutalmente y fusila después a los jóvenes santanderinos Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas. La banda armada de asesinos que preside el teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Almería esgrime como coartada la ley de fugas, y aunque la historia es mantenida por el propio ministro de Interior en el Parlamento, inmediatamente se demuestra que no se trata más que de una sarta de mentiras infantiles para encubrir una de las actuaciones más sanguiarias de las fuerzas del orden que se conozcan en los últimos años.

Y aquí acaba nuestra relación. Para tener un número aproximado de las víctimas de la violencia terrorista, puede multiplicarse por tres la cifra de este resumen. Tengamos en cuenta (además de que la relación no es exhaustiva en relación a lo que ha podido conocerse) que muchísimos «incidentes» no trascienden, porque suceden en lugares alejados de las grandes ciudades o porque la escasa influencia de las víctimas no lleva a interesarse a nadie por su atípico final, o porque consiguen ocultarse.

¿Quién nos defenderá del terrorismo de los defensores del terrorismo, una banda armada equipada con el dinero de todos? ■

A. CH.

Las conexiones de grupos de provocadores en Euskadi o del «Batallón Vasco Español» (20 muertos el año pasado), con los Servicios de Información es ampliamente admitida. Recordemos que tras la matanza de Hendaya el pasado 23 de noviembre, sus autores, tras pasar la frontera de forma violenta, fueron dejados en libertad mediante una llamada de teléfono y la pronunciación de un nombre mágico: Ballesteros.

Fachas y somatenes

También son conocidas las excelentes relaciones y habitual colaboración de los hombres de la Brigada de Información con Fuerza Nueva. Es sorprendente que contra el terrorismo de ultraderecha no se encuentran nunca excesivas pruebas y haya que soltar de inmediato a gente inequívocamente terrorista. En otras ocasiones se les deja salir por las ventanas: curiosamente parece ser bastante frecuente esta forma de escaparse. Unos días antes de que Ramón Antón cayera en mala postura, había escapado por el mismo método y lugar una chica.

Antes y después del golpe, la colaboración policía-Fuerza Nueva se ha materializado en el trasvase de datos a los fachas para la elaboración de un archivo de «rojos». Es bien sabido, por otra parte, que la gente de Información sigue vigilando y poniendo sus ficheros al día, con gente de izquierda que milita en organizaciones legales. No debe extrañar: hasta gente de UCD era espiada por Conesa por orden de Martín Villa, según se descubrió hace unos meses gracias a una filtración.

Herramienta auxiliar de la Guardia Civil, y en general de las fuerzas represivas, es el Somatén, una institución que funcionaba en Cataluña y que fue implantada en toda España por Primo de Rivera con la finalidad de «defensa de vidas y haciendas contra todo ataque al orden social, hacer respetar las leyes y autoridades, capturar al que esté reclamado por la justicia y contribuir al funcionamiento de los servicios públicos mediante la prestación personal». En las normas de funcionamiento de este grupo armado figuraba que «llegado el caso de una alteración del orden social, el comandante general entregaría a los cabos un distintivo visible para todos sus hombres con el fin de que sean conocidos por las tropas y demás agentes de la autoridad encargados de sofocar el movimiento». El jesuita José M. March, uno de los mentores ideológicos del movimiento, escribía: «los fascistas salvaron un año ha a Italia y la misma civilización latina seriamente amenazada; los somatenes seriamente organizados y prudentemente guiados

podrán salvar a España».

Con el reparto de armas correspondiente, el somatén se extendió por todas las provincias, con una recluta escogida en cada pueblo, el citado March, recomendaba que además de disciplinado, etc., el futuro somatén es conveniente: «que tenga algo que perder, y por lo mismo defender. Al que nada tiene poco le importa la perturbación del orden social».

Pues bien, esta banda armada, al servicio del orden, que cumplió durante la república y la guerra el papel que se le había asignado, fue revitalizada en 1945 por el franquismo para el control político y social de las zonas rurales y la lucha contra el maquis, y no ha dejado de estar organizada y bien armada. En 1978, se detectó un reparto de armas en Cuenca y tras una pequeña campaña, se habló de disolverles, lo que motivó encierros de somatenes en distintas poblaciones hasta que recibieron garantías de que no serían disueltos. Formalmente sólo se obligó finalmente a entregar las armas largas, calculándose que sólo en Cataluña disponen hoy de 26.000 pistolas y en el resto de España de al menos 70.000 armas cortas. Dato reconocido oficialmente por la administración.

Una institución exótica pero real, y que empezó a actuar en la noche del 23-F en algunos pueblos del País Valenciano.

Hemos tratado de describir las líneas generales del poder policial. Por quién está formado (en la superficie al menos), los métodos de trabajo, sus diferentes ramas, etc. Un poder que sigue estando ahí, intocado tras el golpe de Estado, aunque sin duda iba a ser herramienta básica de haber triunfado el «pronunciamiento». Es conocido que en la brigada de Información se brindó con champaña cuando Tejero entró en el Parlamento, y que hasta se empezaban a repartir a los futuros presos de renombre.

Todo se sabe pero parece querer ignorarse, se han ignorado hasta las peticiones de «depuración» que han salido de las propias filas de la policía. Tal vez la clave de esta pasividad esté en el mismo artículo que citábamos al principio de Arias Salgado, cuando más adelante, tras recordar la vigencia de los aparatos del franquismo y lo peligrosos que eran daba a entender que podía ser más peligroso acabar con ellos: «su desmontaje es peligroso, porque al desarticularlo puede quedar desguarnecido el aparato de seguridad del Estado, que no puede ser sustituido improvisadamente...».

Seguridad... ¿para quiénes? ■

M. LÁNGARA

nuestro horizonte represivo



La ruptura como necesidad (de supervivencia)

MARIO VILA

En el Estado español, las agresiones a ciudadanos, barbaridades e impunidades protagonizadas por el aparato represivo del régimen, son constantes. Ésa es la situación actual y ése es nuestro horizonte inmediato, a menos que se rompa políticamente con la herencia fascista.

La pregunta que cabe formularse hoy en lo que respecta a previsiones de futuro es si el fascismo español va a sintonizar con ese endurecimiento de los regímenes democráticos que se advierte en Europa desde hace una década, hasta quedar totalmente integrado en ese contexto. La aceptación que la Reforma Política del franquismo ha obtenido por parte de los principales regímenes liberales del capitalismo confirma esta hipótesis. Por diferentes vías, las democracias europeas parecen caminar hacia un nuevo status represivo acorde con la crisis económica.

En ese contexto la vía española va a ser (es) particularmente dura. Es la vía de una sociedad que todavía no es capaz de funcionar sin altas dosis de opresión violenta. Como se ha dicho, «no se puede disolver la Guardia Civil —entre otras razones— porque sin ella se produciría automáticamente una Reforma Agraria espontánea en todo el Sureste español».

En el Estado español el capitalismo no tiene mucho que ofrecer a la mayoría de la población. No puede generar esa opresión basada en el consentimiento pasivo de la mayor parte de la población, porque sus presupuestos no le alcanzan para pagarlo en forma de abundancia para todos (o casi todos). Los Bobys ingleses funcionan en unas condiciones materiales de vida determinadas que sólo encontramos (y cada día más deterioradas) en pequeñas zonas del Estado español. Aquí, la

opresión está centrada en la violencia. No se llega a las cotas de América Central por ejemplo, pero tampoco se consigue «hacer del policía un amigo». Entre ambos extremos nos encontramos, advirtiéndose una clara tendencia de acercamiento hacia el primer parámetro.

La mejor denuncia: la descripción

Sobre quien ejerce el monopolio de la violencia estatal no hay mucho que decir: sencillamente se trata de un aparato represivo fascista. Eso tiene sus inconvenientes (obvios para sus víctimas), pero también sus ventajas: por medio de un aparato represivo fascista el sistema capitalista se pone en evidencia en España a cada mo-

mento. Aquí no es necesario entrar en demasiados análisis: no hay denuncia más eficaz que la propia imagen que el régimen da de sí mismo continuamente.

La reacción ante las brutalidades evidentes del fascismo sólo ha cuajado, por ahora, en Euskadi, articulando un movimiento de oposición y resistencia. Lógicamente, es un movimiento que entre sus medidas a corto plazo (alternativa KAS) exige la desaparición del aparato represivo fascista. Si en cualquier otro lugar del Estado se llegaran a formar movimientos de oposición importantes (en el Sureste a partir de la cuestión agraria, por ejemplo), se encontrarían en uno u otro momento con ese aparato frente a frente; con sus instituciones represivas (la tortura, por ejemplo) afectando a importantes sectores de la población, cosa que ocurre hoy en Euskadi.

Por esta razón, mientras no se generalice una postura rupturista para con el fascismo (postura que debería superar un antifascismo estrecho y reduccionista en sus concepciones), nuestro horizonte cotidiano en materia represiva no será más que una repetición de la cotidianidad actual. Precisamente por la brutalidad que contiene, la mera descripción de esta realidad (en los periódicos, por ejemplo) se convierte en España en un acto subversivo.

Desde una perspectiva de resistencia (nuestro horizonte debería tomar como objetivo la construcción de un movimiento de resistencia parecido al que existe en Euskadi: organización como organización de tareas, estructurando de abajo arriba, autoorganizado y en constante discusión y contraste con el pequeño movimiento que comienza a apuntar en Europa occidental), la ruptura con el franquismo no es sólo un objetivo a medio plazo deseable, sino sobre todo una necesidad. Necesidad de dismantelar un aparato represivo que nos amenaza muy seriamente: en los centros de detención y reclusión, en una manifestación ecologista, en plena calle, a la salida de una discoteca, y en cualquier circunstancia cotidiana en la que nos topemos con él. Como muestra, los siguientes casos:

Segundo Tribunal Popular contra la Tortura

El pasado 11 de junio se celebró en Barcelona la segunda sesión pública del Tribunal Popular contra la Tortura. El TPCT es una de las iniciativas lanzadas por el Frente de Lucha contra la Tortura, organismo que agrupa a un grupo de abogados y militantes antirrepresivos barceloneses. Su fun-

ción consiste en ventilar públicamente los casos de torturas que pasan por las manos de estos abogados, casos fatalmente condenados al olvido de las magistraturas correspondientes. Para ello se intenta conseguir narraciones y testimonios personales de las víctimas de esta institución (la tortura es, por supuesto, una institución) que son previamente introducidos ante el público por los abogados.

La primera sesión pública del Tribunal se había realizado el pasado mes de febrero y fue lógicamente prohibida por el gobernador civil de Barcelona, señor Coderch. En aquella ocasión fueron expuestos numerosos casos, correspondientes todos ellos a presos y detenidos políticos. La segunda sesión se abrió más a la vida cotidiana, y en ella se expusieron: dos casos «políticos», uno de un militante homosexual, otro de un siquiatrizado, otro de una familia apalizada en plena calle de Esplugas el pasado mes de marzo, y otro de un preso social. El acto se celebró en la Universidad de Barcelona ante numeroso público. Veamos brevemente cada uno de los casos:

Familia Medina Ruiz.—Denunció haber sido apalizada en su totalidad (incluida la hija pequeña de 12 años, que fue golpeada con la culata de un revólver) por miembros de la Policía Municipal de Esplugas a finales del pasado mes de marzo. El incidente se inició cuando el hijo de 18 años se encontraba sentado sobre el coche de un pariente aparcado junto a la puerta de su vivienda. Los municipales pasaban por allí («le parece bonito sentarse así») y acabaron pegando e insultando al chaval. En ningún momento hubo resistencia o insultos por parte de la familia. Sencillamente éste fue apalizado por defender al chaval. Desde la paliza el cabeza de familia, Manuel Medina Ruiz, sufre ataques de epilepsia.

Anastasio Pulido.—Militante del PCE(i), detenido el 9 de noviembre de 1980 a las 9 de la noche junto a su compañera. Denunció haber sido torturado por los métodos de «la barra», golpes empleando objetos contundentes en diversas partes del cuerpo, torturas psicológicas y amenazas en la persona de su compañera, etc., etc. Tras su paso por comisaría denunció su lamentable estado físico ante el médico forense (presentaba derrame intestinal y ciática en la pierna izquierda). Éste le contestó que todas las heridas y hematomas se los podía haber hecho él mismo; y además, ¿qué trato esperan ustedes los terroristas? Al fin y al cabo muchos hombres mueren por su culpa». Dos

meses después de tan clarificadora declaración, Anastasio fue puesto en libertad sin cargos de ningún tipo.

Militante del Fagc.—El Fagc es el Front d'alliberament gay de Catalunya. Uno de sus militantes, que prefirió mantenerse en el anonimato por haber sido amenazado si denunciaba su historia, fue abordado por un policía nacional el pasado mes de agosto en el cine Verneda (extrarradio barcelonés): «¿Usted es maricón?», le preguntó el policía. Al contestar afirmativamente, el gay recibió una gran paliza. Su caso figura en uno de los libros de Amnesty Internacional sobre la situación de los «derechos humanos» en esta monarquía bananera. Allí se dice que la víctima recibe en la actualidad tratamiento siquiátrico y sufre dolencias resultantes de los golpes recibidos.

Antonio Álvarez González.—Toda una novela: 12 veces internado en centros siquiátricos, la primera de ellas cuando contaba 14 años de edad. Antonio Álvarez conoce manicomios de Gijón, Oviedo, Palencia, Suiza. De algunos de ellos consiguió escapar en más de una ocasión, una vez construyendo un destornillador a partir de una cuchara. Realizada la paciente operación, desmontó las rejas de su celda y adiós muy buenas. En su testimonio, Antonio Álvarez denunció las instituciones psiquiátricas como centros de represión y tortura. En ellas fue sometido a electrosocks (sin ningún tipo de excusa terapéutica), palizas, etc., etc.

Antonio Martínez.—Preso social con ocho años de cárcel en su historia. Su testimonio se refirió exclusivamente a una de sus detenciones. Él no fue maltratado, en cambio manifestó que la policía detuvo a un hombre mayor (unos 50 años) de forma indiscriminada y con la única finalidad de conseguir una declaración contra él. Según contó Antonio, este hombre fue apalizado fuertemente y firmó una declaración absolutamente falsa. «para la policía —manifestó— cualquier persona que no justifique un trabajo regular en una empresa tiene que estar metida en algún lío». Y así nos va...

Caso Agustín Rueda.—Tanto uno de los abogados que llevan el caso (Manuel Hernández) como la hermana de Agustín aportaron novedades sobre el tema. El abogado hizo públicos algunos puntos del sumario tales como las declaraciones bajo amenazas arrancadas a los presos para que retiraran sus denuncias contra los presuntos asesinos de Carabanchel, la procedencia de los fondos con los que se pagó la

fianza de los funcionarios procesados (con dinero de los presos ingresado en una cuenta bancaria), datos sobre los resultados de la autopsia (Agustín perdió más de tres litros de sangre durante la paliza, y la causa médica de su muerte está certificada como «shock traumático»), y sobre todo fotos: las fotos de su cuerpo amoratado y sin vida que forman parte del sumario, fotos exactas a las del caso Arregui y que serán publicadas en cuanto lleguen a nuestras manos...

María Rueda explicó su vivencia personal del caso desde el momento mismo en que se enteró de la muerte de su hermano hasta que éste fue enterrado en Sallent entre los antidisturbios y la impotencia rojinegra de sus compañeros.

El «homicidio frustrado» de Angel Rekalde

Saliendo ya del marco del Tribunal de Barcelona, pero metidos de lleno en el tema (la institución tortura) y en sus alrededores (toda la cadena de arbitrariedades y brutalidades que la rodean), vale la pena reseñar el caso de Angel Rekalde, un vasco (supuestamente «terrorista») entre muchos.

El 11 de abril a las dos de la madrugada alguien llamó a la puerta de su casa en Eibar. Sin pedir la identificación de quién pulsaba el timbre, Angel Rekalde pulsó a su vez el botón del portero automático y salió al rellano de la escalera para ver quién subía. Eran guardias civiles, subían rápido y fuertemente armados. Cuando llegaron a su piso Angel Rekalde les esperaba brazos en alto. Les dijo: «tranquilos, estamos desarmados, nos entregamos». Junto a él se encontraba otra persona y sus tres hijos de corta edad. La respuesta fue un disparo al vientre que tumbó a Angel Rekalde en el mismo umbral de la puerta de su piso. Tumbado boca arriba y sangrando abundantemente, permaneció en esta posición durante dos horas. Un guardia discutía con otro sobre si lo remataban o no, declarándose partidario de lo primero: «Hay que dejarlo así cinco horas para que se desangre», manifestó. Otros guardias pisaban la cara del herido y le daban fuertes patadas en la cabeza.

Transcurridas dos horas, los guardias se decidieron a llamar a una ambulancia «es un ataque de apendicitis, no es grave», dijeron al conductor mientras le indicaban la ruta más larga para ir al hospital. La torpeza del conductor consiguió que el trayecto se realizara por la autopista, y a las 4'15 de la madrugada, Angel Rekalde era ingresado en estado comatoso en

el hospital, por causa de la sangre perdida.

Durante más de un mes el herido ha estado tres veces al borde de la muerte porque sus heridas no evolucionaban favorablemente. Aislado de cualquier visita y permanentemente vigilado por dos guardias civiles, Angel Rekalde pudo reconocer a uno de los vigilantes: era el mismo guardia que le había disparado, el partidario de rematarle. La angustia producida por el temor de que le mataran en el hospital le produjo fuertes hemorragias internas que agravaban su estado. Sin embargo sobrevivió.

En las contadas visitas que les han sido permitidas a los familiares pudo transmitirles esta narración, que fue publicada por «Egin» el pasado 26 de mayo. Con estos datos los abogados y familiares de Angel Rekalde han interpuesto una denuncia contra la Guardia Civil por «homicidio frustrado». Ningún periódico se ha hecho eco de tal denuncia.

El Sumario Gladys del Estal

El pasado 2 de junio se celebró en San Sebastián una rueda de prensa sobre el estado del sumario abierto por la muerte de la militante ecologista Gladys del Estal. Como se recordará, esta muerte tuvo lugar el 3 de junio de 1979 a manos de la Guardia Civil en Tudela. El abogado que lleva el caso es Miguel Castells, a quien se acaba de levantar su inmunidad parlamentaria para procesarlo por denunciar la actuación de los servicios secretos españoles en Euskadi Norte (algo a lo que el propio Giscard se había referido con el hombre de «los métodos españoles en el País Vasco francés»). Castells puede ser condenado a una pena superior a los 6 años de cárcel. En la rueda de prensa el abogado y senador (absentista) de Herri Batasuna manifestó —a propósito de una re-



ciente resolución del Ministerio del Interior sobre el caso — que todavía hoy prevalecen las viejas tesis oficiales de la Guardia Civil. Estas sostienen que no hubo ninguna culpa por parte de las FOP y que todo se debió a la actuación de grupos que las agredieron al finalizar la manifestación ecologista. Según esa versión, Gladys del Estal formaba parte «del grupo más agresor», y el arma del guardia civil se disparó cuando éste forcejeaba con un manifestante que se la intentaba arrebatar por la espalda.

Sobre el mismo tema el abogado Uruñuela manifestó, por otra parte, que el sumario ya está prácticamente concluido a pesar de los impedimentos puestos por la Escuela de Medicina Legal, que se ha negado a proporcionar importantes datos técnicos (balísticos) al juez de instrucción competente. Respecto al guardia civil, Martínez Salas, considerado en el sumario como presunto autor de la muerte de Gladys del Estal, se sabe que no ha sido relevado de su puesto habitual en Tudela.

Incidente en la Discoteca

El 14 de junio murió en Guadalajara José Félix Ventenera Sánchez, de 28 años de edad, por disparo de arma de fuego efectuado por el guardia civil Emilio Enrique Durán. Según la versión del hermano de la víctima, el guardia civil molestaba a su novia, cosa que provocó alguna discusión. Mientras el novio «ofendido» llamaba a la Policía Municipal, el guardia civil increpó a la chica: «La culpa la tienes tú por estar tan buena». «Tú eres un poco chulo», le contestó ésta «siendo empujada a continuación» (transcribo de la prensa). «El hermano de la chica, José Félix Ventenera, se acercó al autor del empujón y le increpó: «¿Por qué le has pegado?» En ese momento el guardia civil sacó la pistola y disparó a José Félix, sin advertencia alguna.»

A continuación, la nota de la Dirección de la Seguridad del Estado:

«En este caso, la Dirección General de la Guardia Civil, como es su norma (ver lo del sumario de Gladys del Estal, por cierto) ha aplicado con el máximo rigor las medidas disciplinarias que autoriza la reglamentación vigente.» Seguidamente la nota crítica «a ciertos medios de comunicación» por la «tendenciosa forma con que asuntos de esta naturaleza vienen siendo tratados, en un intento de aprovechar hechos aislados (!) de este tipo, para desprestigiar a los integrantes del cuerpo de la Guardia Civil».

M. V.

NOVEDAD

Colectivo de salud



Este libro es un resumen del estudio de abundante material del movimiento feminista, de la Coordinadora de Grupos Feministas de Euskadi, de la Societat de Sexologia del País Valencià del MLAC Frances (*Movimiento de Liberación del Aborto y la Contraposición*) del NAACFG Italiano (Núcleo de Autogestión del Aborto de la Coordinadora de Consultorios Feministas de Roma). Al material que nos servía de base nos hemos limitado a aportar el resultado de nuestras experiencias y discusiones.



Queimada

ediciones

c/Astorga, 8 -
Teléfono: 403 52 09 - Madrid-17



extras BICI!

ANARQUISMO EN EL MUNDO: situación, debate ideológico actual, alternativas... con artículos de Frank Mintz, Noam Chomsky, F. Savater, A. Teller, Stuart Christie, F. Carrasquer, Félix García, Paul Avrich, J.L. Taberner, J. Peirats...

AUTOGESTIÓN: Debate, A. Bertolo, R. Ferri, Nico Bert, M. Antoniolli, L. Lanza, R. Guindicci, René Lourau...

EL CAMPO: La agricultura en el mundo (Martínez Aller, Verena Stöckle, F. Mintz). Los que se van al campo (arts. de Robin Jenkins, colectivo Galea, Josep Vicent Marqués, Juan Serna, Colectivo Natura...). Temas agrarios aquí y ahora (J.M. Naredo y P. Campos, CNT Cantabria, Artemio Baigorri, Ortiz-Osés, M. Gaviria, S.O.C. y CNT de Andalucía...). Nostalgias y Utopías campesinas (Miguel Delibes, E. Lizcano, Gastón Leval, Rafael Esteban, Chayanov).

AMÉRICA LATINA: A. Meister, Gerald Suberville, Domitila, Víctor López, Liber Forti, Colombo, Martínez Aller, J.P. Gabriel, Chomsky, V. Stöckle, M. Aguirre, C.L.A., O. Alberola...

* * *

PUEDES PEDIRLOS (enviando 200 pelas por cada uno en sellos de correos) a BICICLETA (administración), c/Nave, 12 Valencia-3.



Otro gran «poder fáctico» en España (es decir, poder de hecho, aunque no siempre lo sea de derecho) es la Santa Iglesia Católica, que tiene a su cargo la defensa de la moralidad. Habría que remontarse a épocas antiguas para entender el poder de la Iglesia, esa institución superjerárquica y superburocrática, habría que remontarse a la Inquisición, y a su papel esencial para defender la moralidad de las costumbres (quemando vivas a tantas personas), para defender la pureza religiosa y racial en las Españas. Habría que recordar a los belicosos obispos de la Cruzada de Liberación franquista. Habría que recordar también cómo la Iglesia ha sabido a veces aprovechar reivindicaciones populares, como en las guerras carlistas, y también habría que recordar desde la «sopa boba» de los conventos hasta la acción de Caritas (con excedentes agrícolas yanquis) en décadas recientes. No puede olvidarse el poder de la Iglesia en obligar a la gente, tras 1939, a casarse a la fuerza, a comulgar y confesar a la fuerza a los derrotados. No puede olvidarse (aunque no hemos incluido ningún artículo sobre ello) que es la Iglesia quien ha «educado» y «educa» todavía en colegios religiosos a gran parte de la infancia, y es por eso que el ministro de Educación, en el franquismo y en el postfranquismo, ha sido casi siempre miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (el brazo directamente político de la Iglesia en España, junto con el desacreditado Opus Dei).

LOS CUER- VOS SA- GRADOS



La Sagrada Trinidad: la familia, el ejército y la iglesia

VERENA STOLCKE

En momentos de crisis es cuando los sistemas de dominación se tornan transparentes hasta para los más ingenuos, cuando es patente el papel del Estado de controlar y canalizar las crecientes tensiones sociales generadas por el propio sistema capitalista. La contrapartida de este control es la bancarrota de la ilusión parlamentaria representativa. Pero ello no ha de ser necesariamente motivo de desvelo para los que dominan. Su poder nunca descansa exclusivamente en la credulidad de los gobernados. Lo muestra de forma descarada el ominoso artículo 8 de la Nueva Constitución Española que atribuye un papel activo a las Fuerzas Armadas, también en la salvaguardia del orden constitucional, supuestamente democrático. Incluso en democracias aparentemente más auténticas, en momentos de amenaza real del orden establecido salen o saldrían los tanques a la calle. De todas formas esto no quiere decir que la relación entre poder civil y militar siempre sea armónica ni que los proyectos políticos de ambos se complementen necesariamente. El 23 F lo ha demostrado. Ciertos sectores de las Fuerzas Armadas en el Estado Español tienen un proyecto político propio, de raíces históricas y emanado del carácter de la propia institución como corporación, que puede entrar en conflicto con los intereses de la propia burguesía. Pero esta última, junto con la izquierda parlamentaria, precisamente al no depurar al ejército y la policía franquista, han creado las condiciones para sus tribulaciones actuales.

Las caras de la Iglesia

Ya se ha hablado bastante de las Fuerzas Armadas como soporte fáctico de las clases dominantes. Más difuso ha sido hasta hace poco el papel político desempeñado por la Iglesia Católica en la llamada transición post-franquista. La extraordinaria adaptabilidad de la Iglesia Católica a los contextos más diversos en función de su propia supervivencia, muchas veces encubre tanto su incidencia política como su esencia conservadora. Evidentemente no es una organización monolítica, sino que contiene tensiones internas entre alas más o menos conservadoras como producto de los propios cambios sociales, de las situaciones políticas nacionales y de la heterogeneidad social de su clientela. Véase la actuación de la Iglesia tercermundista en defensa de los oprimidos. Por una parte, el tercer mundo constituye la reserva de fieles más voluminosa en el mundo actual, y

la jerarquía eclesiástica tiene esto muy claro. Es en este contexto que hay que entender la postura sorprendentemente progresista que el conservador Papa Wojtila adoptó, por ejemplo, en su viaje al Brasil. Por otra, en ningún momento pone en cuestión las bases de la desigualdad social, sino que aboga tan sólo por una mejor distribución. El papel que ha jugado la Iglesia en las revueltas obreras en Polonia es aún más revelador. Mientras que alentaba al movimiento obrero en su crítica radical a la jerarquía política que amenazaba su propia extinción, lo frenaba, al mismo tiempo, cuando parecía poner en cuestión los fundamentos del orden social en su defensa a ultranza de la igualdad y libertad plenas del individuo.

Ningún poder se mantiene sin una base que lo sustente y legitime, y más aún en un mundo en que los poderes seculares, si no amenazan con recortar drásticamente las prerrogativas de la Iglesia, al menos tratan de convertirla en una fuerza ideológica meramente auxiliar para mantener el orden social. La llamada a Dios resulta siempre muy útil para tornar aceptable la imposición de un orden social presentándolo como orden natural. Pero instituciones tales como la Iglesia y las Fuerzas Armadas requieren también, para mantenerse como fuerzas políticas, de un cierto espacio político autónomo justificado por funciones que les son propias y exclusivas. Y en esto los poderes fácticos se complementan. Mientras que la Iglesia pretende proteger los valores morales y las instituciones privadas de la sociedad, las Fuerzas Armadas se conciben como defensoras de la unidad de la patria tanto ante enemigos externos como internos siempre presentes: como se lee en un manual de instrucción militar de 1973, aún hoy distribuido a los reclutas: «La guerra, en su sentido más amplio, se debe considerar como un fenómeno natural, como producto de una ley suprema, como una de las manifestaciones inherentes a la vida y actividad del hombre, representando una necesidad absoluta para el género humano, en su marcha indeclinable hacia el progreso». La articulación entre el poder civil y los poderes fácticos es siempre dinámica. Esta autonomía relativa, esencial para su propia pervivencia, al mismo tiempo puede producir contradicciones con los poderes civiles a los cuales sirven de soporte.

Cómo se ejerce el poder «temporal»

Una observación, sin embargo. No hay que confundir la influencia ejerci-

da por la Iglesia Católica en el juego político en diferentes momentos de la historia española, con la posible incidencia como fuerza ideológica en la sociedad como un todo. Mientras que es cierto que cuanto más numeroso sea el ejército de fieles, tanto mayor la legitimidad de la Iglesia, la inversa no es verdad. El poder temporal de la Iglesia no es expresión cabal de su poder espiritual. La estrecha vinculación entre el Estado franquista y la jerarquía eclesiástica, la declaración del catolicismo como religión de Estado y el poder que la Iglesia derivaba de ella, no era el producto del sometimiento religioso de los dominados, aunque fuese esencial para las lideranzas eclesiásticas y también civiles afirmar la devoción del pueblo. De la misma manera, el que en la transición post-franquista la Iglesia haya mantenido un cierto protagonismo político se debe más al fraccionamiento de la clase dominante y su fragilidad debido a la falta de ruptura con el pasado franquista, y a la crisis económica que a la existencia de una amplia base social. Y la Iglesia lo sabe. La alarma reciente del Episcopado ante el renacimiento del anticlericalismo es un indicio. Ya lo reconocía el arzobispo de Barcelona Jubany cuando en 1979 se oponía sabiamente a un referéndum sobre la ley de divorcio tras la fachada de la supuesta apoliticidad de la Iglesia.

La Iglesia Católica ejerce su poder de forma indirecta a través de la alianza con ciertos sectores de la clase dominante. Como institución también ejerce una influencia directa en la formulación y legitimación ideológica del proyecto socio-político de la burguesía. Como declaraba José María Aguirre, presidente de Banesto, primer banco de España, poco después del 23 F, los verdaderos detentadores del poder en el Estado español son «los tres poderes fácticos —Iglesia, milicia y Banca—. Pero esta vinculación entre el poder político institucional y los poderes fácticos no es necesariamente armónica, como lo han demostrado tanto las turbulencias dentro del partido del gobierno como el intento de golpe militar. Los llamados poderes fácticos han jugado un papel decisivo desde el inicio de la transición post-franquista. Son útiles a la burguesía mientras refuerzan su propio proyecto de dominación material e ideológica, y mientras no pongan en duda su propio poder ni la imagen democrática que pretende proyectar. La burguesía sólo se exalta cuando los poderes fácticos exceden el espacio político que ella les concede y pretenden un protagonismo autónomo. Como declaró recientemente Garrigues Walker «el poder político en España debe llegar a

acuerdos concretos con los llamados poderes fácticos, incluyendo la Iglesia y el Ejército... (pues) el golpe de Estado del 23 de febrero ha puesto de manifiesto la existencia de otros poderes junto al poder político institucionalizado, que le están cercando, a veces marginando y a veces diluyendo».

¿Cuáles son las formas concretas con que la Iglesia Católica ha participado e influido en la transición post-franquista? Es bien sabido que dos de las principales fuerzas políticas franquistas, los propagandistas católicos y el Opus Dei, especialmente la primera, lejos de ser marginados, continuaron proporcionando numerosos cuadros políticos a los sucesivos gobiernos post-franquistas dándoles el adecuado espíritu católico y frenando el amenazador proceso de secularización. Y es más, figuras tales como Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Íñigo Cavero, fueron importantes en el seno del partido del gobierno, el llamado sector democristiano, reforzando así la tradicional influencia de la Iglesia. El nuevo presidente del gobierno Calvo Sotelo fue de jovencito también militante de la ACNP. Así, el continuismo franquista se da a dos niveles, por una parte a través de la permanencia de los propagandistas (como Alfonso Osorio) y por otra, y gracias a ellos, a través de la persistencia de la Iglesia como poder paralelo.

El nacionalcatolicismo sigue vivo

Pero además, esta vinculación entre el Estado y la Iglesia Católica se da aún de forma más directa. Una parte importante de la jerarquía eclesiástica actual debe su cargo al derecho de presentación de nuevos obispos concedido en su tiempo por el Vaticano a Franco. Fieles al juramento que debían prestar a Franco continúan defendiendo los mismos principios nacional-católicos de antaño, la enseñanza confesional, la indisolubilidad del matrimonio, el orden social. Así, no ha de sorprender la permanente ingerencia directa de la jerarquía eclesiástica en los debates parlamentarios sobre la llamada «ley de divorcio» y la LAU. El sector democristiano exige subvenciones públicas para universidades privadas. En lo que se refiere a la ley de divorcio, ésta ha sido una lucha a la vez doctrinal y de jurisdicción: como declaraba el arzobispo de Toledo Cardenal González, representante del sector más conservador de la Iglesia, «la indisolubilidad del matrimonio es una ley natural y divina, es decir, no sólo afecta a los católicos que la aceptan libremente sino a todos los hombres».



Apelando a la supuesta naturaleza divina del matrimonio y de la familia recalca precisamente las prerrogativas eclesíásticas en cuanto a su regulación. Si ha de haber separaciones matrimoniales sólo le cabe a la Iglesia concederlas. Como demuestran las miles de separaciones o anulaciones matrimoniales canónicas tramitadas en las pasadas décadas, no es que la Iglesia fuera contra ellas. De hecho, la Iglesia no se ha hecho la estrecha en aprovechar esta fuente de pingües ingresos para sus cofres. Se da la curiosa situación de que sólo católicos de creencias y religión anti divorcista pueden divorciarse legalmente. La cuestión es esencialmente de competencias. Para legitimar sus prerrogativas jurisdiccionales la Iglesia ha sabido siempre interpretar el tan cacareado derecho natural e inmutable como mejor le convenía.

En 1977 la Comisión para la Doctrina de la Fe publica el primer documento sobre el matrimonio. Es un documento preventivo que si bien afirmaba la indisolubilidad del matrimonio y el rechazo al divorcio, dejaba una puerta abierta al resaltar el necesario respeto a la libertad religiosa y el carácter opcional del divorcio. A mediados de 1979, el Episcopado hace público un nuevo documento. La reglamentación civil del divorcio es inminente. Esta declaración de los Obispos era a la vez mucho más conservadora y más amplia al enjuiciar no sólo el divorcio sino también el control de la natalidad y el aborto. Su aprobación en la asamblea plenaria del episcopado con 48 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones revela la relación de fuerzas dentro de éste. Esta vez la argumentación es explícitamente de competencias: «es un derecho fundamental de la persona humana poder contraer matrimonio, y corresponde a la sociedad reconocer y proteger la comunidad conyugal y familiar resultante del ejercicio legítimo de

este derecho... Aquí radica la competencia del Estado en la ordenación civil de la institución familiar. Pero dado el carácter sacramental del matrimonio celebrado entre los cristianos... la Iglesia reclama para sí su propia competencia en la ordenación jurídica de estos matrimonios».

El poder de una institución depende de la capacidad de dominar, es decir, controlar, que tiene. La libertad plena del individuo, que consiste precisamente en poder disponer integralmente de su persona, está reñida con cualquier poder. Esto queda particularmente claro cuando la libertad sexual está en tela de juicio. La plena libertad sexual es una amenaza frontal al orden social que tanto la Iglesia como el Estado defienden. Así, la sexualidad no puede ser dejada al libre albedrío del individuo. El individuo es por naturaleza malo y por tanto necesita de la Iglesia para su salvación. En el documento del Episcopado defiende con espíritu absolutamente trasnochado «la castidad antes y después del matrimonio (como) virtud cristiana y exigencia evangélica» pues «una sexualidad no controlada esclaviza en vez de liberar al hombre». Aunque no es que, al menos oficialmente, deba saber mucho de la materia, el Cardenal Jubany ya lo decía, «la función del matrimonio... no es puramente erótica». Pero entiéndase bien, este control es específico. Se trata de controlar los viles instintos que siempre amenazan la libertad espiritual, pero de ninguna manera las consecuencias de una sexualidad que responde a su fin legítimo, la procreación. Aquí se acaba la libertad del individuo, y sobre todo de la individuo. Hay que aceptar todo lo que Dios mande y de ninguna manera le cabe al hombre, y menos aún a la mujer, interferir en los designios divinos. Por lo tanto, el control de la natalidad y más aún el aborto son totalmente rechazables, pues, como

declara el Episcopado con cinismo, «la tradición de la Iglesia ha sido siempre unánime en defender la vida humana desde el momento de su concepción». Las guerras santas, la cruzada nacional-católica, en cambio, eran empresas legítimas ya que defendían el propio poder temporal de la Iglesia.

En noviembre de 1979 el Episcopado publica una nueva declaración haciendo una llamada explícita a los legisladores con una severa crítica a la separación por mutuo acuerdo entre los cónyuges y repitiendo la vieja letanía anti-divorcista de que «el divorcio engendra divorcios». Está comprobado que los conflictos conyugales generan la necesidad de una regulación de ellos y no a la inversa, y también está comprobado que el divorcio de ninguna manera destruye la sagrada institución de la familia. Al contrario, el divorcio es un instrumento legal que sirve para salvaguardar la institución. Y así lo entienden los propios practicantes, al volver a contraer matrimonio en la mayor parte de los casos de divorcio, como ocurre en Estados Unidos. El denunciar los peligros de una regulación civil del divorcio es meramente un argumento retórico más de la Iglesia para salvaguardar sus prerrogativas jurídicas.

Obispos en acción

La campaña anti-divorcista del Episcopado no fue del todo en vano. A principios de 1980 finalmente prospera en el Congreso el primer proyecto para la «reforma del Código Civil en materia de matrimonio y sus causas de disolución». Propuestas anteriores del PC y del PSOE siempre habían sido vencidas. Es el famoso proyecto del dirigente de la ACNP Íñigo Caverro, pactado previamente con la jerarquía eclesíástica y debidamente conservador, tanto en los amplios poderes que concede al juez en denegar la se-

paración como en el matiz culpabilista de las causas de separación, entre las que destacan las tradicionales de abandono del hogar y de infidelidad. Es obvio que tanto una como otra afectan particularmente a las mujeres. Según la moral dominante, tanto uno como la otra revisten diferentes significados para el hombre y la mujer. Aunque el adulterio había sido despenalizado ya antes del referéndum constitucional, aquí se introduce de nuevo por la puerta de atrás. El monopolio sexual entre los esposos como esencia del matrimonio queda salvaguardado.

En la segunda mitad del año Fernández Ordóñez sustituye a Caverro en el Ministerio de Justicia y presenta un proyecto algo más progresista, que introduce lo que será durante todos los debates parlamentarios el punto de discordia central, la separación por mutuo acuerdo. Ordóñez asegura que esta propuesta había sido consensuada dentro del grupo parlamentario centrista, pero es a partir de este momento que las disensiones dentro de UCD se hacen más patentes y que la Iglesia refuerza su ofensiva. Predominan en la ponencia de UCD en la Comisión de Justicia del Congreso militantes de la ACNP junto con algún miembro del Opus Dei, es decir, el sector democristiano anti-divorcista. Se rumoreó incluso que el Episcopado, el Opus Dei y hasta el propio Vaticano, a través de su nuevo nuncio don Antonio Innocenti, no fueron inocentes en la dimisión de Suárez. Se habla al mismo tiempo de una nueva declaración episcopal. Su publicación se retrasa varias veces, pero finalmente aparece justo días antes del segundo congreso de UCD. Quienes elaboraron esta declaración fueron el arzobispo Elías Yanes, de tendencia de derecha y vinculado al sector democristiano representado en el Congreso por Lan-

delino Lavilla, consejero de ACNP, el arzobispo de Valencia y el obispo de Cádiz, ambos de centro. Otra vez el documento recalca el rechazo del Episcopado a la separación por mutuo acuerdo y el reconocimiento del matrimonio religioso: «consideramos que es absolutamente inaceptable el llamado divorcio consensual. Una ley que introdujese el divorcio de tal manera que la pervivencia del vínculo quedase a disposición de los cónyuges sería rechazable moralmente y no podría ser aceptada por ningún católico, ni gobernante ni gobernado. Al pretender privatizar así el vínculo matrimonial, el Estado no cumpliría uno de sus deberes fundamentales de cara a un elemento esencialmente constitutivo del bien común: la protección de aquel mínimo de estabilidad y unidad matrimonial sin el cual no se puede hablar de institución matrimonial». Para persuadir al poder civil, la jerarquía eclesíástica ya no apela tan sólo a la tan manoseada y metafísica ley natural sino que de forma más pragmática, al bien común, léase orden social. El punto neurálgico es que tanto una como el otro están reñidos con la libertad individual, pues, y en esto tiene toda razón, «contraer matrimonio es una decisión individual, pero esta decisión afecta a toda la comunidad, tiene repercusiones sociales...». El pronunciamiento del Episcopado produce considerable revuelo entre los políticos de la izquierda parlamentaria que acusan al Episcopado de indebida injerencia en las actividades parlamentarias. En cambio sorprende la postura de Ordóñez, el padre del proyecto bajo fuego, que niega tal intención. Probablemente, y ante el éxito que hasta el momento ha tenido su proyecto en vencer la oposición democristiana dentro de su propio partido, prefiere no enfrentarse más con el sector eclesíástico. Hay que repetir, sin

embargo, que el Episcopado no es monolítico. Hay al menos dos tendencias en su seno, la progresista, o, como algunos le llaman «realista», es decir, «que cuenta con la realidad social concreta del país donde se legisla» en palabras del obispo de San Sebastián, y el integrista, visceralmente conservador. Durante todo el debate sobre la «ley de divorcio» dominó el sector conservador de la jerarquía eclesíástica.

Ante este papel continuista, patentizado también en el silencio del Episcopado sobre el 23 F, produjo sorpresa y sobresalto la carta pastoral de los Obispos Vascos de condena de las acciones de ETA pero también de cualquier tipo de intervención militar en Euskadi como desestabilizadora y antidemocrática. La Iglesia ha de jugar siempre en dos frentes: ha de garantizarse un espacio político propio frente a los poderes temporales, pero también ha de ser «realista» para mantener la adhesión de una clientela. También durante el debate sobre la «ley de divorcio» los sectores más progresistas prefirieron abstenerse de opinar públicamente de cara al sentimiento mayoritariamente pro-divorcista de la población. Los Obispos Vascos estaban siendo igualmente «realistas». Seguían la misma estrategia que recomendaban al gobierno autónomo vasco en la carta pastoral: «La falta de atribuciones legales necesarias no (le) exime del deber de poner en juego al servicio de la erradicación del terrorismo todo el peso moral que tiene delante de ciertos sectores de la población vasca». En un momento de exacerbación de los sentimientos anti-españolistas en Euskadi por la abierta intervención militar del poder central y para no perder su credibilidad, los obispos tenían que definirse. Pero en ningún momento la pastoral critica las condiciones que están en la raíz de la



situación vasca. Incluso así, al adoptar una postura crítica frente al poder central, los Obispos consiguen presentarse como poder autónomo y con un peso moral propio. En consecuencia se produce un abierto enfrentamiento con el Estado. Mientras el Episcopado apoyaba activamente los proyectos al menos de parte del gobierno, ningún miembro de éste le denunciaba de injerencia indebida, ni siquiera Fernández Ordóñez. Ahora todos, incluso la oposición de izquierda, lanzan el grito al cielo. El que sectores de la Iglesia se arroguen el derecho de denunciar la alianza entre el poder civil y las fuerzas armadas para mantener el status quo es inadmisibles, pues esto constituye una denuncia del propio poder civil.

En materia de familia y específicamente de la «ley de divorcio», sin embargo, la Iglesia mantiene su postura conservadora, apoyada entusiásticamente por el sector democristiano del partido de gobierno, y viceversa. A pesar de esto el proyecto de Ordoñez consigue ser aprobado en el Congreso de Diputados. En el Senado, sin embargo, el sector democristiano de UCD vuelve a la ofensiva y logra reintroducir la llamada «cláusula de dureza», la

facultad del juez de denegar el divorcio bajo ciertas circunstancias incluso cuando existe mutuo acuerdo entre los cónyuges. A esta altura todo parece indicar que sí que habrá «ley de divorcio» pero que éste será tan vigilado y costoso que no alterará nada de fundamental con relación a las anteriores anulaciones eclesiásticas. El proyecto del Senado ya que contiene modificaciones, requiere la aprobación final por el Congreso de Diputados. Los políticos consiguen crear una gran expectativa seguida por una ola de euforia ante el hecho de que al final queda suprimida la «cláusula de dureza», y que encubre las implicaciones no sólo de esta ley sino del hecho de que hay una ley más.

La derrota de la Iglesia y junto con ella de los sectores nacional-católicos es muy relativa. Aunque la Iglesia haya perdido competencias —las nulidades eclesiásticas no son reconocidas civilmente— y exista el divorcio por mutuo acuerdo, no hay que olvidarse que el divorcio en ningún sitio y nunca ha producido mayor libertad real ni ha puesto en peligro a la institución de la familia. Ha servido y sirve precisamente para regularizar judicialmente posibles conflictos en la

familia que puedan amenazarle. Pero aparte de que no tiene ningunas consecuencias fundamentales más que resolver casos de dureza de individuos, el nuevo divorcio implica un procedimiento judicial complicado, extenso y costoso. Mismo cuando hay mutuo acuerdo se requiere dos pasos, la separación previa y el propio divorcio. Pero es bien sabido que en la mayor parte de los casos el divorcio es contencioso. Y en estos casos las causas de culpabilidad principales —abandono del hogar e infidelidad— no son más que nuevas formas de sancionar y reforzar el matrimonio en su significado tradicional.

De hecho, a la ciudadana/o poco le importa que el poder de controlar su vida privada emane de la Rota o de la justicia civil. Lo que sí le importa es que persista el control. La Iglesia no sólo ha hecho de aliado de los sectores más conservadores del gobierno, sino que su injerencia directa e indirecta en el proceso parlamentario ha contribuido de forma eficaz para que también los sectores «progresistas» e incluso la izquierda parlamentaria puedan justificar el que continúe existiendo el control. ■

V. S.

LA ASOCIACION CATOLICA NACIONAL DE PROPAGANDISTAS



Esta poderosa fuerza política semi-secreta, fundada en 1909 para servir a la Iglesia y a la burguesía, tuvo ya un papel importante en la Dictadura de

Primo de Rivera y en el Bienio Negro durante la República (de ella surgió la CEDA). Lo tuvo también, desde el principio, al lado de Franco y lo está teniendo muy destacado en la transi-

ción del franquismo al postfranquismo.

Bastan algunos nombres para que se compruebe lo que decimos. Hay una continuidad sin interrupción alguna entre la generación Herrera Oria, Máximo Cuervo (nombre muy apropiado para uno de los católicos que dirigió la represión franquista), Martín-Artajo, Larraz, etc., a la de Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Otero Novas, Iñigo Caverio, Leopoldo Calvo Sotelo (yerno, por cierto, de Ibáñez Martín, el propagandista católico que durante tanto tiempo fue ministro de Educación de Franco).

A la lista podríamos añadir otros ministros del reciente postfranquismo cuya juventud y madurez se hizo en el seno de la ACNP, cuya educación es el nacional catolicismo corporatista y cuyo pretendido liberalismo es un disfraz de última hora: José Luis Álvarez, Andrés Reguera, Sánchez Ventura, Virgilio Oñate, Eduardo Carriles. Y también políticos importantes, como Emilio Artard, de Valencia; Ruiz Navarro, Iglesias Selgas, Puig de la Bellacosa (tan ligado a la de Juan Carlos de Borbón), y gobernadores civiles, como Belloch, que lo fue de Guipúzcoa y Barcelona; como Sanz Pastor, que atemoriza a Sevilla. Hasta Jesús de Diego López, que fue jefe de la policía franquista en Barcelona y Madrid y que ahora es instructor especialmente designado en el proceso de

Milans, Armada y Tejero (juez y parte, como quien dice), ha sido también miembro de esta sociedad apostólica, de esta minoría de católicos selectos (unos 500 miembros), de la cual, por imitación, nació el mucho más amplio y grosero Opus Dei. La ACNP ha tenido siempre vinculaciones con los militares —su presidente desde 1965, Abelardo Algara, ha sido hombre de negocios y es militar de alta graduación del cuerpo jurídico militar. Hombre en la sombra, frecuente visitante del palacio de la Zarzuela, seguro que tendrá opiniones expertas que aportar sobre el proceso a los sediciosos del 23 de febrero. Promueve reuniones, para formar la Gran Derecha, como en 1974 formó el grupo Tácito, desde su feudo del diario «Ya» y la Editorial Católica, para inventarse la UCD, siendo Suárez la pantalla tras la cual actuaron luego Osorio, Oreja, Lavilla. También es militar del cuerpo jurídico Alfonso Osorio, cuya carrera política está lejos de haber acabado en la fronda de Alianza Popular. (Por el contrario, si

que parece estar políticamente acabado otro famoso propagandista católico, a cuyo amparo medró Osorio: nos referimos a Federico Silva Muñoz.)

Esos (y otros) son los que «El País» llama ahora los «democrístianos», los 39 (y otros) de la Plataforma dentro de UCD, los que nunca descansan en el servicio que han prometido a la Santa Madre Iglesia y a la Burguesía Española.

¿Por qué consiguen conservar el semi-secreto? ¿Por qué los periódicos rara vez analizan el significado político de la secta o mafia de los «propagandistas»? Nosotros somos partidarios de explicitar lo tácito. ■

Colectivo 1936

Otras informaciones sobre la ACNP:

A. Sáez Alba, *La ACNP. Reproducción y métodos de la derecha permanente*. Ruedo Ibérico.

G. Campos, «Los dos primeros gobiernos de la monarquía y el poder económico», *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, núm. 55-57, 1976.

TRES EJEMPLARES ACENEPISTAS DE LOS DEL MONTÓN (NO HAN SIDO MINISTROS)

Francisco Guíjarro
Arrizabalaga

Presidente de la ACNP entre 1953 y 1959 (después de Herrera Oria y Martín-Sánchez Juliá; antes de Martín-Artajo y Abelardo Algara). Ha sido Inspector del Timbre, Director de Impuestos Indirectos, Presidente de Caritas, Presidente de la Editorial Católica, y también presidente de FOESSA, la fundación que publica los informes FOESSA, por tanto asociada a los sociólogos Juan Linz, Amando de Miguel, Jiménez Blanco (hoy portavoz parlamentario de la UCD). Este ha sido un acenepista vinculado a la recopilación de información.

José María Pemán

El conocido literato recientemente fallecido, secretario del centro de la ACNP de Cádiz. Colaborador de «El Debate», de Herrera Oria, en los años 30. Depurador de los cuerpos docentes, por su cargo en la Junta de Burgos,

durante la guerra. Presidente del Consejo Privado de Juan de Borbón. Director de la Academia de la Lengua. Y poeta, como saben sus lectores, de lo más cursi. Este ha sido un acenepista vinculado a tareas intelectuales y a la Monarquía.

Fernán Zelada y
Andrés Moreno

Actual capitosté del Banco Exterior, ha conseguido que este banco tenga acceso a los conciliábulos de los grandes bancos. Ha sido tesorero de la ACNP. Ha sido gobernador civil, consejero nacional del Movimiento, del consejo de administración de la Editorial Católica. También ha sido monárquico de Don Juan. Es un ejemplo de acenepista que a pesar de su falangismo ha sido activo en ambientes bancarios (la ACNP nunca ha descuidado el mundo de las finanzas; sobre todo las Cajas de Ahorros han sido controladas por ellos).

ABORTO
Nueva ofensiva

Envalentonado por el espectáculo militarista del 23 de febrero el Estado español ha pasado una vez más a la ofensiva contra el derecho de las mujeres de decidir sobre sí mismas. En lo que va del año las fuerzas represivas han realizado las siguientes acciones contra mujeres:

— Está pendiente el juicio contra las personas que han sido acusadas de llevar a cabo y someterse a prácticas abortivas en el Centro de Planning de Los Naranjos, en Sevilla.

— El 20 de abril, en Elche, Alicante, una «curandera» es condenada a dos años de cárcel por practicar abortos y además la Audiencia de Alicante ha condenado a cuatro mujeres que se sometieron a las prácticas abortivas a distintas penas que van de tres meses de arresto a los seis de prisión.

— En junio es convocado por tercera vez el juicio contra las once mujeres de Bilbao acusadas por aborto; el juicio es suspendido una vez más bajo la alegación de que dos mujeres no se presentaron.

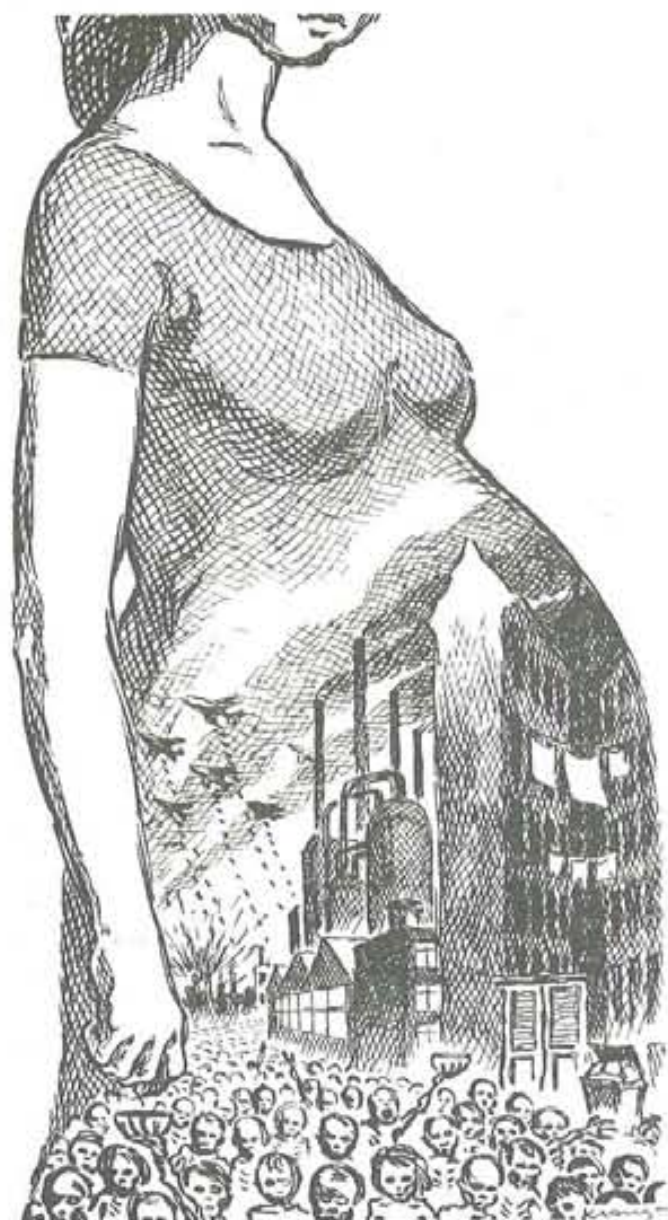
— En julio un subcomité del Senado norteamericano aprueba por tres votos contra dos el que la vida comienza con la concepción; esta decisión se encaja dentro de la virulenta campaña militarista y anti-feminista de los seguidores del presidente Reagan.

— Valencia: once mujeres detenidas el 14 de julio por prácticas abortivas.

— En agosto, en Valladolid, una mujer de 63 años es encarcelada por supuestas prácticas abortivas; como ha denunciado un grupo de mujeres que integran la denominada Comisión Pro Aborto de Valladolid se han abierto también diligencias judiciales a otras 16 mujeres.

— En Valencia, el 14 de julio la Guardia Civil entra a saco y con engaños en un centro de planificación familiar y detiene a doce personas, de las que dos pasarán a la cárcel. Luego se detiene a dos médicos en distintos lugares. A todos ellos se les acusa de «prácticas abortivas», y se encuentran en libertad provisional.

V.



solidaridad

HÉCTOR

Estas dos medidas mostraron la intención del partido del Gobierno de poner freno a las aspiraciones de las mujeres, pretende que se siga reconociendo al Estado la capacidad de decidir que toda mujer deba continuar su embarazo aunque no lo desee o el hijo sea subnormal y cuándo puede separarse una pareja que se unió voluntariamente. Lo que está claro es que no han podido, el juicio de Bilbao lo han tenido que aplazar de nuevo y la votación sobre el divorcio ha dividido a la UCD hasta cuestionar su continuidad como partido.

Al día siguiente de aplazado el juicio, el PCE presentó una propuesta de ley de aborto al parlamento. Ese mismo día la parlamentaria francesa Jette Fuillent, socialista miembro del parlamento europeo, presentó a este organismo un proyecto de resolución para que la despenalización del aborto en España se incluyera entre las condiciones para nuestra entrada en la CEE. Al día siguiente Felipe González declaraba que su partido podría apoyar en el parlamento el proyecto de ley comunista.

El interés de estos datos se deriva sobre todo de la repercusión pública que consiguen, pero dejando de un lado un análisis de las limitaciones que tiene el proyecto de ley presentado, empieza a resultar molesto que el PCE y sobre todo el PSOE se apunten a las batallas al día siguiente y no el día antes de que demuestren que pueden ganarse.

PSOE y PCE prometieron abordar el tema tras el aplazamiento del juicio de Bilbao en el 79, el PCE hizo público a la prensa un proyecto de ley en el marco de la campaña de solidaridad con el cierre de «Los Naranjos» y lo presenta meses después al parlamento al ver aplazado otra vez el juicio de Bilbao, pudiendo dar la falsa impresión de que ha sido quien ha hecho posible las movilizaciones de esas fechas. El PSOE empezó en el 79 la pelea de alguno de sus concejales vascos que intentaban impedir que las mujeres presentaran mociones de solidaridad en los ayuntamientos, un alcalde socialista mandó desalojar el de Granada cuando las mujeres intentaban conseguir un pronunciamiento por el cierre de «Los Naranjos» y otro concejal socialista, esta vez en Madrid, nos hace pensar que las declaraciones socialistas a favor del aborto no acaban de creérselas ni ellos.

La Solidaridad Internacional, que ya estuvo presente en el 79, se extendió con motivo del cierre del centro «Los Naranjos», organizó una jornada mundial por el derecho al aborto, la contracepción y la esterilización, el pasado 16 de mayo con referencia a la situación española en todos los países y la celebración en Sevilla el pasado 27 y 28 de junio de unas jornadas en solidaridad con el centro «Los Naranjos» a las que asistieron compañeras de todo el Estado y representantes de seis países europeos. Estas jornadas han sido la expresión más acabada de un movimiento que viene consiguiendo importantes victorias en países como Inglaterra, Francia, Holanda o Italia, que comprende la necesidad de consolidar relaciones de solidaridad internacional y buscar una relación más estrecha con las compañeras del Estado español. ■

H.



Si se pregunta a la gente ¿quién manda aquí?, habría muchos que contestarían que mandan los militares, habría algunos que responderían que también mandan los curas, pero sin duda otros contestarían que mandan los ricos. Incluso puede decirse que mandan los militares y los curas en cuanto no se oponen, sino que ayudan, al poder de los ricos. Cuando hay Estado hay desigualdad. El Estado franquista estuvo al servicio de los latifundistas, de los banqueros (que obtuvieron un monopolio a favor de los bancos mayores) y de la burguesía industrial, que pudo aprovecharse durante muchos años de unos salarios de hambre y de la represión contra el movimiento obrero.

¿Mandan más en España los ricos de aquí o los ricos de fuera, las multinacionales? ¿Qué conflictos hay, o puede haber, entre los banqueros de aquí y la banca extranjera? ¿Cuál es el poder que conservan los latifundistas, que ahora no sólo se llaman Duque de Alba sino también Rumasa, por ejemplo? ¿Quién está impulsando la nuclearización de España? ¿Qué significa que Calvo Sotelo (1) haya sido empresario en Explosivos Río Tinto, en constructoras como Ibervial y Ferrovial, haya estado ligado al Banco Urquijo que lo está al Hispano Americano? ¿Qué significa que Lavilla (2) haya sido director adjunto del Banesto, que Oreja Aguirre (3) sea sobrino de Aguirre Gonzalo, el patriarca del Banesto y de la banca española? ¿Por qué la «izquierda» parlamentaria, que antes se llenaba la boca con las reformas estructurales como la nacionalización de la banca y la reforma agraria, ahora calla prudentemente? ¿No es precisamente a causa de que son los ricos quienes tienen una parte esencial del poder fáctico? Estas cuestiones son tratadas, de lleno o de refilón, en los artículos siguientes.

(1) Presidente del Gobierno ahora, y varias veces ministro.

(2) Presidente del Congreso de los Diputados.

(3) Ex ministro de Asuntos Exteriores, hoy delegado del poder central en el País Vasco.

LAS RICAS URRA- CAS

El 16 de junio se ha vuelto a aplazar por tercera vez el juicio contra las once mujeres de Bilbao acusadas de realizar o someterse a prácticas abortivas. Este hecho tiene una significación política que no se nos puede escapar si queremos contribuir a analizar la situación política que atravesamos.

Tras el 23 de febrero, con el vuelco a la derecha que venimos observando, la militarización de Euskadi y la proximidad del verano, nadie cree que la no asistencia de dos de las acusadas al juicio, porque no fueron formalmente avisadas, justifique el aplazamiento.

Pese a que al juicio se había avisado a los abogados con menos de tres semanas de antelación y el diario «El País» no dio la noticia hasta que no faltaron 11 días para la celebración de la vista, la respuesta del movimiento feminista no se hizo esperar. Las recogidas de firmas, pintadas, tomas de autobuses, ocupaciones de edificios públicos, concentraciones, etc..., se dieron en todo el Estado y aunque estas acciones no contaron con la masividad del 79 hay que destacar que ganaron en extensión (sólo en Andalucía se incorporaron Córdoba, Almería, Málaga, ...) y en combatividad, como lo demuestra la respuesta de las mujeres ante la agresión de la policía municipal madrileña a las órdenes del socialista José Barriónuevo.

El anuncio del juicio de Bilbao coincidió con la reintroducción en el senado por parte de UCD de la cláusula de dureza en el proyecto de ley de divorcio que estaban discutiendo, con la que concedía al juez más poder que a los esposos.



LA PATRONAL

Dos enfoques posibles tiene el estudio de la patronal: el análisis y descripción de las distintas organizaciones patronales, y su cima la CEOE; o bien el intentar insertar la función de éstas dentro de la compleja dominación de la burguesía como clase. Aunque difícil de resumir en pocos folios, el segundo enfoque me parece más atractivo, y es el que voy a intentar.

RAÚL GARCÍA-DURÁN

Para ello necesitamos un punto de partida teórico, el concepto de clase, y la distinción clase en sí-clase para sí, esencial, creo, para poder comprender la realidad en toda su complejidad. Las clases no son un conjunto de individuos tal como el análisis al uso nos ha acostumbrado a considerar, no tiene sentido la pregunta, tan corriente, ¿a qué clase pertenece tal persona o tal grupo profesional?, sino que las clases son un concepto abstracto (como el de modo de producción), que nos define unos intereses históricos objetivos (intereses de clase) fruto de la inserción de los distintos individuos en la división social del trabajo (grupos profesionales que tienden objetivamente hacia esos intereses de clase). Esto es lo que entendemos por clases en sí. Pero para no quedarse en puro teorismo, abstracción, concepto, inte-

reses sin concreción, las clases tienden a consolidarse en fuerzas sociales activas, clases para sí, para lo cual necesitan que los individuos agrupados en grupos profesionales, situados en los respectivos lugares de la división social del trabajo, actúen de acuerdo con esos intereses de clase objetivos. Ello exige, fundamentalmente:

★ La clarificación de cuáles son esos intereses (conciencia de clase).

★ Organización (del tipo que sea) de los diferentes individuos. La lucha ha de ser colectiva y por tanto organizada.

★ Que la organización adoptada y la clarificación de intereses correspondan realmente a los intereses de clase que se quieren plasmar y defender. No siempre, desde luego, ocurre así.

El paso del en sí al para sí es tarea difícil, y nunca acabada, para cual-

quiera de las clases existentes, que tienen que luchar contra los intereses individuales e inmediatos de sus agentes, los cuales tienden a adecuarse lo mejor posible al sistema existente, al dominio de la clase dominante. Pero tampoco para ésta, para la burguesía hoy, es tarea fácil, por dos razones:

a) En su propia naturaleza está la competencia interna, hasta la ruina del otro y el aprovechamiento así del mercado dejado libre... «Esa burguesía que, a cada instante, sacrificaba su propio interés general de clase, su interés político, a sus intereses particulares y privados más estrechos, más sucios»... «La lucha por la defensa de sus intereses públicos, de sus propios intereses de clase, de su poder político, no hacía más que indisponerla e importunarla como estorbo para sus asuntos privados», nos añade Marx.

b) La burguesía tiene además que convertir su propia ideología en ideología dominante, garantizar la legitimación de su dominación y conseguir el control político del Estado, que éste responda a los intereses de clase burgueses. No podemos entrar aquí en el tema, pero los hechos han demostrado ya suficientemente los peligros de autonomía excesiva tanto de los encargados del control ideológico, los «intelectuales orgánicos» de la burguesía, como de los encargados del control político (bonapartismo, franquismo...).

Llegamos así a una primera situación de las funciones de la patronal. La burguesía tiene que luchar contra su competencia interna, contra los intereses particulares de sus agentes, y tiene que controlar a aquellos elementos, relativamente autónomos, en quienes ha delegado el poder ideológico y político. En general, para ello la burguesía se organiza, como las otras clases, en Partidos Políticos, la lucha entre clase y clase es en última instancia una lucha política, nos dice también Marx, y el sistema de partidos es la forma de lucha política propia del Estado burgués; pero la lucha es también más amplia y los Partidos Políticos, siempre divididos, no siempre aciertan la táctica y estrategia adecuadas, condicionados por sus propios intereses. La burguesía se organiza así directamente en asociaciones empresariales, un instrumento más para la consolidación para sí, principalmente para que la competencia interna no impida la consolidación, tarea normalmente dejada de lado por los partidos, pero también para el control, sustitución incluso, de estos partidos y de los distintos agentes con poder delegado.

Es hora ya de dejar de hablar en abstracto. He colado ya, conscientemente, la palabra franquismo. Hemos de situar los intentos para sí de la

burguesía tanto histórica (ya no existe burguesía, sino burguesía monopolista por un lado y pequeña burguesía por otro) como geográficamente (el franquismo juega en nuestros lares un papel determinante).

La lógica del Capital

La caracterización de nuestra burguesía y su proceso de desarrollo exige mucho más espacio que el de este artículo, pero aún así podemos señalar, sin demostración, algunas ideas básicas.

1.ª No tiene ningún sentido, más que la deformación partidista de la realidad, la idea, mantenida muchos años, de no realización de la revolución burguesa y definición de nuestra clase dominante como oligarquía financiero-terrateniente. La revolución burguesa se realiza también en nuestros lares aunque de forma tardía (1832-1868) dada la estructura de clases propia del Imperio que nos lleva a jugar el papel de tránsito del oro y la plata americanos en el proceso de acumulación mundial del capital; timorata dado el desarrollo existente ya de la lucha obrera (1871. Comuna de París); y dependiente, lo cual significa el freno a nuestra industrialización: así la construcción del ferrocarril, que podría haber sido la base de la industrialización del país vía industria siderúrgica, se hace con raíl inglés, quedando nuestra producción reducida (con la excepción catalana) a la actividad agrícola y la exportación minera.

2.ª Pese al aparente fracaso de la burguesía industrial se impone la lógica del capital y cuando la primera guerra mundial rompe el círculo de la dependencia tenemos el primer boom industrial, facilitado por la Dictadura de Primo de Rivera que reprime integra al otro freno tradicional: la lucha obrera. La crisis económica mundial y la lucha revolucionaria cortarán el proceso de expansión. Pero el capital ha iniciado ya su expansión y aún con las limitaciones heredadas de nacimiento se va adaptando a los cambios que la dinámica del capital exige: aparición de la burguesía monopolista. No existe así, tal como se sostuvo más tarde, oposición entre la burguesía bancaria (opuesta a la modernización) y burguesía industrial sino un proceso creciente de fusión de ambas (capital financiero) en un modelo específico de desarrollo. A. Gershenkon nos explica, a nivel teórico, las características del capitalismo de desarrollo tardío, que encajan al dedillo con nuestra realidad: importación de las innovaciones tecnológicas, participación del capital extranjero, desarrollo

de las instituciones financieras (Banca Mixta, principalmente) y participación del Estado.

3.ª El franquismo no es así, esencialmente, un régimen conservador, sino la respuesta defensiva de la burguesía frente a la revolución obrera, para la que recurre a las fuerzas más conservadoras, esencialmente Iglesia y Ejército. De aquí su doble carácter inmovilista respecto a la represión pero lo suficientemente flexible para ir siendo, sin trauma: militar, fascista, católico anti-comunista, liberalizador, europeísta y tecnocrático, reformista-aperturista y finalmente, llegando a su fin, democrático. Frenada la clase obrera la burguesía está así en condiciones de, cuando la coyuntura mundial lo permite, realizar el segundo y definitivo salto adelante en la industrialización (años 60). El salto se realiza adaptándose a las nuevas condiciones exigidas por el capital: aceleración de la concentración y centralización, intervencionismo estatal, internacionalización, innovación tecnológica; pero al mismo tiempo bajo una fuerte protección que permite (junto con el auge, hay beneficio para todos) la subsistencia de una estructura productiva que no corresponde a esas condiciones: equipos anticuados, mantenimiento excesivo de la mediana empresa, etc...

4.ª El franquismo puede ser considerado un cierto tipo de «bonapartismo», en el sentido de recurso de la burguesía a un poder fuerte, no expresión directa suya, burocrático, como consecuencia de la inestabilidad de la dominación de clase a través de las organizaciones políticas burguesas. Existe pues la tendencia, inherente a la misma situación objetiva, a la normalización, a la vuelta a una representación normal, lo cual explica la dinámica del franquismo; pero al mismo tiempo existe el freno a la liquidación, no por la no modernidad del capital financiero, sino por: a) el miedo tradicional a la clase obrera cuya lucha, pese a todo, vuelve a ser creciente y superando los estrechos cauces de integración previstos, y b) el maridaje burguesía monopolista-burocracia franquista-fuerzas conservadoras. Este maridaje viene sustentado por: el carácter timorato de nuestra burguesía, de origen, el creciente proceso de burocratización de la sociedad a nivel internacional (democracia represiva) y la misma duración y privilegios de la burocracia franquista. El ligamen es fuerte, incluso físico y personal: lazos familiares, Consejos de Administración, etc... De aquí la lentitud y vueltas atrás del proceso de liquidación, aún no acabado (divorcio, Tejerazo, Banco Central). El pacto con las fuerzas conservadoras tiene

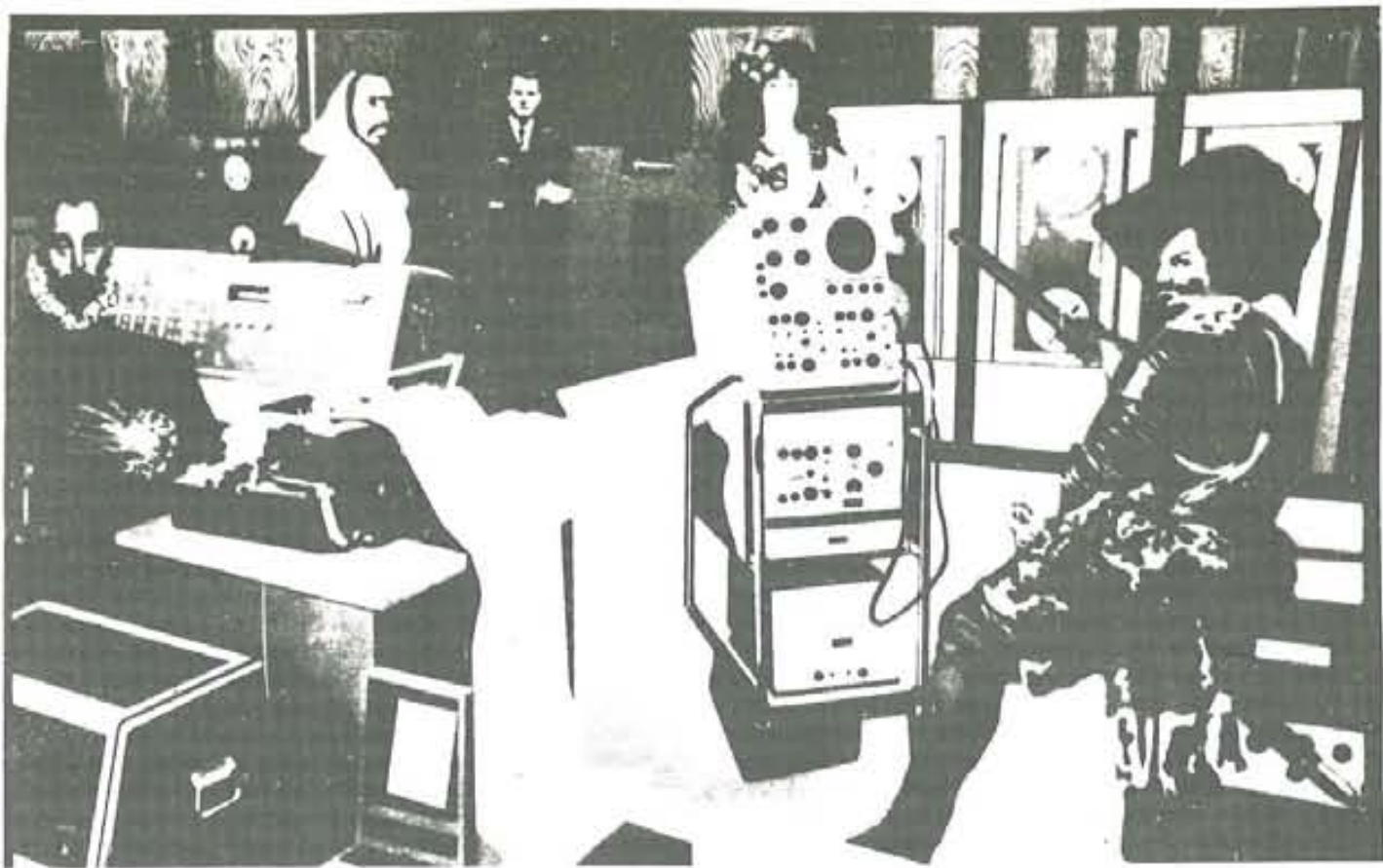
su coste. Así el franquismo sólo cae, y en parte, por la muerte física del dictador, sin que la burguesía, que descansa políticamente en él, haya preparado una alternativa política coherente, montándose apresuradamente la UCD, por la que la burguesía sólo opta claramente tras el fracaso electoral de Alianza Popular. Bajo el franquismo la burguesía había actuado a través de organizaciones muy sui generis, ACNP, Opus, Círculo de Economía, y le cuesta adaptarse a las nuevas formas de organización política.

Las tareas de la CEOE

Vemos así que la burguesía sale del franquismo con claras contradicciones internas, dividida. Por una parte dividida objetivamente —esto no es problema— entre burguesía monopolista y pequeña burguesía, pero también dividida entre los elementos conscientes de la necesidad de modernización y de cómo la estructura burocrática franquista frena esta modernización —léase mayor integración al capital internacional— y los elementos, quizá mayoritarios, que descansan aún en el proteccionismo franquista, en la fusión con la burocracia. Esta división es más grave, se da dentro de la misma burguesía monopolista, y se refleja además en una división política, en muy diferentes ritmos de liquidación del franquismo y opciones «democráticas» diferentes, lo cual hace aún más difícil la consolidación de una alternativa política propia (divisiones en UCD).

Tenemos así que gran parte de nuestra clase dominante, con Olarra quizá como figura, se resiste al cambio necesario objetivamente, en parte por anteponer sus intereses particulares y porque, qué caray, con el franquismo tampoco fue tan mal. Por otra vemos configurarse, ya en los últimos años de franquismo, una consciente vanguardia de la clase, cuyas figuras más destacadas son quizá Durán Farrell y Ferrer Salat, modernizadora y liquidadora del franquismo. Es Durán Farrell quien ha señalado como objetivo número 1 de la política económica actual la eliminación de la irracionalidad franquista del INI, que ha de ser el motor de la modernización, reprochando a UCD su incapacidad para conseguirlo. Para colmo la crisis económica.

Esta situación es lo que hace que la patronal juegue aquí un papel más importante de lo usual en la configuración de la burguesía monopolista como clase para sí, para lo cual se monta, también a toda prisa, la CEOE.



Aún dentro de la poca información que la clase dominante deja traslucir sobre sí misma, podemos resumir un esquema de tareas de la CEOE que creemos explica suficientemente su comportamiento:

1.º La tarea fundamental es la unidad de la burguesía monopolista, principalmente la unidad política y de modelo de desarrollo. La CEOE juega un papel esencialmente político dejando para otras organizaciones empresariales (Cámaras, Organizaciones sectoriales) las tareas más técnicas, más propias, si queremos decirlo así, de una patronal. La política de unidad se refleja en la composición de la CEOE y explica muchas de las oscilaciones de su actuación ante temas como el pacto social, por ejemplo. La «vanguardia de clase» consigue, dentro de esta política de unidad, un cierto control a través de la figura de su presidente, pero no sin frenar para ello parte de sus pretensiones, configurándose la CEOE como organización fundamentalmente conservadora, tal como corresponde al carácter dominante de nuestra burguesía monopolista. De este modo se consigue además aislar a las opciones patronales más retrógradas (SEFES).

2.º Búsqueda de una expresión política propia. Ya hemos señalado la poca confianza burguesa en las actuales fuerzas políticas. De aquí las continuas críticas de la CEOE a UCD; la cual, pese a todo y a falta de otra alternativa (saldrá en el 83?), se configura como la fuerza política burguesa

mayoritaria. Hay sin embargo que controlarla. La CEOE es el Pepito Grillo de UCD.

3.º Atracción de la pequeña burguesía al modelo de desarrollo de la burguesía monopolista. Relaciones cada vez menos contradictorias con CEPYME y COPYME.

4.º Racionalización de la política económica y del sector público. Es el objetivo básico de la vanguardia de la clase, aunque no totalmente asumido por el conjunto. Pocas realizaciones vemos en este sentido aunque sí una lenta renovación del aparato económico de la Administración. La lentitud se explica además por la crisis económica que da prioridad a otros problemas, a la salida de la crisis, con lo que empalmamos con la quinta y última tarea esencial.

5.º Elaboración de una alternativa a la crisis, lo cual sólo puede pasar por una mayor integración al capital internacional. La crisis es mundial y también lo será su salida. Quizá vale la pena, para acabar (he superado ya la extensión prevista) detenerse un poco en este punto ya que en él, junto a la evolución política seguida, parece la burguesía monopolista encontrar la tan buscada unidad. Me explico.

Las crisis son, innegablemente, épocas de reestructuración, de salto adelante. La vanguardia de la clase tiene aquí todas las de ganar. O modernización o ruina, no hay otra salida. Pero al mismo tiempo todo parece indicar que a escala internacional la modernización se va a aguantar en la línea

más dura, más conservadora política-mente — Thatcher, Reagan —, es decir, en la garantía del beneficio mediante la reducción de impuestos y salarios. Esta línea encaja perfectamente con el carácter conservador de nuestra burguesía monopolista y sus alianzas, y así, de hecho, el último informe de la CEOE lo que hace es pecir precisamente su adopción. La vanguardia de la clase se ve menos forzada a adoptar políticas de consenso con la clase obrera y la izquierda política, ante lo que se inclinaba antes dada la debilidad política de la burguesía sin franquismo, el auge del movimiento obrero y el relativo triunfo electoral de la izquierda. Ésta sin embargo — temerosa de una política de ruptura por su poco control de la clase obrera, más radical que sus «vanguardias» — ha cedido la iniciativa política a la derecha, y el movimiento obrero se muestra cada vez más desorientado y preocupado tan sólo del puesto de trabajo. Cada vez los Ferrer Salat y compañía tienen menos necesidad de arrastrar al conjunto de la clase. Se ha elaborado una política de conjunto cuyas manifestaciones las hemos sufrido en el nuevo «pacto social» respecto al paro. La nostalgia del pasado y el ansia de futuro se parecen cada día más.

De momento, circulamos por la derecha con la CEOE — y la guardia civil aún — regulando el tráfico. ■

R. G.-D.
(Agradecemos la colaboración de J. Rosell y S. Aguilar)

Los bancos españoles han perdido una importante batalla durante los últimos días, lo que puede venir a constatar un cierto retroceso en su poder frente a otros centros de decisión y eso que se han cuidado muy mucho de seguir contemplando todas las posibles alianzas políticas, dentro de un orden naturalmente. Frente a declaraciones más bien derechistas de algún presidente de uno de los grandes bancos nacionales, otros en sus discursos ante las Juntas generales de accionistas, en las que además se ha dado cuenta de que se han obtenido importantes beneficios, no han dudado en hacer profesión de fe democrática y respeto a la Constitución al tiempo que todos prácticamente ofrecían su apoyo, decían incondicionado, al actual partido en el poder. Incluso alguno se ha atrevido a afirmar que un gobierno socialista no les importaría demasiado. Son las tomas de posición ante el presente y un posible futuro a unos años vista.

Pero lo importante es que la batalla que han perdido ha sido en su propio terreno, con lo cual aceptan de hecho su inferioridad frente a otras instituciones financieras exteriores. Es el caso de la Banca López Quesada, adjudicada a la BNP francesa en la subasta que el fondo de garantías de depósitos realizó para quitarse de enmedio la responsabilidad de seguir manteniendo un banco con muy graves problemas de existencia.

La López Quesada, uno de los pocos bancos medianos que seguían teniendo una cierta estructura familiar, donde el banco se confundía con el banquero, entró en crisis declarada hace un par de años, después de llevar algún tiempo más en crisis oculta porque el conjunto del sector quería negar, o al menos no hacer pública, la existencia de una crisis que amenazaba y en cierto modo lo sigue haciendo todavía al conjunto por la vía de los problemas reales y, sobre todo, de la credibilidad. La imagen es algo que estas instituciones tienen que mantener para seguir operando y pensaron que negar la crisis era conservar la imagen.

Pero la situación fue insostenible y un puñado de bancos pequeños y medianos tuvieron que ser protegidos por los demás para que no se produjera una escalada de cierres que podría haber afectado a todos. Con ayudas del Estado, es decir, del conjunto de la población, se decidieron a ayudar a estos bancos en crisis para que, una vez estuvieran mínimamente saneados, fueran adjudicados a los

que ésta ha descubierto en el mercado interno español, hizo que, sorprendentemente, un banco inglés pujara por el Banco de Valladolid y se lo llevara. Esto sorprendió y desagradó a los responsables de los bancos españoles por lo que creían significaba una competencia desleal. Cuando se supo que por la Banca López Quesada estaba interesado el BNP, los presidentes de los siete grandes bancos, los que mandan de verdad dentro del sector, a los que luego se añadiría el del Banco Exterior de España, empezaron a mantener reuniones para intentar parar la posible adjudicación al banco francés.

Hicieron declaraciones falsamente patriotas y hablaron de que no era justo que una entidad extranjera, que no había ayudado a sanear a la López Quesada, se fuera a quedar con ella. Y sin embargo había una posibilidad muy clara para que esto no ocurriera: que un banco español pujara más que la BNP. Así de sencillo y sin embargo no ocurrió porque, en definitiva, valiéndose de un pretendido patriotismo que no han demostrado demasiadas veces a lo largo del tiempo, lo que se pretendía era comprar un banco a un precio bajo, a un precio «político», antes de que cayera en manos de extranjeros.

Las argumentaciones, como se vé, no son nada buenas y el poder central, no haciendo caso de las presiones de los bancos o quizá obedeciendo a otras presiones más fuertes logró que los bancos españoles retiraran la propuesta que hacían quedando sólo, por tanto, la de la BNP que ha sido considerada como satisfactoria.

Parece como si esta batalla, primera en la que la banca nacional, especialmente, la gran banca, no ha estado unida completamente, empezara a significar la pérdida de una parte del poder que tradicionalmente ha tenido y que de hecho ha sido omnipotente en muchas ocasiones. La internacionalización de la actividad económica española, su dependencia cada vez más grande respecto a los grandes centros de decisión de fuera del país; la pérdida de poder de decisión en la industria española, como consecuencia de su retirada ante la crisis industrial desatada al hacer quiebra el modelo de crecimiento elegido en la década de los sesenta son algunas de las causas por las que el sector bancario está perdiendo poder y se refugia en la actividad típica de prestamista de dinero y de servicios que quieren cobrar ante la pérdida de rentabilidad de otras operaciones que en su momento fueron rentables y que ahora les ha llegado la época de las vacas flacas. ■

R. P.

UNA BATAALLA PERDIDA

RAÚL PILLADO

mejores postores que, se suponía, serían siempre otros bancos nacionales. El montaje funcionó durante un tiempo y en el primer año fueron adjudicados algunos bancos de éstos a entidades con capital español.

Pero la llegada de la banca extranjera, las posibilidades de expansión

Desde hace años se viene hablando de la «oligarquía financiera» y del «poder de la Banca en España», con razón. Como en otros países de industrialización relativamente tardía (Alemania es el ejemplo más conocido), cuando la industrialización se produjo, existían ya grandes instituciones financieras que tuvieron en ella un papel predominante. Porque la industrialización española (con las consabidas excepciones de Cataluña y Euskadi) se produce realmente en los años 60.

El poder de la banca no procede únicamente de que, al financiar la industria, logra controlarla, sino que procede también, en el caso español reciente, de las ventajas que gozó en el franquismo. La «oligarquía financiera» logró en los inicios del franquismo que, por ley, se impidiera o dificultara mucho la creación de nuevos bancos, de modo que se consolidó la posición de los que ya existían. Estos fueron absorbiendo a otros pequeños, en los años del franquismo.

Los grandes bancos son el Español de Crédito (Banesto), el Central, el Hispano Americano, el Bilbao, el Vizcaya, el Santander. Se pueden añadir el Popular y Atlántico (vinculados al Opus Dei, y uno de ellos a Rumasa), y el Exterior. Sus jerarcas son nombres conocidos de cualquiera que se interese por la política española: Aguirre Gonzalo, Escámez, Botín, etc. Los bancos industriales (Urquijo, Bankunión) están vinculados a éstos. Los bancos más pequeños que han ido naciendo (la Banca Catalana, ligada a la familia de Jordi Pujol, por ejemplo) lo han hecho con la tolerancia del gobierno franquista y de los grandes bancos, al amparo de la expansión económica de los años 60.

En pocos países del mundo se vería como algo adecuado para un banquero el asistir a una manifestación como la que hubo en Madrid tras el 23 de febrero. En España, sin embargo, donde a la mayoría de los ministros se les puede vincular, en el franquismo o en el postfranquismo, a uno u otro grupo bancario, donde se supone, no sin razón, que los cambios de gobierno y hasta los pronunciamientos militares se hacen por presión o al menos bajo los auspicios de uno u otro banco, pareció necesaria la asistencia de una representación bancaria al más alto nivel en primera fila de la manifestación pro-constitucional. Era una manera indicar que si había banqueros con el golpe, también los había con la Constitución. Sería sin embargo muy extraño que hubiera representación bancaria en una manifestación de

EL PODER DE LA BANCA



un primero de mayo, aún en las de tipo procesional organizadas por UGT y CC.OO. Los banqueros están divididos entre golpistas y constitucionalistas. Seguramente, por ahora, con Calvo Sotelo en el gobierno, predominan los segundos.

El poder de los banqueros lo ejercen, sobre todo, para continuar con el negocio. No se trata de ejercer su poder para mantener el modelo de economía capitalista, poco amenazado por los políticos de oposición (al menos por ahora, en que han recedido las amenazas retóricas de nacionalización de la banca, tan frecuentes en los años 60 en la pluma de Ramón Tamames y otros pensadores radicales). Se trata de cosas más mundanas. Por ejemplo, el permitir que se les continúe consintiendo repartir beneficios muy altos (beneficios que no van a la inversión sino al consumo de lujo), no en la forma de dividendos, pues eso se nota demasiado y es de mal gusto en época de topes salariales, sino en la forma de «ampliaciones de capital», de nuevas acciones que se entregan gratis o a bajo coste a los accionistas. Por ejemplo, que se limite la entrada de banca extranjera. Por ejemplo, que se les permita destinar los depósitos a los destinos que tengan por convenientes, sin imponerles inversiones obligatorias —ha de ser el mercado, dirían ellos, el que asigne los recursos—, aunque de todas formas les viene muy bien en estos años poder colocar mucho dinero en papel de estado que les reporta un interés más alto que el que pagan a los depositantes, el negocio del banquero es de los más cómodos del mundo.

El poder de la banca les viene de su especialización en el dinero. Los grandes bancos concentran un enorme poder económico, y este poder económico les da poder político. Y, de otro lado, bastantes de quienes consiguen poder político, son cooptados luego por el poder económico, y se colocan, antes de ser ministros o directores generales, o después, en asesorías y consejos de administración bancarios. El poder de la banca es el poder de encaminar el dinero hacia fines rentables, en vez de útiles a la sociedad. Es el poder de cargarse a algún ministro que no haga una política económica a su gusto, y de sustituirlo por otro. Es, sobre todo, un poder de veto. Un hipotético gobierno del PSOE No se atrevería a nacionalizar la gran banca —¿hace falta otra demostración del poder de la banca? ■

J. M. A.

No es nuestra intención entrar exhaustivamente, en este apunte, en el tema de los que mandan en la tierra, y sus consecuencias. El número extra de BICI, del verano pasado, dedicado íntegramente al campo, trataba éste, junto a otros temas, y quedaba suficientemente aclarado. Sin embargo, en el repaso a los poderes, no está de más un acercamiento. Que la tierra no es del que la trabaja, resulta tan obvio que no vale la pena insistir en ello.

Y, entre los que mandan, sobre todo en Andalucía y Extremadura, hay un puñado de familias que son quienes poseen la tierra en buena parte. Títulos nobiliarios que a todos sonarán, como el Duque de Medinaceli o la Duquesa de Alba, y apellidos compuestos como Escrivá de Romaní, Fernández de Córdoba, Colón de Carvajal, junto a otros de resonancias coloniales inglesas (Domecq, Terry, Garvey...), se reparten, junto con la Iglesia (así en sentido general, sin distinguir entre unas órdenes u otras) un buen pellizco de nuestras tierras de las que, en la mayoría de los casos, no sacan apenas provecho.

Para muchas de estas familias, la posesión de la tierra es, fundamentalmente, una cuestión de prestigio: «La legitimidad social de la propiedad es todavía básica», escribía Martínez Alier, en 1965, en su tesis sobre el latifundismo, publicada por Ruedo Ibérico. Naturalmente, también quieren esas tierras para criar toros, y poder ir a cazar de vez en cuando, invitando al resto de la camada, todos ellos también con apellidos compuestos, producto en muchos casos de recientes modificaciones en los registros civiles. Salvo casos aislados de modernización capitalista (que sería el

LOS QUE MANDAN EN EL CAMPO

RELACION TERRATENIENTES BURGUESIA FINANCIERA

NOMBRE	N.º HAS	Procento	Procento en
AL. de SALVATIERRA	894	11	11. Sevilla
M. CASANOVA BOKONE	853	13	13. Expatriación
ALVARO DOMÉCO	800	10	10. Madrid
CONDE DE ELDA	494	6	6. Madrid
JUAN PEDRO DOMÉCO	783	5	5. Sevilla
FLORO GANDARÍAS	1.633	20	20. Madrid
TCO. JORDA BATES	2.083	2	2. Desconocido
M. de COSILLAS	12.036	15	15. Madrid
JUAN MANHIG	1.307	8	8. Madrid
I. OSORIO VAZQUEZ	308	1	1. Madrid
M. de MOTILLA	7.718	9	9. Andalucía

caso de Rumasa en Cádiz, por ejemplo), el resto de los grandes terratenientes españoles mantienen sus propiedades con la misma estructura de hace, por lo menos, doscientos años. Víctimas directas de esta situación son todos esos jornaleros que carecen de trabajo la mayor parte de los días del año, y cuyas justas aspiraciones de «reparto» de tierra de propietarios absentistas, o de reformas agrarias, incluso moderadas, no encuentran, desde hace muchos años, ni siquiera eco entre la izquierda.

Un estudio realizado en 1977, por Manuela Leal Maldonado y Salvador Arancibia («Quiénes son los propietarios de la tierra», La Gaceta Científica), por estamentos sociales y áreas geográficas, demuestra que la burguesía agraria, entendiendo por ésta a quienes no ostentan título nobiliario ni son familia directa de los «nobles», poseen casi un 28% del total de las tierras del país, que representan 750.000 hectáreas. La aristocracia, tanto titulares como familiares, posee 437.000 hectáreas, equivalentes a un 16%. En este caso, aseguran los autores, la concentración de tierras es muy alta, ya que se da con frecuencia el propietario de más de una finca, la mayor parte de las cuales provienen de las entregas efectuadas por los reyes a sus cortesanos, como pago de ayudas y servicios prestados.

Y no sólo por esto, sino que los continuos matrimonios entre los propios miembros de la aristocracia, y los «morganáticos» con miembros de la oligarquía financiera, contribuyen a aumentar continuamente las tierras y el poder. «A menudo —escribe Juan Anlló en «El campo español» (Editorial Cuadernos para el diálogo)—, los grandes propietarios poseen tierras en

varios municipios y controlan, de hecho, otras propiedades registradas a nombre de sus esposas e hijos».

También Malefakis («Reforma agraria y revolución campesina», Editorial Ariel), insiste sobre el tema: «La mayoría de los grandes terratenientes del sur están vinculados por razones de sangre y descendencia a unas pocas familias. Los más opulentos tienen conexiones con la nobleza, pero la mayoría son de origen más reciente y puramente burgués». Para este autor, «El latifundista», en su calidad de propietario de las tierras y los hombres que en ellas se ocupan, «tiene una importancia relativa mucho mayor que el propio latifundio». Una importancia social, y política, añadimos nosotros. Todos esos propietarios de la tierra, que, naturalmente, son también propietarios de muchas otras cosas en el país (como puede verse en el cuadro anexo, sus relaciones con la Banca son de primer grado), son los mismos que, durante cuarenta años, estuvieron colaborando con el régimen de Franco para que nada, que pudiera disturbar su opulencia, cambiara.

Los casos más flagrantes se dan, naturalmente, en Andalucía. «En Castellar, cerca de San Roque, a 26 kilómetros de Algeciras», cuenta Antonio Burgos en «Andalucía ¿Tercer mundo?», «hay una finca de 14.000 hectáreas que pertenece a un solo propietario. Se tarda seis horas en atravesarla a caballo». La revista francesa «Paris Match», en julio de 1965, ponía como prototipo de grandes terratenientes a los Duques de Medinaceli, y afirmaba que, de 1785 fincas, 545 eran propiedad de títulos nobiliarios.

«En Andalucía», se lee en el mencionado estudio de Antonio Burgos, «La sociedad es una pirámide que tiene en la cúspide la nobleza y los propietarios de la tierra». Al empezar el siglo, 11.000 personas poseían casi siete millones de hectáreas en el sur. Cádiz es el paraíso de los latifundistas con 102 fincas que totalizan 139.982 hectáreas, mientras que Huelva da el porcentaje mayor de fincas con más de 1.000 hectáreas. En general, el 16 por ciento de las explotaciones reúne el 53,5% de la tierra, en explotaciones de más de 200 hectáreas. En Sevilla, el 40% de la provincia son fincas consideradas de «proporciones modernas» (entre 50 y 500 Ha), mientras que el resto es latifundio de más de 500 hectáreas. ■

M. A.

RELACION NOMINAL DE LOS 25 PRIMEROS PROPIETARIOS PRIVADOS DE LA MUESTRA

NOMBRE	N.º HAS
1. UNION BURGUESA ESPAÑOLA	42.000
2. INMOBILIARIA DEL SERLAQUE	20.000
3. AZOR ARAGON GUILLAMAS, Pío	23.000
4. FIZ JAMES STUART SILVA, Cayetano	19.000
5. COMPAÑIA DE INARIS	18.000
6. CONCHERA ALMOURAÑA	15.000
7. SOCIEDAD MINERO METALURGICA PERARROVA	15.000
8. AGRICOLA Y FORESTAL DEL PUERTO	14.000
9. FERNANDEZ DE CORDOBA RIV, Cuadec	14.000
10. CASTILLO CASTILLO, Alejandro	14.000
11. TALCO ANCHORENA, Manuel	13.000
12. AGROPECUARIA DEL GUADALQUIVIR	13.000
13. CUELLI MARTOS, Jose Albano	12.000
14. GONZALEZ MARTIN, Eusebio	12.000
15. FIZ JAMES STUART SALVEDRA, Fernando	11.000
16. ESCRIBA DE ROMAN	11.000
17. MEDINA CARVAY, Manuel	11.000
18. COMPAÑIA BURGUESA	10.000
19. PUES CROSS, Pío	10.000
20. NOQUERA PEREZ, Salvador	10.000
21. MANISMA DE GUADAMAR	10.000
22. COLON CARVAJAL, Pío	10.000
23. DINESA CEREZO	9.000
24. ESCRIBA DE ROMAN Y OLINTANA, Isaac	9.000
25. GUTIERREZ TAPIA, José	8.000

La sociedad informatizada

¿Pero alguien se había creído aquello de que la ciencia era neutral? Un buen ejemplo es el de la cibernética y el desarrollo de los sistemas que aumentan y en algunos casos suplen la inteligencia del hombre.

Sin la ayuda providencial de este nuevo instrumento de control al servicio del poder, los mecanismos de dominación conocidos hasta la fecha hubieran sido desbordados por la creciente complejidad del entramado social y la movilidad de la población.

Veamos la influencia de la informática en la España del postfranquismo, su aplicación represiva y generadora de paro y su repercusión en la vida cotidiana.

Si el antiguo régimen franquista, en sus relaciones con sus súbditos, siempre se caracterizó por una brutalidad sólo superada por su torpeza, los herederos del negocio han sabido comprender que para dar continuidad a la obra de consolidación tenían que echar mano de la tecnología. Sólo con ella podrían obtener la eficacia en la gestión que los que mandan esperaban de ellos. Evidentemente que la tecnificación en el modo de gobernar no ha excluido la brutalidad. Y si no que se lo pregunten a los de Almería o a los cuatro Grupos de Gerona.

Así pues, por obra y gracia de los famosos «chips» y algún que otro tecnócrata, los ojos y los oídos del Poder se han multiplicado por mil.

El felizmente desaparecido Giscard

conocía bien la íntima relación entre la posesión de la información y el poder. Por ello encargó a sus colaboradores el informe conocido como Nora-Minc sobre las influencias de la nueva tecnología de tratamiento de la información en la sociedad futura. De los resultados del mismo y de la ampliación del análisis han sabido tomar buena nota los que gobiernan.

Ahora también el ordenador comprueba

De golpe, y siguiendo el ejemplo de los empresarios que lo vieron claro hace algún tiempo, los nuevos burócratas que han ocupado los ministerios del postfranquismo, se han lanzado a

una mecanización frenética. Todos los males del Estado pueden solucionarse con el uso intensivo del ordenador. El único consuelo para los que trabajamos es que esos ordenadores serán los únicos que no pongan gente en la calle, aún sabiendo que al ejército de funcionarios los pagamos entre todos con lo que nos expolían en el sobre de cada mes.

Por cierto que, con machacona insistencia, durante meses todos los medios de comunicación nos han mostrado la apocalíptica requisitoria del Ministerio de Hacienda, conminándonos a pagar, con la amenaza de un misterioso ordenador que «comprueba». Lo que no explican es que para que la maquinilla pueda comprobar han tenido que ir introduciéndole todos los

datos que configuran al Homo Economicus, visto como una vaca lechera por todos los que viven de él, desde los diputados hasta el conserje del Juzgado, desde los que llevan armas de fuego hasta los que las llevan de papel timbrado. Cuando domiciliamos la nómina en la Caja de Ahorros del barrio, o compramos algún artefacto a plazos, o nos suscribimos a una publicación, vamos poniendo uno a uno los granos de arena que harán todopoderoso al cerebro del nuevo Leviatán.

Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento a los funcionarios de Hacienda que compran nuestra revista y han anunciado en la prensa que se sancionará expresamente a todos aquellos contribuyentes que incurran en cambios o errores, deliberados o no, al indicar sus datos, tal como recomendaba oportunamente BICI hace unos meses.

El gran hermano electrónico

En los tiempos de la escucha telefónica artesanal que utilizaban los fontaneros del régimen del Invicto, el control de los ciudadanos tenía un límite, marcado por el número de «Morales» que tenían que estar pendientes del auricular y de la clavija para vigilar al sospechoso de turno. Hace ya años que la tecnología ha roto esa barrera. Hoy un ordenador de mediana potencia puede supervisar todas las llamadas de miles de abonados de una central tomando nota de los números de abonados que conversan, indicando la hora en que lo hacen y grabando aquellas conversaciones que se considere oportuno.

El artífice del avance en el control social fue el siniestro Martín Villa que, en sus tiempos de ministro del Interior, aprovechó sus intercambios culturales con los descendientes de Hitler hoy en el poder en la República Federal Alemana. En uno de sus viajes se quedó prendado del gigantesco sistema de ordenadores empleado por la BKA (Policía Alemana) que, para aquellas fechas ya llevaba fichados a 32 Millones de alemanes. Otra de las maravillas de la técnica consistía en un fichero llamado AUROS que contenía los registros de la voz humana de todos los sospechosos que habían tenido contacto con la policía en los últimos tiempos. Desbordante de júbilo, el amigo Rodolfo encargó otro juguete igual, al módico precio de 5.000 millones de pesetas.

Hoy día ya están en marcha cuatro flamantes ordenadores Siemens en el Servicio de Informática de la Dirección de Seguridad del Estado. De momento, según informaba en «El

País» el responsable del centro, presentado como un anónimo Mister Computadora, existen terminales en Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y Sevilla. Desde los mismos se pueden efectuar consultas a los archivos centrales, con un tiempo de respuesta que oscila entre dos y cuatro segundos. La media de consultas mensuales a los ficheros de «delincuentes con antecedentes» y de estupefactos es de 275.000. Eso sí, aclara que están muy preocupados por garantizar el más exquisito respeto a los derechos del ciudadano recogidos en la Constitución.

El pasado 17 de junio tuvo lugar una reunión en Roma entre los responsables de la lucha antiterrorista españoles e italianos, para coordinar la transferencia de los ficheros informáticos conteniendo los datos de los «terroristas» de ambos países. También se estudió la interconexión, en tiempo real, es decir con datos siempre disponibles y actualizados constantemente, de los ordenadores italiano, español y, cómo no, alemán. Arias Navarro, Alonso Vega y demás joyas del terror se relamerían de gusto con la nueva dimensión cibernética del eje Bonn-Roma-Madrid.

La actitud de los socialistas no difiere lo más mínimo. En su «Documento sobre bases de acción» y en el apartado de Terrorismo y Libertades, recomiendan textualmente «la centralización de la recogida de datos en el Cuerpo Superior de Policía; introducción de la informática en el procesamiento de los datos, con terminales en las comisarías, unidades móviles y fronterizas». Recientemente, en televisión, el diputado del PSOE Solana formulaba su crítica al Estado por NO tener todavía a punto un buen sistema de control de los ciudadanos que ayude a la lucha contra el supuesto terrorismo. Siempre «en aras de la racionalidad y de un conocimiento exacto de la situación».

Para comprender lo que se nos viene encima con la información hay que considerar que cuanto mayor es ésta, más centralizada está la información, y los puntos donde se concentra la misma se convierten en neurálgicos para el funcionamiento del sistema global. Se trata de conservar la memoria del Estado y todo es justificable con ese fin. Ello se traduce, al igual que en las centrales nucleares, en una necesidad de máxima seguridad, de control de todo sospechoso de atentar contra ella. Con este fin se crean normas de identificación, controles de acceso, duplicación y diseminación de copias de los datos en diferentes ubicaciones, etc. Es posible que actualmente no exista otra cosa tan protegida como esos centros de tratamiento de información.

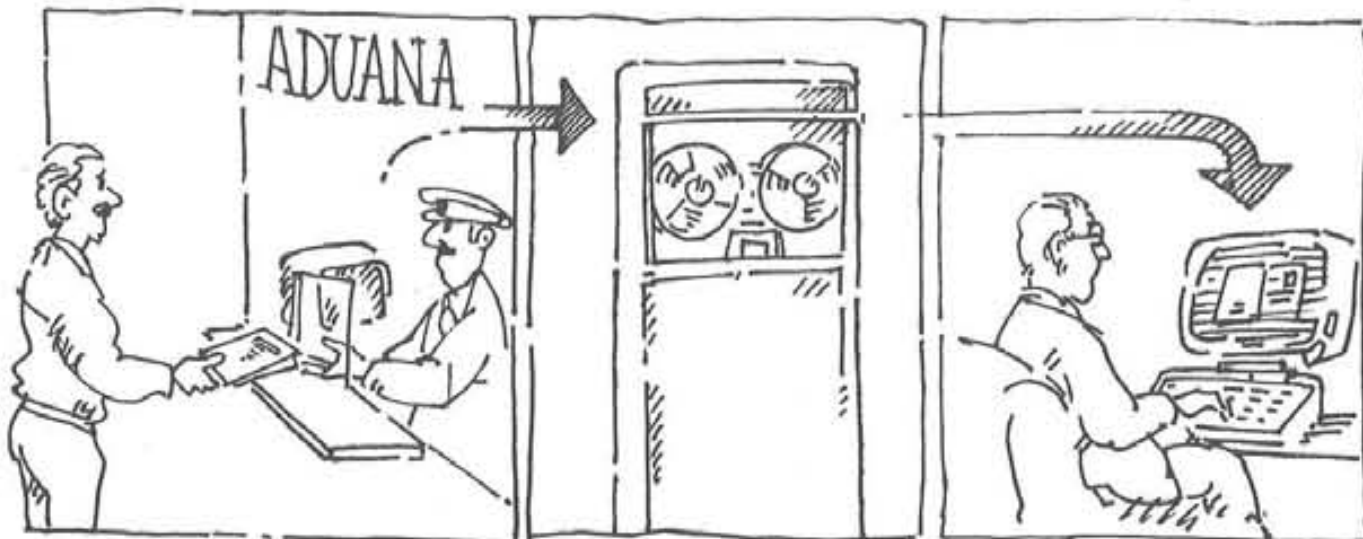
La ordenación de la vida cotidiana

Los últimos años han sido testigos de esta invasión lenta, pero irreversible en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin saberlo la mayoría de las actividades diarias de cualquier trabajador están relacionadas con información que se procesa en un ordenador, visible o no. El tráfico de nuestras ciudades está controlado automáticamente, los movimientos de dinero en las entidades bancarias pasan por él, y en general todo el sector servicios se apoya en la mecanización de tareas. En España son 200.000 las personas que trabajan en el sector.

Y para el futuro el delirio de los tecnócratas nos describe un mundo de robots que realizarán todas las tareas pesadas y repetitivas, las sufridas amas de casa tendrán sus recetas de cocina en un miniordenador y podremos enviar cartas de amor, con procedimientos de representación visual en el televisor de nuestro/a amado/a. So-corro.

Y para que la sociedad asimile como propia la necesidad de la informática, se debe iniciar el adiestramiento desde la más tierna infancia del ciudadano. Desde los USA llega un conjunto de técnicas de enseñanza asistida (por ordenador, claro) que permitiría matar varios pájaros de un tiro. Cada niño se pasará varias horas al día conversando con una máquina que se convertirá en su tutor electrónico y del cual adquirirá los conocimientos que los gestores de la sociedad hayan dispuesto para él. Se asegura que en un futuro bastante cercano desaparecerán los libros y las grandes bibliotecas serán como museos. Las grandes masas de información estarán ubicadas en los soportes magnéticos de grandes ordenadores, a los cuales se conectarán los usuarios que deseen consultar algo, pagando por su utilización. La memoria colectiva de la sociedad se instalará en los sótanos del Poder y en ella estarán aquellos datos que el Gran Hermano tenga a bien disponer. En la actualidad ya funcionan varios de estos sistemas, básicamente en USA, y las facilidades que se prevén con la comunicación por satélite apunta a un claro monopolio de la información y de su distribución a los países dependientes política y tecnológicamente.

Lo más temible de la cuestión está en que, como consecuencia de la vertiginosa evolución a la baja de los costes de producción de los componentes electrónicos de los ordenadores: circuitos lógicos, memoria, almacenamiento en disco, etc., todos los sueños del Poder se hacen posibles, pues cada



vez es menos costosa la instalación de máquinas cada día más potentes.

Cosa de veinte años

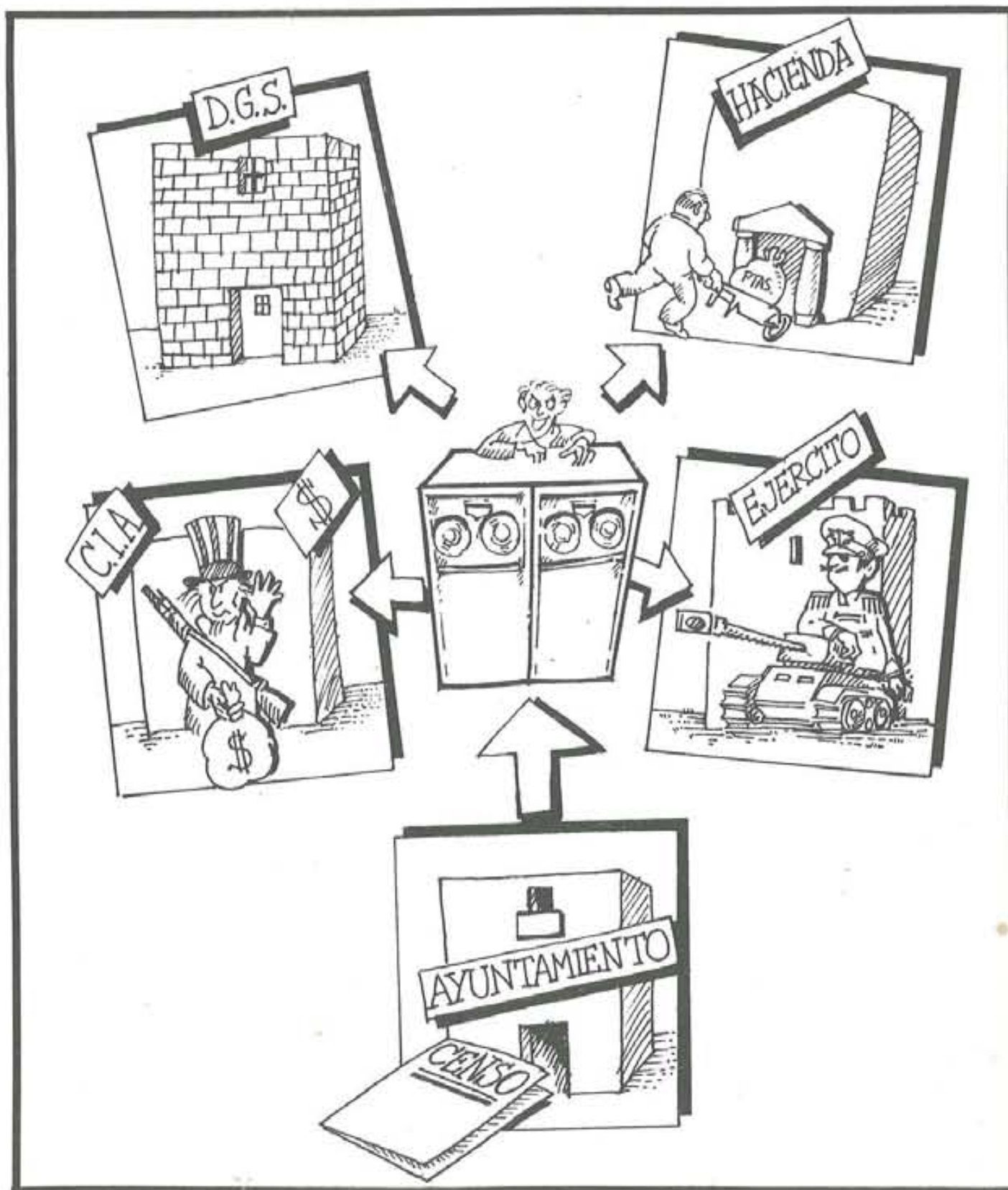
En lo que existe una rara unanimidad es en la efectividad de los ordenadores para desplazar mano de obra conflictiva por un coste igual o menor. Los astutos empresarios españoles hicieron números en su día y hoy se

encuentran con que vienen produciendo el triple de lo que producían hace cinco años, pero con la mitad de la plantilla. Algo así como el milagro de los panes y los peces, pero jugando con el derecho de la gente a comer cada día.

Garrigues Walker, portavoz cualificado del capitalismo moderno y salvaje, nos explica que el problema de la sociedad actual está en el miedo al cambio. Que las cosas ya han cambia-

do y que hay que adaptarse. Lo que no explica es por qué siempre se han de adaptar, reconvertir y reestructurar los mismos. Con referencia a la ofensiva tecnológica nos aseguran que es la única salida, y que sólo habrá que esperar unos pocos años, veinte o treinta. Para entonces trabajaremos poquísimo y viviremos en el mejor de los mundos. ■

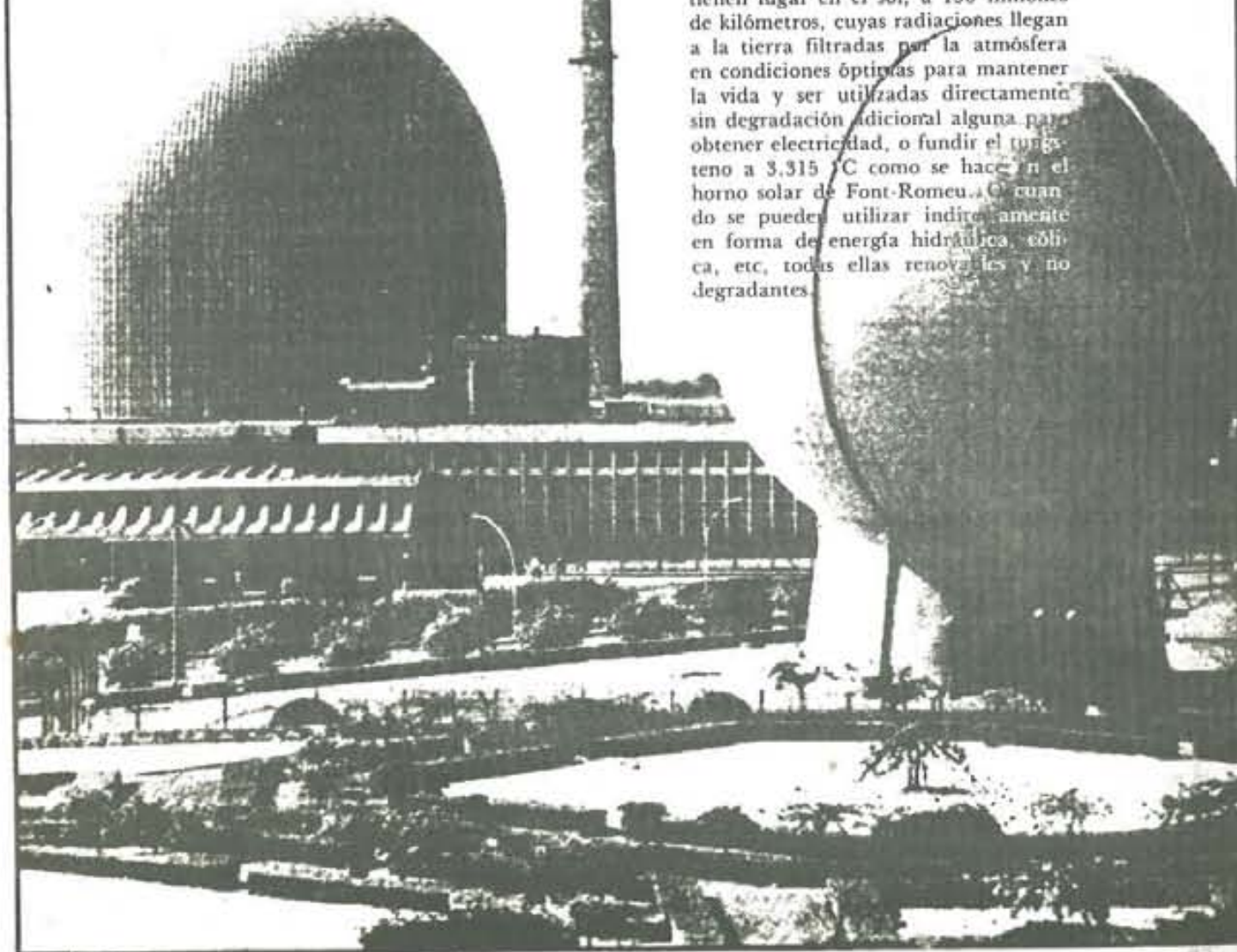
Colectivo Bici Barcelona



La estafa nuclear y sus propagandistas

GENARO CAMPOS

Las reacciones nucleares se extienden en el sol o en las estrellas de lejanas galaxias, pero en esos sitios es imposible que exista el más mínimo resquicio de vida. Así, resulta chocante que, con el pretexto de expandir actividades que se dicen al servicio de la vida humana, se pretendan generalizar en nuestro planeta fenómenos que están reñidos con ella. No debe, pues, sorprender que las reacciones nucleares debutaran en la Tierra como fruto de experiencias bélicas con fines meramente destructivos y que el empeño de «domesticarlas» bajo la cúpula de los reactores no pueda evitar que entrañen una superdestrucción termodinámica y ambiental. Su uso generalizado para hervir agua, impulsar una turbina y obtener electricidad supone una desproporción de tal calibre entre el fin perseguido y los medios propuestos como es — al decir de Commoner (1) — el matar moscas a cañonazos: las moscas al final mueren, pero la destrucción originada desaconseja el procedimiento. Sobre todo cuando apenas utilizamos la energía de esas otras reacciones nucleares que tienen lugar en el sol, a 150 millones de kilómetros, cuyas radiaciones llegan a la tierra filtradas por la atmósfera en condiciones óptimas para mantener la vida y ser utilizadas directamente sin degradación adicional alguna para obtener electricidad, o fundir el tungsteno a 3.315 °C como se hace en el horno solar de Font-Romeu. Cuando se pueden utilizar indirectamente en forma de energía hidráulica, eólica, etc., todas ellas renovables y no degradantes.



A pesar de la insistencia con que se ha presentado la energía nuclear como solución a la «crisis energética», cabe advertir que las instalaciones nucleares al uso no suponen una solución técnicamente acertada a los dos problemas básicos de la actual encrucijada energética: el de las reservas limitadas y el de la degradación del medio. Las reservas accesibles de uranio son escasas. No hay ninguna estadística seria que no muestre con claridad el hecho contundente de que las exigencias de uranio de los reactores proyectados en los distintos países conduciría antes de fin de siglo a una grave escasez de este mineral (2). Así, la viabilidad de las centrales en construcción aparece ya empañada por la crisis del uranio que presagia la escalada de precios observada desde 1973 (recordemos que las reservas con que cuenta nuestro país apenas llegarían a cubrir el 30% de las necesidades de los reactores autorizados).

Pero el más importante factor de oposición a las instalaciones nucleares procede de su impacto sobre la degradación del medio ambiente y de la especie humana. No podemos más que apuntar el hecho ya divulgado de que las centrales nucleares, además de la polución térmica y radiactiva que resulta de su funcionamiento «normal» —que ya de por sí incide negativamente sobre la biosfera y la salud humana— ofrecen riesgos importantes de catástrofes nucleares y problemas irresolubles sobre la seguridad del transporte del combustible nuclear y, en especial, sobre el almacenamiento de los residuos radiactivos. Con la peculiaridad de que la larga vida de algunos de los componentes radiactivos hacen que sus consecuencias sobre el medio ambiente adquieran un grado de irreversibilidad muy superior a las que se desprenden del uso de los combustibles fósiles. Hecho que se hace más relevante dada su probada incidencia sobre las mutaciones genéticas, que podría romper el ya frágil equilibrio genético sobre el que se asienta la especie humana, originando un proceso de regresión.

Tras los accidentes acaecidos en Estados Unidos se han acentuado las reservas de la población y de los expertos hacia este tipo de instalaciones. Incluso en círculos empresariales USA se ha reconocido expresamente que la obtención de electricidad a partir de centrales nucleares ha dejado de ser rentable habida cuenta la escalada de costes y las perspectivas de escasez del uranio (3). Y ello a pesar del apoyo estatal y del cálculo sesgado que minimiza los costes de las centrales a sufragar por las empresas. Este rechazo acrecentado de la energía nuclear ha llevado a establecer en los

Estados Unidos una moratoria de tres años a la construcción de nuevas centrales para estudiar a fondo las implicaciones y riesgos de esta tecnología y revisar las condiciones de seguridad de las que están en funcionamiento, lo que ha implicado ya el cierre de varias de ellas. Tales decisiones, tomadas en ese país pionero de la energía nuclear, parecen argumento sobrado para contemplar en el nuestro el tema nuclear con moderación y propugnar, al menos, una moratoria que alcance a ver cómo se resuelve el tema en los Estados Unidos. Pues al fin y al cabo es la tecnología USA la que guía la casi totalidad del programa nuclear español.

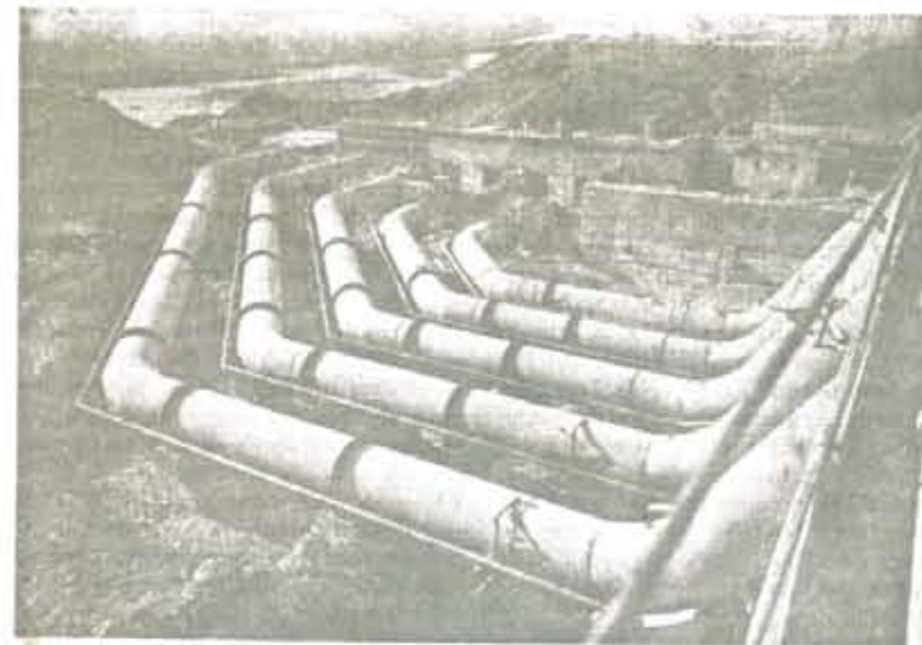
Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo en nuestro país a una ofensiva nuclear sin precedentes tanto en los medios de difusión como en el Ministerio de Industria. ¿Es que se les ha alterado el juicio a esos periodistas «científicos» a esos personajes políticos que desde sus cargos oficiales siguen expandiendo en estas condiciones tan dudosas la buena nueva nuclear aun a costa de hacer el ridículo? ¿Cómo se atreve un ministro de Industria a ser más papista que el papa ensalzando las calidades técnicas y las condiciones de seguridad de las centrales españolas frente a las de Estados Unidos con tal de salvar el programa nuclear español? ¿Es que no sabe que tal comparación no puede menos que arrancar una sonrisa a quien conozca mínimamente la calidad de la infraestructura técnica, de los equipos humanos, de los controles de fabricación de ambos países, o que sepa que el nuestro ni siquiera cuenta con una normativa propia respecto al «nivel de seguridad deseado»? ¿Cómo es posible que el comisario de la Energía haga caso omiso de tales acontecimientos y prosiga, inasequible al desaliento, su ya larga campaña pronuclear ni siquiera perturbada por los cambios de ministros? ¿O cómo puede ofrecerse el panorama insólito de una directora general de Medio Ambiente que es ferviente defensora de las centrales nucleares? No. No es una extraña obcecación la que hace homogéneo el comportamiento de esos personajes, sino su espíritu fiel de servicio a la poderosa comunidad de intereses ligada al negocio de la construcción del programa nuclear.

Los empresarios españoles no son tan osados como el ministro de Industria y su cohorte de propagandistas. Cuando los empresarios americanos dicen que no es negocio la explotación de las centrales nucleares, sus colegas españoles ya habían tomado posiciones al respecto: ante las escasas perspectivas de rentabilidad que brinda la explotación de las centrales nucleares



programadas, que agrava la crisis de capital del sector eléctrico, los grupos financieros ligados a los grandes bancos se han desprendido ya, casi por completo, de los cuantiosos paquetes de acciones de compañías eléctricas que antes poseían, manteniendo, sin embargo, su control con vistas a manejar ese billón largo de pesetas que se movilizaría en la construcción de las centrales contempladas en el Plan energético.

En este negocio participan los holding bancarios españoles —con sus empresas de ingeniería, proyectos, construcción y suministros de equipo— en buena convivencia y estrecha vinculación con empresas extranjeras deseosas de vender —bien directamente bien a través de sus filiales españolas— una tecnología y unos equipos que ya no tienen mercado en los Estados Unidos. La estrategia de esta comunidad de intereses es clara (4): sacar el mayor lucro posible de la construcción de las centrales nucleares, prolongándola al máximo e inflando los presupuestos, aunque ello comprometa la rentabilidad futura de su explotación. Ya se encargará luego el Estado de «nacionalizar las pérdidas de las compañías eléctricas que tengan que amortizar tan desmesuradas inversiones». La nube de pequeños accio-



nistas de las eléctricas —víctima propiciatoria de este proceder— constituirá un buen escudo a la hora de pedir al Estado que pague los platos rotos del enorme negocio de la construcción. La comunidad de intereses dominante en este proceso ya habrá acumulado millones suficientes como para despreocuparse del problemático funcionamiento y explotación de las centrales o de la previsible escasez de uranio. Ante la incertidumbre del futuro, ante los riesgos irreversibles que su opción comporta, su actuación se ha guiado por el refrán «realista»

de «más vale pájaro en mano que ciento volando».

Los grupos interesados en este negocio tienen prisa y cuando ven que flaquea la fe de la gente en el «progreso» nuclear que proponen, intentan apuntalarla con dinero y recurren a campañas de imagen para crear una opinión favorable a las centrales nucleares, campañas que no se centran en un montaje típicamente publicitario, sino que su fuerza se basa en ocultar que tales campañas existen, disfrazándolas bajo el ropaje de la divulgación científica y el debate «libre», cogiendo así desprevenidos a los receptores. En estas lides es pionero el «Plan de acciones para una campaña de promoción de imagen de las centrales nucleares en España», elaborada por la consultora AGEUROP en diciembre de 1975. Pues bien, este plan se ha ido cumpliendo paso a paso y las líneas de acción no han unido esencialmente desde entonces. Se ha editado con todo lujo de medios los folletos divulgadores que en él se preveían; se han convocado los concursos infantiles en las zonas próximas al emplazamiento de las centrales; se han organizado los ciclos de conferencias y las mesas redondas buscando la participación de conocidos «humanistas», publicistas o técnicos... y se han manipulado los medios de difusión a través del plantel de «periodistas colaboradores», pagando artículos de firma, editoriales, etc., favorables a la energía nuclear. ¿Dónde está la línea divisoria de estas campañas entre los «cruzados» voluntarios y aquellos otros mercenarios? No lo sabemos. Si Julián Marías, Díaz Plaja, Miguel Boyer o Ignacio Sotelo, pongamos por caso, han trabajado gratis sólo cabe recordarles que podían haber pasado factura. Quizá sepan algo de esto propagandistas nucleares más ajenos del campo del

periodismo como un Sancho Rof, un Martín Ferrand o un Calvo Hernando. Asimismo, se ha mantenido como se preveía en este plan la estrecha colaboración entre las empresas de imagen y los organismos oficiales, sólo ha faltado ese «libro blanco» de la energía nuclear en el que ésta se ofreciera con el sello oficial, pero el Plan Energético ha cubierto con creces esta laguna. Pues ¿qué es el Plan Energético sino ese libro blanco? Prueba de ello son los malabarismos que se han tenido que hacer para recortar las previsiones de oferta energética a partir de las fuentes convencionales, y hacer un hueco al programa nuclear (5). Estas cifras trucadas dan así apoyo oficial a la falsa «urgencia» del programa nuclear esgrimida por sus propagandistas. De ahí que, no estando la razón de su parte tengan que recurrir a esas «plumas mercenarias» que —al decir de Machado— trabajan «para el servicio de causas tanto más lucrativas como menos recomendables» y tratan de presentar sus torcidos argumentos bajo envolturas supuestamente científicas atreviéndose a calificar de anticientíficos a quienes nos oponemos a este vergonzoso estado de cosas. Anticientíficos son aquellos que por intereses mezquinos no dudan en modificar los procesos de la vida sin importarles las consecuencias imprevisibles e incalculables de sus acciones.

Pero estas modificaciones no sólo se refieren a cuestiones de tan gran importancia como las que puedan afectar a los procesos de la vida, sino que se realizan mediante chapuzas increíbles como puede ser en estos momentos la revisión del Plan Energético Nacional, dos años después de su puesta en marcha tras la aprobación en el Congreso de los Diputados.

Todas las críticas que en su día se plantearon sobre la poca importancia que se le daba al potencial hidroeléctrico de pequeñas centrales, que no entraban dentro de los planes de expansión de las grandes compañías eléctricas porque ello significaba dispersión en lugar de concentración de poder; todo lo referente a la posible construcción de centrales térmicas de carbón en lugar de grupos nucleares, la aportación de las llamadas nuevas energías —que sin embargo son las más viejas y las que antes fueron utilizadas por la humanidad— al consumo final de energía, ha sido aceptado por los responsables del Ministerio de Industria y Energía con motivo de la revisión del PEN... para volver a justificar la necesidad de las nucleares y encima en mayor número.

El ministro de Industria ha reconocido que, a pesar de que las inversiones se están llevando a cabo dentro de los ritmos previstos según él, la ener-

- (1) B. COMMONER, *La escasez de energía*, Plaza y Janés, Barcelona 1977.
- (2) Cfr. *Nuclear Fuel Cycle Requirements*, OCDE, París, 1978; B. COMMONER, *Op. Cit.*; o declaraciones del propio director general de la Energía («La voz de Asturias», 3-XI-1978).
- (3) D. YERGUIN and R. STOBACH, *Energy Future*, Harvard Business School, Random House, 1979.
- (4) Esta cuestión se encuentra ampliamente documentada en Juan MUÑOZ y Ángel SERRANO, «El negocio de la construcción de las centrales nucleares», *Energía, política, información*, Cuadernos de Ruedo Ibérico, 63/66, mayo-diciembre 1979.
- (5) Se escamotea la Central Térmica de Anllares (350 MW) ya en funcionamiento, se contabiliza como potencia instalada, pero no como producción el grupo 2 de la térmica de Puentes creando otro hueco de 650 MW, a las térmicas de carbón proyectadas se les atribuye sólo una utilización de 4.500 h/año, cuando un año hidrológico medio ésta supera normalmente las 5.500, creándose otro hueco de unos 1.000 MW; para fijar la demanda de energía se tiene en cuenta la «España extrapeninsular» mientras que en la oferta no se incluyen las térmicas ubicadas en las islas, creándose otro hueco de cerca de 1.000 MW; a las térmicas de fuel se les atribuye una utilización media de 2.300 h/año cuando ésta varía siendo en año hidrológico medio de 4.400 h/año creándose un hueco de 3.700 MW; tampoco se contemplan los 15.659 MW de potencia que supondría el uso de los 259 embalses construidos sin central pero con proyecto que estima el M.º de O. P., ni otras posibilidades hidroeléctricas y de ahorro, que superan fácilmente la potencia nuclear prevista en el Plan Energético (10.500 MW) ocultando que el horizonte de demanda previsto en ese Plan podría cubrirse sin problemas mediante fuentes convencionales. (Véase S. M. ARANCIBIA, «Los engaños del Plan Energético Nacional», *energía, política, información*, Cuadernos de Ruedo Ibérico, 63/66, mayo-diciembre, 1979.)

gía nuclear ocupará un lugar menor del previsto en el reparto del consumo de energía primaria en 1985. Según la versión aprobada del PEN, lo nuclear debería suministrar el 13'2% del total; en realidad, y con mucha suerte, representará el 10'7%. El por qué de esto se encuentra en los plazos cada vez mayores de construcción de las centrales nucleares, ante la cadena de accidentes acaecidos en numerosas centrales norteamericanas y japonesas, lo que encarece el producto final de forma importante. Los presupuestos de construcción se desbordan continuamente y lo normal es que los costes finales sean entre un 60 y un 120% superiores a lo previsto. Así por mucho que se cumplan las inversiones se seguirán retrasando los finales de obra con lo cual las empresas constructoras dependientes de los grandes grupos seguirán incrementando sus beneficios.

Y que ello empiece a ser una preocupación grave para las empresas eléctricas, de cara a su rentabilidad posterior, se observa en el hecho de que el Estado está empezando a tomar participación en diversos proyectos de construcción de nucleares: Sayago, Trillo y Vandellós son los grupos en los que el INI, a través de sus empresas eléctricas ha empezado a entrar en el negocio nuclear.

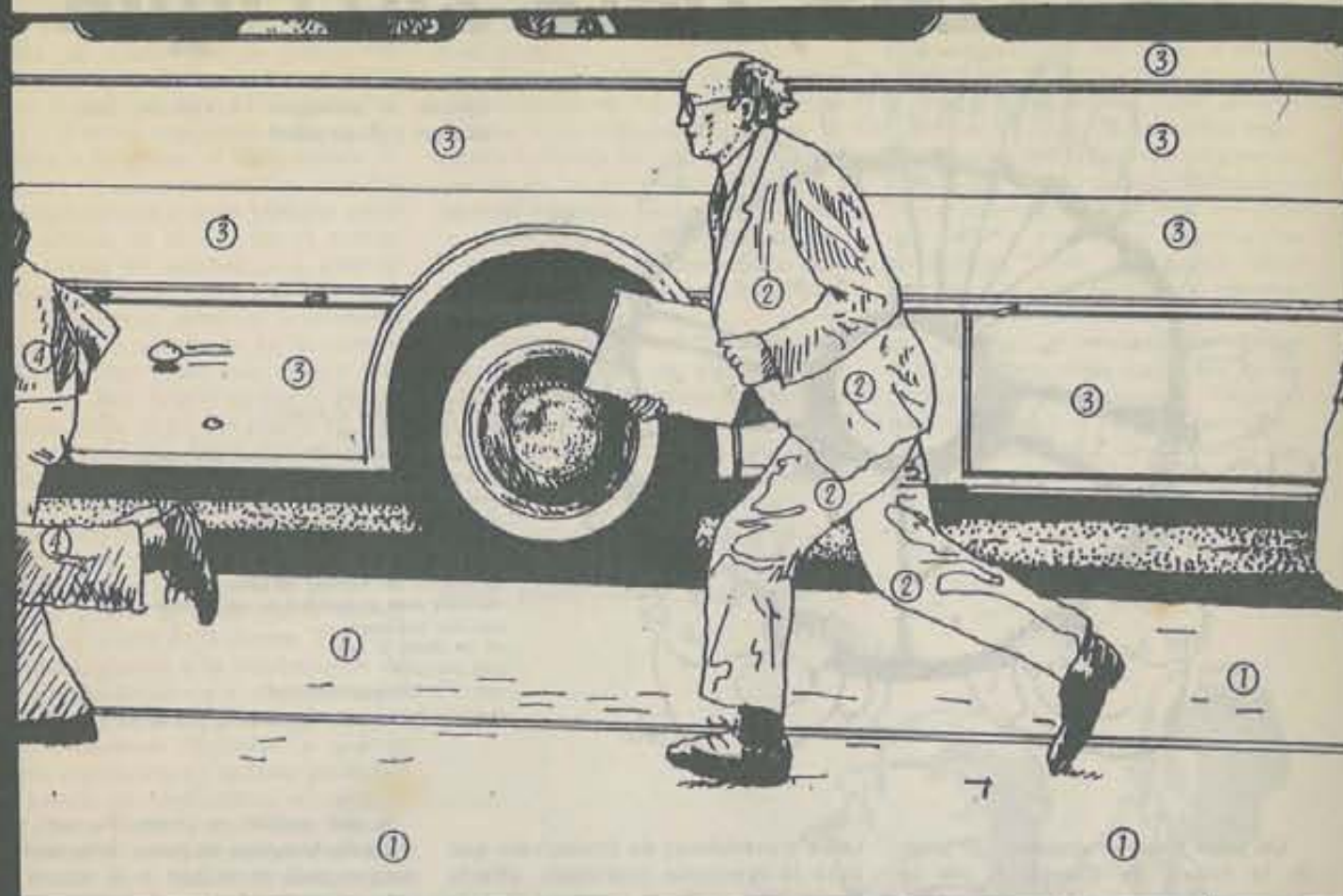
El ministro de Industria, con una

caradura que espanta, al aceptar el retraso de construcción de los grupos autorizados, afirma sin embargo al mismo tiempo que es necesario acelerar el proceso para que la economía española no se quede descolgada. Lo basa en que el crecimiento del consumo de energía seguirá creciendo de forma importante, por encima de lo que lo haga el PIB, en los próximos diez años, para así intentar justificar lo nuclear una vez más. Y esto es mentira o al menos debería serlo. Por un lado porque nadie tiene claro que, en estas circunstancias se pueda asegurar crecimientos económicos del 4% cuando la situación no da para más de un 1% o como mucho de un 2%. Muy bien tendrían que ponerse las cosas para que esto ocurriera y nada indica que vaya a ocurrir una especie de milagro.

Por otro lado, y esto es lo más grave, significa que siguen sin hacer ningún caso a la necesidad de llevar a cabo programas de ahorro de energía reales que apenas si tienen costes y que sin embargo redundan en ahorros significativos en el consumo de energía. Se quiere seguir despilfarrando para justificar de nuevo la necesidad de «nucleares o velas», como dicen los propagandistas oficiales u oficineros. El Centro de Estudios de la Energía, del que es presidente Luis Magaña, que a

su vez es Comisario de la Energía y Recursos Minerales y uno de los más acérrimos defensores de la energía nuclear, acaba de publicar en su Memoria correspondiente a 1980 los resultados de una encuesta sobre las industrias que en conjunto consumen el 84% del consumo final directo de la industria. Según estos resultados se podría llegar a ahorrar entre el 12 y el 15% del consumo final. Textualmente la Memoria dice: «Estas inversiones son muy rentables. En efecto, los resultados indican que se pueden lograr ahorros del orden de 2.500.000 tep, con inversiones que se recuperan en 2'5 años, como media, a nivel nacional». En estas condiciones está claro que mantener la construcción de grupos nucleares, mucho más caros, con grandes posibilidades de que no sean rentables a nivel económico, y con unos problemas de polución y contaminación claros, sólo puede deberse a que el negocio de los mismos se encuentra en otro lado y que, por tanto, como siempre, quienes tienen parte del poder económico pasan por completo de las posibles implicaciones sociales que sus decisiones puedan contener. La obtención del máximo beneficio en el más corto espacio de tiempo posible sigue siendo la máxima fundamental de este tipo de actuación. ■

PARA COLOREAR: 1-gris pálido, 2-azul marino, 3-beige, 4-verde botella



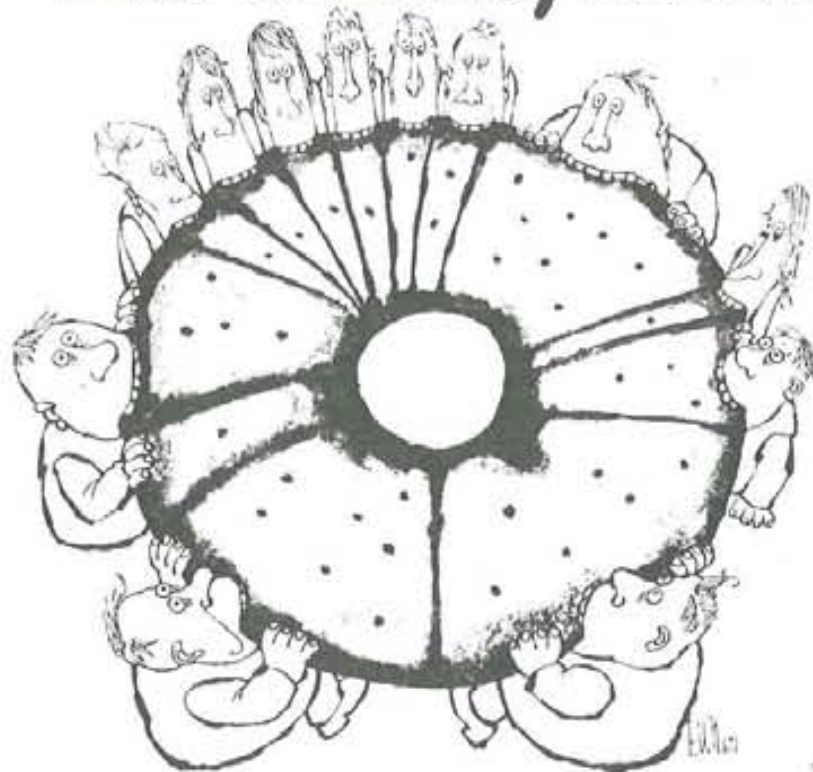
Como dicen Baigorri y Gaviria a menudo, la crisis como quien dice no ha empezado todavía. Si los que más mandan en el mundo (las compañías petrolíferas, el ejército norteamericano) no logran impedirlo, el día que se arme un lío gordo en Arabia Saudita, en Abu-Dahbi, en Kuwait, vamos a notar la crisis de verdad, porque el «desarrollo de las fuerzas productivas» del mundo occidental ha dependido y depende aun de la expoliación y de la destrucción de petróleo.

Ante la crisis (de la cual ya se percatan incluso los economistas, como José Luis Sampedro, extraño caso de asesor bancario, catedrático, senador real y anarquista poco practicante, a quien agradecemos su colaboración en las páginas poco respetables de BICICLETA), ¿cuál ha sido la actitud de los supuestos dirigentes obreros? Se han portado, realmente, como unos «mandados», haciendo pactos sociales con la excusa mentirosa de que así se saldría de la crisis.

Con lo que se podría producir en el mundo, respetuosamente con la naturaleza, hay para que todo el mundo trabaje y para que todo el mundo tenga lo que necesita razonablemente. «Trabajar todos y trabajar menos». «Austeridad sólo para los ricos». Ésas son las soluciones para la crisis.

LOS CUENTOS DE LA CRISIS

La crisis, fieras zurrupia



(donde se prosigue el cuento, con sucesos y desgracias)

«Sois viejo — dijo el joven — como antes observé, y habéis engordado de manera descomunal. Pero al cruzar el umbral ¡Dísteis una voltereta hacia atrás...! Os ruego que me respondáis: ¿cómo explicáis el portento?»
«En mi juventud — replicó el anciano sacudiendo sus blancos cabellos — mantuve bien la agilidad de mis miembros con este ungüento.
¡A un chelín la caja!
¿Me permitís que os venda unas cuantas?»
(LEWIS CARROLL: Alicia en el país de las maravillas)

Un poco como se quedaría el joven de la fábula de Carroll al oír la contestación del abuelo (atónito, boquiabierto y cariacontecido) se habrán quedado algunos al conocer los resul-

tados y previsiones de crecimiento que para la economía «nacional» ofrecía García Díez el día de la onomástica de los obreros, y que se reproducen el el cuadro siguiente:

	1980	1981	1982
Crecimiento económico (%).....	1'7	2'0	3'0
Incremento IPC (%).....	15'1	15'0	15'0
Crecimiento disponibilidad líquida (%).....	16-17	17	17-18

(«El País» 1-V-81)

Creía yo, porque así lo decían que andábamos atravesando una grave crisis económica. ¿No nos amenazaba el crecimiento cero tal que si de una gigantesca bola de nieve se tratara? ¿No había que tener moderación porque el horno no estaba para bollos? ¿No había que apretarse la cincha, haciéndole si fuera preciso nuevos agujeros a tiros de pistola de Tejero? Hace tan sólo un año los augurios no podían ser más negros, no sólo a nivel peninsular sino asimismo a nivel planetario. Hasta se hizo preciso que los

samarugos del Imperio votasen por Reagan («Once upon a time you dressed so fine, / you threw the bums a dime in your prime, / Didn't you?», Dylan dixit).

Hoy, sin embargo, los cantos alegres inundan a todos por igual. Nubes de colores surcan nuevamente los cielos del capitalismo. Véase si no el siguiente cuadro de resultados y previsiones de crecimiento del PNB que ha elaborado el inefable FMI (Frente Monetario del Imperio):

VARIACIÓN INTERANUAL										
PNB real	1962-72	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Todos los países										
industriales	4'7	6'2	0'3	-0'6	5'3	3'8	4'0	3'4	1'1	1'2
Los siete países principales ..	4'7	6'3	-0'2	-0'7	5'6	4'2	4'3	3'5	1'0	1'2
Países exp. petróleo	9'0	10'7	8'0	-0'3	12'1	6'3	2'6	2'5	0'3	3'0
Países III Mundo no petrol.	5'8	6'6	5'7	4'3	5'8	5'1	5'4	4'8	4'8	5'1

(Fuente: FMI, citado en Papeles de economía española, núm. 6, pág. 37)

Si este cuadro es cierto (lo cual en el fondo tampoco importa demasiado, porque todo es verdad y es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira), resultaría que 1980 ha sido el punto de inflexión de esta pretendida crisis y que, sin tener que llegar al temido crecimiento cero (que ya se dio por cierto en muchos países en 1975-76 a raíz del imprevisible aumento del precio de los crudos en 1973), a partir del presente año vuelven, aunque con gran moderación, nuevos días de vino y rosas. «Nuestros empresarios se encuentran más optimistas respecto al porvenir: por ejemplo, las previsiones de la cartera de pedidos de bienes de consumo han venido aumentando sustancialmente en los últimos ocho o diez meses, y la misma situación actual de la cartera total de la industria se está recuperando después de la breve caída del verano» (Grupo de Estudios Estructura, en «Perspectivas y Mercado» núm. 22 —segunda quincena de mayo—, pág. 112).

Sin embargo, algo está ocurriendo para que los sacerdotes del capital en todas sus variantes se alegren sobremanera ante previsiones tan ridículas como las que se observan más arriba. Quiere decirse: los períodos de crisis suelen resolverse en el capitalismo con apoteósicos y explosivos despegues de la producción y el PNB. ¿Qué ocurre para que sea considerado como un «despeque» el paso de un crecimiento

del 1'1 al 1'2, como en el caso de la totalidad de países industriales, o, en el caso español, del 1'7 al 2%? Pues es muy posible que ocurra más o menos como al abuelo de la fábula de Carroll. El capitalismo mantuvo de joven la agilidad de sus miembros gracias a diversos ungüentos como la democracia burguesa, el sindicalismo reformista y economicista, los partidos correspondientes y otras pildoras como el fascismo, de forma que el cuerpo del sistema ha «aprendido» a generar defensas e instrumentos que le permiten dar saltitos, cabriolas y volteretas como las del abuelo en los momentos más delicados y por más viejo y fofo que esté. Pero lo que no dice la fábula es que, viejo al fin, el abuelo la acabará cascando un día u otro por otras razones. Principalmente porque el exceso de ejercicio le ha hecho agotar otros recursos y reservas internas, y un día en plena cabriola le faltará el aire, o fuerza en el corazón, o le fallará la vista y al caer se dará con la cabeza contra el marco de la puerta. En otras palabras, gracias a la colaboración de las fuerzas sociales y a otros mecanismos el capital ha logrado superar ese breve momento depresivo a que le había conducido un aparato productivo basado en combustibles semigratuitos y otras jaujas, adaptándose bastante bien a la nueva situación. Pero esto no puede durar indefinidamente: ninguna persona, animal, vegetal, organismo u organización social tiene la virtud de la inmortalidad. El capitalismo está viejo y chocheado. Y como el abuelo de la fábula necesita de vez en cuando dar cabriolas como la que ahora inicia, para demostrar que sigue siendo «útil» a las clases dominantes como sistema de relaciones económicas y sociales.

La nueva cabriola, a la que alguna otra vez hemos llamado «el último empujón» (ver nuestra aproximación a este mismo tema en «Transición», núm. 25, pág. 18), muy bien podría estar caracterizada por todos o algunos de los siguientes elementos, entre otros posibles:

- Nuevos sectores punta como «caballo de arrastre» de la economía, principalmente Alimentación, Energía, Informática y Electrónica de precisión.
- Tercerización del proceso productivo.
- Ahorro energético.
- Máximo autocontrol de la clase obrera, permanentemente amenazada por el fantasma de la crisis y la escasez.
- Nuevo desarrollo del consumismo y la sociedad del ocio en los países centrales, pero generando entre los consumidores mediante mecanismos de control sutiles la mala conciencia por

consumir en exceso en un mundo de recursos escasos. Esa mala conciencia convertirá al consumidor en cómplice de su Estado imperialista y de su clase dominante.

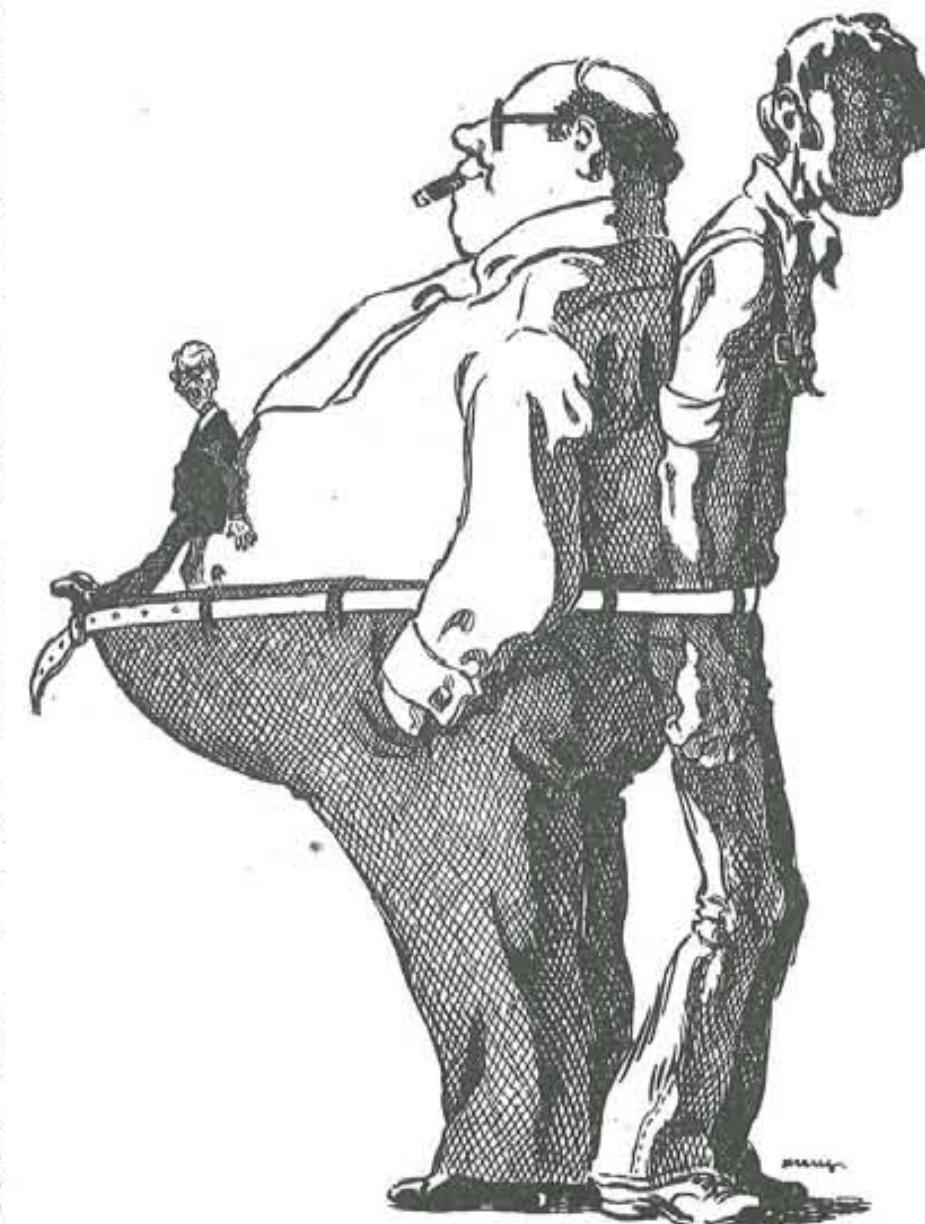
— Profundización de la obsolescencia industrial en los países subimperialistas y tercermundistas. Se les seguirán enviando las pocas plantas que quedan en las metrópolis dedicadas a fabricar cemento, coches, barcos, acero, plástico, productos químicos, etc.

— Aumento de la intervención estatal en la economía a través del proceso productivo.

— Ralentización del ritmo de producción. Tan sólo en algunos países subimperialistas o tercermundistas podrá sobrepasarse en alguna ocasión el 5% de crecimiento anual del PNB. Probablemente la cosa flote entre el 0 y el 3%.

Creemos que ahí va a estar el quid de la cuestión. Sinceramente, ¿quién puede pensar que el capitalismo se

puede mantener al ralentí? Si la producción no crece por lo menos al mismo ritmo que la población el paro crece más rápidamente que el relevo generacional, aún sin crisis, y disminuye la tasa de ganancia al aumentar la composición de la clase obrera, tanto por el simple crecimiento vegetativo como por el proceso de concentración del capital (que continuamente arroja a engrosar las filas del proletariado a pequeños empresarios arruinados). Todo ello quiere decir que sólo hay dos vías para el sistema: o un nuevo crecimiento exponencial, que aceleraría el momento de llegada de la verdadera crisis (esto es la de recursos naturales, energía, oxígeno respirable, etc.); o bien un recrudecimiento de la lucha de clases en las distintas naciones (que hará lógica-



mente aumentar la tiranía de las clases dominantes, salvo que los partidos obreros accedan, como lo están haciendo hoy por hoy, a asumir por cuenta propia el control de los trabajadores) sumado a un aumento de las contiendas internacionales de tipo imperialista por el control de recursos más que de mercados. Evidentemente, ambas vías conducen a la catástrofe. Pero, atención, «la catástrofe», que indiscutiblemente supondrá el final del capitalismo como sistema de relaciones de producción, intercambio y organización social, no tiene por qué acarrear forzosamente el advenimiento del socialismo feliz, aunque también es cierto que sí que podemos hacer que entonces llegue el socialismo, aunque mejor si lo hacemos antes de la catástrofe.

Quiere decirse, con perdón, que por mucha alegría primaveral que ahora embargue a los brujos del sistema, el fantasma de la crisis no va a desaparecer. Antes al contrario, la crisis va a estar ya siempre presente, a modo de coitus interruptus que diría Mario, amenazando permanentemente a los trabajadores a través de los medios de comunicación y a través de sus propias organizaciones, partidos y sindicatos, maleándolos, doblegándolos, dándoles por el culo.

Final o corolario sobre la vía al subdesarrollo en este país

«... El alcalde.—Amos a sentanos en el banco que nos regaló el ingeniero.

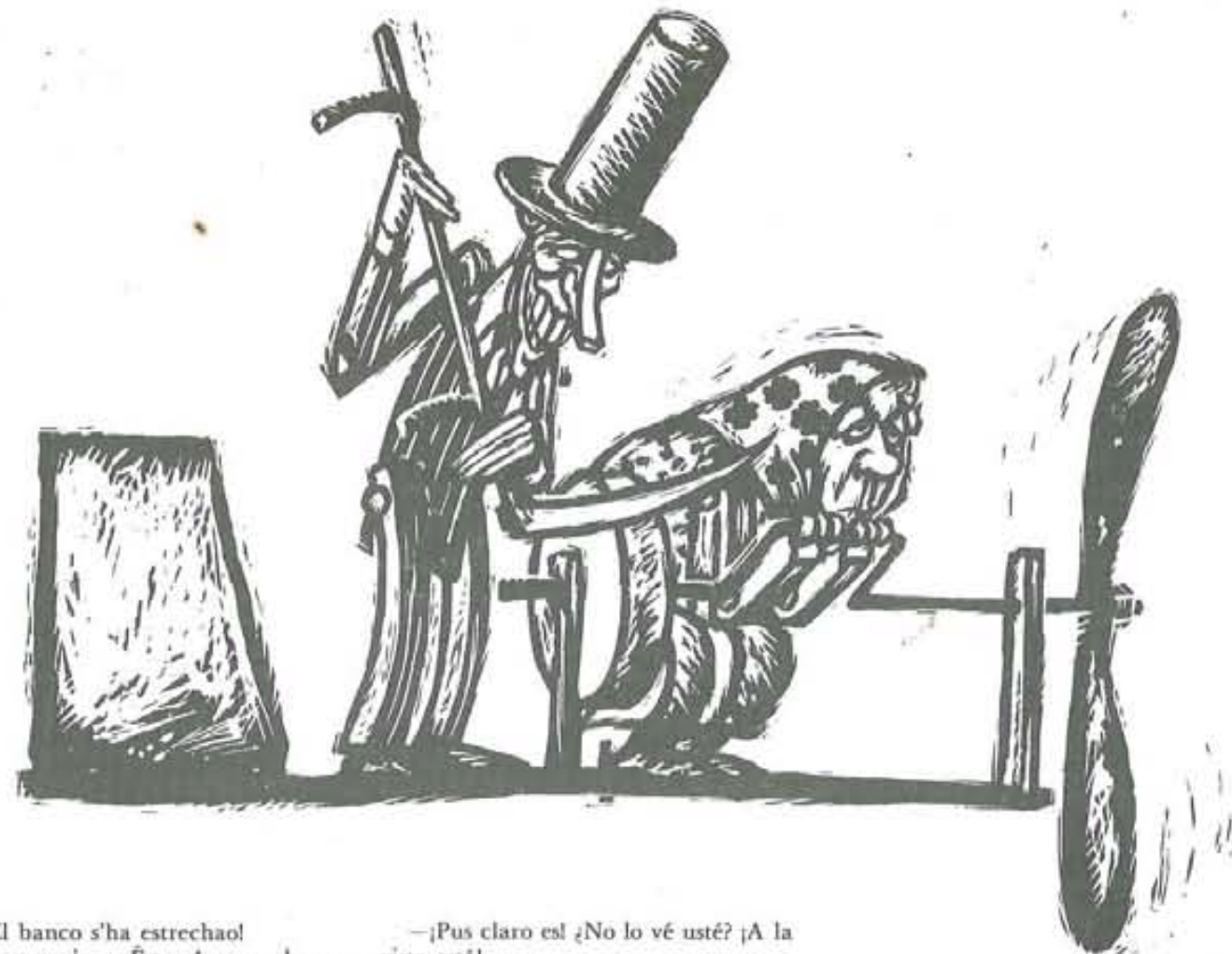
—¿El judío?

—¿Ya lo sabís? —Tóo el pueblo lo ice, que nos ha salido judío.

—¿Tendrá cola?

—Sentase, señores.

Se sientan en un gran banco de piedra que hay en la plaza frente a la iglesia. No caben más que diez. Un concejal dice:



—¡El banco s'ha estrechao!

El secretario.—¡Esta sí que chana-da! ¡Si no quepemos!

—¡Pus siempre himos cupidol!

El alcalde.—Señores, esto es cosa nueva. Aquí nos sentamos algunas veces hasta catorce amigos y ahora semos doce y no entramos. ¿Qué es esto?

Que el banco se ha estrechao!

—Será piedra mala.

—Que con el calor se habrá reme-tido.

—Ná, ¡que se ha estrechao!

—Pus hay que alargalo.

El alcalde.—¡A ver! Quitase las capas, y si es menester las chaquetas, y tirar cinco de un lao y cinco de otro.

Se quitan las chaquetas, y con grandes esfuerzos tiran de cada extremo del banco cinco concejales.

El alcalde.—¡Tirar, tirar más!

Llega el ingeniero.

—¿Qué hacen ustedes?

—¡Vaya un banco que nos ha dao usté!

—De piedra magnífica, de las canteras de la Compañía.

—Pus se encoge.

—¡Hombre, no diga usté tonterías!

—¡Ya cederá, yal!

Un concejal.—Tirar fuerte. ¡Aaaaaa!

—Me paice que ha cedido una mija.

El alcalde.—Amos a velo; sentase otra vez.

Se sientan los doce holgadamente.

El ingeniero.—¿De modo que ustedes lo han alargado?

—¡Pus claro es! ¿No lo vé usté? ¡A la vista está!

—Pero y ustedes... ¿no ven que antes se sentaron con las capas puestas y ahora sin ellas? ¡Cómo va a tener nadie fuerza para estirar la piedra?

El alcalde.—¿Que no tenemos fuerzas?

El secretario.—¿Que no tenemos fuerzas? ¡Al río vas a ir!

—¡Ehl! ¡Alto!

Todos.—¡Al río, al río! ¡Enemigo de Dios!

(EUSEBIO BLASCO: «El banco de la plaza», en *Cuentos aragoneses*.)

Yo no sé si se le ve la relación al cuento con la economía «nacional». El que no se la vea al menos se habrá reído, que es a lo máximo que podemos aspirar con Cabeza de Buque: a reírnos de nosotros mismos. Pero en cualquier caso aquí pasa como con el banco de la plaza: que «la cosa» no llega porque vamos demasiado cargados.

Una breve nota final para entendernos, porque el espacio aprieta pero ahoga, el tiempo se echa encima y otros quehaceres aguardan. En una reciente encuesta realizada por la revista «ceoe» *Nueva Empresa* (num. 121, 15 al 25 de mayo, pág. 43) a un grupo bastante extenso de altos ejecutivos del capitalismo español sobre hipotéticas inversiones ideales cara al futuro, éstos afirman que, también aquí, «alimentación, energía e informática se perfilan con todas las de la

ley como los sectores punta dentro de la actividad industrial». De querer hacer inversiones, y según el resultado de la encuesta, el 75% de las mismas habrían de ir a esos sectores (sin olvidar que cuando hablan de energía excluyen la nuclear). En otras palabras, plantean seguir la vía de los países avanzados.

Sin embargo, el Poder económico está planteando como «nuevos» sectores punta reales la siderurgia (cuyo plan de reestructuración va a costar 144.000 millones y 5.800 jubilados forzosos), la construcción naval (que también será reestructurada prontamente), el cemento, el automóvil, el refinado de crudos y la petroquímica. O sea, los mismos sectores que han «empujado» nuestra economía desde 1960. O sea, los mismos sectores que nos están arruinando recursos, tiempo y fuerza de trabajo. O sea, los mismos sectores que van a constituir en el próximo futuro la base industrial de los países en vías de desarrollo. Y todo ello apoyado por la clase obrera a través de sus representantes. Para este viaje no hacían falta alforjas. ■

ARTEMIO J. BAIGORRI, (Mallén, 29 de mayo de 1981, bajo un cielo azul, manchado de blancas nubes y negros «Phantoms».)

SINDICATO Y PODER

ANDRÉS



El papel y el poder de los sindicatos ha variado a través de su historia, en relación con las características políticas y económicas de las sociedades en las que se han desarrollado.

Sin renegar de su origen como organización para la defensa de los intereses de los trabajadores contra las condiciones de explotación del capital, la mayoría de los sindicatos existentes no han trascendido de su función de defensa contra el capital a instrumentos para la destrucción del asalariado

EL EUROCORPORATISMO

Para un debate sobre la instauración de un nuevo corporatismo en el Estado español el momento no puede ser más favorable. Corporatismo quiere decir, desde hace muchos años, conciliación de clases y negociación en la cumbre del reparto que a cada grupo le toca en la producción. Corporatismo es lo contrario de negociación directa y de aspiración a la igualdad. Corporatismo es «política de rentas», es decir, control de salarios para mantener los niveles de beneficio, la «retribución del capital», que es lo mismo que la «retribución de los capitalistas». Corporatismo es, como decían los teóricos de esa doctrina de principios de siglo, suprimir o dificultar la lucha de clases mediante la estructuración social en organizaciones sindicales y patronales que lleguen a acuerdos bajo los auspicios del Estado, aunque sin la imposición del Estado. Corporatismo es dar por liquidado el sindicalismo revolucionario que se pone por meta la igualdad y la abolición de la clase capitalista.

El momento es especialmente oportuno porque se está consiguiendo en España lo que Franco decía que quería hacer, la concordia

entre las clases sociales. Tras el pacto del 5 de junio (disfrazado esta vez bajo el nombre de acuerdo sobre el empleo) que por primera vez determina una disminución de los salarios reales (ya que los salarios en dinero subirán menos que el coste de la vida), que también por primera vez faculta a las empresas para descontar directamente la cuota sindical y que concede a los sindicatos pactistas una gran cantidad de dinero procedente del Estado, las tendencias corporatistas han dado un gran salto adelante. Eso se ve muy claro en la manera en que se prevén los aumentos de salarios en dinero: proporcionalmente, de manera que cada grupo conserve y mejore la posición que tiene con respecto a los que están por debajo, aun si la posición general de los asalariados sale perjudicada con el descenso de salarios reales.

La socialdemocracia ha sido, muchas veces en su historia, corporatista. Baste recordar la presencia de Largo Caballero en el régimen de Primo de Rivera. Desde luego, de cuando en cuando ha habido una reacción contraria, como la del propio Largo Caballero después de 1934. Los comunistas hasta hace pocos años

y la participación en la instauración de una nueva sociedad. Por el contrario, han pasado a convertirse en instituciones que detentan una parcela de poder en el campo de las relaciones de producción, y por tanto en la organización del buen funcionamiento de la sociedad fundamental para la estabilidad y reproducción del sistema.

«En España, se requerirá la existencia... de un sindicalismo fuerte, de clase, reivindicativo, que no acepte la integración del obrero en el sistema económico burgués ni admita la colaboración de clases, fundamento primordial de la explotación del hombre por el hombre». (Nicolás Redondo, «Cuadernos para el diálogo», extra XVIII, 1971). Diez años separan esta declaración escrita de Nicolás Redondo, de la firma del ANE (Acuerdo Nacional sobre Empleo): si mucho han variado las declaraciones, desde la salida de la clandestinidad, del secretario general de UGT, es de reconocer que también han variado las condiciones sociales en estos diez años; lo que no está claro es que haya variado a peor. Quizá lo que es bien diferente es la parcela de poder que en el año 71 detentaban los sindicatos clandestinos en relación con la que ahora tienen las centrales sindicales.

El poder sindical

Actualmente el poder de los sindicatos se expresa de dos maneras diferentes.

— Sobre el conjunto de los asalariados. Los sindicatos son los que deciden las actuaciones prioritarias, tales como la forma de encuadrar el movimiento obrero o sus manifestaciones, los objetivos inmediatos de las luchas, la diferencia de presión sobre distintos sectores productivos o sobre diferentes sectores de la burguesía, la relación entre luchas políticas y económicas.

Es evidente que no todas las actuaciones son controlables y encuadrables, especialmente en una situación como la española, con unos sindicatos poco asentados, con una imagen más basada en actitudes de la última etapa del franquismo y principios de la transición que implantación real por los hechos concretos durante la etapa democrática, que ha sido, en la cual, efectivamente, han existido los sindicatos. Pero la falta de apoyo a movilizaciones concretas, la negativa a la extensión y coordinación de luchas parciales, el semiabandono de los pa-

rados, el enfrentamiento contra los que quieren convertir las luchas reivindicativas en críticas políticas y, en definitiva, la sumisión a la ideología dominante, a veces implícita cuando no explícitamente en pactos sociales, como los pactos de la Moncloa, el AMI o el ANE, que además de las concesiones económicas implican concesiones políticas de más largo alcance por cuanto suponen asumir las condiciones de la clase dominante para soportar la crisis, y negar la posibilidad de una alternativa obrera al sistema social, son hechos que progresivamente han influido en la desmovilización y han precipitado la práctica desaparición de experiencias que propiciaban una contestación al sistema de poder, en el ámbito de la organización de la producción.

Excepto el SOC, actual punta de lanza del movimiento obrero revolucionario, y la UCSTE y el SLMM, que sobreviven con mejor o peor fortuna, la desaparición de los sindicatos minoritarios como CSUT, SU, o CNT, la desaparición también de la influencia en sindicatos mayoritarios como el MC en las CC.OO. de Navarra, o la LC y otros grupos troskistas en UGT; han supuesto el afianzamiento del poder de los sindicatos.

se habían mantenido al margen pero se ve claro que el euro-comunismo es, en el fondo, euro-corporatismo. No es accidental que en las críticas de Carrillo a los regímenes del este de Europa nunca se critique la desigualdad económica que en ellos impera.

El pacto social del 5 de junio se está intentando vender como un acuerdo sobre empleo, con el argumento que al bajar los salarios reales y al continuar subiendo la producción por trabajador empleado (pues aunque la producción suba poco el número de empleados desciende), los beneficios de los capitalistas van a dar un gran salto. Eso llevará a más inversiones y a una reducción del desempleo. A esa política se le ha llamado en otros países europeos el socialismo en una sola clase, pues se supone que los trabajadores con trabajo han de sacrificarse a cuenta de los trabajadores desempleados mientras los capitalistas ven aumentar sus beneficios y sus posibilidades de adquirir más propiedades que les darán después aún más beneficios y rentas.

Así estamos y si los sindicatos pactistas son capaces de seguir esa política de claudicación no es porque logren convencer a la clase obrera (como no la convencieron con el Pacto de la Moncloa) sino gracias a la colaboración de Tejero y Miláns. La situación es la siguiente: nos dicen que nos conformemos con este sistema neocorporatista, de conciliación de clases a favor de los que mandan y son

ricos, o se nos vienen encima los militares con una política pinochetista (un neoliberalismo económico con sindicatos prohibidos: una combinación de Adam Smith con Mussolini).

El pacto del 5 de junio es probable que tenga éxito en reducir los salarios reales, pero en eso influye también el paro, quizá más que el pacto. Es posible también que si el petróleo mantiene su nivel de precios en dinero, perdiendo por tanto en valor real, se anime la economía un poco, aquí y en otras partes. Pero la situación es inestable: mucho depende de que Arabia Saudita continúe exportando una cantidad de petróleo mucho mayor que la que razonablemente debería exportar. Mucho depende de cuánto tarde en surgir una reacción nacionalista en Arabia Saudita contra la corrupción y el expolio, simbolizada en un personaje como ese rey Jaled, tan amigo del nuestro, que hace poco nos visitó. El mismo Jaled que hace un año mandó decapitar por las buenas a cincuenta o sesenta personas que habían ocupado la mezquita de La Meca para protestar contra su régimen y el de su familia. Todo un demócrata. De ese petróleo depende nuestra economía en buena parte, y si su precio se mantiene puede ser que haya una cierta mejora económica en los meses próximos. Si así ocurre, eso será agua para el molino de los pactistas y se consolidará algo más el neocorporatismo hispánico.

J. M. A.

— Sobre el conjunto de la sociedad. La opinión de los sindicatos es importante en la definición de la orientación económica del país. Si bien no es cierto que participe en la decisión del tipo de desarrollo, ni siquiera del tipo de industrias a crear o hacer desaparecer, su consentimiento a los planes del poder económico es importante en orden a hacer disminuir los costes políticos (véase por ejemplo la reestructuración del sector naval). También es evidente que una posición enfrentada de los sindicatos con el Gobierno hubiera dificultado la puesta en marcha del PEN, la instalación de la factoría de alumina en Galicia o el asentamiento de la General Motors, por poner ejemplos que claramente chocan con los intereses populares del Estado español.

La participación en la distribución de las rentas de los asalariados, con las consecuencias sobre el beneficio y reorganización del Capital, o las presiones en materia de equipamientos sociales o dotaciones para los parados, con su influencia sobre los presupuestos del Estado, tienen incidencia sobre todos los sectores de la sociedad.

Los dirigentes

Consecuentemente con estas expresiones del poder de los sindicatos, sus dirigentes más importantes son aquellos que están más cualificados para tomar este tipo de decisiones político-económicas.

Se ha pasado ya el tiempo de los líderes de fábrica o ramo que propor-

cionaban la confianza suficiente a los trabajadores para enfrentarse a la dictadura; ha pasado el tiempo de los organizadores natos que creaban núcleos en las empresas que después aglutinarían a sectores importantes de trabajadores; ha pasado el tiempo de los abogados que buscaban la cobertura legal de las actuaciones sindicales.

Ha llegado el tiempo del negociador hábil, respetado por la patronal, que sabe cambiar tantos por ciento por derechos sindicales, del burócrata que sabe todas las triquiñuelas para invalidar un acta de elección de comités, o del economista que trabaja en cuadros macroeconómicos de distribución del PIB por sectores o de incidencia de la disminución del poder adquisitivo de los asalariados en la producción de las industrias de consumo.

Aunque ha cambiado la función de los dirigentes sindicales, no ha cambiado la relación (e estos respecto a la organización. Son profesionales, con sus derechos incluso corporativos, que han trabajado para la organización y deben seguir trabajando sin que se produzca ni una merma de sus ingresos ni, lo que es más grave, una merma de sus funciones, es decir, un alejamiento del poder; en caso contrario se producirán las críticas, las fugas y en último término, las escisiones. No es infrecuente escuchar a miembros de la Corriente Socialista Autogestionaria de CC.OO.: «en los últimos tiempos de USO no se podía ni permanecer, los únicos liberados que cobraban eran los adictos a Zaguirre»; mucho más descaradas fueron las declaraciones de Tranquilino, histórico y nefasto líder de la Construcción de Madrid: «Me voy a UGT porque en CC.OO. quedé fuera del ejecutivo, querían prescindir de mí e incluso me amenazaron con quitarme el sueldo».

En último caso se justificarán los trasvases de dirigentes en base al espacio político. «No puede haber dos sindicatos socialistas, que se disputen el mismo espacio sindical», dijo José M.^a Zufiaur, cuando salió de USO con la mitad de la ejecutiva hacia UGT, olvidando sin duda que el «espacio sindical» se crea en base a respuestas ante problemas concretos, pues si no, seguiríamos todos los trabajadores en la vieja CNS o en los modernos sindicatos de empresa.

Pero claro, crearse un espacio es criticar al sistema, no participar del poder, es ir creando una alternativa obrera a la sociedad productivista, es, en definitiva, luchar contra la explotación del hombre por el hombre, justo lo contrario del papel de nuestros flamantes y responsables sindicatos. ■

A.

José Luis Sampedro, catedrático de Estructura económica, senador real, técnico del Banco Exterior de España, maestro de generaciones de economistas contestatarios, crítico del poder en todas sus expresiones, es un hombre respetado por su firme oposición a esta sociedad derrochadora y deshumanizada.

entrevista JOSE LUIS SAMPEDRO

■ PREGUNTA.—Además de tu dedicación profesional a la economía, ¿encuentras tiempo para escribir novelas?

□ RESPUESTA.—Bueno, soy un escritor un poco furtivo, pero tengo tres novelas publicadas y una que va a salir en breve, que se llama «Octubre, Octubre». Así, dos veces Octubre, porque es un mes dual; por una parte es el mes rojo, revolucionario, sangriento, y por otro lado es el otoño, la decadencia, el color malva. Habla de las dos salvaciones posibles, que para mí son válidas ambas, la violencia o la inhibición, la vida carnal y la vida mística que dirían los escolásticos.

Aunque escribir novelas sea divertido, dicho sea sin frivolidad, lo que básicamente he publicado son libros de economía, algunos de ellos traducidos a varios idiomas.

Además estoy orgulloso de haber publicado dos libros de divulgación, uno era «Conciencia del subdesarrollo» y otro «La inflación en versión completa». Éste era un libro muy sencillo y dirigido al ciudadano, diciéndole que lo que nos cuentan sobre la inflación es sólo una parte de la verdad. Era tan sencillo que estuve tentado de titularlo «La inflación al alcance de los ministros», pero podía parecer una broma.

■—También puede parecer una broma cuando nos hablan de las virtudes de la economía de mercado.

□—Es otro tipo de broma, claro, pero efectivamente yo mantengo que la sociedad de mercado está caduca, no responde a las exigencias de nuestro tiempo, no permite afrontar los problemas de la técnica de hoy, los niveles de producción de algunos artículos de consumo.

La idea del mercado podía servir a una etapa de la técnica en la cual era relativamente sencillo entrar en la producción, porque el utillaje era muy sencillo, porque los mercados estaban muy divididos; pero con estructuras de producción y niveles técnicos altos y complicados para producir cualquier cosa, con dependencias financieras co-

mo las que están impuestas es falso. Pensar además que el consumidor es el rey del mercado, el que establece la demanda a la que se adaptan los productores es especialmente falso en una época como ésta, en que hay unas técnicas de publicidad, de indoctrinación y de hacernos creer que necesitamos determinado consumo porque si no somos muy desgraciados.

Esto era muy rudimentario o prácticamente no existía hace 200 años, entonces se respondía más a la demanda del consumidor, que además era más sencilla, pero hoy nos hacen creer que el consumidor decide, cuando en realidad se lo meten en la cabeza.

■—Cuando hablas de que la sociedad de mercado ha tocado fondo ¿hablas también de la planificación del futuro?

□—Yo no hablo tanto de planificar el futuro como de buscar otro modelo de desarrollo. En «Conciencia del subdesarrollo» repetía una teoría que han tratado los latinoamericanos, que es la teoría de la dependencia y la marginación, que básicamente dice que el tercer mundo no puede seguir el mismo camino que siguieron los países hoy adelantados, porque no lo pueden practicar; cuando Inglaterra hace la revolución industrial y empieza a vender en el mercado mundial, no tiene competidores. Por eso los países subdesarrollados de hoy no pueden seguir esa vía, porque los países desarrollados de hoy nunca fueron subdesarrollados, nunca estuvieron menos desarrollados que otros y por tanto eran los líderes y los que dominaban la situación. El futuro hay que construirlo y para ello hay que buscar un nuevo modelo de desarrollo.

Por eso estoy en contra de los experimentos de prospectiva o proyectiva que se hacen, y eso que he participado en uno (el proyecto Interfuturos de la OCDE), y estoy en contra porque el futuro no se prevé, se construye. Para lo que puede servir un experimento de extrapolación estadística es para señalarte la imposibilidad



«nunca
quise
ser
rico
ni
ministro»



BAR EL CIRCO



de ciertos objetivos, pero no para decirte lo que va a pasar; en cierta manera basta que tú preveas que algo no va a ser posible para que contribuyas a la creación del futuro, pero la historia nos enfrenta constantemente con situaciones inesperadas de modo que esos experimentos como el Club de Roma o el mismo Interfuturos me parecen cosas de gabinete que son útiles pero que no nos dicen cuál va a ser el futuro. Lo que sí podemos es tener ideas de lo que no queremos y trabajar en sentido que no vaya hacia donde no queremos.

■—¿Habría que buscar entonces un nuevo modelo de desarrollo, es decir, un desarrollo bajo premisas distintas de las que parte el sistema actual?

□—Un nuevo modelo de desarrollo exige llegar a niveles más profundos que los de la teoría convencional. Las interpretaciones de la realidad pueden llegar a niveles distintos. Si tú te quedas en el nivel técnico o en el nivel económico estás en las teorías convencionales del desarrollo, que te dicen que hay que invertir para crear capital, y es donde se suelen quedar los modelos económicos del desarrollo, pero hay otros dos niveles importantes que son el nivel político y el nivel social.

El poder político es una variable que no se suele tener en cuenta, pero cuando se habla de inversión no son cantidades abstractas, sino que se trata de invertir en ciertos sectores en vez de invertir en otros, invertir en educación o en coca cola; ¿quién decide esto? El poder. Entonces para estudiar el desarrollo y para construirlo tienes

que dar entrada al poder. Has llegado a un tercer nivel, que no es el técnico ni el económico, sino el político. Pero además ese poder está condicionado, porque no es absoluto, todos los dictadores están condicionados por estructuras sociales; tienes que dar entrada a un cuarto nivel, que es el nivel social; ahí es donde se mueven otras teorías del desarrollo más avanzadas, las de la dependencia o la marginación.

Más recientemente, y ahí empezamos a entrar en el nuevo desarrollo, aparte de las limitaciones que introducen ciertos grupos sociales para tomar decisiones, hay una limitación que es la ecología; se pongan como se pongan los optimistas, el planeta es limitado y no se puede pedir un desarrollo constante sin tropezar con límites, entonces empiezas a entrar en el eco-desarrollo, es decir, un desarrollo económico armónico con la limitación de recursos, que no los destruya, y esto sería un nuevo desarrollo; pero además tenemos que llegar a un nivel axiológico, de valores, pues no habrá desarrollo ecológico frente al desarrollo que nos proponen, que es más deslumbrador, si no cambiamos de valores, si no se precia por ejemplo la vida interior a la exterior o la contemplación al consumo.

Especialmente con la educación que hemos recibido, que nos hace por ejemplo valorar más un paisaje visto en la televisión en un anuncio de Marlboro, que una puesta de sol real en el campo, que no le interesa a nadie, pues el campo es árido e incómodo. Hoy, si en la plaza de la Armería, que hay una puesta de sol precioso

sa y siempre está vacía, pusieran un chiringuito y unos altavoces, la gente se mataría por estar allí; como no se les ha ocurrido aún podemos disfrutarla.

■—¿Este tipo de análisis está de acuerdo con posturas ecologistas?

□—Claro, aunque yo no sea un ecologista de «estricta observancia», entre otras cosas porque no tengo estricta observancia de nada. Precisamente cuando estuve en el Senado, las dos veces que hablé fue por motivos ecológicos, una para presentar un proyecto de ley para llevar al ánimo del gobierno la necesidad de tener en cuenta el problema ecológico, que fue aprobado por unanimidad y nadie le ha hecho caso, y otra vez para que se defendiera el coto de Doñana contra el Ministerio de Agricultura.

También he participado en charlas contra la energía nuclear, aunque no creo que energía nuclear sí o no sea un debate fundamental, porque con este sistema de vida la energía nuclear es inevitable. Es un problema de modelo de desarrollo, lo que hay que hacer es ir a otro modelo, en el que yo no rechazo del todo la energía nuclear porque no se puede generalizar. Quizá haga falta en un determinado sitio, lo que no veo que haga falta es en la Europa industrializada, porque si te dicen que la demanda de energía crece a un determinado tanto por ciento y la única manera de hacerla frente a corto plazo es la energía nuclear, mi pregunta es, ¿por qué crece a ese ritmo la demanda de energía? Claro, porque ellos lo provocan; lo que quiero es saber para qué son las nuevas fuentes de energía y entonces diré sí o no, pero claro, es que lo montan al revés. ¿Qué podemos hacer?, pues poner en evidencia los intereses a los que sirven, que son los de los que mandan, demostrar que la mano invisible no es tan invisible y tratar de convencer a la gente de que se resista.

■—Tú has estado cercano al poder, incluso fuiste senador real, ¿cómo es posible estar cerca del poder sin estar en él?

□—En mi caso porque no me gusta, no es un mérito personal; hay dos cosas que yo no he querido ser, ni rico, ni ministro, y esto es congénito en mí. Uno está cerca del poder por contingencias, cuando nombraron ministro de Comercio al director general del Banco Exterior me llamó para que le ayudara en unas cuestiones económicas, dije que bueno, pero que no quería ser nada en el Ministerio, y estuve en el Ministerio, pagado por el Banco. No estaba en el poder porque no quería, no he querido tomar decisiones sobre la vida de los demás, que

es lo que en definitiva hace el que ejerce el poder. He oído mucho en la dictadura «debo estar aquí, porque si no está otro peor», pero ante esta postura tengo recelo, porque los que lo decían de buena fe se marcharon pronto, porque se dieron cuenta de que el sistema aquel no permitía hacer nada serio, pero la mayoría cedían, quizá no de mala fe, quizá tiraban la toalla y abandonaban, pero... sin irse, y entonces eran cómplices estructurales del sistema, quizá porque el poder corrompe, quizá por eso no quiero el poder, porque no quiero ser corrupto. Bueno yo no soy puro, pero es diferente ser impuro que estar corrompido.

■—Pero el poder actual también corrompe.

□—Evidentemente el poder corrompe siempre. Cuando Lord Aston decía que el poder corrompe estaba hablando del poder en una democracia, pero es posible que aquí no se haya comprendido todavía lo que significa, lo que implica la lucha por

participar en el poder de arriba, en la toma de decisiones, sin apoyarse suficientemente en el poder de abajo; creo, por ejemplo, que los partidos de la oposición han explotado, en el mejor sentido de la palabra, insuficientemente el poder principal; a mí me asombra que al tomar el poder en los ayuntamientos no se haya empezado por hacer un estado de la situación, por decir claramente en un documento nos hemos hecho cargo de una cosa que estaba así, como en una oficina cualquiera, que cuando se entra, o se hace arqueo y se parte de ahí, o se asume lo anterior; cuando se dice que los ayuntamientos no pueden transformar la ciudad en unos meses, reconozco que es verdad, pero por lo menos la desmitificación del pasado, el poner en evidencia las cosas que allí ocurrían, creo que era una obligación democrática fundamental.

■—Democrática y ética desde una posición anarquista.

□—También ética desde mi perspectiva, claro, aunque yo tampoco sea

un anarquista de estricta observancia, que además me parece que estaría fatal. Pero un intelectual, si lo es en serio, es esencialmente anarquista, porque lo que le caracteriza es la duda, no admitir dogmas; si además está doblado de escritor y literato, es un poco bohemio, y en el mejor sentido de la palabra, anarquista y bohemio van juntos.

Yo me considero como un anarquista ético, y lo digo a sabiendas de que es una redundancia, porque si no, no podría concebirse. De todas maneras, una vez que le dije esto a un periodista, lo escribió mal y publicó anarquista estético, cosa que tampoco me disgustó mucho, pues aunque no creo que todo lo bueno sea bello, no me parece mal que se asocie la estética con la ética. ■

ANDRÉS

Fotos: Alhazen

PEQUEÑA HISTORIA DE LOS PACTOS

Los pactos sociales son la concreción práctica del ejercicio del poder en el ámbito de las relaciones sociales. Un poder que comparten, aunque en diferente medida, y ejercen armoniosamente, fuerzas que deberían estar enfrentadas, y, como siempre que hay poder hay alguien aplastado, en este caso no es preciso añadir que son los de siempre, los de abajo, incluidos los miles de trabajadores que contribuyeron a que los líderes sindicales ascendieran hasta la cumbre del boca a boca con la CEOE.

El primero fue el de «La Moncloa», en octubre de 1977. Varias razones se esgrimen para aquel pacto social. Lo único que se dice abiertamente es que se trata de «luchar contra la inflación». En realidad se urge a la izquierda para que pacte, porque hay ruido de sables y conviene dar la impresión de que desde Fraga hasta Carrillo, las instituciones son una pila y el sistema goza de buena salud. Los pactos tienen dos partes, una de «saneamiento y reforma de la economía», con Fuentes Quintana y Tamames como cerebros, y otra sobre «actuación jurídica y política» que es un adorno en el que se prometen

grandes reformas y más cancha política a la izquierda.

Lo más importante de los pactos de la Moncloa es el abandono definitivo de la lucha de clases con una mínima radicalidad, por parte de los sindicatos mayoritarios: la aceptación del pacto social, aunque aún se trate de camuflar con eufemismos. Así vemos que el mismo Camacho que a principios de septiembre se negaba al pacto «un pacto social supondría abandonar la meta que ha guiado los pasos del movimiento obrero desde su nacimiento: el socialismo», se transfigura tras su paso por la Moncloa: «es un pacto para demostrar que los intereses de la clase trabajadora no están en contra de los de la nación».

Éste es el balance de lo que supusieron los pactos de la Moncloa, en boca del que fue una de las figuras destacadas de Comisiones Obreras en Cataluña, el laborista Albert Fina: «...los pactos de la Moncloa fueron básicamente un engaño a la gente, un engaño consistente en decirle que le daban unas cuantas cosas que en realidad no le daban. Es evidente desde el primer momento que las famosas contrapartidas, todas ellas genéricas y

vagas, eran de aplicación prácticamente imposible, mientras que lo que se concretaba mucho era la congelación salarial y todas las normas que interesaban a la patronal. Los pactos y el consenso se justificaron en base a la necesidad de consolidar la democracia, pero yo creo que la desmovilización consiguiente a los mismos no es precisamente la mejor manera de consolidar nada. Aquí se produce ahora un golpe de Estado y con la desmovilización y desmoralización que hay no se mueve nadie...». No podían ser más certeras estas declaraciones, hechas en septiembre de 1979.

UGT-CEOE: mano a mano

El primer acuerdo se fragua en julio de 1979. La UGT en minoría según las elecciones y con mucha menor implantación que Comisiones recibe el espaldarazo de la patronal. El pacto llega en medio de un intento de Comisiones de movilización controlada contra el paro, por lo que llueven críticas a Redondo, de las que sale al paso haciendo gala de responsabilidad y seriedad: «acostumbrados como está-

bamos a que en las relaciones patronal-sindicatos el enfrentamiento y las posturas encontradas fuera la regla, y el diálogo la excepción, resulta hasta cierto punto comprensible que desde perspectivas sectaristas se haya atacado el acuerdo UGT-CEOE.

Un acuerdo que es preludio del famoso Acuerdo Marco Interconfederal, firmado en enero de 1980 y que supone pactar sobre la productividad y la fijación de los topes salariales por debajo del 11'5% a cambio de derechos sindicales, que ya no son pues tales «derechos», sino un objeto de trueque y comercio, una concesión, cuando ya esos derechos, con las manos atadas por el pacto social, van a servir de muy poco. Pero no seremos nosotros, sino el comentarista laboral de «El Socialista» el que recoja lo que este nuevo avance en el pacto social significa:

«Con el AMI se está dando un paso trascendental en la configuración de un nuevo sistema de relaciones industriales en nuestro país, acorde y homologable con los comportamientos que en esta materia imperan en la Europa comunitaria». Y así se destaca por esta misma publicación la reducción de la «conflictividad laboral» en un 50% como consecuencia de los pactos.

Se van configurando plenamente las nuevas formas de ejercicio del poder en las relaciones sociales: evitación de movilizaciones sociales, planteamiento sólo de las reivindicaciones que la patronal está dispuesta a conceder y por tanto aceptación de su lógica y sus planes, separación de la negociación de quienes directamente están interesados y sustitución de la lucha reivindicativa directa por el pacto en las alturas y los acuerdos marco, que encierran el campo de las relaciones laborales y hacen «salvaje» cualquier lucha planteada al margen.

ANE para asnos

No sólo nos colocamos a la altura de los países democráticos en materia de pacto social sino que los superamos. En efecto, en ningún país con sindicatos libres se ha llevado a cabo un acuerdo como el firmado por Comisiones y UGT con la patronal y el gobierno, por el que se acuerda que los trabajadores verán rebajados sus sueldos entre un 5 y un 10 por ciento oficialmente regalando a la patronal un mínimo de 170.000 pesetas. Las justificaciones vienen al pelo tras el 23-F: se trata de hacer ver que las instituciones funcionan... se trata de combatir el golpismo... es por patriotismo...

En realidad con el ANE lo que se ha hecho es cerrar el sistema neocor-

poratista, y ni siquiera nadie se extraña de que CC.OO y UGT no hayan firmado el pacto de la bajada de sueldos para sus propios afiliados y que lo hayan hecho para todos los trabajadores y en su nombre. Vuelve el sindicato vertical, vuelve la unidad de destino.

Como premio se asignan 2.400 millones para los sindicatos por parte del gobierno «a cuenta del patrimonio». La patronal finge enfadarse aunque pronto es calmada por el gobierno. Desde la OIT, el representante de UGT, Anguiriano, se dirige francamente a los patronos: «Las medidas de apoyo financiero son bienvenidas y lo decimos frente a voces de sectores empresariales que, si reflexionan con lógica y con visión de futuro, son los primeros interesados en que la dinámica de las relaciones laborales encuentren frente a ellas interlocutores independientes, fuertes y responsables».

Desde el propio seno de los sindicatos empiezan a surgir las primeras

rebeldías. Camacho tiene que viajar para convencer a Comisiones de Cataluña, que se niega a reconocer la validez del ANE, porque ni siquiera se les ha informado de la firma. El secretario general recuerda a los catalanes que «Comisiones no es una organización anarcosindicalista: hay ciertos órganos con responsabilidad plena». Aunque sólo unos días más tarde abre en Barcelona el Congreso del sindicato, asumiendo «el pasado anarcosindicalista del movimiento obrero catalán».

Tampoco es aceptado el acuerdo en Euskadi, y en Andalucía ni siquiera se atreven a esgrimirlo. La ausencia de contrapartidas para los trabajadores es tan clara (a no ser que se interprete como tal la subvención a los aparatos sindicales «mayoritarios»), que el sistema de ejercicio de poder en el campo laboral puede empezar a hacer agua en cualquier momento. ■

ANSELMO



Los «funcionarios», en sus «cuerpos», son el Estado. Recaudan los impuestos, se quedan la mayor parte para gastos de funcionamiento pues los funcionarios gordos cobran salarios muy altos, y administran el resto. A veces se pelean entre ellos, como ahora ocurre con las nuevas administraciones «autonómicas», donde también quieren colocarse nuevos funcionarios, procedentes (como explicó Beltza, en *Nacionalismo vasco y clases sociales*) de la «pequeña burguesía tecnocrática». En Madrid se enfadan con esta nueva hornada de funcionarios que, ¡oh escándalo!, no han hecho oposiciones. Hay funcionarios con dedicación exclusiva, con dedicación plena, con dedicación normal: estos últimos son los que nunca aparecen por sus oficinas, aunque continúan cobrando. Los funcionarios cobran pluses de dedicación e incentivos de cuerpo. Son inamovibles. Hay bastantes diputados que son funcionarios y que cobran como diputados y como funcionarios. Un Estado sin funcionarios no funcionaría.

En estos artículos se trata el caso de los funcionarios de la carrera judicial y de las magistraturas de Trabajo, ni uno sólo de los cuales ha sido depurado en la transición del franquismo al postfranquismo. Se da también una imagen de la «administración por dentro» y de los lazos que existen entre funcionarios y los puestos de dirección de las grandes empresas. Faltarían artículos sobre varias subespecies de funcionarios: los antiguos de los sindicatos verticales que siguen todos al servicio del Estado, los abogados del Estado, los catedráticos de universidad (tan dados a la lectura del Boletín Oficial del Estado), los tan renombrados secretarios de ayuntamiento y tantos otros. Todos ellos con su escalafón, a imagen del Ejército y de la Iglesia. Hasta existen los Inspectores del Timbre y sin duda los Inspectores de Sanidad que vigilan los fraudes en los aceites. Hay la gran masa de funcionarios de la Seguridad Social.

¿Es posible llegar a la sociedad ideal en que todos seamos funcionarios, viviendo sin trabajar, moviendo papeles de un lado para otro? Si descontamos a los que tienen que trabajar para que los funcionarios puedan vivir tranquilos, en los países del Este de Europa ya triunfa esplendorosa esa casta burocrática que algunos llaman «tecnoburocracia» (aunque no sea siempre muy «técnica», pues los hay bastante brutos). El artículo de Nico Berti analiza esta cuestión.

LA CASTA BURO- CRÁTICA

«El poder judicial no es del pueblo»



PREGUNTA.—Podías empezar analizando el «poder judicial», apuntando cómo funciona en la práctica...

RESPUESTA.—Bueno, primero habría que concretar. Cuando se habla de la justicia tiende a reducirse siempre la conversación a lo que llaman el aparato de justicia: los jueces, magistrados, fiscales... Pero esto es resumirlo de una manera muy escueta, porque el aparato de la justicia es mucho más complejo y más amplio. Es verdad que existen jueces, fiscales, secretarios, etc., pero la justicia no es sólo eso sino que están los abogados, registradores, notarios, procuradores..., en fin, todo un mundo que no es sólo que esté relacionado, sino que constituye el ámbito propio donde actúa concretamente ya la última palabra, que es la palabra de los tribunales. Quiero decir que es un mundo complejo, y que todos los que viven de la producción de la sentencia están interesados en la persistencia de ese mundo. Así por ejemplo, cuando en el siglo pasado hubo un ministro, un hombre totalmente fuera de lo común que quiso reducir los procedimientos y hacerlos mucho más rápidos, más accesibles, en fin, hacer más próximos los jueces a los ciudadanos, entonces el Colegio de Abogados de Madrid, y todos los abogados, se opusieron a la aparición de esas leyes que simplificaban los trámites de la justicia. Por lo tanto, cuando se habla de la justicia —y se habla normalmente en tono peyorativo, como instrumento de represión y no como instrumento de salvación— se suele siempre referir a los jueces y tribunales, y sin embargo se olvida todo este tipo de mecanismos que están en torno. Y no conviene que reduzcamos la justicia al último instrumento. Es como pensar que cualquier mecanismo de la autoridad es lo deci-

ENTREVISTA con el FISCAL CHAMORRO

sivo. No, lo decisivo es lo que está a su alrededor. Los guardias municipales o cualquier tipo de guardias están al servicio de una serie de intereses que constituyen su mundo más propio, y esto me parece que es una cosa importante.

En cuanto a su papel como mediador, te citaré lo que dije no hace mucho en un congreso en Portugal: «¿Cómo es posible que la justicia, que es un poder del Estado que se ejerce en nombre del pueblo (ya que si no viene del pueblo el poder en la democracia, de dónde cuernos viene), cómo es posible que esa justicia tenga jueces que obtienen su poder por oposición, por concurso, y no por elección? ¿Cómo es posible que nosotros podamos interpretar adecuadamente el sentir popular? En una palabra, el poder judicial no es del pueblo, no es un poder democrático, por elección, es profesional. ¿Cómo es posible la existencia de un poder judicial en una democracia, sin que los jueces tengan una referencia popular? Aquí hubo a principios de siglo unos jueces que eran por elección (jueces municipales) pero que ahora ya no existen. Así que, en efecto, el poder judicial no tiene una referencia democrática. Puede haber unas formas democráticas dentro de la propia justicia; no con relación al pueblo.

P.—¿Ha cambiado algo desde el fin de la dictadura?

R.—Yo creo que lo que fundamentalmente ha cambiado a partir de la democracia podría decirse que es el aire de las gentes ante los tribunales. Antes había un aire atemorizado. Ahora no digo que vayan tan frescos, pero es otra la actitud ante el tribunal. Tienen un aire más suelto, más desenvuelto.

P.—¿Pero la institución en sí?

R.—No porque los jueces somos los mismos de antes, porque el sistema es el de antes, las leyes más importantes son las mismas que había. No se ha llevado a cabo una modificación en la justicia. Está casi intacta. Bueno, ha habido algunas leyes, pero todavía no son leyes que alteren el tema. Todavía se está viviendo con los mismos mecanismos legales, con los mismos instrumentos personales y con los mismos instrumentos orgánicos del tiempo pasado.

P.—En una mesa redonda de magistrados «progresistas», se comentaba que había que evolucionar desde los planteamientos de «Justicia Democrática», hacia posiciones de trabajo que defendieran los aspectos «avanzados» de la Constitución...

R.—Bueno, no entiendo yo eso muy bien porque naturalmente toda autoridad, todo funcionario, tiene que cumplir con la Constitución. Si no, una constitución que no se cumple, para qué firmarla. Además el artículo 13, núm. 1, dice que los derechos y deberes vinculan a todos los ciudadanos de Estados. Eso es lo que caracteriza el ser democrático, ser cumplidor con su Constitución. Pero habrá magistrados y habrá jueces que no estén dispuestos a cumplirlos y entonces habrá que reprochárselo, o que despedirlos o algo. Pero yo no creo que la máxima aspiración de una justicia democrática sea el cumplir con la Constitución. Eso me parece que es una vulgaridad. Eso es lo que hace todo ciudadano.

P.—Hay una sobrefuerza del poder ejecutivo sobre el poder judicial de modo que condiciona de alguna manera su actuación. Y sin embargo el poder judicial respeta formalmente la Constitución. Hay una avalancha de derechización europea y norteamericana que se produce respetando formalmente la Constitución.

R.—Claro, pero eso ha sido siempre en los países donde la clase dominante no tiene esta anemia cultural, esta indolencia a la lectura que tiene la clase dominante española. Entonces tienen unas formas de dominio sobre la clase dominada que no son tan estridentes, que tienen otros mecanismos y que son más listos para actuar, porque cuando la clase dominante es activamente primitiva, esas formas de actuación son primitivas. En Inglaterra, cuando asesinaron a Lord Mountbatten, ningún mariscal tomó los Comunes. En Estados Unidos a un presidente lo mataron y a éste le intentaron matar y ningún general, ningún héroe de guerra tomó el Capitolio.

Sobre la influencia que dices tú del ejecutivo sobre el poder judicial, aquí es que no se ha concebido nunca de otra manera, y ahora que se ha creado, sobre una idea de Justicia Democrática que fue recogida en la Constitución, el Consejo del Poder Judicial, para que los jueces no fuesen designados por el Gobierno, entonces, claro, han creado esa forma de asociación que es la única que puede proponer candidatos. Es un mundo cerrado, casi corporativo. El Gobierno no ha cedido nunca en el mundo de los puestos de la justicia. Y claro, como el que paga manda, por la misma condición del trabajo existe una dependencia. Pero más que nada es una dependencia ideológica, de clase, de rutina, de la que ningún juez ha tenido nunca la audacia de hablar, y por lo tanto una dependencia nacida del temor.

P.—Es posible un tipo de actuación «desde dentro» al modo que se intentó con la UMD en el ejército?

R.—Yo creo que el sistema tal y como está, ¿mejorarlo?... Lo que sí que hay es que conocerlo, tal vez para cambiarlo. Ahora que yo creo que el sistema, adecentarlo un poco, arreglarlo, asearlo, me parece que, aparte de que no creo que sea de interés, tampoco es cosa fácil porque el mecanismo del poder está muy arraigado. Claro, si hubiese un ministro que se decidiera a cambiar...

P.—Eso es como el asunto de las torturas, por ejemplo...

R.—El problema de las torturas tiene una enorme dificultad porque nadie puede ser condenado (y además ha de ser así) sin que se le pueda probar

ante un tribunal que ha ocurrido tal cosa. Pero a mí me parece que las torturas (aparte de las primitivas y bárbaras) no dejan huella clara ni se hacen ante testigos.

P.—¿Está ahora claramente separada la jurisdicción militar?

R.—Sí, está separada. Está restringida. Antes la jurisdicción militar lo comprendía casi todo. Por ejemplo después de la guerra la jurisdicción militar juzgaba delitos de opinión y de casi todo lo divino y lo humano. En el año 63 ya deja de entender la jurisdicción militar que hasta entonces entendía que los delitos de opinión y desde la Constitución para acá se ha restringido más a la jurisdicción estrictamente militar.

P.—Pero aunque la jurisdicción militar tenga un ámbito restringido, existe la Audiencia Nacional y los juzgados centrales que se van desarrollando en las leyes de desarrollo del poder judicial y que están en contra incluso de la Constitución.

R.—Eso es cierto. Hay una jurisdicción militar que está restringida al ámbito militar, y después, dentro de la jurisdicción ordinaria, hay una especial, un hueco ahí que tiene un carácter que a veces recuerda al Tribunal de Orden Público, e incluso ahora más, porque también tiene una situación especial y la están dando cada vez mayor amplitud en detrimento de la jurisdicción ordinaria. En primer lugar implica una medida excepcional porque abarca todo el territorio nacional y el juzgado abarca su partido o territorio. La Audiencia Nacional está en contradicción con la Constitución que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a su juez natural, y

parece que un juez central no es un juez natural.

P.—¿Siguen los roces entre la policía y el aparato judicial? Me refiero a aquellas protestas de la policía porque los jueces les soltaban demasiado pronto a los detenidos, y del Consejo del poder judicial porque los policías querían meterse a jueces.

R.—Eso está bien que lo preguntes. En la Constitución se dice que la policía judicial está a las órdenes del juez y del Ministerio Fiscal, y que será auxiliar. Lo dice también la ley de procesamiento judicial desde el siglo pasado en 1872. Lo dice la misma ley de la policía. O sea que en España no ha existido nunca un poder policial legalmente. Es un poder auxiliar. La ley de Procesamientos dice: «Cuando el juez de instrucción se presentare a formar sumario cesarán las diligencias de prevención que estuviere practicando cualquier autoridad o agente de policía, debiendo éstos entregarles en el acto a dicho juez así como los efectos, pruebas, etc., del delito que se hubieren recogido y poniendo a su disposición a los detenidos si los hubiese.» Ese es el artículo que acredita que no hay un poder policial. El poder policial no existe. Existe una solución auxiliar hasta que llega el juez. Y desde ese momento actúa el juez, no actúa la policía. Este artículo está aquí impertérrito en vigor. Se queda uno perplejo de que no se aplica. Pero en fin, está ahí legalmente. Estas leyes, la actual ley antiterrorista y la del 75, también establecen que la policía puede detener y que pasados tres días pregunten al juez si hay que seguir la detención y el juez puede conceder el que sigan otros siete días detenidos, con lo cual el juez, aún



J. V. Chamorro, uno de los pocos hombres de izquierda en el aparato judicial español, con posiciones que van con frecuencia más allá de los partidos parlamentarios, es fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid.

sabiendo que hay un hecho en que está interviniendo la policía, no hace que cese la actuación de la policía, cuando este artículo lo establece así. Con lo cual, de hecho se está creando una función policial que casi goza de autonomía de investigación con respecto a los jueces. La ley que han creado el año pasado para la persecución de delitos flagrantes muy graves, también le confiere a la policía un poder de investigación, con lo que se está haciendo que el juez no sea tal juez de instrucción, sino de la instrucción. Se está creando subrepticamente una institución que tiene un mecanismo propio, una dialéctica propia, y casi un poder propio, lo cual está absolutamente fuera de lo que las leyes establecen.

P.—Si la forma en que nuestra izquierda oficial se ha metido con instituciones de la dictadura como la brigada social o el estamento militar han sido tímidas, a la magistratura ni se le ha nombrado prácticamente...

R.—Yo no entiendo muy bien por qué lo hacen así. Es decir, los partidos de izquierdas, o los dirigentes de los partidos de izquierdas, no creo que sea un título de honor para ellos, pero tienen una considerable ignorancia acerca de esto que se llama el poder judicial, y a lo mejor se han preocupado de cosas que tienen menos poder en el país. Yo nada más lo veo como una manifestación de la escasa comprensión de la realidad en que viven algunos de los dirigentes de partidos de izquierdas. A esto se añade el mito de la independencia del poder judicial. El poder más importante, que es un poder que establece los límites de las leyes en los casos concretos, es un poder absolutamente indiscutido, recogido, aceptado íntegramente en su plenitud según estaba en el régimen anterior. No han hecho así con los Ayuntamientos, donde han ido a nombrar concejales. Es decir, parece que eso fuera más importante, y yo no lo entiendo. Después aspiran a que sea progresista. Por ejemplo, en la Constitución se dice: «y habrá jurado» (y además en los juicios criminales nada más, aunque el jurado debe ser para muchísimas más cosas). Y ahí está puesto en la Constitución, pero ahí está puesto a enfriar, porque ya verás tú cuando va a haber jurado, y después, cuando lo haya, ya verás tú cómo harán el jurado. Si a esto no se opone nadie, pues no sé cómo se va a democratizar, cómo se va a crear un espíritu progresivo en la justicia. ■

Declaraciones recogidas por Maribel (Colectivo BICI - Madrid)

LOS ENEMIGOS DE LA PELIGROSIDAD SOCIAL

Que el país va camino de convertirse en un estado policiaco no lo decimos nosotros. Son palabras pronunciadas por un miembro del poder judicial, con motivo de una mesa redonda organizada por la Unión Sindical de Policías. Al desarraigo y la delincuencia creciente que generan el paro y la concentración en las grandes ciudades, el partido del gobierno no sabe dar otra respuesta que la proposición de rebajar la edad penal, aún más. Al estado de miedo se intenta contestar con respuestas de terror. Y para los ángeles del suburbio, que decía García Calvo, la carrera marginación-delinuencia-cárcel se convierte en la pesadilla que se muerde la cola, y se ignora donde tiene, realmente, la cabeza.

En torno a esta problemática, de la que son buena prueba los cientos de cartas recibidas en BICICLETA, hemos entresacado algunos puntos para recabar opiniones de distintos abogados, profesionalmente al tanto de los llamados «delitos comunes» y la forma en que habitualmente se juzgan y castigan. Bastan unos apuntes. No es preciso insistir exhaustivamente. Las páginas de nuestra revista recogen, en cada número, el testimonio directo de quienes han pasado por las manos de la justicia y cumplen condenas en esos reductos ignorados que son las cárceles, donde se amontonan muchas veces en condiciones infrahumanas.

1. Relaciones policía-justicia

«Hoy, hasta la misma administración de justicia se comporta a veces como una policía», nos ha dicho un letrado y nosotros transcribimos la frase. Hay unanimidad en afirmar que abundan las concomitancias entre las decisiones policiales y judiciales. En los juicios en que se denuncian casos de torturas, es habitual que el presidente de la sala corte estas manifestaciones diciendo que no se está juzgando a la policía, y que hay que centrarse en el delito denunciado. En casos de atentado, es suficiente para la

condena con que la policía se ratifique en el atestado presentado, la mayor parte de las veces contra la opinión del detenido y sin practicar ninguna otra prueba.

La libertad provisional ha sido sustituida por la prisión provisional: es decir, el juez decreta siempre prisión inmediatamente, aunque pocas horas más tarde conceda la libertad con fianza, como primera medida.

El criterio último parece ser el negar la libertad provisional para determinados delitos, sean cuales sean las circunstancias. Y así, se está negando sistemáticamente en los casos de robo con intimidación (aunque se trate de un simple tirón), delitos contra la moral y atentados. Todos los abogados han coincidido en afirmar que la declaración del detenido no sirve absolutamente para nada, y «lo que va a misa es el atestado policial», que no debiera pasar de ser una información.

Se puede hablar de «colaboración policía-justicia» en lo que «significa represión», pero no en general ya que unos pasan de otros olímpicamente cuando les interesa.

2. Asistencia letrada al detenido

Cuando se legisló la posibilidad de que los detenidos contaran con la presencia de un abogado desde el primer momento, y ante la asignación de 10.000 pesetas diarias para este tipo de guardias, se hicieron colas en los colegios de abogados. Luego, ha ido bajando el entusiasmo y no son muchos los letrados que lo hacen voluntariamente. De todas formas, el abogado es «sólo un convidado de piedra» en la declaración, ya que no puede decir nada y tiene que limitarse a firmar.

La táctica policial, sobre todo en las brigadas de robos, es «presionar» (lo que ellos llaman «subir al ring», es decir, moler a palos al detenido), para que renuncie a llamar al abogado. También se les presiona con amenazas

y referencias a la familia. Sería suficiente que el abogado pidiera la apertura de diligencias, en estos casos, para que resultara anulada la declaración. Sin embargo, se hace muy raramente ya que se estima que «el enfrentamiento con la policía es muy delicado».

Algo que es importante, y que muchas personas ignoran, es que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, estén o no estén los abogados delante.

3. Medidas de rehabilitación

Para los abogados consultados, el caso de «el lute», como extremo, «es algo que habría que denunciar porque se nos quiere hacer tragar como un ejemplo», y «aquí no se rehabilita ni dios», entre otras cosas «porque con el miedo no se puede rehabilitar a nadie». Las condiciones de la cárcel son absolutamente denigrantes, cada día se producen más robos y violaciones en el interior de las mismas.

Lo normal es que, los más jóvenes, al llegar por primera vez a la cárcel sientan miedo: «Es natural —nos dicen— un chaval de 16 años no puede tener asumida su historia como un tío de treinta». Pero cuando se consigue superar el miedo, ya no existe ningún problema en volver, entre otras cosas «porque al salir no saben qué hacer».

4. Los delitos más comunes de entre los «comunes»

Son los llamados «contra la salud pública», pero los criterios en lo que respecta a salud pública, el código los deja al arbitrio de la sala. En cualquier caso, los más frecuentes son los relacionados con el hash y la heroína. En cuanto al hash, están cambiando los criterios en cuanto a las penalidades, de forma que incluso una cantidad importante, está siendo considerada en muchos casos, como para consumo propio.

El tema de la heroína, que desde hace un par de años ha cobrado un auge increíble, está empezando a crear conflictos de audiencia ya que la mayor parte de los delitos que se juzgan son robos con intimidación y de ellos, un buen porcentaje han sido cometidos para conseguir dinero con el que procurarse la droga.

4. A qué se llama peligrosidad social

Parece haber unanimidad al estimar que para dictaminarlo privan criterios policiales, más que otra cosa. Normalmente, se tramitan los casos a

base de atestados, y suele ser muy raro que haya una denuncia previa presentada en algún juzgado. De todas maneras, los criterios no son unánimes en todas las audiencias territoriales, de forma que mientras, por ejemplo en Sevilla, un caso de dos kilos de hash lo archivan, en Valencia te caen seis meses. «Como no hay casas de rehabilitación (las llamadas «casas de templanza»), los meten en la cárcel y tienen que cumplir todos los meses, porque no se puede redimir con el trabajo».

6. La edad penal

Se encuentra en los 16 años. Es criterio de UCD rebajarla al menos en un año. Tener de 16 a 18 años se considera atenuante, y a veces calificada, lo que significa en la práctica que la edad puede servir para rebajar la condena en un grado, y a veces en dos.

Todos los abogados consultados coinciden en afirmar que rebajando la edad penal no se va a conseguir nada «porque la clave de la delincuencia no está en la represión, sino en la frustración vital». Lo único que se va a lograr es llenar las cárceles de chavales «lo que se va a traducir en una delincuencia más sutil». Mientras no se eliminan las causas «rebajando la edad penal solamente se conseguirá rebajar la conciencia delictiva». ■

M. A



A pesar de que en los últimos años se han realizado valiosas investigaciones sobre el tema de la burocracia en España, sigue existiendo un conocimiento bastante vulgar de la misma muy generalizado. Puede afirmarse que la Administración Pública se ha puesto de actualidad; los programas políticos de todos los partidos, los amplios debates parlamentarios, las declaraciones del Gobierno, etc., han recogido el asunto convirtiéndolo en tema común. Sin embargo, muchas de las alusiones a diversos aspectos de la burocracia tienen un carácter muy vago. Uno de ellos es el poder de la burocracia.

Frente a esta noción puede afirmarse que, en la realidad, los burócratas son en buena medida protagonistas del poder político y económico y ello en un doble sentido. De una parte, porque existe una zona de las instituciones estatales, el aparato administrativo, donde la burocracia se mueve en su propio terreno y donde ejerce un poder político que trasciende a todos los ámbitos y, naturalmente, al económico. De otra parte, porque la burocracia desborda el ámbito del poder que le es propio y peculiar e invade los de carácter político y económico, mediante su presencia en el Parlamento, los cargos de nombramiento político y los Consejos de Administración de las grandes empresas.

No me voy a referir a la presencia de burócratas en el Parlamento, en el Gobierno y otros órganos de poder político, por entender que esto es algo sobradamente conocido. Baste señalar el dato de que en repetidas ocasiones ha habido mayoría de burócratas entre los miembros componentes del Gobierno.

Me voy a referir específicamente al poder económico de la burocracia teniendo en cuenta a la gran empresa española y las relaciones entre los grandes empresarios, depositarios en gran medida del poder y los burócratas.

Los datos publicados sobre la presencia de los burócratas en el campo específico de los capitalistas, es decir, los Consejos de Administración de las grandes empresas, revelan que existe un considerable número de personas que reúnen la doble condición de burócratas y miembros de Consejos de Administración. Aún más, la presencia de burócratas es considerablemente mayor si, en vez de la cifra relativa a consejeros de una sola empresa, se atiende al numeroso grupo de personas miembros de los Consejos de Administración de dos, tres, cuatro o más empresas. Estos consejeros a título múltiple dominan puestos en empresas de distintos sectores económicos. Ade-

más existe un número apreciable de personas que, siendo simultáneamente miembros de los consejos de las grandes empresas públicas y privadas, lo son en empresas del mismo sector económico.

Está claro que existe una fuerte identificación burócratas-empresarios. Es más, cuanto más importante es el grupo de personas considerado, más importante es también el peso específico de los burócratas, lo que demuestra hasta qué punto es altamente cualificado el grupo de consejeros burócratas.

Por otra parte, la presencia de consejeros no burócratas y de consejeros extranjeros en las empresas públicas junto al elevado número de consejeros simultáneamente burócratas y empresarios privados, que hemos señalado, demuestra la inexistencia de fronteras entre la empresa pública y privada en España y pone de manifiesto la estrecha colaboración del capital público y privado, así como las vinculaciones con el capital multinacional.

Una vez esbozado el poder económico de los burócratas, interesa concretar quiénes son los burócratas. Pues bien, hay que señalar que el poder económico de la burocracia está localizado en determinados cuerpos de funcionarios, los cuerpos de élite, pues a ellos pertenecen la mayoría de los burócratas-consejeros. Concretamente corresponde a los Cuerpos de Abogados del Estado, Ingenieros de Caminos, Ingenieros de Minas, Catedráticos de Universidad e Ingenieros Industriales la mayor presencia de consejeros, perteneciendo un número importante de ellos a varios cuerpos. También hay que constatar la presencia de burócratas militares, aunque en menor cuantía que los civiles. Es decir, el poder económico de la burocracia se concentra en un grupo de miembros de un pequeño número de cuerpos burocráticos y en los Consejos y Armas del Ejército.

En conclusión, existe en España una gran concentración del poder económico, en el que los burócratas tienen una participación importantísima. Sin embargo, ese poder no viene determinado únicamente por la influencia de los poderes públicos sobre el capitalismo ni de los capitalistas sobre los burócratas, sino más bien por el hecho de que, en gran medida, los grandes empresarios y los grandes burócratas son los mismos.

Por otra parte, a través de la presencia de capitalistas extranjeros en ella, la gran empresa española constituye el nexo del capitalismo multinacional con el español. ■

J. L. O.

A LA MAGISTRATURA DE TRABAJO

DANIEL

Así, como el título, comienza una demanda que un trabajador cualquiera plantea contra la empresa en que presta sus servicios, iniciando con ella un procedimiento judicial que terminará en el mejor de los casos con la sentencia del magistrado reconociéndole o no los derechos que reclama, ya que si la sentencia es favorable al trabajador en el sentido de percibir una cantidad de dinero por ejemplo y la empresa no paga, se inicia la ejecución de la misma que se podría denominar otro proceso dentro del mismo por lo lento, engorroso y a veces kafkiano en la forma de desarrollarse.

El procedimiento indicado se desarrolla en la jurídica casa a la que se dirige la demanda y tiene unas características especiales que merecen analizarse, tanto en lo que se refiere al personal que por ella pulula, como a la institución en sí que representa.

El poder económico de la burocracia



El personal. Los Magistrados

En este tema, nos encontramos con un variopinto de personajes que condimentan el desaguisado jurídico que en ella se cuece. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, los magistrados, esa rara mezcla de probos doctores jurídicos enfundados en un luto eterno y con una aureola de autoridad que el Estado les confiere, personas que al quitarse ese cascarón sólo les queda una licenciatura a su favor y para de contar. Este personaje al que acabamos de generalizar, si lo concretamos, nos encontramos con señores que llegan a las 12 horas de la mañana y se cepillan entre 20 y 30 juicios en hora y media, aquellos que antes de comenzar el juicio prejuzgan delante de las partes presionando de esta forma para que se llegue a un pacto y evitarse el trabajo de hacer una sentencia, aquellos que interpretan las leyes que conceden derechos a los trabajadores de una forma restrictiva a quienes se les puede aplicar la célebre frase «mientras más te agachas, más se te ve el culo», quien persigue a las funcionarias que trabajan en la casa con un entusiasmo digno de su ya lejana juventud, aunque celebrando juicio es un celoso guardián de las formas procesales, y, en fin, aquel que ostenta su condición de progresista demostrando con ello que el sistema es capaz de integrarlo todo. De todas formas, siendo superficialidades las que acabamos de exponer, y sin ironías, al personaje la ley le confiere una autoridad sin límites dentro del juicio laboral, o sea árbitro indiscutible y con mucha frecuencia irracional de la lucha de clases en quien el Estado deposita su autoridad, para que no nos olvidemos de dónde procede la misma en un «estado de derecho».

Los Ordenanzas

Pasemos revista, en segundo lugar, a otro de los personajes que a pesar de ser simples trabajadores del Estado, al verse enfundados en azules uniformes con dorados en sus extremidades superiores, crecen de su envergadura inicial hasta erigirse en magistrados de antesala. Estos señores, a quienes se les dirigen todas las preguntas provenientes de aquellos que no conocen la casa, y al encontrarse con un uniforme que no es de guardia civil, intentan encontrar respuesta a su interrogante. Es común encontrarse con uno o varios trabajadores preguntando a un ordenanza, y éste, de forma inmediata adopta postura con mirada

puesta en el horizonte de las paredes de la casa, o sea sin mirar a su interlocutor, y comienza una exposición utilizando palabras del lenguaje técnico-jurídico que ha aprendido, logrando con ello desorientar aún más al interlocutor, que termina haciendo de forma continua un signo afirmativo como única respuesta y volviendo por donde había entrado con el mismo interrogante. Algunos, los más antiguos, cuando hablan con los letrados o similares repiten, todavía, aquello de que «con Franco vivíamos mejor», sin disimular cuál es el origen de su actual «status social».

Los Abogados

Otro de los personajes de la casa, quizá el más conocido, dado que parte de ellos, los laboristas, tienen mucho que ver con la historia más reciente del movimiento obrero, son los señores letrados. Enfundados también en un negro y vitalicio andar por las magistraturas —nos referimos a las togas—, estos personajes defienden uno de los intereses de la lucha de clases, o los dos, según los casos, constituyendo un estamento muy diverso. Dentro de los abogados que defienden empresas nos encontramos desde aquel que todavía conserva el clásico bigotito facha esbozando una especie de sonrisa que parece que oliera continuamente a mierda, hasta aquel que sostiene que el ser profesional comporta defender cualquier caso, afianzando su tesis en el liberalismo, o sea la derecha. En el otro lado nos encontramos con los laboristas, o sea aquellos que defienden únicamente trabajadores pero con una continua contradicción a cuestas, ya que si por una parte existe una coherencia entre la ideología que sustentan y el trabajo que desarrollan, por otra cabe la pregunta de si no se le hace un grueso favor al Estado al llevar a su redil los conflictos sociales existentes para que éste los resuelva y con ello se logre la paz social, o lo que es lo mismo la paz para los de arriba.

El Resto

Por último nos encontramos con los consabidos buitres, o sea aquellos que compran en las subastas los bienes de las empresas embargadas por falta de pago, que constituyen una verdadera mafia dentro de la casa con el consentimiento tácito, o a veces expreso, de funcionarios o magistrados. Funcionarios que llevan el trabajo administrativo, de los cuales se destacan los más antiguos que al conocer por la vía de hecho todas las tretas legales, son dados a hacer favores previo pago de

«minuta», o mantienen una rara amistad, por no llamarla convivencia, con los buitres antes descritos, y algún que otro personaje que por su escasa importancia se nos queda «ex profeso» en el tintero.

La Institución

Esta casa, que tal como comenzábamos con la descripción de personajes, es donde se cuece el desaguisado jurídico del procedimiento laboral, representa uno de los poderes en donde descansa, nunca mejor dicho, el poder popular. Nos referimos al poder judicial, que junto con el poder ejecutivo y el legislativo componen el Estado de derecho, o sea el Estado de la burguesía. Es la institución que junto con el Ministerio de Trabajo cumplen la función de entrometerse en la lucha de clases y terminarla en cada conflicto específico, a través de resolución administrativa o sentencia judicial, devolviendo a su cauce legal las desbordadas aguas de la lucha obrera. Está claro que es invulnerable en tanto en cuanto se le trate de reformar desde dentro del sistema, ya que en el mejor de los casos cambiarían las formas sin tocar el fondo que constituyen las leyes, pero por el contrario es vulnerable si se le margina, si no se utiliza su función mediatizadora, autoritaria y resolutoria, si se utiliza en concreto la acción directa, aunque es preciso reconocer que en las actuales circunstancias es difícil lograrlo, dado la absoluta desmovilización que existe en el movimiento obrero. ■

D.



TECNOBUROCRACIA Y TEORIA ANARQUICA

En este artículo trataré un problema específico: ¿de qué modo y por qué razón los anarquistas han llegado a formular los análisis y reflexiones esenciales que les han permitido, desde fines del pasado siglo, ver en la tecnoburocracia la nueva clase dominante? Ya he desarrollado las líneas maestras de este tema desde un punto de vista histórico (1), pero aquí trato de repensar desde dentro las bases epistemológicas de este hallazgo. En otras palabras, este texto se propone discutir las razones últimas, en cierto sentido irreductibles, que constituyen las estructuras elementales del pensamiento anárquico (2), las cuales han permitido este descubrimiento entre otros.

(1) En mi artículo «Anticipazioni anarchiche sul nuovo padronato», *Interrogazioni* 6, marzo 1976.

(2) Conservamos el «anárquico» del original italiano, en lugar del «anarquista» habitual en castellano, pues la homogeneidad escolástica que el «ista» connota queda denunciado en el mismo artículo. —N. del T.



antes de seguir, sentaría una premisa epistemológica: el pensamiento anárquico no se presenta de una manera homogénea. Su evolución histórica refleja inevitablemente la pluralidad de intereses que él reúne en torno a polos científicos e ideológicos que no siempre pueden reducirse a una misma y única crítica, a un mismo y único proyecto. Hay una enorme distancia entre un Stirner y un Proudhon o un Kropotkin, entre un Tucker y un Malatesta o un Merlino.

Tal discontinuidad obliga a veces al historiador a recomponer y resaltar la lógica que se deriva de esas estructuras elementales, las cuales sí son comunes al conjunto del pensamiento anárquico. El texto que sigue será pues esencialmente ideológico y sacará a la luz esta lógica en el caso particular del fenómeno de «los nuevos amos» (*).

En cualquier caso hay un hilo conductor que puede unificar la anticipación de la tecnoburocracia por los anarquistas. De naturaleza puramente ideológica, acaso sea el único elemento universal en el pensamiento anárquico: la crítica del poder en tanto que tal. Es desde este punto de vista desde el que me parece posible explicitar la andadura del anarquismo histórico.

Ello nos permitirá explicar desde el interior cómo el pensamiento anárquico ha llegado así a identificar la tecnoburocracia. Sin hacer distinción, voluntariamente, entre elementos ideológicos, teóricos y científicos, intentaré reconstruir las dos etapas fundamentales de este descubrimiento: 1.º, la determinación de las estructuras socio-económicas, y por tanto históricas, del poder tecnoburocrático —lo que conduce a la descripción sociológica de la clase portadora de tal proyecto— gracias a 2.º, la crítica ideológica del poder mismo, del poder en tanto que tal.

El poder de la ciencia/la ciencia del poder

Estas dos etapas, que se distinguen sobre todo en la reconstrucción de la relación entre socialismo autoritario y

utilización monopolística de la ciencia en la división jerárquica del trabajo —en particular la división vertical entre trabajo manual y trabajo intelectual—, exigen por tanto dos direcciones de investigación. Estas parecen diverger radicalmente en ciertos aspectos, en la medida en que una definición del poder puro, en términos «absolutos», puede parecer profundamente contradictoria con la necesidad de una definición histórica de sus términos y de sus características socio-económicas. La primera dirección tendería, en cierto sentido, a dar una imagen fija de la naturaleza del poder, mientras que la segunda no lo consideraría más que en las secuencias temporales, móviles, cambiantes, de su evolución histórica. Pero el anarquismo resuelve en parte esta contradicción mediante su descubrimiento esencial del vínculo analógico que existe entre el carácter universalista propio de la ciencia —sobre el que se funda el poder tecnoburocrático— y el carácter mismo del poder en tanto que tal. La utilización monopolística de la ciencia por una élite específica, en el seno de la división jerárquica del trabajo, ha podido determinar históricamente el poder tecnoburocrático, pero ello no le ha impedido —más que a cualquier otra forma de poder— asemejarse a la forma y a la práctica del poder a secas. El carácter universalista de la ciencia, expresado por su naturaleza abstracta, le confiere la mayor y más objetiva capacidad de poder. Su poder es de hecho el poder más puro, el menos condicionado históricamente de cuantos hayan existido, puesto que la ciencia se expresa en un lenguaje formalmente universal, extensible a toda la tierra. Ninguna religión, ningún régimen económico o político ha tenido nunca esa capacidad de expansión casi infinita que ha tenido el poder de la ciencia de un siglo acá. Sólo la ciencia desborda toda particularidad, sólo ella es practicable en cualquier lugar. Todos los poderes históricos anteriores paldecen ante el poder científico.

En la época contemporánea el papel de la ciencia —entendida como un saber socialmente útil en la gestión política— se hace particularmente determinante de cara a objetivos de productividad o de control social. El capitalismo, que ha condicionado históricamente el nacimiento de la ciencia moderna, favorece por su naturaleza expansionista el desarrollo progresivo e irrefrenable del uso de la ciencia. Ésta, de carácter neutro, tiende a hacerse disponible para todo uso, para todo abuso. El cuerpo científico viene así a desligarse cada vez más, en sus determinaciones y articulaciones

institucionales, del cuerpo social y productivo. Este proceso de emancipación del condicionamiento histórico inicial señala el divorcio entre ciencia y trabajo; él va a ahondar la separación, ya socialmente importante, entre funciones directivas y funciones ejecutivas, entre actividades manuales e intelectuales. El poder de la ciencia aparece pues como congénito a la división jerárquica del trabajo social, que a su vez es, como veremos, congénita al poder tecnoburocrático (3).

El criterio de la crítica del poder en tanto que tal permite así a los anarquistas entender el papel en adelante autónomo de la ciencia y cómo sus adeptos, los intelectuales, pueden constituirse en clase autónoma, aunque en su origen sean servidores de la clase burguesa capitalista (4). El capitalismo condiciona a la ciencia en sus comienzos, pero no de manera permanente. Pues, una vez que la ciencia tiene la posibilidad de constituirse ella misma en centro de poder, su origen particular desaparece en la medida en que progresa su universalidad, en la medida en que desarrolla su manera de ser poder. De ahí proviene la noción de los intelectuales como clase, como una fuerza social que atraviesa no sólo el ámbito capitalista burgués sino también el ámbito proletario, sin solución de continuidad.

Pero si al proceso por el que la ciencia moderna se emancipa de su origen histórico corresponde un proceso de emancipación de los intelectuales en tanto que clase, ¿cómo justificar el término *clase* para explicar sociológicamente el fenómeno del ascenso de los intelectuales? Los anarquistas no dan otra respuesta que aquella que consiste en desvelar su poder, en mostrar su denominador común: todos los intelectuales son propietarios de saber. Los intelectuales —en la acepción que hemos dado a la palabra— son guardianes, depositarios, portadores, manipuladores y monopolizadores de la fuerza productiva más universal y más poderosa de la era contemporánea, la ciencia. Dos premisas, la ruptura histórica entre ciencia y capitalismo y la emancipación de la clase intelectual, han llevado al descubrimiento por los anarquistas de esta nueva forma de propiedad, la *propiedad intelectual*. Esta nueva forma de propiedad, como cualquier otra, se define a partir del análisis del poder. La definición anarquista de la propiedad no es otra que la extensión a términos históricos del concepto de poder.

Llegados a este punto, podemos intentar una primera explicación, parcial, de la relación entre socialismo autoritario y uso monopolístico de la

ciencia en la división jerárquica del trabajo. La crítica anarquista al marxismo se funda en la simple constatación siguiente: el socialismo (del que el marxismo es la expresión científica más coherente) se enfrenta, para destruirla, a una forma de propiedad particular, a la propiedad privada de los medios de producción bajo su forma jurídica y económica, y no a toda forma de propiedad. No destruye toda propiedad porque quiere destruir un poder histórico concreto (el del capitalismo burgués) y no el poder en tanto que tal. En la nueva sociedad de los socialistas autoritarios, se ha abolido la propiedad privada de los medios de producción pero subsiste la división jerárquica del trabajo, en particular la división vertical entre trabajo manual y trabajo intelectual, piedra angular de la nueva propiedad: la propiedad intelectual (5). Más allá de todas sus buenas intenciones, el marxismo se comporta pues históricamente como el vector natural de esta nueva forma de propiedad, como su ideología más propia. El poder que teoriza y defiende el marxismo —dictadura del proletariado, o dictadura del Partido sobre el proletariado, o incluso dictadura de una cierta élite intelectual sobre el Partido y sobre el proletariado— expresa a las mil maravillas un aspecto de esta nueva forma de propiedad en vías de constitución, en lucha contra la propiedad

burguesa. La élite dirigente del movimiento socialista legalista y autoritario más ampliamente, el conjunto del movimiento socialista y obrero, y más ampliamente, el conjunto del movimiento socialista legalista y autoritario aparecen pues como los vehículos históricos principales de la nueva dominación fundada en la burocracia (6).

Ciencia, jerarquía y meritocracia

En el momento en que el pensamiento anárquico pone en evidencia la propiedad intelectual y descubre así la contradicción fundamental del poder tecnoburocrático, es decir, la división vertical entre trabajo manual y trabajo intelectual —contradicción nacida del conflicto entre la tendencia universal de la ciencia y su utilización necesariamente monopolística— dicho pensamiento desvela entonces los dos modos epistemológicamente diferentes de abordar la cuestión de la desigualdad y la de la explotación. El término *explotación* apunta a una realidad, histórica, y por tanto particular; el término *desigualdad* apunta a una abstracción. Es decir, para explicar y entender la explotación siempre hay que describirla en su historicidad; mientras que el término abstracto, el



(*) Traducimos el «padrone» italiano o «patron» francés por «amo», pues este término refleja mejor el fenómeno estudiado que el de «patron», cuya referencia empresarial queda tan desbordada que haría buena incluso la tercera acepción posible, la del «patron» o santo protector en la mitología católica. — N. del T.

(3) P. J. PROUDHON, *De la création de l'ordre dans l'humanité*, Paris 1843; *De la justice dans la révolution et dans l'Église, sixième étude: le travail*, Bruselas/Leipzig 1860. M. BAKUNIN, «l'instruction intégrale», *Oeuvres*, t. V, Paris 1904. P. KROPOTKIN, *Champs, usines, ateliers*, Paris 1910.

(4) Sobre todo es Bakunin quien comprende, siguiendo la pista stirneriana de la crítica la divinización del saber —crítica basada en la alienación definida por Feuerbach—, «Les endormeurs», *Oeuvres*, op. cit. Así como, en la línea individualista, E. ARMAND, *Initiation à l'individualisme anarchiste*, Paris 1923.

(5) Según Bakunin, la evolución histórica del marxismo vendrá a dar en el gobierno «de una nueva y muy restringida aristocracia de auténticos o supuestos sabios... (que) tomarán en sus manos las riendas del gobierno porque el pueblo ignorante está necesitado de una buena tutela; (que) crearán una Banca del Estado que concentrará en sus manos la totalidad del comercio, de la industria, de la agricultura e incluso de la producción científica, mientras que la masa del pueblo se dividirá en dos ejércitos: el ejército industrial y el ejército agrícola, bajo el mando directo de los ingenieros del Estado que formarán una nueva casta político-sabía privilegiada». (*Etatisme et anarchie*, Archives Bakounine III, Leiden 1967, pp. 347-349). Se encuentran ideas análogas en Merlino, Malatesta, Kropotkin y otros.

(6) Ver en particular lo que dice W. Machajski, citado por M. NOMAD, *Aspects of Revolt*, New York 1961, y *Apostles of Revolution*, New York 1961.

modelo general de desigualdad es aplicable a cualquier realidad histórica. Y es precisamente porque el primer término debe describirse en su particularidad en tanto que el segundo puede concebirse como una forma pura antes de ser percibido en la realidad, por lo que puede decirse que la explotación es un término histórico y la desigualdad un término universal.

Una vez admitidos los dos modelos epistemológicos necesarios para tratar la cuestión de la explotación y la de la desigualdad, la abstracción de la proposición anarquista clásica «crítica del principio de autoridad» se ilumina al aproximarla a ese otro concepto abstracto, pero universal, que es la desigualdad. ¿A qué realidad concreta se aplica entonces esta proposición? A una realidad que, materialmente, cambia a lo largo del tiempo pero que permanece estructuralmente semejante a sí misma: la división jerárquica de cualquier actividad humana. Es esta división jerárquica la que constituye en toda sociedad el «principio de autoridad». La división jerárquica del trabajo social es la estructura elemental de la autoridad. A su vez, de todas las actividades humanas, la más importante y la más decisiva en cuanto a la explotación del hombre es la actividad productora, económica. La explotación no es pues otra cosa que la móvil realidad de los diversos modos de ser históricos de la desigualdad.

En la época actual, la división jerárquica del trabajo social es la que representa para los anarquistas la estructura elemental de la desigualdad entre los hombres, precisamente porque se ve atravesada por el uso monopolístico de la ciencia, es decir, por un poder que se expresa en los términos más neutros y más generales posibles. Esta estructura realiza más que ninguna otra la vocación del «principio de autoridad». En este sentido, el término estructura sugiere una imagen geométrica, la de una pirámide que puede representarse formalmente a lo largo de toda la historia humana, imagen que se deduce de los rasgos comunes a todo poder constituido y de aquellas formas que se presentan como constantes en todas las situaciones históricas.

A diferencia del análisis de la desigualdad, el análisis de la explotación debe ceñirse a todos los recovecos de la historia para aplicarse a cada situación particular. Esto demuestra la absoluta historicidad de la explotación capitalista, fenómeno particular y limitado en el tiempo y en el espacio, y que en consecuencia no puede ser causa primera ni determinante de la desigualdad social, política, económica, religiosa, civil, étnica, racial, geográfica, etc., entre los hombres. Ahí está además el criterio de interpretación que nos permite comprender y explicar por qué el anarquismo no es

una teoría crítica específica del capitalismo. En efecto, el capitalismo es una forma histórica, que ha sucedido a otra, de explotación del hombre por el hombre; la división jerárquica del trabajo, en cuanto tal, es la forma estructural de la desigualdad entre los hombres; aunque la primera pase, la segunda permanece. Así el anarquismo analizará históricamente la explotación bajo todas sus formas, y analizará estructuralmente la forma menos condicionada históricamente, la más permanente, de desigualdad social entre los hombres, es decir, la división jerárquica del trabajo. Esta no determina las formas de explotación pero sanciona en ellas lo sustancial.

Para el anarquismo, la relación entre desigualdad y explotación no equivale a la relación marxista entre estructura y superestructura. La desigualdad es ciertamente la causa de la explotación, la precede y es omnipresente, pero precisamente por su forma jerárquica «neutra» no puede estabilizar ninguna forma derivada. En la epistemología marxista, la estructura económica produce sus superestructuras políticas, jurídicas o culturales; en la epistemología anarquista estas proposiciones no se sostienen puesto que la estructura económica es a su vez una forma histórica que adopta la explotación del hombre por el hombre en la división jerárquica de toda actividad humana. En otras palabras, la estructura económica es una categoría de poder y no el poder mismo.

El anarquismo explica así la historicidad de la explotación capitalista sociológicamente y no económicamente. Esta explicación se deriva de la división jerárquica del trabajo y se aplica a la explotación capitalista, pero también a cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. El marxismo generaliza un momento histórico y lo hipostasía, partiendo de la explotación para explicar la desigualdad. El anarquismo sigue el camino inverso, historiza el principio universal de autoridad, lo que le permite explicar la explotación por el criterio de la desigualdad.

Si el capitalismo no es la causa de la desigualdad entre los hombres, es posible entonces que su muerte no coincida necesariamente con la llegada del socialismo, entendido como un desarrollo infinito de la libertad y la igualdad. El descubrimiento de la absoluta historicidad del capitalismo hace previsible otra evolución cuando el Partido dirige las masas populares y cuando la división jerárquica del trabajo revolucionario se aplica al propio proceso de liberación humana. La aparición de la tecno-burocracia como nueva clase dirigente es entonces un resultado necesario y perfectamente

lógico, una vez que resultara hegemónica la corriente autoritaria en el movimiento revolucionario y socialista.

Una vez más, el criterio epistemológico en que se funda este hallazgo es la crítica ideológica del poder en tanto que tal. La clase tecnoburocrática está compuesta sobre todo por intelectuales, cuyos privilegios no les vienen de una propiedad jurídica o económica sino de la propiedad del saber. Si asociamos esto a lo que decíamos de la dimensión universal del poder científico, se entenderá cómo el análisis del poder tecno-burocrático se articula con el criterio epistemológico de la crítica del poder en tanto que tal. Desde el momento en que no se confunde la desigualdad con una particular forma de explotación económica en un momento histórico dado, el análisis de la división jerárquica del trabajo puede llevar a descubrir la naturaleza del poder tecno-burocrático así como, más generalmente, la naturaleza de todo poder.

El poder tecno-burocrático combina la ciencia en sus aplicaciones (la técnica) con su disponibilidad para el uso administrativo bajo su versión monopolista e institucional (la burocracia). Esta combinación, que no logra superar la contradicción entre las dos exigencias de esta dominación (el carácter universal de la ciencia, aquí bajo aspecto técnico, y su utilización administrativa), encuentra su expresión más perfecta en el proyecto socialista autoritario. El Estado es el sujeto político principal de tal proyecto, donde la planificación económica y la supresión del mercado entrañan necesariamente una fusión entre poder económico y poder político (7); él generaliza al máximo la vocación centralizadora de esta combinación, incluso aunque no llegue a reconciliar por entero técnica y burocracia (8).

El descubrimiento de la contradicción del poder tecno-burocrático nos permite dar un paso más en la definición de la ideología que mejor justifica esta contradicción: la meritocracia. Teoría de la desigualdad natural entre los hombres, que en consecuencia legitima la aristocracia de la inteligencia, la ideología meritocrática puede justificar el que todos tengan acceso a los recursos universales de la ciencia (a la técnica) por la necesidad de que éstos sean administrados por los «mejores». Tal ideología no deja de tener sus vínculos con el socialismo autoritario.

Puede desvelarse otra analogía aún entre la teorización del poder de la ciencia y la desigualdad natural entre los hombres, tal y como ésta surge precisamente de la teorización de la ideología meritocrática. La meritocracia sanciona la desigualdad que, de entre todas, más se aproxima a la des-

igualdad en tanto tal, del mismo modo que el poder de la ciencia es aquél que —como hemos visto— expresa, mejor que ningún otro poder histórico, la idea y la práctica del poder en tanto tal. Así la meritocracia viene a sancionar propiamente la máxima desigualdad posible, dado que la desigualdad natural, una vez admitida, es irremediable e irreductible (9).

Pero el anarquismo no ha previsto y entendido la llegada de la tecno-burocracia tan sólo por su concepción dinámica de la desigualdad fundada en el reconocimiento de tres clases sociales. El análisis de la división jerárquica del trabajo ha llevado a una división sociológica de las clases según las funciones de dirección o de sumisión de los individuos que las componen. En el seno de esta división, la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual adquiere una importancia singular, que ahonda e incluso ilumina las diferencias jerárquicas entre las funciones de cada tipo. Esta distinción decisiva permite llegar, como hemos visto, a una definición de propiedad intelectual fundada en el papel esencial del trabajo humano en asuntos de fuerza y de poder: el trabajo humano como capacidad de dominio sobre las cosas y los hombres, como actividad decisiva de control, en definitiva, como posibilidad permanente de poder.

Destaquemos que la analogía entre el poder de la ciencia y la desigualdad natural entre los hombres proviene, y no por casualidad, de un criterio universalista. El poder de la ciencia es el mayor de cuantos se conocen porque es el más universal, del mismo modo que la teoría de la desigualdad natural es la más desigualitaria posible, dado que hace referencia a la naturaleza, cuyas determinaciones y fenómenos escapan a la historia y a las tentativas humanas de modificar la realidad. La ideología meritocrática presta hoy un gran servicio a la división jerárquica del trabajo, puesto que la da por natural. En este sentido, las clases sociales, que son expresión y consecuencia de la división jerárquica del trabajo, se convierten en diferencias naturales en una sociedad «socialista» donde la colectivización de los medios de producción ha limpiado el terreno de todo obstáculo histórico a la igualdad social entre los hombres. El poder tecno-burocrático aparece en semejante sociedad como mera «administración de las cosas» y no como «gobierno de los hombres», un poder perfectamente legítimo por naturalmente necesario (10).

Los anarquistas ven un lazo de lo más lógico entre los elementos materiales e ideológicos del poder tecno-burocrático: el poder de la ciencia en

su utilización monopolística, la división jerárquica del trabajo social y la meritocracia son tres piezas de un mismo mosaico que ha encontrado su mejor expresión en el fenómeno histórico del socialismo autoritario.

Volvamos brevemente a la distinción entre explotación y desigualdad. Hemos visto que gracias a ella el anarquismo ha podido ver en el capitalismo una forma histórica de explotación, sucesora de otras, y no la causa fundamental de la desigualdad (la cual se funda en la división jerárquica del trabajo social). Así ha podido evitar la escatología marxista que, al dar al socialismo por heredero histórico del capitalismo, no ha previsto la llegada de una nueva clase, ni proletaria ni capitalista, a la escena de la historia, la cual iba a reemplazar a los capitalistas para mejor someter a los proletarios. La distinción entre las realidades históricas de explotación y la repetición formal de la desigualdad ha permitido así comprender que, desde una perspectiva diacrónica, hay dos clases que se manifiestan siempre en la lucha por el poder: la una para mantenerse en él y la otra para desalojarla, mientras que, hasta el momento, hay una tercera clase dedicada a ser útil a la clase ascendente, encadenándose así a una sumisión eterna. No se oponen pues dos clases en la historia, sino tres. La lucha de las primeras podrá definirse como lucha de clases, la de la tercera es lucha revolucionaria (11).

En este ánimo, existe una correlación evidente entre el análisis bipolar del marxismo, que se presenta como el apóstol de la lucha de clases, y la lucha por el poder en tanto tal, puesto que la lucha de clases siempre estaría en función de la conquista del poder y



(7) Citaremos de nuevo a PROUDHON, *De la capacité politique des classes ouvrières*, Paris 1885; F. S. MERLINO, *Pro e Contro il Socialismo*, Milano 1897; P. KROPOTKINE, *La science moderne et l'anarchie*, Paris 1913; V. TCHERKESSEFF, *Pages d'histoire socialiste*, Paris 1896.

(8) Ver P. J. PROUDHON, *Manuel du Spéculateur à la Bourse*, Paris 1857, pp. VII-XI y pássim.

(9) «¿Quiénes son, se pregunta Eliseo Reclús, los que se abalanzan hacia el poder para reemplazar a esta élite de nacimiento o de fortuna por una nueva élite, digamos, de la inteligencia? Son aquellos mismos que reivindican para los hombres de genio, es decir, para sí mismos, la dirección política de la sociedad. La expresión «gobierno de mandarines» se les ha aplicado crudamente». (*L'évolution, la révolution et l'idéal anarchiste*, Paris 1898, p. 71 y ss.) Es la misma crítica que hace Kropotkin hacia el sansimonismo (*La science moderne et l'anarchie*, op. cit.).

(10) Malatesta precisa a este respecto: «El que domina las cosas domina también a los hombres; el que gobierna la producción también gobierna al productor; el que determina el consumo es también dueño del consumidor» (Scritti Scelti, Nápoles 1954, p. 48).

no de su destrucción. Es fácil observar que, mientras que la concepción marxista atribuye a un determinismo histórico la resolución de la lucha de clases, los anarquistas no ven tal resolución sino en la lucha revolucionaria. Así se explican el determinismo de la primera escuela y el voluntarismo de la segunda. Y esto explica sobre todo la posición anarquista respecto de la lucha de clases, posición estructural y no histórica. Es decir, los anarquistas se interesan en definir las clases en su relación jerárquica. Su definición se funda en el criterio «formal» del principio de autoridad, que puede trascender las determinaciones históricas de la época moderna (nobleza, burguesía, proletariado, tecnoburocracia) y aplicarse a toda sociedad histórica pasada, presente o futura.

Subrayemos pues lo esencial de la metodología anarquista: el examen de la naturaleza política y social de la nueva clase tecno-burocrática lleva forzosamente al examen del poder en cuanto tal; y viceversa, no se llega a esta referencia ideológica general más que si se parte de la constatación científica de que el nuevo poder tecno-burocrático acabará por equivaler, en sustancia, a cualquier otro poder anteriormente constituido, dejando así abierta la única alternativa revolucionaria digna de adoptarse: la destrucción del poder en cuanto tal. *

N. B.

(traducción EMMANUEL)

(11) Según Kropotkin «dos grandes corrientes prepararon e hicieron la Revolución (francesa). Una, la corriente de ideas —el tropel de ideas nuevas sobre la reorganización política de los Estados—, provenía de la burguesía. La otra, la de la acción, surgía de las masas populares, de los campesinos y de los proletarios en las ciudades, que querían obtener mejoras inmediatas y tangibles en sus condiciones económicas. Y cuando estas dos corrientes se encontraron, en un objetivo en principio común, cuando se prestaron mutuo apoyo durante algún tiempo, entonces fue la Revolución». La «corriente de ideas» es la burguesía que asciende al poder detentado hasta entonces por la nobleza; la «corriente de la acción» es la clase inferior, en lucha por destruir el poder. (P. KROPOTKINE; *La Grande Révolution*, Paris 1909, p. 1).

«Por mucho que la fuerza principal de todas las revoluciones importantes, escribe Archinov, reside en los obreros y los campesinos que hacen grandes e innumerables sacrificios por su triunfo, los gúds, los que organizan los medios, los ideólogos de los fines fueron invariablemente, no obreros y campesinos, sino elementos al margen: elementos que les eran extraños, generalmente intermediarios, vacilantes entre la clase dominante de la época moribunda y el proletariado de las ciudades y los campos. (...) El hecho fundamental que destaca (de la Revolución rusa) es —con ayuda de los mayores sacrificios, sufrimientos y esfuerzos revolucionarios de obreros y campesinos— la toma del poder político por un grupo intermedio: la «intelligentsia» socialista revolucionaria, en realidad demócrata-socialista». (P. ARCHINOV, *L'Histoire du mouvement makhnoviste*, Paris 1923, pp. 45-47).

EL PODER

En España hay dos territorios que tienen la suerte de ser autónomos de España: se llaman Gibraltar y Andorra. Todos los demás territorios son heteronómicos. Esto lo notan fácilmente los turistas, pues en Gibraltar y en Andorra no existen individuos de verde con sombrero de charol de tres picos, armados hasta los dientes. En cambio, en los territorios heteronómicos, sólo al llegar a la frontera o al aeropuerto, los turistas tropiezan con estos individuos. Muchos de ellos piensan que son toreros (*matadores*, en inglés).

El más viejo de los territorios autónomos, Andorra, no es propiamente un territorio autónomo de España. O, mejor dicho, es a la vez un territorio autónomo de España y de Cataluña (que es a su vez un territorio heteronómico de España). En Andorra no hay ni esos individuos que sorprenden a los turistas ni hay tampoco mozos de escuadra. Mozos de escuadra es, como si dijéramos, el nombre de los mozos de cuerda de la Generalitat de Cataluña. La Generalitat de Cataluña es, como si dijéramos, la Diputación Provincial de Burgos, pero en Barcelona. Así como Andorra, territorio autónomo, tiene como jefes a un obispo que no vive en el país y al presidente de la República francesa, que vive en París (en esa ausencia se nota la autonomía), Cataluña tiene como jefes al Capitán General y al Súper-Gobernador Civil, que viven en Barcelona, en lo cual se nota la heteronomía.

En Barcelona vive también el llamado presidente Pujol, como si dijéramos el mozo de escuadra o de cuerda del Capitán General, encargado de subir y bajar la bandera bicolor de la Monarquía Española. En Andorra no hay banderas españolas, ni monárquicas ni republicanas, otro signo evidente de autonomía.

El segundo territorio autónomo de España es Gibraltar, que no depende ni del Estado español, ni de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, situada en un pabellón de estilo pseudo-morisco en Sevilla, es una de las atracciones de los turistas que pasean por el Parque de María Luisa. Su

competencia exclusiva es alimentar de altramuces a las palomas que vuelan y cagan a su alrededor.

Hubo una vez otro territorio autónomo, Menorca. Una reciente encuesta en Menorca mostró que el 97% de la población era favorable a volver a su estado autónomo, que gozó en el siglo 18. El otro 3% eran turistas irlandeses. No es de sorprender tanto que otra encuesta realizada en Gibraltar, acerca de si los gibraltareños preferían asociarse a la Corona Española por vía del artículo 143 o por la vía del artículo 151, dio como resultado un 98% que preferían antes la vía del artículo *mortis* que convertirse en territorio heterónimo en los términos del Título VIII de la Constitución de 1978. El resto eran también irlandeses, que no cuentan.

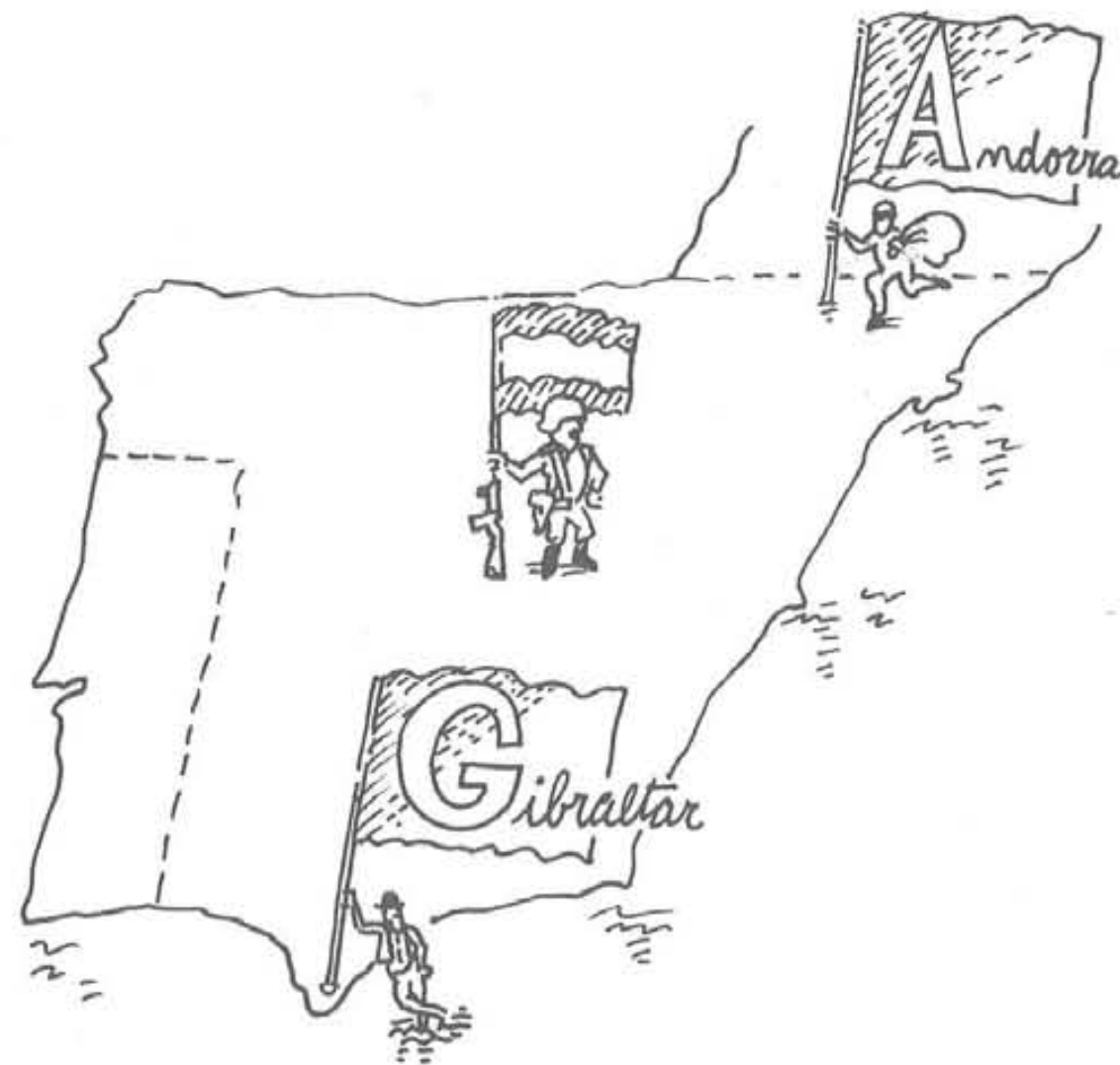
Hay también algún pequeño enclave autónomo en el territorio de los antiguos vascos, paradójicamente, pues es allí donde más densidad hay de individuos de sombrero charolado. Pero éstos están guarnecidos en cuarteles, mientras a su alrededor se va extendiendo la mancha autonómica. Con el tiempo, puede ser que lleguen a una verdadera autonomía, al estilo de Andorra por lo menos, siendo regidos (desde lejos y en teoría) por el Obispo de Pau (probablemente Monseñor Tuñón de Lara) y el presidente de la República Española (el viejo profesor Tierno Galván) —de hecho, el poder de estos gobernantes será escaso.

Por el momento, pues, no puede hablarse de autonomía en los territorios del Estado español —siendo territorios del Estado español, son por definición heteronómicos respecto al Estado español—. En esto, los territorios son como los individuos —si son individuos de un Estado, no pueden ser individuos autónomos.

En España hay pocos individuos autónomos; casi todos ellos son campesinos gallegos. Esto se nota en que ni contestan encuestas ni van a votar en referendums y elecciones.

Remontándonos a la historia (y sin entrar en casos como el vasco Lope de Aguirre o el indio Tupac Amaru, casos interesantes pues vascos e indios,

HETERONÓMICO



la misma lucha), hay otros ejemplos de territorios autónomos de España pero que no están ya en España. Hay muchos niños que no saben que una vez Cuba fue una parte de España, lo que no es de extrañar si se piensa que las Islas Canarias, a pesar del mar, son España, según los textos de EGB. Cuba se hizo autónoma de España en 1898, aunque luego haya sido heterónoma de los USA e incluso de la URSS. Un político de la época, el Felipe de entonces que se llamaba Sagasta, dijo que el ejército español lucharía hasta el último soldado y la última peseta para que Cuba tuviera

una verdadera autonomía —para eso era necesario matar a muchos cubanos anti-autónomos, es decir, independentistas. El ejército español, como queda demostrado, ha sido siempre partidario de las autonomías bien entendidas, es decir, de las heteronomías, al estilo del Protectorado de Marruecos —éste es otro interesante caso histórico de territorio autónomo (con Sultán y todo, mucho más que un Lendakari) que BICICLETA analizará otro día, cuando las Cortes del Reino discutan el estatuto de autonomía (es decir, de heteronomía con respecto a España y de autonomía con

respecto a Marruecos) de Ceuta y Melilla. Ifni y Río de Oro son otros ejemplos de territorios hoy autónomos de España, aunque con la mala suerte de ser heterónomos de Marruecos y Hassan el Cruel.

El asunto de las autonomías es, pues, bastante complicado. Pero se puede decir que si alguien tiene poder, otros, por definición, carecen de poder, y son heterónomos. «Poder autónomo» es una tautología o una contradicción. ■

J. G.

LA ADMINISTRACIÓN POR DENTRO

CARLOS RAMOS

¿Qué mecanismos hacen posible que la Administración tenga este poder omnímodo, que la Administración sea, como se suele decir, el 4.º poder?

Para empezar esta tarea, habría que decir que no se puede hablar de la Administración, en general, como poder, sino del poder que controla y dirige la Administración y que hace de ésta un poder dentro del poder del Estado: La Burocracia.

De esta manera se trata de cuestionar la imagen vulgar que tiene el ciudadano de la calle que identifica burocracia con papeleo y al burócrata con el funcionario de la ventanilla.

La burocracia es el sector de la Administración que participa y controla la gestión y toma de decisiones que se producen en la Administración pública, y se proyecta más allá de su ámbito. Este sector se corresponde con una élite de ejecutivos que, integrados en los altos cargos y cuerpos especiales de la Administración, constituyen la élite burocrática, ese cuarto poder al que nos referíamos al principio.

A su lado, y frecuentemente como miembros de esa élite, están los cargos de designación política, como son los Ministros, Subsecretarios, Directores Generales, Presidentes y Directivos de tantos y tantos organismos (hay un libro editado por Presidencia del Go-

bierno que recoge casi todos y que agrupa a más de 1.500).

Esta élite burocrática configurada en cada país con motivos de acontecimientos históricos diferentes, pero existente en todos ellos, en España, que es el caso que nos ocupa, tiene un desarrollo y estructuración perfectamente consistente, extendida, fortalecida y experimentada durante el franquismo, como suele ocurrir en todos los países en periodos de dictadura del tipo que sea, en que el poder altamente centralizado asume competencias y el control de multitud de funciones que de otra manera suelen ser competencias de organizaciones no estatales.

Entre sus características más peculiares está la «fagocitosis». El poder que ejerce, el control que realiza sobre todos los ámbitos sociales y las operaciones de todo tipo que esto le permite son tan amplios y ejercidos con tanta impunidad que esta situación crea un atractivo especial sobre todos los que se acercan a la élite, ya sean los hombres del poder político de turno, los nuevos ingresados en esos cuerpos funcionariales de élite o incluso el funcionario de a pie que a pesar de no poder acceder a la élite, sí aspira a beneficiarse de las migajas que ésta le otorga graciosamente a cambio de su silencio, su subordinación y fidelidad incondicional. (Solamente en estos ca-

sos se puede hablar de burócratas refiriéndose a funcionarios de «abajo». Evidentemente se trata de individuos —no pocos— a los que se les podría aplicar aquel dicho popular: «eres más tonto que un obrero de derechas»). Por esta razón es difícil encontrar a personas que por alguna razón se hayan acercado al ámbito de intervención de la burocracia que no hayan sido rápidamente «adscritos», engullidos o al menos neutralizados en sus intenciones innovadoras... si es que realmente las tenían.

Naturalmente no es de extrañar que organizaciones políticas o sociedades muy características como la masonería o el Opus, hayan puesto sus ojos en la burocracia y luchan por su control como la forma más fácil de conquista fáctica del poder estatal. Los sondeos de opinión para determinar la ideología o adscripción política de los burócratas dan como resultado mayoritario la «no vinculación ideológica» o la vinculación a ideologías conservadoras o reaccionarias: es decir, todos de derechas. Pero, es curioso observar cómo aquellos que llegan a estos puestos de poder burocrático, perteneciendo a ideologías de izquierda (socialistas o comunistas porque la otra izquierda no llega a estos puestos) desarrollan las mismas pautas de comportamiento que los demás. Es decir, pesa más la adscripción a la élite que a determi-

nada ideología. Es un caso más de la fagocitosis de la que hablábamos. Además, ya se sabe que tratándose de la conquista del poder, a determinadas ideologías, todos los medios le parecen buenos... Se podrá entender fácilmente que en el caso de la Logia italiana P-2 no es un caso aislado, sino todo lo contrario.

Otra peculiaridad sobresaliente es lo que podríamos llamar la **complicidad corporativa** que ejercen entre sí los señores burócratas y que conlleva la defensa de sus múltiples intereses. La estructura funcional facilita esto en tanto en cuanto está organizada por cuerpos o estamentos con distintas atribuciones según el lugar que ocupen en el «ranking» jerárquico corporativo. Esta estructura favorece la separación entre los funcionarios y su mentalidad corporativista. Pero mientras que para los cuerpos del estado llano —los que hemos denominado funcionarios de a pie subalternos, auxiliares, administrativos— esto no significa más que un obstáculo para la necesaria unidad a la hora de defender sus intereses, para los cuerpos de élite es la gran ventaja, puesto que los une en la defensa de sus privilegios comunes, de sus prebendas y de las sevicias por ellos establecidas y que poco a poco se han ido institucionalizando hasta formar parte de sus derechos «adquiridos». Del poder de esta unión o complicidad corporativista da una idea el hecho de que hayan podido frenar la famosa «Ley de incompatibilidades» que pretendía recortar «un poquito» sus actuales pluriempleos, ordinariamente de alto nivel, que ejercen simultáneamente y de la forma más natural e impune. Como ejemplo baste citar el hecho de que un alto cargo de un ministerio ejercía su profesión «paralela» de abogado en el mismo despacho del ministerio... Estas situaciones son con frecuencia reproducidas por funcionarios de otros cuerpos de abajo, si no para ejercer otra profesión, en muchos casos, sí para realizar tareas domésticas, atender obligaciones familiares, etc... Los «jefes» no tienen fuerza moral para impedir lo que ellos hacen sistemáticamente. Otra manifestación de su poder de intervención es el hecho de que toda la normativa que regula la actividad funcional ha salido y sale de sus manos, con lo que aseguran claramente la defensa de sus intereses.

Antes de hablar del resto de los funcionarios es importante aludir a otro componente peculiar de la Administración Pública: **los cargos políticos**.

Cada vez que hay un cambio de Gobierno o de Ministro o incluso de algún Director General, los nuevos ocupantes de las poltronas pomposa-

mente llamados «cargos de designación política», «remodelan» su departamento, es decir, quitan a los enemigos o simplemente desconocidos, para poner a sus amigos o los miembros de su partido o tendencia ideológica. Estos cambios son seguidos con suma atención por la burocracia departamental correspondiente para ver en qué medida los «nuevos jefes» van a colaborar con ellos o van a intentar alguna veleidad reformista que pueda afectar a su status. Ordinariamente no suele pasar nada. Entre otras cosas porque los «nuevos políticos» suelen ser también funcionarios de esa élite, y en todo caso, conocen de antemano, o son rápidamente informados, de las tramas de poder existentes a su alrededor y suelen optar por respetarlas. De esta manera la cúpula de la Administración no pierde su homogeneidad, su triste capacidad de manipulación. Las controversias que a veces salen a la luz, es claro, que no pasan de ser pequeños desajustes que se corrigen rápidamente, aunque estas discrepancias domésticas lleguen a comprometer seriamente la política del Gobierno en algún sector o la imagen de nuestro país en el concurso internacional.

Los TAP: entre el servilismo y denuncia

La inmensa mayoría de los efectivos personales de la Administración lo constituyen lo que hemos venido llamando los «Funcionarios de a pie», integrados en la multiplicidad casi desconocida por su cantidad y variedad de cuerpos más modestos (tanto por sus retribuciones económicas como por sus capacidades de decisión). Son los denominados en los últimos años TAP: Trabajadores de la Administración Pública.

Para entender el papel que juega este importante colectivo en el seno de la A.P. es importante referirse a las características que lo acompañan y definen así como a las herencias del periodo anterior.

El franquismo, aparte de hacer de la A.P. española una estructura monstruosa (1) como competía a las instancias de control de una dictadura, la utilizó para fortalecer su poder político ofreciendo puestos en la misma por «servicios prestados» a muchas personas, asegurándoles un sueldo estable y la posibilidad de «situarse» a partir de su entrada en la misma. Hoy todavía muchos funcionarios pertenecen a la generación de «beneficiados» por este método, con la carga ideológica que conlleva su presencia y actuación en el seno de la misma A.P. (2).

La estabilidad como carga psicológica que implicaba este tipo de trabajo en aquellos momentos para una España de posguerra, se ha mantenido hasta hoy, apoyada en el peculiar sistema de vinculación de los TAP a la A.P.

Hoy, a pesar de los más de 50.000 trabajadores que prestan sus servicios en la A.P. que no tienen garantizado su puesto de trabajo más que el trabajador de la empresa privada, e incluso en algunos casos menos, el funcionario se siente seguro gracias a la «oposición» que hizo en su momento.

Este elemento prima por encima del hecho de que los salarios sean ordinariamente bajos (el ingreso medio de este colectivo se puede cifrar en 40.000 pesetas/mes). Y separa al funcionario del resto de los trabajadores, haciendo que se sienta diferente.

De esta manera, y ayudado por la estructuración en cuerpos antes comentada, el funcionario de a pie está predispuesto a asumir una fuerte conciencia corporativista similar a la de las élites burocráticas y a utilizar a éstas como puntos de referencia para su hacer profesional (3). Estas condiciones favorecen grandemente el que acepte con facilidad la estructura creada por los organizadores de la Administración —las élites— y se integre en los mecanismos viciados que aquéllas pusieron en marcha para satisfacer sus ambiciones. La diferencia es que al no poder entrar en el círculo cerrado de los burócratas se tienen que contentar con subordinarse sin condiciones a aquéllos, para recibir las migajas de sus prebendas y participar tan sólo de las pequeñas corruptelas. De esta manera algunos funcionarios de a pie se convierten, gracias a su servilismo, en sostenedores del «sistema» del que apenas participan, y en cómplices de sus amos. En cualquier caso, es más atractivo este camino para el que no encuentran excesivas cortapisas que enfrentarse abiertamente con la estructura, denunciando todo el tinglado descrito y reclamando unas condiciones de trato similares a las del resto de los trabajadores, tanto en cuanto a derechos como a obligaciones.

Las generaciones más jóvenes que han accedido a la A.P. en los últimos 10 años han pretendido oponerse de alguna manera a esta situación. Esta actitud cristalizó en los años del postfranquismo dando lugar al llamado «Movimiento de los TAP», que empujado por las nacientes organizaciones sindicales de clase en el sector pugnó por cambiar este estado de cosas. Fruto de este movimiento fueron las huelgas en determinados sectores de la A.P. (PMM, PND de Universidades, CSIC, etc.) e incluso con carácter

general en toda ella en dos ocasiones, tuvieron lugar a lo largo de los años 77 al 80. Pero la ausencia generalizada de una conciencia organizativa y de clase, y las condiciones adversas del sector antes descritas han relegado, de momento, estas aspiraciones al olvido.

Las «reformas» de la Administración Pública

Ante un panorama tan descaradamente provocador, presente al menos en algunos de sus aspectos en la conciencia de la gente de la calle, los gobiernos de siempre, y por lo tanto también los de ahora, no han tenido más remedio que hablar del asunto en términos de «la necesaria» reforma de la A.P. de nuestro país. En todos los programas de los partidos políticos, en todos los momentos electorales que ha vivido nuestro país, ha aparecido reflejado de una o de otra manera el tema de la reforma administrativa. Se han escrito centenares de libros, artículos, editoriales, etc... por personas conocedoras del mundo de nuestra A.P. Incluso durante los gobiernos de UCD se han elaborado varios proyectos al respecto. De todos ellos, tan sólo uno llegó al Parlamento. Pero fue retirado antes de su discusión y hoy el tema ha desaparecido del panorama inmediato de iniciativas políticas de todos los partidos. Estos proyectos fueron elaborados por las élites de siempre (¡faltaría más!) y su contenido no respondía a ninguna transformación real ni cambio importante con respecto a la legislación vigente hasta el momento (la última ley de la Función Pública data del año 64, en pleno período franquista). Pero parece que hasta un cambio simplemente formal les parecía una exageración a estos señores... ■

C. R.

(1) En el año 79 se contabilizaron 610.842 funcionarios, que cobraban de los presupuestos generales del Estado y que constituyen el 48% de la población activa de nuestro país. Si se tiene en cuenta que de esta cifra están excluidas las decenas de miles de contratados administrativos y laborales y los retribuidos con cargo a presupuestos de corporaciones y otros, se podrá apreciar la importancia numérica de este sector. Fuente: Contabilidad de las Administraciones Públicas, año 1970.

(2) Hay que hacer mención también a los puestos normativamente reservados a los militares y miembros de las fuerzas de la Policía y G. Civil que se integran en la Administración cuando se jubilan en el Ejército.

(3) Para completar el cuadro del funcionario modesto, diremos que sus derechos profesionales, sindicales, laborales, sufren una regulación especial, distinta a la del resto de los trabajadores, y que supone un coste importantísimo de gastos.

NOVEDADES

El juego y el juguete

José M. ^a Gorris

Un paseo pedagógico por el mundo de los juegos a través del tiempo
300 pesetas



La "cocina" perdida

418 procedimientos prácticos recopilados por Josep M. ^a Gorris
prologo de Josep Vicent Marqués
2.ª edición
400 pesetas



sociología del trabajo

Número 3/4.
Mercado de trabajo y relaciones de producción.
500 pesetas

Número 5. 1981
Fábrica y ciudad
300 pesetas



Queimada

ediciones

c/Astorga, 8 -

Teléfono: 403 52 09 - Madrid-17

autoquestions

nouvelle série

13^e année

revue trimestrielle

n° 6 1981

LES HABITS NEUPS DU
PRESIDENT TITO

critique sociale, re-
pression politique et
luttres ouvrières en
Yougoslavie

-enquête-

rappel: "Pologne: la
breche?", N°5

ABONEMENTS:

100 fr. indiv.
120 fr. inst.

etranger:

110 fr. indiv.
140 fr. inst.

En librairie: 30 fr.
le numéro.

Editions PRIVAT.

14 rue des Arts, 31000 Toulouse



Casi nadie diría que en España manda Rockefeller, o la compañía Exxon, casi nadie diría que manda General Motors o Ford, o la Westinghouse y los exportadores de soja o maíz, y sin embargo deben mandar bastante. Cómo manda esa gente dentro y fuera de su país es una cosa bastante misteriosa, porque no es sólo que tengan aquí agentes en las altas esferas (que los tienen) sino que nos inundan con su propaganda del modo de vivir norteamericano. Un modo de vivir absurdo, basado en la explotación del resto del mundo. Un modo de vivir que exige el militarismo, que puede llevar a la última guerra mundial. Los que mandan a los que nos mandan quieren ahora que entremos en la OTAN, usando a veces la curiosa excusa de que así se «consolidará» el papel «democrático» del Ejército del Estado español. Como en Turquía, como quien dice, o en el Portugal de Salazar, o en la Grecia de los coroneles y del rey Constantino, el hermano de Sofía, reina de España.

La guerra la hacen los Estados, a veces en sus luchas por mercados o recursos naturales, a veces porque «la guerra es la salud para el Estado». Nada se nos ha perdido en las guerras o en la preparación para las guerras de las «grandes potencias». No entrando en la OTAN se quita una justificación para la existencia absurda (de cara a los peligros exteriores) del Ejército Español que sirve sólo como amenaza al pueblo del interior.

Es posible escapar a la dominación de las «grandes potencias». Tanto a los Estados Unidos como a la Unión Soviética les conviene mantener la tensión internacional, para poder mantener sujetos a sus «aliados» en sus respectivas esferas de poder. Nuestra contribución a la paz mundial ha de ser escaparnos de la esfera «occidental» y «cristiana», al tiempo que apoyamos los esfuerzos no sólo de Nicaragua sino de Polonia, no sólo de El Salvador sino de Checoslovaquia —la lista completa sería interminable.

LOS QUE MANDAN A LOS MANDA- DOS



«La OTAN constituye una garantía contra el desarrollo de un proceso revolucionario en Europa... No puedo ser más explícito.»

Alexander Haig, abril de 1978

Según las «lenguas de doble filo» esto está claro, para septiembre de cabeza a la Alianza. El tema está en boca de todos. Parece que el gobierno de Calvo Sotelo está dispuesto a integrarnos a toda costa en el «ente otánico» que dicen algunos.

En cambio, por la calle, a lo que parece, todos contra la OTAN. Que si el comentario, que si la firmita, que si el referéndum, que si el festival monstruo en Madrid...

A pesar de todo, en la mente de muchos de nosotros flotan unas cuantas preguntas: ¿sabemos realmente de qué va eso de la OTAN, para qué sirve, a quién sirve, qué supondría el ingreso del Estado español para la gente normal y corriente?, ¿sabemos lo suficiente de la Alianza como para poder explicárselo a gente menos preparada que nosotros con datos objetivos, sin demagogias?...

el 48, por el Pacto de Bruselas, Bélgica, Holanda y Luxemburgo se unen al pacto anterior para la defensa mutua ante un posible ataque por parte de Alemania. Esta vez el pacto no es sólo militar sino también económico y cultural.

Por fin el 4 de abril de 1949, en Washington, se firma el Tratado del Atlántico Norte. Posteriormente, en el 52 se adhieren Grecia y Turquía, mientras que la República Federal Alemana lo hacía el 5 de mayo de 1955. Con la RFA serán quince los estados pertenecientes a la Alianza: Estados Unidos, Inglaterra, Islandia, Bélgica, Italia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Grecia, Turquía, Canadá y la mencionada RFA.

Las «deserciones» de la OTAN comenzaron muy pronto, en 1966, cuando el general De Gaulle decidió la retirada de Francia de la organización militar debido al protagonismo de los EE.UU. Esto comportó la salida del territorio francés de las fuerzas de la Alianza. A pesar de esto participa habitualmente en las reuniones de carácter no militar y no ha denunciado el Tratado. La segunda deserción, en el 74, a raíz del conflicto greco-chipriota, fue la de Grecia, como protesta ante la pasividad americana y atlantista. Grecia salió de la organización militar pero volvió a ingresar en ella en 1980.

El tratado del Atlántico Norte consta de catorce artículos. Después de las habituales declaraciones sobre la paz, la justicia y las libertades —retórica gastada—, los asistentes pasaron al meollo del Tratado, el artículo 5.º que, textualmente, dice así: «Las Partes están de acuerdo en que un ataque contra una o más de ellas en Europa o Norteamérica será considerado un ataque contra todos, y en consecuencia acuerdan que, si este ataque armado se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de defensa propia individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes atacadas, acometiendo inmediatamente, individualmente y en convenio con las otras Partes, aquellas acciones que se consideren necesarias, incluyéndose las de la fuerza armada, con tal de mantener y restaurar la seguridad del Atlántico Norte».

La realidad de la O.T.A.N.

Si queremos entender los motivos reales de la existencia de la Alianza Atlántica hemos de reducir al absurdo —en primer lugar— las causas oficiales que legitiman su existencia: el peligro de un ataque militar soviético sobre Europa.

Las causas de nuestra creencia en la falsedad de esta premisa legitimadora de la existencia de la OTAN las basaremos en varios apartados.

A nivel económico, las relaciones entre los países de la OTAN y los del Pacto de Varsovia son cada vez más intensas. A la URSS le es necesario recurrir a productos, créditos y tecnología occidental dado el exiguo desarrollo de las fuerzas productivas en la mayoría de las áreas socialistas. En cuanto a los estados capitalistas des-

arrollados, es la crisis de la superproducción que ahoga al mundo capitalista la que proyecta sus fuerzas productivas y sus excedentes de capital hacia el mundo socialista. Esta interdependencia económica entre el área capitalista y «socialista» es evidentemente un excelente amortiguador de cualquier tentación bélica.

A nivel militar, la URSS ha de defenderse de dos peligros, el chino (que en virtud de su teoría de los Tres Mundos considera a la URSS como su principal enemigo) y el de un posible ataque norteamericano. Militarmente no podrían adoptar medidas ofensivas y políticamente le resultaría difícil a la clase dominante soviética llevar a la guerra a un pueblo que en un corto espacio de tiempo ha pasado por una revolución, una guerra civil y dos

guerras mundiales (en la última de las cuales perdió más de 20 millones de personas).

Finalmente está el hecho de que el Pacto de Varsovia surge en realidad para controlar bajo su área de dominación y de influencia a los pueblos de Europa del Este. El Pacto es una organización de carácter agresivo, pero hacia su propio territorio interior, exactamente igual que la OTAN.

Una vez desmitificado el peligro de un ataque soviético, pasemos a estudiar la auténtica misión de la OTAN, la misión que la burguesía monopolista, la clase dominante de los estados capitalistas le han designado, la de policía multinacional.

Veamos su actuación a lo largo de los treinta años de existencia con que cuenta:

— La pertenencia de Portugal a la Alianza desde su creación. ¿Cómo una organización que se autodenomina democrática puede albergar en su seno a un país controlado por la brutal dictadura de Salazar y Caetano?

— El apoyo de la OTAN a la dictadura fascista de los coronales en Grecia. Y no sólo a la dictadura, el golpe se llevó a cabo siguiendo el llamado «Plan Prometeo» preparado por la Alianza para responder a una hipotética insurrección comunista que nunca existió.

Más tarde, en el 72, se realizaron las maniobras llamadas «Helenic Express» con participación de tropas norteamericanas, germano-occidentales, italianas y belgas. Fueron una evidente manifestación de solidaridad de los líderes de la OTAN con la Junta Militar Griega.

— El apoyo al intento de golpe fascista en Italia ante el temor de que los izquierdistas pudiesen ganar las elecciones. El neofascista Ernesto Cavallero declaró que «Rosa di Venti» (la organización golpista) había recibido la conformidad del cuartel general de la OTAN para dar el golpe.

— Las injerencias en los asuntos internos de los estados miembros. Así, vetó a Portugal cuando algunas cartaras ministeriales fueron ocupadas por comunistas y en 1978 emitió un comunicado llamando a los italianos a que no votasen al partido comunista.

— En agosto del 78 ejerció presiones para que en Islandia el partido más votado, la Alianza del Pueblo (comunista) no encabezase el nuevo gobierno.

— Su postura imperialista en conflictos ajenos. Su ayuda a Portugal para el mantenimiento de sus antiguas colonias (Angola, Guinea Bissau y Mozambique). Su ayuda a los franceses durante la guerra de Indochina.

— Por último su intento de globalizar aún más la Alianza introduciendo



a países de África y América del Sur. Ejemplos claros son Zaire, Sudáfrica, Marruecos, Rhodesia, Brasil y Argentina.

Queda claro pues, tras el estudio de la actuación de esta «gloriosa» Alianza, su ideología visceralmente reaccionaria y anticomunista. Como decía antes, OTAN es igual a policía multinacional, a policía de las multinacionales. Habrá que darle la razón, sin que sienta precedente, al general Alexander Haig, ex comandante supremo de las fuerzas de la OTAN cuando en el seminario sobre «El Estado español y la OTAN» celebrado en Inglaterra el 15-4-78 declaró: «La pertenencia de un país a la OTAN es una garantía contra el desarrollo de determinados procesos revolucionarios». Thank-you, Mr. Haig.

La O.T.A.N. y el Estado español

La historia de las relaciones entre la Alianza Atlántica y el Estado español es larga y densa. Acabada la segunda guerra mundial y derrotados militarmente los regímenes fascistas que apoyaban a Franco, los gobiernos de las potencias europeas cerraron las puertas al Estado español más por la presión popular antifranquista que por su propio gusto (excepto en los muy honrosos casos de Bélgica, Holanda y Noruega el resto probablemente no hubiera tenido el más mínimo inconveniente en mantener relaciones amistosas con el régimen). Era el tiempo de la autarquía económica, las cartillas de racionamiento y el feroz nacionalismo españolista. Esta situación no duró mucho, los paladines de la democracia y las libertades, los EE.UU., por supuesto, rompieron el hielo en 1949 con la entrevista Franco-Eisenhower dando un buen respiro a la dictadura. Después, de nuevo, todas las puertas se abrieron. Inmediatamente comenzó un largo noviazgo entre el Estado español y la OTAN (la mayoría de ella deseaba el ingreso).

En el año 75 el tira y afloja entre los partidarios del ingreso (EE.UU. y la RFA) y los que se oponían (aunque sí admitieron a Salazar) llegaron rápidamente a un acuerdo. La revolución del clavel tomó la decisión por ellos. La entrada favorecería la «estabilidad» en la zona. Pero, tan pronto como la posibilidad de una revolución socialista en Portugal desapareció, se esfumó el interés por el ingreso.

Una vez muerto el dictador, realizada la llamada transición, instaurada la monarquía y llevadas a cabo las primeras elecciones parecía que los obstáculos por parte de algunos países de la Alianza desaparecían y que el noviaz-

go terminaría en boda. Se acrecentan las relaciones, reuniones de Oreja con Luns y Haig, asistencia de diplomáticos a reuniones de la OTAN... Asimismo comienza una sutil campaña integradora en los medios de comunicación. Por todas partes se oye del expansionismo soviético, de la superioridad del Pacto sobre la OTAN, del peligro para las Canarias...

En el 78 el proceso llega a una de sus cotas más altas, el rey y Gutiérrez Mellado se entrevistan con el jefe de los ejércitos centrales de la OTAN, Blanchard, en abril, parlamentarios de AP, UCD y PSOE van a una reunión parece que patrocinada por la C.I.A. para hablar de nuestro ingreso en la Alianza en Ditchley Park (Inglaterra). Inmediatamente se empieza a hablar de la gran base aeronaval de Canarias. En agosto del mismo año 80 paracaidistas participan en unas maniobras de la OTAN en Portugal.

Implicaciones de la entrada del Estado español en la O.T.A.N.

a) Políticas.

En su declaración de principios se hace referencia constante a la defensa de la democracia y del mundo libre contra cualquier clase de totalitarismo. ¿Cómo se explica su actuación, evidentemente contradictoria con esta teoría? El segundo punto de su declaración de principios nos lo puede aclarar: «los firmantes se esforzarán por eliminar toda oposición económica internacional y favorecerá la colaboración económica entre algunas de ellas o entre todas».

Vemos pues que la OTAN, más allá de ser una alianza militar, es una organización destinada a defender un sistema económico determinado: el capitalismo monopolista bajo la hegemonía norteamericana, a defenderlo de cualquier cambio social o económico que haga peligrar la supremacía económica de los Estados Unidos.

«La OTAN tiene una potencia superior al Pacto de Varsovia. Si tuviera interés por aumentar su ventaja con medios de gran calidad y en buenas condiciones económicas, España no puede ofrecer ninguna de las dos cosas (...) Pero las ventajas son otra cosa. Entrar en la OTAN supone entrar en el dispositivo político que los EE.UU. preparan para el viejo continente y esto es como una forma de garantizar la estabilización del proceso interno español. La estrategia gubernamental parece concordar con este esquema (...) Entrar en la OTAN es alinearse políticamente en el terreno de la civilización occidental, en el marco del capitalismo y las multinacionales, y aun-

que España no sea vital para la estrategia militar americana, los EE.UU. necesitan consolidar a España dentro de sus campos de dominio» (Sacado de «España y la OTAN», Vicens Fisas, CAC).

b) Económicas

España viene realizando ya un esfuerzo económico en materia de Defensa en modernización de armamento y reestructuración del ejército. Mientras, que en 1975 el presupuesto de Defensa fue de 165'4 millones de pesetas, es decir, un 2'80% del Producto Interior Bruto; en 1980 el Presupuesto en el mismo apartado dedicó 429'1 millones de pesetas, un 3'29% del Producto Interior Bruto.

El ingreso en la OTAN costará al Estado español, a cada españolito de a pie en sus impuestos, una cifra difícilmente calculable. Parece casi imposible dar una cifra objetiva, los pro y los anti-atlantistas mantienen una batalla de cifras. Parece ser que los cálculos más acertados, incluyendo ingreso, modernización de material... estarían alrededor de los 800 mil millones de pesetas (el doble de lo que el gobierno dice necesitar para solucionar el paro).

Parece ser que los EE.UU., siempre tan amables, ofrecen un crédito de 500 millones de dólares. También cabe la posibilidad de que, como en Portugal, envíen material de segunda mano en calidad de donativo.

Es preciso saber que la OTAN acordó modernizar su armamento entre el 79 y el 84 ¿cómo? aumentando el presupuesto de defensa como mínimo un 3% cada año por encima de la tasa de inflación del año anterior.

c) Militares

Estas implicaciones las podemos ver a cuatro niveles:

1.º Papel de las Fuerzas Armadas españolas dentro de la OTAN. — Parece que, debido a nuestra situación geoestratégica bastante especial, sería el de enviar tropas aeronavales al Mediterráneo occidental. El Estado español se encuentra dentro de lo que la Alianza llama el «Mundo Atlántico Ibérico» (IBERLANT), es decir, el campo de control de las entradas y salidas del Mediterráneo. Este IBERLANT forma un triángulo cuyos vértices son las islas Azores, las Canarias y el Estrecho de Gibraltar.

2.º Modernización del armamento. — Sería una modernización tanto cuantitativa como cualitativa. Parece ser que ya se están remodelando algunas de las unidades del ejército para adaptarlas a la estructuración de las unidades de la Alianza Atlántica.

3.º Implicaciones en Canarias, Gi-



braltar e islas Baleares. — En cuanto a las Canarias, se convertiría en la gran base aeronaval, punta de lanza del imperialismo contra los pueblos de África.

En cuanto a Gibraltar parece ser que sería cedido por el gobierno británico al español, manteniéndose la actual base de la OTAN en el peñón. Una vez más el gobierno del Estado demostraría la más absoluta falta de interés por la opinión de los gibraltareños.

En cuanto a las Baleares existen varias posibilidades, o se ampliaría la base de Mahón — donde se instalarían submarinos y lanchas lanzamisiles —, o se crearía una nueva base aeronaval en Mallorca.

4.º Posibilidad de guerra. — En caso de conflicto bélico, recordemos que la firma del Tratado comprometería a prestar ayuda material y efectiva a cualquier país de la OTAN que se sintiera atacado, es decir, el estado habría de declarar la guerra a alguien que no nos habría atacado.

Por último, repetir la posible utilización del ingreso para potenciar el aumento y globalización de la organización. Se trataría de crear las OTAS (Organización del Tratado del Atlántico Sur), filial a la OTAN y que tendría, en principio, como seguros «clientes» a Sudáfrica, Marruecos y Zaire.

Ni que decir tiene que, además, la integración contribuiría a una elevación vertiginosa de las posibilidades de conflicto mundial, sobre todo si tenemos en cuenta el momento político mundial; el asunto de Irán, la invasión de Afganistán y el golpe de Turquía, la tensión social en Polonia, la decisión de instalar en Europa los cohetes Cruise y Pershing II, etc.

d) Ecológicas

También aquí había que estudiar cuatro planos distintos:

1.º Relación con las centrales nucleares. — Las centrales nucleares en proceso de fisión producen los dos elementos — uranio y plutonio — nece-

sarios para la fabricación de la bomba. Cualquier país con una buena red de centrales puede obtener la bomba.

Las bases militares que pasarían a formar parte de la OTAN, a la larga, representarían una vigilancia de las zonas con centrales, la militarización de las zonas sería algo progresivo. La fabricación de armamento nuclear y la vigilancia y militarización es algo que va intrínsecamente unido a la creación de centrales nucleares. No en vano el presidente de la Junta de Energía Nuclear (JEN) es un militar.

2.º Almacén de armas. — Teniendo en cuenta nuestra lejanía geográfica con los países del Este, es más que probable que nuestro suelo se convirtiera en un arsenal de bombas atómicas y en un campo de entrenamiento como ya parece que la OTAN ha sugerido.

Es preciso tener en cuenta los peligros que traería consigo la existencia de almacenes de productos bacteriológicos como por ejemplo la «toxina botulínica» (sólo 500 gramos de esta sustancia bastarían para exterminar a la humanidad).

3.º Construcción de bases. — La construcción de las base aeronaval de Canarias y la ampliación de la de Mahón supondrían un desastre ecológico sin precedentes.

4.º Campos de tiro. — Es posible que las instalaciones militares que hasta hoy han causado mayores daños ecológicos en la península sean los campos de tiro. Veamos un ejemplo. El campo de las Bárdenas. Más de una vez han caído bombas en campos cultivados (cuando no en alguna zona habitada); el ruido de los reactores hace que las gallinas de la zona no pongan huevos.

Los problemas ecológicos que nos traería la entrada en la OTAN son una clara evidencia de la intrínseca relación que existe entre los problemas de carácter ecológico y los de carácter militar. Otra guerra mundial no sólo supondría la destrucción de un gran número de seres humanos, sino también de la ecología de extensísimas zonas del planeta, por no decir de todo el ecosistema de la tierra.

Como conclusión diremos que el ingreso en la OTAN supondría la potenciación de la política de bloques, mantenida por intereses económicos y políticos contra los intereses y la voluntad de los pueblos, supondría — al igual que la renovación del tratado bilateral con EE.UU. — la perpetuación de la invasión extranjera de nuestro suelo y la ocupación militar por tropas de una nación imperialista cuyo gobierno hace de la guerra y del desprecio a los derechos humanos su principal preocupación. ■

M. DEL RÍO

Reflexiones sobre Reagan

Está claro que quien manda no es quien gana las luchas electorales. Lo que es importante, más que la competencia electoral abierta, es el control que unos u otros grupos mantienen sobre el «menú» de la política, sobre lo que se discute o no se discute en la escena pública. En España, la Iglesia y las Fuerzas Armadas afectan, controlan e incluso determinan de cierta manera cuál es la «agenda» política, qué cuestiones están o cuáles no pueden estar en el «orden del día». Este tipo de control existe también en Estados Unidos (el país llamado líder de las democracias) y allí lo ejercen las grandes empresas, especialmente las multinacionales.

En una democracia «verdadera», que funcionara según se dice que deben funcionar, mandarían si no los propios ciudadanos, por lo menos unos representantes delegados elegidos por sus votantes. Pero la cuestión fundamental es otra: ¿De qué discutirían? ¿Quiénes formularían los problemas y las propuestas de solución que alcanzan la tribuna popular? En una democracia realmente «participativa» serían claramente los propios ciudadanos quienes formularían las propuestas y quienes propondrían todo tipo de ideas, en vez de aceptar simplemente una de las «ofertas electorales». No habría ninguna cuestión intocable, con tal que los ciudadanos políticos mantuvieran la igualdad ante la ley y hubiera participación libre para todos.

Pero no es así, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. En los Estados Unidos, como en los demás países «desarrollados», aún más que en éstos, mandan los grandes poderes económicos, pero de manera bastante escondida. Primero, lo hacen a través de la hegemonía casi total de la ideología de la «libre empresa». Así, desde mediados del siglo pasado, han podido bloquear casi cualquier iniciativa ciudadana o gubernamental que se inclinara a limitar el poder de las grandes empresas en el mercado o en sus

relaciones con los trabajadores, en nombre del mantenimiento del mercado libre. Hizo falta la gran caída de Wall Street en 1929 y la crisis siguiente de los años 1930 para que se legitimara la idea de que los ciudadanos aislados y especialmente los trabajadores de las grandes empresas no tenían poder para defenderse. Surgieron entonces una serie de leyes y programas sociales (la seguridad social, el seguro de desempleo, garantías de salario mínimo, aunque con la excepción de los trabajadores agrícolas), junto con la protección para los sindicatos y el proceso de sindicalización. Pero también en aquellos tiempos se justificaban estos cambios a través de la ideología capitalista, para que el capitalismo funcionara mejor mediante un cierto «equilibrio de poderes» un poco más equivalentes. El gobierno tendría el papel de asegurar que los «intereses» de todos los grupos afectados estuvieran representados. Así nació un nuevo corporativismo en los Estados Unidos (un autor de esa línea conocido en España es el economista Galbraith).

Ese arreglo de los años 30, que ha predominado por lo menos hasta el acceso al poder de Reagan, no garantiza sin embargo ni la democracia ni el control ciudadano del «menú» político, del «orden del día» político. No ha sido nunca discutido durante estos años ni tampoco ahora cómo utilizar el poder económico de Estados Unidos para acabar con la pobreza en este país, tanto económica como política. El bienestar de los propios ciudadanos norteamericanos fue ligado al poder de los Estados Unidos en el mundo, que más bien quiere decir el poder de las grandes empresas multinacionales. Si no mantenemos nuestra posición dominante, entonces aumentarán los problemas económicos de las multinacionales y —claro está— de los trabajadores y de toda la población.

Es decir, hace 75 ó 100 años se transformó de manera muy significati-

va la ideología dominante en Estados Unidos. Las recientes «reformas» de Reagan son solamente la etapa más «moderna» (el «neoliberalismo» económico retrocede a las ideas anteriores a 1929). Se entiende por «democracia» desde hace 75 ó 100 años, no el poder político y económico de los ciudadanos, sino la defensa de los intereses económico-políticos de los Estados Unidos en el mercado mundial. El nuevo presupuesto de Reagan, que reduce significativamente el apoyo a los desempleados, a los servicios urbanos, a las escuelas (los llamados programas sociales), a la vez que reduce los impuestos de la alta burguesía y de las empresas y aumenta los gastos militares, demuestra el significado más reciente de esta transformación.

Esto no quiere decir que la ciudadanía esté de acuerdo con las propuestas de Reagan y su gabinete. En las últimas elecciones, el nivel de abstencionismo en Estados Unidos aumentó aún más. Reagan obtuvo solamente el 26% de todos los votos posibles. Hay ahora un nivel de oposición al presupuesto bastante alto. Pero ni la «oposición» del Partido Demócrata ni ningún otro grupo han sido capaces de proponer otra manera de ver las cosas.

Así, la dominación del gran capital en Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista de los propios capitalistas sino también desde el punto de vista de gran parte de la población, está ligada al mantenimiento de la posición dominante de los Estados Unidos en el mundo. Y todo —se dice— en beneficio de la democracia y del bien común. Quienes controlan el «orden del día» de la política han logrado excluir de la discusión política en Estados Unidos la cuestión de cómo reducir el poder económico y políticos de Estados Unidos y de sus empresas multinacionales. ■

MARTHA A.

DEL DOGMA DEL ESTADO A LA VIOLENCIA SIN DOGMA

Dedicatoria:

Al procer señor Herrero de Miñón, jerarca de la Amorosa Doctrina, con el deseo que su Dios le ilumine y se retracte de su apología de las ejecuciones «in situ».

A todos aquellos comparsas, voceros del «ETA, Mátales», con el deseo que superen su impotencia desesperada.

El individuo como organismo dotado de potencia propinqua

Cervantes describe la potencia propinqua individual como la capacidad de que están dotados los seres para poder satisfacer sus funciones vitales: nacer, crecer, comunicarse, reproducirse y morir. Esta conciencia se enmarca en los condicionantes del medio físico y social en que se desenvuelve su existencia. Las manifestaciones de su propia potencia, esto es, de su poder, las expresa mediante actitudes, gestos y comportamientos. El ejercicio de esta potencia, que en ocasiones entra en contraste con otras potencias, no necesariamente es violento, ni fraternal. Para entendernos, el empleo de la potencia propinqua, aquí lo llamamos agresividad, y ojo, entre sus facetas se encuentra la ayuda mutua.

El concepto antagonista de agresividad es la mansedumbre, burda flor carente de forma, aroma y color, cultivada en el Paraíso Terrenal de la religión judaico-cristiana. La agresividad es la herramienta mediante la cual el individuo alcanza el grado de libertad que le corresponde por su rango de potencia propinqua.

Por otra parte, la violencia, es la peyoración de la agresividad, cuando ésta se emplea para dislocar el natural desenvolvimiento de las circunstancias vitales. La respuesta a la violencia suma es la mansedumbre, y a la inversa, la mansedumbre fomenta la violencia. De ahí aquello de que «Bienaventurados los mansos, porque ellos verán a Dios». El Sumo violento, El más Justiciero, El más Vengador.

Disculparán nuestros lectores lo prolijo y puntilloso que resulta el exquisito léxico empleado, a lo cual nos vemos forzados por la caída de los referentes y la abyecta escalada de confusión por parte de nuestros contiguos. Así, por ejemplo, vean la mala leche que ponen en confundir agresividad y violencia, sexualidad y pornografía, orden y abuso; crisis y corrupción, seguridad y cautiverio, tranquilidad y estado de sitio, felicidad y vacaciones de verano, poder adquisitivo y salario, información y televisión, honradez y virginidad, honestidad y golpes de pecho, sindicato libre y UGT, Bicicleta y revista de comunicaciones libertarias, etc.

Nos asaltó la duda sobre si este escrito pudiera considerarse como violento, caso de tener intención doctrinalista, que la tiene, sobre nuestros lectores, que como ustedes bien saben, son elérgicos en ejercicio. Pero no hay tal, vamos a relatar casos reales como la vida misma, sacados de polvorientos libros cuya lectura nos ha quemado las pestañas, de forma que aquí paz, y en el cielo gloria.

«En el reino animal el combate entre los miembros de una especie ayuda convenientemente al desarrollo de sus funciones. Evitar la muerte o un daño serio al contendiente por medio de un torneo formal, parece ser un modelo de conducta innato en las especies» (Irenäus Eibl-Eibesfeldt).

La lucha entre los miembros de la misma especie es casi universal entre los vertebrados, desde el pez hasta el hombre. La observación nos muestra el por qué: los animales de la misma clase, que ocupan el mismo hábitáculo

en la naturaleza, deben competir por el mismo alimento, los mismos lugares para anidar y los mismos materiales de construcción. La lucha entre animales de la misma especie, por tanto, sirve a la importante función de distribuir en el espacio a los individuos o a sus grupos en el área que ocupan. Aseguran para cada uno el territorio mínimo requerido para poder vivir, impidiendo el amontonamiento excesivo y promoviendo la distribución de la especie siempre y cuando no se les violenta con el carisma seguridad-cautiverio. La lucha surge también de la competencia por las hembras y sirve de este modo para seleccionar a los individuos más fuertes y apropiados para la propagación de la especie. No es extraño, pues, que los herbívoros parezcan luchar unos contra otros, tan diligentemente como lo hacen los carnívoros y que casi todos los grupos de vertebrados, con excepción quizá de algunos anfibios, presentan un comportamiento agresivo.

Una investigación completa del comportamiento en la lucha debe tener en cuenta, sin embargo, otra observación general: las luchas entre individuos de la misma especie casi nunca terminan con la muerte y raramente tienen como resultado una lesión grave para uno u otro combatiente. De hecho, estas luchas están con frecuencia sumamente ritualizadas y casi se parecen más a un torneo que a una pugna mortal. Si éste no fuera el caso, si el perdedor fuera muerto o gravemente herido, la lucha tendría graves desventajas para la especie. El animal que pierde una lucha no es necesariamente menos sano o menos viable; simple-



mente puede ser un animal inmaduro que no puede resistir el ataque de otro maduro.

A la vista de las desventajas de las heridas graves a los miembros de la especie, podría haberse esperado que la evolución hubiera ejercido una fuerte presión selectiva contra el comportamiento agresivo. Pero la distribución espacial que se consigue mediante el combate es aparentemente demasiado importante para permitir un debilitamiento de las tendencias agresivas; de hecho, la agresividad parece haber sido favorecida por la selección natural. Lo que cuenta es permitir que la distribución espacial resulte de la lucha más que de la muerte o la lesión, por lo que se han producido, por evolución, los hábitos ceremoniales del combate.

Es cierto que ocurren luchas totales entre animales de la misma especie, pero se dan usualmente en especies que no tienen armas que puedan infringir heridas mortales. Los animales mordedores, que pueden matar o herirse gravemente unos a otros, usualmente son también capaces de una rápida huida. Pueden empeñarse en luchas lesivas pero éstas terminan cuando el perdedor emprende una rápida escapada. También pueden rendirse, adoptando una postura de sumisión que el ganador respeta. Konrad Z. Lorenz, del Instituto Max Planck de Fisiología y Comportamiento en Alemania, ha descrito este comportamiento en lobos y perros. La lucha empieza con un intercambio de mordiscos, tan pronto como un contendiente empieza a perder, sin embargo, expone su vulnerable garganta al oponente desviando su cabeza. Este acto de sumisión inhibe inmediatamente el ataque adicional de su rival. Un perro joven con frecuencia se somete arrojándose sobre su lomo y exponiendo su vientre; un perro mimado puede asumir esta postura simplemente con que su amo levante la voz. Entre las aves es común un comportamiento análogo. Cuando una víctima se arroja indefensa a los pies de su enemigo, el ser humano natural se ve fuertemente inhibido para continuar la agresión. Este mecanismo puede haber perdido ahora su valor adaptativo en los hechos humanos, porque las armas modernas pueden matar tan rápidamente y desde tan grandes distancias, que el individuo atacado tiene pocas oportunidades de apelar a los sentimientos de su oponente.

La mayoría de los animales no dependen ni de la huida ni de la rendición para evitar las luchas destructivas. En lugar de ello se entregan a una contienda ceremonial, en el curso de la cual los contendientes miden su fuerza con el contacto corporal, sin

danarse seriamente uno a otro. Con frecuencia, estas contiendas empiezan con un duelo de amenazas; posturas, movimientos y ruidos; destinadas a acobardar al oponente sin ningún contacto físico en absoluto. A veces, esta competición de bravatas da lugar a una decisión; usualmente es un preliminar para el resto del torneo.

La ritualización del comportamiento en la lucha asume importancia crítica en las contiendas entre animales que están dotados de armas mortales. La serpiente de cascabel, por ejemplo, pueden matarse una a otra con una sola mordedura. Sin embargo, cuando las serpientes de cascabel luchan, nunca se muerden. Charles E. Shaw, del Zoo de San Diego, ha descrito con detalle el modo de combate de una especie (*Crotalus Ruber*). Las dos serpientes se deslizan una a lo largo de la otra con el tercio delantero de su longitud levantado al aire. En esta postura, se empujan cabeza con cabeza tratando cada una de forzar a la otra a caer de costado al suelo, de acuerdo con estrictas reglas reminiscentes de las que gobiernan la lucha india. La serpiente triunfadora sujeta a la perdedora por un momento con el peso de su cuerpo y luego la permite escapar. Muchas otras serpientes venenosas luchan de manera similar. Algunos de nuestros lectores más despiertos se verán tentados a comparar este comportamiento con el feliz desenlace de los televisados sucesos de este invierno.

La idea de que la agresividad es un fenómeno biológico básico se ve apoyada por estudios fisiológicos de los procesos subyacentes neurales y hormonales. Algunos investigadores han inducido comportamientos de lucha en aves y mamíferos, estimulando áreas cerebrales específicas con corrientes eléctricas. La mente de un animal recién nacido no es una pizarra en blanco en la que la experiencia va a ir escribiendo. El comportamiento agresivo es un mecanismo de adaptación mediante el cual los miembros de la especie se separan en áreas y se seleccionan los más adecuados para la propagación. El aprendizaje no es un prerrequisito de este comportamiento, aunque probablemente tenga alguna influencia sobre la intensidad y la detallada expresión de la agresividad.

En la especie humana parece probable que el comportamiento agresivo evolucionara al servicio de las mismas funciones, como hizo en el caso de los animales inferiores. Indudablemente fue útil y adaptativo hace miles de años cuando los hombres vivían en pequeños grupos. Sin embargo, con el desarrollo de las supersociedades, este comportamiento ha llegado a ser inadaptado. Habrá que intentar contro-

larlo; y el primer paso en la dirección de su control es el de darse cuenta de que la agresividad está profundamente enraizada en la historia de las especies y en la fisiología y en la organización comportamental de cada individuo.

A este propósito debe hacerse hincapié en que la agresividad no es el único motivo que gobierna la interacción de los miembros de la misma especie, ni entre especies diferentes. En los animales gregarios existen modelos de comportamiento igualmente innatos que llevan a la ayuda y apoyo mutuos y se puede asegurar que el altruismo no está menos profundamente enraizado que la agresividad.

La agrupación libre. El apoyo muto

Todos los seres vivos necesitamos, para perdurar, un territorio, aporte de energía y materias exteriores, un lugar para depositar nuestras excretas, en definitiva, un «oikos» (en griego, casa). Este ambiente físico imprescindible, nunca es paradisíaco. A veces, incluso, es hostil en sumo grado, y desde luego no hay noticia experimentada que demuestre que en él se vive en continuo goce y disfrute del Dios.

Todos los seres vivos se encuentran desvalidos en mayor o menor grado. Casi ninguno es capaz de satisfacer sus necesidades en solitario. Cuando menos, haría falta otro individuo para comunicarse, elemento imprescindible de conformación de la propia personalidad.

La defensa del «oikos» precisa de la agresividad; la superación de la soledad, se alcanza con el amor. Agresividad y amor son los dos componentes que, con la neutra indiferencia, generan el comportamiento natural.

Dejemos para los moralistas la valoración de estos dos atributos. A nosotros nos refanfila lo mismo aquello del «pecado original», por el que el hombre es naturalmente malo y, consecuentemente, necesita un Salvador, como las afirmaciones de Rousseau sobre «el buen salvaje» y las buenas inclinaciones naturales. En suma, la ternura y el odio son componentes del sentir, que se entrecruzan, acrecientan o disminuyen de acuerdo con las circunstancias. Ni tan siquiera podemos afirmar que una de las dos es permanentemente la más gratificante. No hagamos un arquetipo, ni busquemos un comportamiento universal, válido para todos los individuos de una especie. ¡Vivan el caos y la diversidad! ¡Vivan los filántropos y los guardias civiles! ¡Vivan los ornicultores y los cazadores, los parlamentarios y los

dicharacheros, las comadronas y los verdugos!

El caso es que parece como si la agresividad estuviese más cerca de la intuición próxima (impulso), y que el afecto se motiva por la intuición remota (razonamiento). Supuesto que los individuos, en el origen de los tiempos, vivieran desperdigados, sin lazos de unión —lo cual es mucho suponer, pues comportaría la aceptación del relato bíblico del Génesis— se habrían visto impelidos naturalmente a asociarse. Estas sociedades iniciales tendrían por objeto el mutuo beneficio. En concreto, y para el hombre, la asociación le reduce su propiedad y le aumenta la personalidad; le constriñe la independencia, pero le amplía las posibilidades. ¿En el balance de estos factores, sale favorecido? Parece que sí, pues se asocia. Con tal gesto le aparecen nuevas necesidades. Tiene que establecer unas reglas de juego para la convivencia. Crea una ética para ser aplicada a sí mismo, en su intimidad; y una moral, por la que se regulan las costumbres, en común.

Si el colectivo es pequeño, las reglas morales son pocas y la comunicación fácil, afín. Cuando aquél se agranda, éstas se complican y la relación se dificulta, apareciendo las discrepancias. Simultáneamente, la sociedad, que en principio era un simple conjunto de individuos con vínculos de interés personal, se transforma, toma cuerpo en sí misma, se autogenera, se erige en elemento de orden superior al individuo, al que desprecia y deja de servir. Nace, en fin, la abstracción Sociedad. Es el monstruo de Frankenstein que desborda el marco del experimento.

La sociedad elemental, la reunión de individuos, como solución a los problemas carenciales de la especie, significa, además, el instrumento para atenuar la agresividad, de que ésta se manifieste sólo en momentos de evidente peligro. Los torneos, la danza, la fiesta, la sexualidad, son herramientas incruentas de descarga emocional. No ha sido necesario reprimirla, puesto que se han encontrado unas vías adecuadas para evacuarla. No hay, por tanto, frustración en este sentido. La capacidad defensiva-ofensiva individual se mantiene y desarrolla. El hombre se vale en gran parte por sí mismo. No necesita protección especializada. Es consciente de su responsabilidad. Palpa su existir. No admite un orden superior a sí mismo. Es tribal. Vive el caos.

La Sociedad, ente etéreo, no es sino el conjunto de normas, de reglas de juego, de limitantes establecidos. Con el tiempo se complican, se entretienen, encierran al individuo, le ponen una camisa de fuerza contra la que su

agresividad es impotente. Enferma, se hace violento, deja la naturalidad. Aparece el hombre civilizado.

La anterior exposición, basada en los conceptos de agresividad y apoyo mutuo, no es la única admitida en los medios científicos, más bien todo lo contrario. Las regiones que se consideran como adelantadas están más por las teorías darvinistas que por las kropokinianas, fundamentalmente en base a su semejanza con el modelo económico liberal de los anglosajones.

Darwin considera que la teoría sobre la selección natural necesita argumentaciones especiales que demuestren la ineludibilidad de la selección. De aquí el que incluya en la teoría de la evolución la doctrina de la lucha por la existencia como causa principal de la selección natural. Es fácil comprender que Darwin pretende trasladar al mundo biológico las tesis económicas de libre mercado imperantes en su época.

En la confusa expresión de «lucha por la existencia» se fundamenta todo el montaje anglosajón-protestante de la cultura competitiva, ya que con este principio establece las siguientes conclusiones:

— Existencia de una reproducción continua y monótonamente creciente de todos los seres vivos, en parangón con la expansión continuada del capitalismo.

— El continuo progreso en la reproducción tiende a la superpoblación. En lo económico significaría que la metrópoli debe controlar la capacidad de producción de las colonias.

— La superpoblación genera un déficit de espacio y alimentos, que a su vez es el origen de un incremento fuerte en la competencia intraespecífica.

— En consecuencia, la superpoblación y la rivalidad son los grandes estímulos de la selección natural y del equilibrio ecológico.

En su día esta doctrina representó un avance importante sobre las ideas creacionistas tradicionales, inventadas por los estamentos religiosos de la antigüedad, que eran en definitiva el soporte ideológico de las Sociedades de entonces, y a su vez, Darwin proporcionó un ideario para el Estado Moderno, suplantando lo sacro por lo científico, lo mágico por lo tecnológico, lo metafísico por lo dialéctico, el Paraíso por el Imperio, es decir, lo estático e inaccesible para el hombre, por lo dinámico y al alcance de los más feroces. Con esto cayó el último bastión que defendía al individuo. Nace el liberalismo, que degenera rápidamente en la abyección esclavitud del fascismo liberal y del fascismo marxista-leninista.

Afortunadamente para los homínidos y otras bestias, tales afirmaciones,

aun con la buena prensa de todos los errores, son fácilmente rebatibles.

Si el medio fuera la fuerza conductora de la evolución, y si fuera la selección natural la que opera a través de la lucha por la existencia, ésta no sería más que una sirvienta que adaptaría a los organismos a las necesidades del ambiente (*). Por fortuna, la selección sólo elimina, no crea.

En particular, puede afirmarse:

1.º No se conoce ningún caso de una especie, que por evolución haya generado otra especie. Las afirmaciones de los neodarvinistas se basan en observaciones sobre bacterias, extrapolando a los seres superiores de forma gratuita. Por ejemplo, los registros fósiles demuestran que la evolución no es continua, sino discreta.

2.º Las micromutaciones son en su mayor parte nocivas, y desde luego, todas no neutras. Según la teoría del progreso sin límites del darwinismo, cada una de ellas, para conservarse en la herencia, debería presentar ventajas para el individuo o la especie, lo cual es contrario a la experiencia. Por tanto, la creencia de que la evolución es una suma de suficiente número de micromutaciones, está reñida con la realidad.

3.º El hecho cierto de que la superpoblación y la rivalidad interespecífica gobiernan en parte las poblaciones, no excluye la veracidad de que el asociacionismo, el apoyo mutuo, las condiciones del medio y otros hechos desconocidos, influyen tan poderosamente o más que aquéllos.

Nos sabe mal refutar las teorías de Darwin en estos momentos, puesto que el señor Reagan ha proscrito su enseñanza en las escuelas americanas. Claro que sus móviles son bien distintos. No han entrado en el grado de veracidad que pudieran contener. Ocurre que el darwinismo está dejando de ser útil al Estado. La argucia empleada para su desafección, armónica con el proceso de poder, ha consistido en catalogarla como doctrina religiosa, y dado que en EE.UU. hay «libertad de conciencia», el Estado, saliendo en defensa de las restantes «religiones», impide su difusión oficial. Con ello, los gringos vuelven sus miradas a la creatividad divina.

El gregarismo forzado. El Estado Multinacional

La horda, la tribu, se han quedado atrás. El hombre nace en su núcleo donde las normas están preestablecidas. No le compete aceptarlas, sino acatarlas. Durante toda su vida estará sometido a la tensión resultante de la discrepancia entre su potencia propinqua y el código moral de su pueblo.



Su albedrío es el permanente perdedor.

Un biólogo centrado en la ciencia oficial, R. Alvarado, ha escrito «El individuo es un nudo somático en la cuerda genética de la especie». Esta misma opinión fascistoide constituye el substrato metafísico de la interpretación al uso de las interrelaciones humanas. Para los poderosos de cada época, su Sociedad queda conformada como una malla multidimensional, cuyos nudos son los individuos y en la que los tramos conjuntan el Orden. Monótonamente los nudos se van reduciendo en importancia, llegando a ser, en última instancia, solamente el lugar de encuentro de los tramos. En esta estructura de «progreso» creciente, proliferan cada vez más los tramos que pasan por cada nudo. Para dar una determinada configuración espacial a la malla, necesariamente debe aumentarse la tensión interna sobre los nudos, transmitida mediante los tramos. Con ello, ha de aumentarse la tenacidad de éstos, que exigirán, a su vez, mayor resistencia a los nudos. Y así, «in crescendo» hasta agotar su capacidad de aguante, hasta la violencia total, hasta la autodestrucción de la malla. Es decir, partiendo del poder dogmático se llega, fatalmente, a la violencia sin dogma.

DE FORMA GRÁFICA, LA GÉNESIS DE ESTE PROCESO RESPONDERÍA A LA SIGUIENTE MATRIZ DEL PROGRESO

	1	2	3	4
Características	Sociedad de apoyo mutuo.	Sociedad gregaria.	Estado Nacional.	Estado Multinacional.
1 Sentimiento de lo sagrado.	Difuso dimanado de la naturaleza.	Divinidades antropomorfas. Panteísmo. Monoteísmo.	Auge de un credo sacro excluyente.	Sacralización del Estado. Culto pánico.
2 Estructura de grupo.	Equilibrio de relación según capacidad individual. Mallas elásticas. Génesis de la profesionalidad.	Creación de los estamentos. Auge del gremialismo. Esclerotización de las mallas.	Creación de clases sociales. Tendencia a la polimorfía. Deformación violenta de las mallas preexistentes.	Simplificación de las clases que quedan reducidas a dos. Superespecialización. Cristalización de las mallas forzadas.
3 Poder.	Potencia propinqua actualizada en lugares y usos.	Jerarquización por estamentos personales. Génesis de profesionales del Poder en cierto equilibrio con la realidad.	Centralización del poder en manos de unos pocos profesionales neopópicos y crueles.	Despersonalización del Poder. Intensificación máxima de la intervención mediante la tecnoburocracia.
4 Tensión del cambio.	La realidad se muestra variada según el uso del Poder. Aspiración hacia una concreción del Poder.	Inhibición de la agresividad mediante la aplicación ejemplar de la Ley. Paternalismo y crueldad.	Grandes persecuciones internas. Autos de fe. Avidez expansionista a costa de los vecinos.	Control de la opinión mediante la información. Creación del espectro del terror para justificar la escalada del poder.
5 El Clero.	Chamanes y hechiceros que mantienen los conocimientos básicos no científicos.	Ascenso del poder clerical al servicio de la Autoridad. Separación de la ciencia, la magia y los ritos de integración social.	El poder clerical se transforma en policía secreta del Estado. Vigila el cumplimiento del poder dogmático.	El poder clerical se instaura como otro Estado más. Asistencia al sistema en materia de educación y oscurismo.
6 El Ejército.	Inexistente como institución profesional.	Aparición de los ejércitos profesionales y la casta militar.	Prepotencia de la élite militar. Especialización y diversificación de las instituciones defensivas represoras. Militarización de la sociedad. Las levas. El servicio militar obligatorio.	Despersonalización del poder militar. Supertecnificación de los ejércitos. Relevancia de su función económica en el proceso productivo. Motivador principal del desarrollo tecnológico actual.
7 La Justicia.	Venganza personal. Asambleas. Códigos elementales e intuitivos. Aplicación inmediata del castigo. Máxima pena: el extrañamiento.	Venganza gremial. Comité de expertos. Códigos revelados por la divinidad al estamento dominante. Ley del Talión. El Verdicto. Castigos públicos.	Proscripción de la venganza. Tribunales de justicia. Códigos racionalistas e imperiales. Dilación de la sentencia. Gran novedad: el crimen de lesa majestad.	Introducción del sistema judicial. Esclerotización de los miembros, e impunidad de los servidores de la justicia. Versatilidad de los procesos. Inflación de la demanda de servicios.
8 Relaciones económicas.	Producción de subsistencia. Propiedad comunal.	Producción excedentaria. Propiedad diversificada. División del trabajo. Conformismo gremial.	Capitalización de los excedentes en el proceso productivo. Expansión colonialista. Proletarización de los menos capaces.	El progreso despilfarrador. Especialización estatal de la producción. Proletarización del mundo.
9 La Violencia.	Instantánea e individual, que no suele producirse más que como rito de magia negra.	Génesis de la violencia como respuesta a la presión social. Aparición de visionarios, salvadores, iluminados, marginales, herejes.	Institucionalización de la violencia del Estado y los estamentos superiores.	Monopolización de la violencia por las instituciones estatales.

De nuevo nos abruma la idea de que estamos violentando a los pacientes lectores, razón por la cual hemos presentado las conclusiones de nuestros arduos estudios en forma de matriz bidimensional, lo que permitirá deambular la imaginación de cada uno, de dictado de su potencia propinqua.

Seguramente no habrá existido nunca una sociedad que se ajuste enteramente a los arquetipos que ofrecemos en las columnas. Ahora bien, si cogemos un elemento de cada fila y otro de cada columna de la matriz, llega-

remos a configurar un gran número de estructuras sociales, alguna de las cuales tendría gran parecido con agrupaciones humanas existentes en diversos ámbitos del espacio geográfico y el tiempo físico, incluso antes y después de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que es reconfortante leer los sueltos de Natura con fruición en la tenebrosa frescura de los Claustros monásticos de alta montaña?

Una última consideración. Sea cual fuere el tipo de sociedad en su devenir, se observa que, con el material preexistente y las nuevas ideas, se genera

una nueva estructura que institucionaliza lo espontáneo de la anterior. El material, así, se prolonga en el tiempo sin mutarse, y es la Organización y el Orden los que revientan todo. Un observador imparcial quizá entendiese la historia humana como desarrollándose sobre una hélice que se retuerce sobre sí misma, al igual que el superarrollamiento del material genético en el interior de los cromosomas.

(*) ¿Qué mayor gozo para un dirigente que estar convencido de que el individuo está subordinado al Imperio?

Ejemplos de este retorcimiento:

La contradicción entre la elevación del ritmo basal de la violencia individual y la privación a los individuos del derecho a la agresividad, obliga a que la presión del dogma tenga que ser cada vez mayor.

Dentro del creciente repudio que en el ámbito social genera el dogma, los individuos o se integran o se marginan. Algunos de éstos últimos ilusoriamente, «pasan», quedando inermes frente al aumento progresivo de la violencia del estado. El «pasota» se encuentra en un estado de inhibición en el que se reciben todos los estímulos, aunque uno no lo quiera, y no se emite ningún tipo de respuesta, es una especie de pozo negro que va acumulando energía metastable, a la que un día cualquier estímulo pequeño puede hacer paradójicamente estallar de forma ciega.

Los otros marginados (el lumpen de «fuera de la Ley»), lo que intentan es «vivir» y para ello aumentan al máximo su grado de violencia, aplicándola aparentemente en su propio provecho individual, y no en detrimento del Estado-Verdugo, sino de otros individuos más indefensos que él. Con ello no hacen sino aplicar un grado de violencia proporcional al que ejerce el Estado, que además sirve a éste como justificación para aumentar su burocracia represora y dictar nuevas leyes violentas contra los individuos desarmados. En consecuencia, los miembros del lumpen son tan necesarios como los del orden para mantener y potenciar la dinámica de la reacción en cadena de las comunidades hacia la esclavización del hombre.

Lo nuevo de esta situación va a radicar en la ruptura de aquella cota de violencia que imponía el dogma, y su sustitución progresiva por el estallido paradójico de una violencia sin dogmas es de tal magnitud que no siente el mínimo respeto por la vida, puesto que en el fondo no es más que la exaltación del egoísmo grupuscular para negar al individuo.

De todo lo anteriormente dicho es evidente que tarde o temprano el ciclo se va a cerrar. Desde aquí, propondríamos como acción directa e inmediata soldar los extremos de la hélice. Permitásenos exponer la técnica más rápida. Es fácil, solamente consiste en decidirnos de una vez, a confundir pragmáticamente los referentes de nuestros contiguos. ¡Asimilemos la jocosa cópula entre la libertad y el libertinaje! Con ello nos aseguraríamos el placentero sentir de que siempre hay un ideal mejor por el que morir, y desde luego, y mientras tanto, por el que vivir. ¡Todos! ■

NATURA

La violencia a debate

ANSELMO

Como sin duda esperabais, compañeros de NATURA, vuestra última entrega sobre el tema de la violencia induce a la polémica y a la confrontación, por supuesto pacífica y fraterna. Y como por circunstancias que no son del caso, el número se ha retrasado en salir más de lo previsto y su carácter extraordinario demorará la siempre gozosa aparición de un nuevo número, me permito tomar la palabra ya, para que unas notas urgentes que me sugiere vuestro trabajo le acompañen, a modo de inicio de un debate.

Sorprendéis en primer lugar llamando «agresividad» a un todo que puede englobar hasta la ayuda mutua, y afirmáis que lo hacéis «para entendernos». Pues, la verdad, no entiendo nada. Y consciente de hallarme lejos de vosotros en maestría para el uso del lenguaje, acudo al socorrido recurso de consultar el Casares, donde me encuentro como agresor a «la persona que acomete a otra para hacerle daño» y como agresivo-va al «propenso a ofender o provocar a los demás», o a lo «que implica provocación o ataque». Otros diccionarios de más o menos solera hablan de «agresividad» como «tendencia a atacar» y añaden que en psicología suele hablarse de tal como «forma de desequilibrio psicológico que se traduce por la hostilidad permanente del sujeto con respecto a los demás».

No sé si entre las autoridades que han provocado la quemazón de vuestras pestañas —en cuyas militancias políticas no entraré— se usa el término de la agresividad como algo que puede segregar apoyo mutuo, pero me temo que no, al seguir leyendo y ver cómo aparece la agresividad como una «constante» en la historia de la humanidad; una constante en el reino animal, en la naturaleza donde se compite por el mismo espacio o alimento; una «tendencia» innata, escrita en los genes y presente en la composición del cerebro: «un fenómeno biológico básico cuya evidencia se ve apoyada por estudios fisiológicos de los

procesos subyacentes neurales y hormonales... «la agresividad profundamente enraizada en la historia de las especies y en la fisiología y organización comportamental de cada individuo». Todo esto con la alusión a Lorenz, como máxima autoridad en la materia, a partir de la extrapolación de sus experiencias con animales.

Claro que a la altura del último tercio de vuestro trabajo decís que os da lo mismo que el hombre sea naturalmente agresivo o pacífico y roussonian. Pero para ese momento ya habéis soltado todas vuestras baterías en un sentido muy claro que, he de confesaros, me ha sorprendido extrañamente, conociendo a alguno de vosotros, y su talante más kropotkiniano que otra cosa, incapaz de cultivar actitudes personales agresivas, y con una ética libertaria al modo de los anarquistas de antes.

Y el debate considero que no puede despacharse diciendo que nos tiene sin cuidado. Sobre todo si hemos citado en los folios precedentes a gente como Lorenz o el tal Ireneus Eibl-Eibesfeldt. Muy diferente será lo que haya que decir de las cárceles si consideramos a los delincuentes como la quintaesencia de los sentimientos innatos y biológicos a reprimir, o si consideramos que la sociedad hace a los criminales y que las cárceles tienen su función en un sistema organizado como el que vivimos. Porque si no, ahí está, siguiendo los racionamientos de agresionistas innatos, el célebre Lombroso, padre de la criminología moderna, con su «L'uomo delinquente», donde llega a describir los estigmas físicos para identificar al criminal nato, en sus orejas, barbilla, ojos, etc.

También en la educación será básico saber si el niño es una bestezuela a la que hay que domar, y en general en todo lo que atañe a la organización de la sociedad, al individuo (por cierto ¿la última parte de vuestro trabajo y la primera las han escrito la misma persona?).

Agresividad innata

Los etólogos del agresionismo inna-

to, curiosamente promocionados y popularizados entre el «gran público» (Lorenz, Desmond Morris...) nos dicen que la agresividad la hemos heredado de nuestros ancestros, que la tenemos metida en nuestros mismos genes, que cada individuo tiene una energía violenta acumulada que ha de descargar-se... y así se hacen novelas, películas, libritos sobre el mono desnudo, que van penetrando de estas ideas a la gente, incluso a los progres. En realidad se trata de una nueva edición de la doctrina del pecado original, imbuida por otros medios ahora que la gente ya no asimila tan bien la leyenda al uso. Se trata de uno de los principios más poderosos e influyentes de la fe hebreo-cristiana con el apoyo de la organización más eficaz de la historia: la Iglesia. Ahora en lugar de San Pablo diciéndonos del hombre que «en su carne no habita nada bueno», que «el pecado habita en él», se nos meten las cosas con un ropaje científico y hasta se nos hace una historia laica de la evolución humana con idéntico mensaje. Ahora nuevamente, corresponde a los libertarios luchar contra corriente.

Cerebro y estructuras genéticas, se nos presentan como programadas para

la agresión que sería por tanto «innata». Sin embargo las investigaciones en los últimos años demuestran que esto es completamente falso. Que las influencias genéticas no determinan nada, aunque son decisivas, que es de la interacción de éstas con el medio de las que surge la agresión o la cooperación.

Ninguna conducta humana específica está genéticamente determinada: los seres humanos son capaces de cualquier tipo de conducta, incluyendo la conducta agresiva e incluyendo también la bondad, la crueldad, la sensibilidad...

Lo mismo puede decirse del sistema neuronal. La experiencia es la que determina el desarrollo del cerebro, incluso en sus aspectos puramente químicos, y esa experiencia es la que influye luego en el desarrollo de la conducta individual.

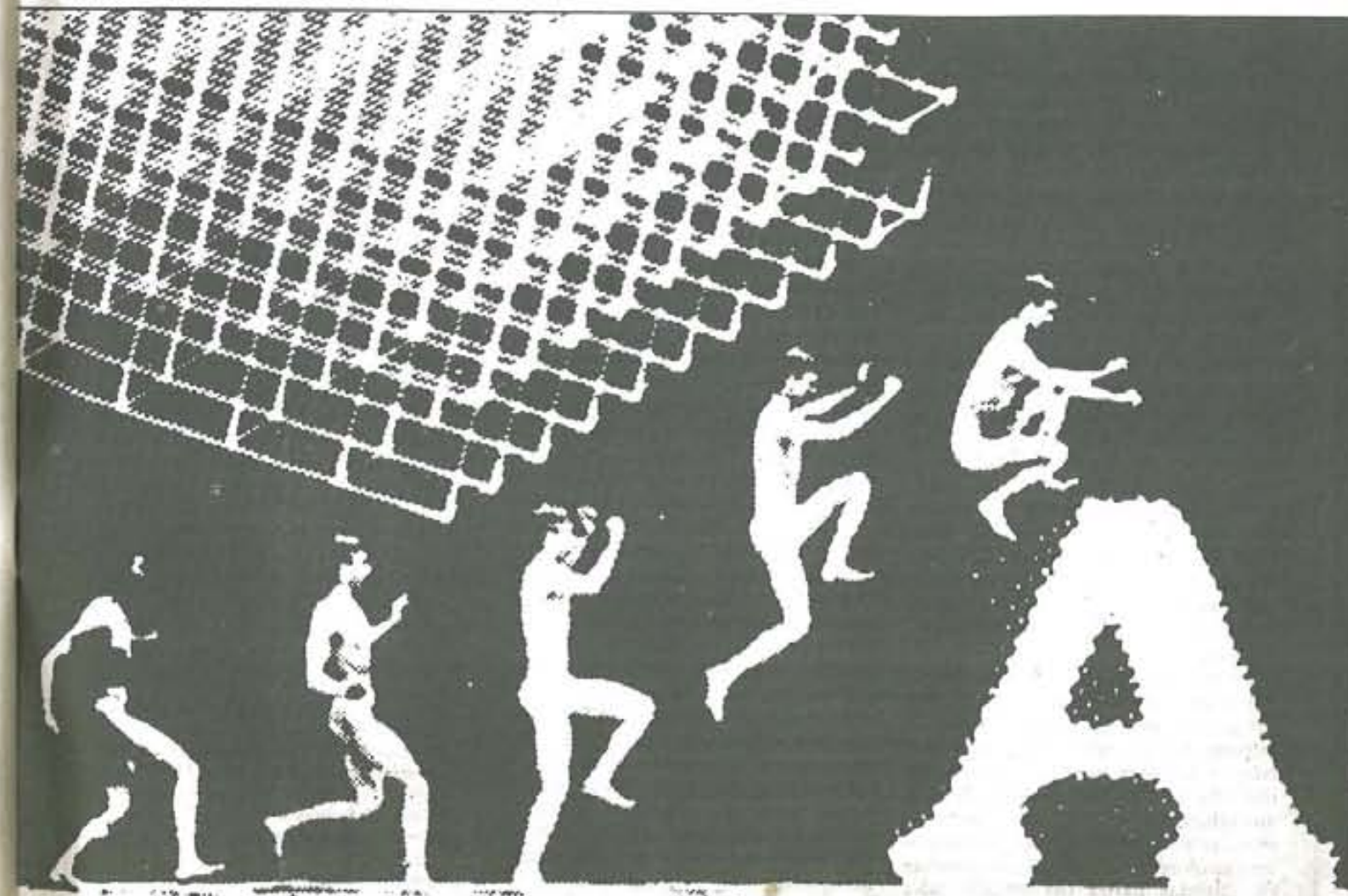
De modo que el hombre ni está programado para ser agresivo. Lo que hay en él son elementos neuronales bien localizados, que se dejan organizar fácilmente según sean las experiencias que vive desde el período prenatal y que pueden dar lugar según éstas a una conducta agresiva como interacción de estas disposiciones

y la experiencia vivida. Pero no existe ninguna prueba de que el hombre nazca ya programado para la agresión: que la conducta agresiva, así como su tipo y naturaleza, sea suscitada o no por un estímulo dado, dependerá de lo que previamente haya sido organizado por la experiencia en el sistema nervioso central.

Que el niño desarrolle o no una conducta agresiva, dependerá pues de un montón de factores: desde la alimentación recibida en las fases decisivas de su desarrollo, hasta del modo en que haya sido «socializado» y de los modelos suministrados por la sociedad que le haya tocado vivir.

Los instintos

Es otra cosa que ha entrado como la seda en el «sentido común». Una fácil explicación para lo complejo de la experiencia humana y aún de los animales. Con los términos «innatos» e «instintos», todo queda bien resumido y explicado. Igual se habla de la sangre como vehículo que transporta la herencia humana, aunque hace un siglo que se sabe que no tiene esta función, se habla de instintos par hablar de la



pulsión sexual, de la agresividad o del famoso «instinto territorial».

Al contrario de lo que afirman las autoridades citadas anteriormente, se sabe que «ese impulso genético imposible de erradicar», no suele existir en los pueblos «primitivos» diseminados actualmente por el mundo. Que la territorialidad no surge como un «instinto», sino como la vinculación emocional a una tierra donde el individuo nace y vive, y que no existe normalmente en los pueblos recolectores cazadores, sino que surge, como una fuerza cultural, con el advenimiento de la agricultura, cuando surgen las primeras comunidades aldeanas hace 12.000 años sólo, y aparece, no como la agresividad, sino como vinculación emocional a la tierra y a la comunidad.

Los animalitos

Parece ser ampliamente considerada como ingenua la pretensión de Lorenz de hacer valer sus datos obtenidos con animales, a otros animales y a los seres humanos como hace en su último libro «Sobre la agresión», tan bien difundido y distribuido. Tanto él como Timbergen, premios Nobel por sus estudios sobre gansos y pájaros, hacen unas extrapolaciones automáticas de esas conductas a los hombres, ignorando además, como señala Erich Fromm, todos los hallazgos de la antropología en los últimos 50 años: «Lorenz puede ser un observador competente de animales inferiores pero su conocimiento del hombre no pasa del de la persona media».

Cierto que nuestro origen es común al de todas las especies animales, pero nuestro parentesco no significa que la conducta del hombre esté sometida a la influencia de los instintos: existe una inmensa brecha entre la humanidad y otras especies, brecha que ha ido ensanchándose a lo largo de un período de más de cinco millones de años, como consecuencia de la singular historia evolutiva de la especie humana. Ciertamente han quedado cosas importantes de nuestra herencia biológica, pero esto no quiere decir que esta herencia determine o regule la forma o el contenido de la conducta humana.

La antropología sugiere lógicamente que es más interesante que el graznido del ganso, considerar como fuente de información de cuál ha sido la evolución de los seres humanos durante los millones de años que median entre el australopiteco y el hombre de hoy, estudiar los pueblos ágrafos, recolectores cazadores que quedan actualmente en distintas partes del mundo tales

como los tasmanianos, los bosquimanos, los esquimales o los tasaday de Filipinas. A estos últimos, por ejemplo, descubiertos hace apenas diez años, se les encontró organizados «en sociedades pequeñas y uniformes. No suelen creer en dioses, son pacíficos y amistosos y cooperativos. Comparten sus alimentos y sus pertenencias entre sí y con extraños. Juegan con sus hijos, se cuidan de los ancianos, sus relaciones mutuas son estrechas y amorosas, se preocupan de los demás...»

La historia

Extraña pues, oír en vosotros, amigos de Natura y kropotkinianos de pro, afirmaciones que asocian la historia del hombre a la historia de la agresión y la lucha por el territorio, que ha tardado mucho en ser limitado como hoy, y que esta agresividad es la que ha favorecido la selección natural de los más fuertes y todo eso. Parece que no. Parece que la selección natural favorecía a los individuos y grupos con alguna inclinación natural al cuidado de las crías y adultos indefensos. En cualquier grupo los que se cuidaban unos a otros sobrevivían mucho más tiempo que los individuos caracterizados por la hostilidad mutua, la violencia y la falta de confianza. Porque un grupo semejante, o bien se desintegraría dejando de existir como grupo y exponiendo así a cada individuo a la dificultad creciente de la soledad, o se extinguiría simplemente como resultado de matarse entre sí los individuos. O ambas cosas.

Y ahí llegamos a la cooperación y a la ayuda mutua como verdadero hilo conductor de la historia y la evolución del hombre, revalorizado hoy por numerosos antropólogos. Tanto la cooperación como la competencia están presentes en el desarrollo de la evolución humana pero si el hilo de la cooperación y la ayuda mutua no hubiese estado presente, y si en su lugar hubiese predominado la agresión y la hostilidad, nuestra especie nunca habría alcanzado la humanidad.

Pero hay más: estudios como el de Hobhouse, Wheeler y Ginsberg («La cultura natural y las instituciones sociales en los pueblos más simples»), demuestran que donde no existe organización política o donde tal organización es elemental los pueblos tienden a no ser agresivos ni belicosos: «el hecho liso y llano es que las sociedades sin estado no practican por lo general la guerra»; y que suele ser necesario organizar una sociedad como estado político para que entren en juego las condiciones que llevan a la beligerancia».

Estado y violencia

Y éstas han sido las bases de partida del pensamiento libertario, lo que realmente, a mi modo de ver, ha sido su aporte fundamental, tanto para interpretar o seguir la historia de la humanidad, como para enfocar la lucha contra las instituciones. No hay que desdeñar, pues, la discusión sobre la «agresividad innata», el «instinto territorial», la «competencia como base del progreso» y todas esas ideas que se introducen con gran facilidad y que vienen a justificar todo tipo de coerciones y, en definitiva, a ser ellas mismas generadoras de esa misma violencia de la que dicen protegernos. Porque de los patitos se pasa, casi sin escalas, a afirmaciones como ésta: «la organización social humana es fundamental e inmutablemente jerárquica, porque las relaciones de dominación se encuentran genéticamente determinadas».

Y aquí termino mis notas, que no son más que un intento de discusión y debate, en un tema cuya trascendencia, compañeros de Natura, merece más rigor con el que soléis obsequiarlos en vuestros artículos, que la ligereza y la admisión de algunas de las claves del pensamiento autoritario que habéis permitido que se deslizaran en vuestro escrito (*).

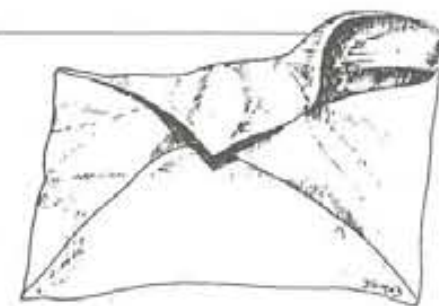
Por lo demás, y en orden a la dedicatoria, no creo que sea la historia de la humanidad ni la biología de la especie las herramientas más adecuadas para debatir sobre la violencia y la lucha armada en nuestra sociedad actual. Sugiero un debate en el que participasen los protagonistas de las diferentes formas de oponerse al sistema. Y empezaría reconociendo la sabiduría contenida en la copla del viejo Bergamín:

*«La justicia y la verdad
son dos malas consejeras.*

Una te dice que mates.

La otra te dice que mueras.»

(*) Mis notas no son más que una amplia revisión, fuera de la sección correspondiente, de «La naturaleza de la agresividad humana», de Ashley Montagu. Uno de los últimos libros que tratan globalmente el tema y que me parece no exagerar si lo considero «El apoyo mutuo» de nuestros días. Lo recomiendo calurosamente.



DESDE BARCELONA

En la actualidad me encuentro en la cárcel Modelo de Barcelona, cumpliendo la ya firme condena de 17 años, impuesta por la «justicia» de este país a motivo del manipulado y falso caso Escala, ya que soy uno de los encartados.

Pero no es debido a este tema el motivo del siguiente escrito, ya no es que injustamente tenga que cumplir una larga condena, es que además tengo que sufrir en mi persona todas las deficiencias de las Instituciones Penitenciarias y sus cárceles, entre una de ellas, la falta de asistencia sanitaria.

Desde el mes de marzo de 1980, es decir, hace casi un año y medio, encontrándome por aquella fecha en la cárcel de Segovia, contraí una infección urinaria. A las primeras molestias fui al médico de dicha prisión, donde me fueron hechos análisis de orina; en el tiempo que tardaron en llegar los resultados, unos cuantos días, el médico me recetó, en preventiva, antibióticos a razón de 1.200.000 unidades por día; los resultados analíticos confirmaron la mencionada infección urinaria, continuando inyectándome durante cuatro días más, una vez finalizado el tratamiento pregunté si no sería necesario que se me efectuase un nuevo análisis, para ver si la curación había sido total o en cambio había quedado alguna secuela, siendo respondido negativamente. Al cabo de medio mes me volverían a resurgir las mismas molestias iniciales, siendo tratado durante un mes a base de pastillas; en vista de que no experimentaba ninguna clase de mejoría, me suspendieron el tratamiento por desconocer las formas y medios para curarme. Llegando a estos términos el médico solicitó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con fecha 24 de junio de 1980, mi traslado al Hospital Penitenciario de Madrid, y no siendo llevado a efecto hasta el 23 de agosto, todo el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta el ingreso (dos meses) no tuve ninguna clase de tratamiento. En el Hospital y tras previos análisis se me diagnosticó infección urinaria crónica, con inflamación de próstata, recetándose inyecciones en la cantidad de dos diarias a la vez que cápsulas. Me dieron de alta el 20 de octubre después de dos meses, siendo trasladado de nuevo a Segovia,

sin haber sido curado, ya que seguía teniendo las mismas molestias. No sirvieron de nada mis protestas manifestadas tanto en Madrid como en Segovia; el médico de esta última me dijo que como el Hospital me había dado de alta, yo ya estaba completamente curado. Seguí insistiendo verbalmente pero ni caso, y ante esto cursé solicitud al juzgado de instrucción de mi sumario para que fuese trasladado a un Hospital de la calle en donde hubiese un cuadro médico competente en Urología.

A raíz de la instancia cursada por mí, y para evitar posibles complicaciones ya que se enteraron, el Hospital Penitenciario me recetó un nuevo tratamiento a largo plazo, a base de inyecciones, una por semana, y diariamente cápsulas y gotas.

En el mes de noviembre fui trasladado a Barcelona. Dicho traslado duró cinco días, tres en Carabanchel y dos de viaje. Durante estos días se me suspendió otra vez la medicación. Una vez llegado a Barcelona, y a notificación mía, el médico me reanudó la misma medicación. Debido a una sanción que hubo, colectiva, a todos los «Políticos» en esta cárcel, al final del mes de noviembre fui incomunicado por 14 días en la 5.ª galería, y durante este tiempo de nuevo me suspendieron la medicación, siéndome reanudada cuando finalicé dicha sanción; no fueron éstas las únicas interrupciones, ya que cuando se acababan las medicinas y hasta que me traían otras nuevas pasaban unos días, ante mis protestas, se me contestó que al agotarse en el botiquín de la enfermería había que comprarlas en la calle, esto me pasaba cada vez que se me agotaba una caja. Como referencia diré que enfrente de la modelo hay una farmacia; vamos, que no había disculpas por parte de ellos sino que falta de responsabilidad y de atención médica, formulé mis quejas al director de la cárcel y a la vez mi familia lo denunció, publicando un artículo en el *Diario de Barcelona*, el cual al parecer fue leído por el director de la cárcel, ya que fui amenazado verbalmente por el mismo diciéndome que si seguía quejándome me trasladarían al Hospital Penitenciario de Madrid. Todo esto tuvo su efecto, porque el tratamiento me fue suministrado con más regularidad, aunque siguieron

habiendo interrupciones, pero ya no con tanta frecuencia, hasta que llegó el mes de junio y debido a mi insistencia, ya que no experimentaba ninguna mejoría, me llevaron al Hospital Clínico para varias revisiones, siéndome efectuada la última el 10 de junio, siendo preciso hacer nuevos análisis de orina y al a vez de esperma. Sólo fue posible hacer el primero, pues el análisis de esperma me negué a efectuarlo porque la Policía Nacional pretendía que me masturbase delante de ellos en el furgón, a lo cual no acepté.

Una vez estando en la cárcel, y en ambiente íntimo más propicio, recogía la muestra precisa de semen para que la dirección la remitiera al Clínico, lo cual no ha efectuado hasta la fecha, no sólo por una vez, sino que sucesivamente me ha ocurrido cuatro veces, y ante mis quejas al director, médico y A.T.S. no he tenido ninguna clase de respuesta de por qué no se ha cursado la muestra.

Ya no sé qué pensar, a no ser que mi esperma está siendo comercializado con uno de los bancos de semen que al parecer ahora se están poniendo en vigor.

Lo que sí tengo claro es que una simple infección que se podía haber cortado con la precisa medicación en un par de semanas, la llevo arrastrando durante año y medio, afectándome en la actualidad a la próstata e ignorando cómo acabaré, si me curaré de una vez o en cambio lo tendré que arrastrar para toda mi vida, con todas las consecuencias que me pueda acarrear.

En el momento de querer cursar este escrito recibo la noticia de que el director va a llevar a efecto la amenaza de trasladarme al Hospital Penitenciario de Madrid. Como se ve, no es que traten de curarme, sino que por el mero hecho de pretender curarme toman represalias en contra mía y como ya he manifestado en este escrito, durante los dos meses que estuve en el Hospital Penitenciario no fueron capaces de sanarme. Además, voy a ser apartado de mi compañera e hijo.

Ante semejante injusticia espero que la Dirección de esta revista se digne publicar este escrito, dando de antemano las gracias y mis saludos cordiales. ■

JOSÉ CUEVAS CASADO

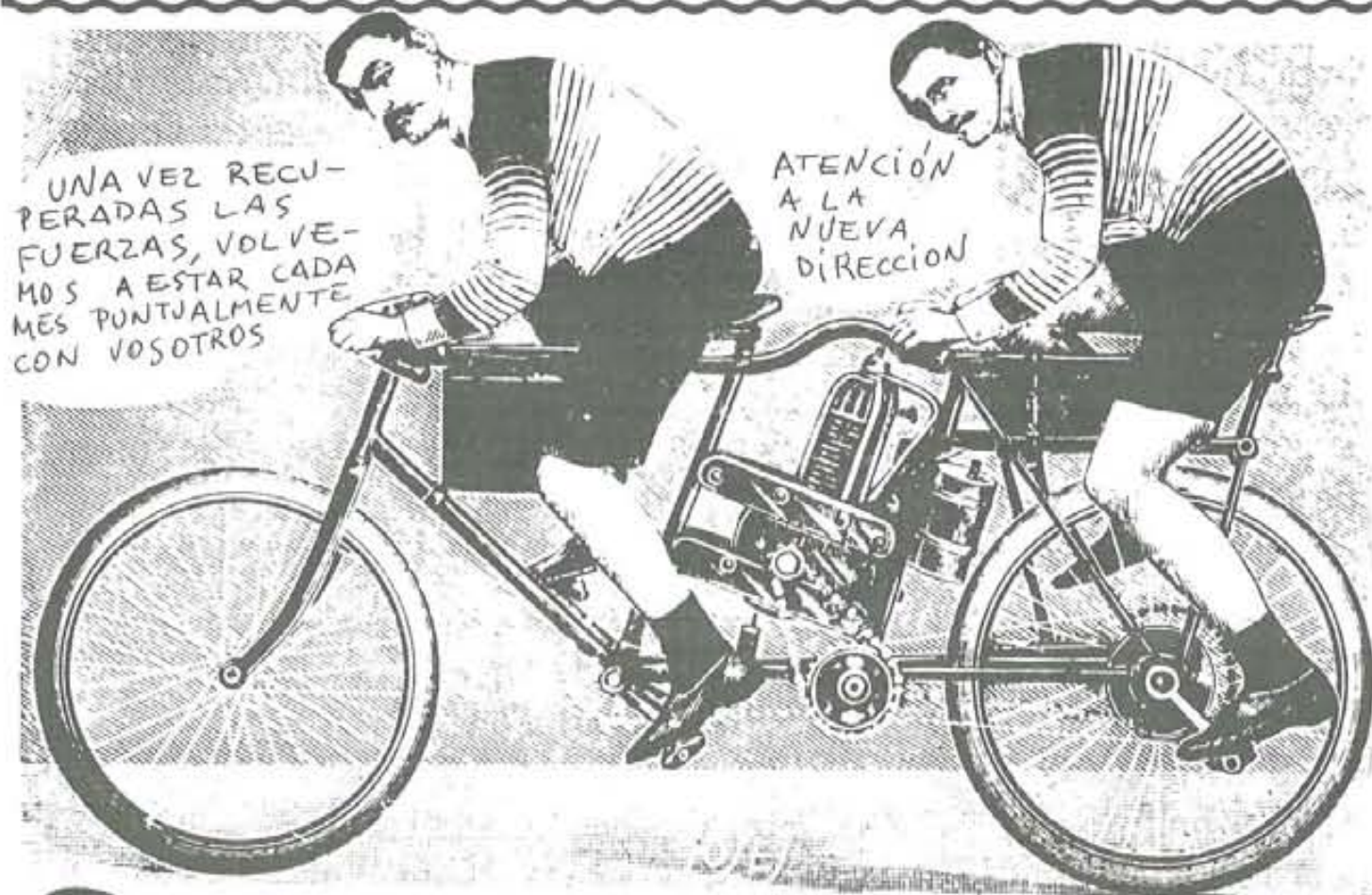
POR ESCRIBIR A BICI

A Diego Benítez Barea, preso en la cuarta galería de la cárcel de Barcelona, la dirección le ha quitado el trabajo que venía efectuando en los talleres, y con el que podía redimir y ganarse unas pesetas, por el terrible delito de HABER ESCRITO A BICICLETA. Decir que es un nuevo atentado contra la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ya apenas es decir nada. Porque en este caso es mucho más. Diego, condenado por robo, tiene ahora que barrer y fregar para poder ir redimiendo, cuando hasta el momento en que decidió escribirnos tenía un trabajo en los talleres, que cumplía.

A sus numerosas peticiones de volver al trabajo, la única respuesta que ha recibido ha sido la de un jefe de servicios, un tal «Don Avelino»: «Si yo fuera el director, le obligaría a escribir de nuevo a "Bicicleta" desmintiendo todo lo que dijo». Y no contento con explicarle lo que haría si fuese director, se permitió también un juicio de valor sobre todos los presos: «Están ustedes violando, robando y atracando, y quieren vivir aquí como reyes... Tampoco es eso, ¿no? Por más que se esforzaran la administración y las juntas de régimen, no parece probable que los presos llegaran a poder vivir ni siquiera como ayudas de cámara.

Lo que el tal Don Avelino piensa que debería rectificar Diego Benítez era su información sobre las celdas de castigo en la cárcel de Barcelona. Que, naturalmente, existen. ¡Vaya si existen! En el fondo, a este funcionario, como a tantos otros, lo que pasa es que les parece «feo» o de mal gusto, que algunas cosas se ventilen. En vista de lo cual, y por orden de no sabemos quién, a Diego ahora no le dejan leer BICICLETA, y así tampoco puede enterarse de lo que pasa en otros sitios. Los dos últimos números «no le han llegado».

Qué casualidad, ¿no?



suscripción

NOMBRE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD

Enviadla a BICICLETA, apartado de correos 629 valencia

☐ GIRO POSTAL Nº
☐ CHEQUE (SOLO EN ESPAÑA)
☐ TRANSFERENCIA

6 NUMEROS (1 EXTRA) EN ESPAÑA: 750 PTS.
12 NUMEROS (2 EXTRA) EN ESPAÑA: 1.500 PTS.
12 NUMEROS (2 EXTRAS) EN EL EXTRANJERO
EUROPA: 2.200 PTS.- RESTO: 2.800 PTS.
SUSCRIPCIÓN DE APOYO POR UN AÑO ESPAÑA: 2.500 PTS.
SUSCRIPCIÓN DE APOYO POR UN AÑO EXTRANJERO: 3.500 PTS.



Contactos

Compartimos piso de alquiler (25.000 ptas./mes) en Barcelona, muy céntrico, comunicado, grande, teléfono y calefacción, con personas de elevado nivel cultural y experiencias, entre 25 y 40 años, que quieran vivir en común a lo largo de un año (más o menos), con vistas a realizar un viaje de uno o varios años («mochilero»), pidiendo la excedencia o dejando el trabajo, y con unos ahorros que sobrepasen el medio millón de pesetas. Telefonar al 217 07 89, de Barcelona, y preguntar por Javier.

Desearía que alguien me informara verazmente, y con toda la seriedad posible, sobre lo que puede hacerse en caso de devolver la cartilla militar una vez hecha la mili, y la posible acogida al estatuto de objetores de conciencia, por motivos que todo el mundo comprenderá. Que se pongan en contacto conmigo en el siguiente domicilio: Manuel Martínez Crespo, Gallo, 26-1, Dcha, Madrid-32.



Me gustaría corresponder con una compañera sobre la filosofía libertaria y la liberación de la mujer. Podría intercambiar cartas sustanciosas. Recibí un doctorado en filosofía de la Universidad de California y me he especializado en filosofía política. También me gustaría intercambiar domicilios. Te doy albergue en California a cambio de albergue en España por unos días, en el verano que viene. J. Martínez, c/o José Buxo, 4095 Florida St, San Diego, California 92104.

Convencidos da necesidade dun cambio radical na forma e maneira de vivir, queremos comezar unha «EXPERIENCIA» comunal no eido urbán, que serva de convivencia e de comezo dun debate teórico e práctico sobre o tema. Para un primeiro contacto dirixirvos a: Ref. «A comuna». Apartado de Correos 52, Santiago de Compostela (Galiza).

Joven libertario desearía contactar con comuna agraria autogestionada que desee aumentar el número de sus integrantes. Escribir a Joaquín Callal Malla, Juan Maragall, 48, San Feliú del Llobregat (Barcelona).

Si a los queridos libros libertarios los tiene olvidados, perdidos, en las estanterías o en las mesillas, en tu cabeza, etc. ¡Escribeme! Te los compro. Fernando. Apartado 415, Vitoria.

Aviso al personal

RECORDAD QUE A PARTIR DE YA LA DIRECCIÓN DE BICI ES:

Apartado de Correos 629
Valencia

AVISO

Pedaleamos todos o se para la Bicicleta

Este número doble, extra, cuesta de imprenta y papel 700.000 pts., a lo que hay que añadir el coste de los fotolitos, el local, el teléfono. En Bicicleta no cobra nadie. De cada número la distribuidora se queda el 45%, es decir que de un número que vale 225 pts. nos quedan unas 125. Para cubrir gastos hemos de vender unos 7.000 ejemplares, pero vendemos unos 6.000 (incluyendo suscripciones). Bicicleta casi se autofinancia. Pero necesitamos ayuda, cerca de 100.000 pts. al mes. Necesitamos aumentar las suscripciones y también pedimos donaciones (talones, y giros postales al Apartado de Correos 629, Valencia). Si no conseguimos ayuda, no podremos continuar mucho tiempo.